



AVISO LEGAL

Título: *Coacciones y oportunidades de la globalización: el caso de la Nicaragua sandinista y sus relaciones con Estados Unidos*

Autor: Orduña Trujillo, Eva Leticia

Colaboradores: Creativa Impresores, S.A de C.V. (diseñador de la portada)

ISBN: 970-32-3187-X

Forma sugerida de citar: Orduña, E. L. (2006). *Coacciones y oportunidades de la globalización: el caso de la Nicaragua sandinista y sus relaciones con Estados Unidos*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos. <https://rilzea.cialc.unam.mx/jspui/>

D.R. © 2006 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.

© Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510
Ciudad de México, México.
<https://cialc.unam.mx>
Correo electrónico: cialc-sibiunam@dgb.unam.mx

Los derechos patrimoniales pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este contenido en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0 Internacional). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>



Usted es libre de:

- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

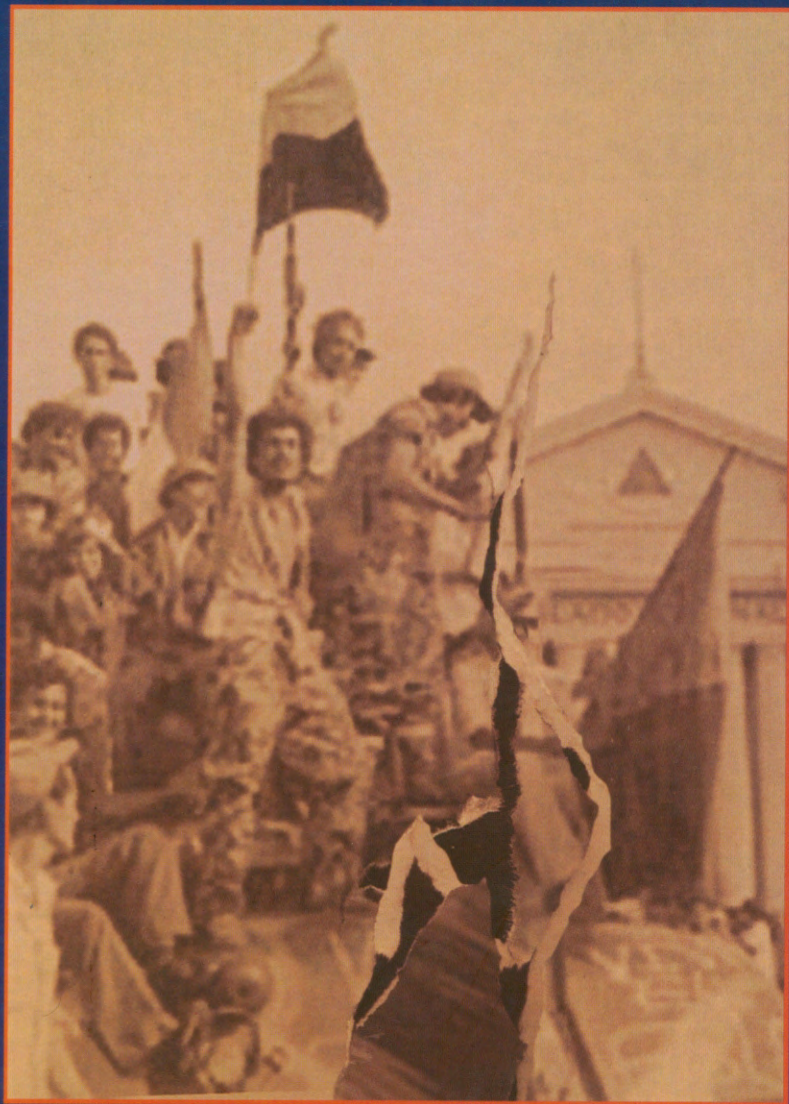
- Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Pueden hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- Compartir igual: si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

Coacciones y oportunidades de la globalización: el caso de la Nicaragua sandinista y sus relaciones con Estados Unidos

Eva Leticia Orduña Trujillo



**Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos
Universidad Nacional Autónoma de México**

Coacciones y oportunidades
de la globalización:
el caso de la Nicaragua sandinista
y sus relaciones con Estados Unidos

Serie Nuestra América 65

CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR
DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Coacciones y oportunidades
de la globalización:
el caso de la Nicaragua sandinista
y sus relaciones con Estados Unidos

Eva Leticia Orduña Trujillo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

MÉXICO, 2006

Diseño de la portada: Creativa Impresores

Primera edición: 2006

DR © 2006 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F.

CENTRO COORDINADOR Y DIFUSOR DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

ISBN 970-32-3187-X

Impreso y hecho en México

A la memoria del Dr. Marcos Kaplan

ÍNDICE

Introducción	7
I. El proceso de globalización	21
El primer orden económico mundial.....	23
La primera revolución industrial	32
La segunda revolución industrial	40
La tercera revolución industrial.....	47
Latinoamérica ante la globalización.....	56
II. Nicaragua ante la globalización	85
Las variables políticas	88
Las variables económicas	138
La migración	159
III. La política exterior de Estados Unidos	165
Antecedentes	167
El gobierno de Reagan	178
La política migratoria	211
Epílogo.....	228
Estados Unidos.....	229
Nuevas políticas y tendencias migratorias.....	232
Nicaragua.....	237
Bibliografía	253

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la década de 1980, un país que hasta antes no había tenido mayor importancia para la historia mundial fue motivo de constante atención. Nicaragua emergió del silencio y se convirtió no sólo en noticia, sino también en esperanza para los países subdesarrollados y para los movimientos de liberación de muchas partes del mundo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), parte de una alianza amplia que derrocó al gobierno somocista, se propuso cambiar de raíz tanto la situación interna, como la posición que su país guardaba dentro de la jerarquía internacional. No obstante dos décadas después de iniciado el proceso, Nicaragua mantiene uno de los lugares más bajos dentro de esta jerarquía.

El presente estudio se propone examinar las razones por las cuales el gobierno sandinista no pudo lograr sus pretensiones. La historia de la globalización muestra ciertos factores como determinantes del diferente grado de desarrollo de los países. Identificar y entender estos factores resulta necesario no sólo para analizar el pasado, sino también para obtener luces y herramientas que permitan diseñar políticas futuras.

Desde el inicio del proceso de globalización, el desarrollo de los países ha estado determinado por la forma en la que enfren-
tan las condiciones externas y por las políticas que instauran en

el interior de sí mismos. En realidad, estos elementos han tenido una interrelación tan estrecha, que el buen o mal desempeño en uno ha influido de manera directa en el otro. En el caso de Nicaragua, la situación externa fue un factor constante e intensamente adverso. En este trabajo se identifican y se analizan las condiciones externas que afectaron el desempeño del gobierno sandinista, y la manera en que éste las enfrentó. Por otro lado, también se estudian las políticas que en el nivel interno se diseñaron y se aplicaron, y el grado de eficacia que tuvieron para el desarrollo del país.

Uno de los obstáculos externos más significativos fue la posición agresiva que Estados Unidos tuvo hacia el FSLN. Por ello se reflexiona en la manera en que el país del norte influyó para que el país centroamericano no pudiera ofrecer respuestas de calidad a los desafíos de la globalización.

En el primer capítulo del libro se hace un seguimiento histórico del proceso de globalización. A través de él se pretende identificar los elementos que permitieron a ciertos países la inserción exitosa en las diferentes etapas del proceso. Está estructurado en cinco secciones: 1) El primer orden económico mundial, 2) La primera revolución industrial, 3) La segunda revolución industrial, 4) La tercera revolución industrial y 5) América Latina ante la globalización. Inicia con el estudio de lo que Aldo Ferrer denomina "Primer orden económico mundial", que comprende los años 1500 a 1800, porque es en estas fechas cuando comienza el proceso de internacionalización, y con él, la colocación de los países en distintos lugares y niveles de la pirámide de poder. Al final de cada sección se ofrece un análisis de los procesos migratorios verificados en cada etapa, con lo cual se trata de mostrar la estrecha relación que han tenido con el desarrollo interno de los países y con el proceso de globalización.

En la sección referente a América Latina, se aprecia, en primera instancia, que el subcontinente ha sufrido las consecuencias adversas del proyecto globalizador, que ha actuado como coadyuvante del progreso de otros países en detrimento de sus propias

realidades y potencialidades. Estados Unidos sirvió de modelo en cuanto a las instituciones jurídicas y políticas y realizó varias intervenciones en distintos aspectos (intervenciones armadas directas; inversiones productivas u otra clase de mecanismos económico-comerciales o de desarrollo; adoctrinamiento y formación (física e ideológica) de cuadros militares; préstamos y apoyos financieros ya fuera directos o por medio de instituciones internacionales; proclamación de doctrinas de defensa y/o integración del continente, etcétera).

Posteriormente se reflexiona en torno a una característica que ha acompañado la historia latinoamericana: la debilidad y subordinación hacia el exterior, respecto a los países centrales y la rigidez y el autoritarismo hacia el interior, respecto a sus ciudadanos. En este segundo aspecto, se analizan dos tipos de intervenciones que han tenido los gobiernos: el intervencionismo proteccionista-benefactor en una primera etapa y, posteriormente, el intervencionismo neoliberal. Se estudian después las subsecuentes etapas: los años de dictadura que, con el apoyo de Estados Unidos y el sustento ideológico de la Doctrina de Seguridad Nacional, vivió la mayor parte de los países latinoamericanos. El reemplazo generalizado de gobiernos militares por civiles es el siguiente periodo analizado. En él sobresalen dos hechos: la transición a la democracia y la agudización de problemas económicos y sociales. Este último hecho es de fundamental importancia en la emergencia de nuevos actores ante los cuales Latinoamérica adquiere dependencia y debilidad: las instituciones financieras internacionales, las empresas transnacionales y los inversionistas y especuladores internacionales.

En esta sección también se incluye un análisis del aspecto migratorio. Principia recordando que fue precisamente una inmigración —la europea— la que dio nacimiento a la historia del subcontinente latinoamericano, y que fue considerada como atractiva y aun necesaria, incluso después de que las colonias lograron su independencia política. La inmigración europea cobró especial importancia en los años de mayor auge del positivismo,

ya que se veía en el material genético superior, que se suponía ésta traía consigo, una tabla de salvación, al permitir blanquear a la población y terminar de este modo con el freno que los indígenas representaban para el progreso —ya que en esos años no se hablaba aún de desarrollo— de los nacientes estados. A partir de 1950, la migración intercontinental tomó el lugar que hasta entonces había tenido la europea, y se empezaron a dar traslados poblacionales a través de todo el subcontinente. Estos desplazamientos se intensificaron con el fortalecimiento económico y político de Estados Unidos, país que, a consecuencia también del auge de los medios de comunicación, se convertía en un polo de atracción cada vez más potente. Posteriormente, se observa cómo los conflictos políticos y sociales han sido una causa constante de expulsión de migrantes en Latinoamérica. En la década de 1970, los principales expulsores en este sentido fueron los países del Cono Sur, y en la década de 1980, los centroamericanos. Se hace hincapié en que el éxodo centroamericano estuvo caracterizado principalmente por su masividad. A través de la descripción de la situación vivida en los campamentos en Honduras, se intenta mostrar que el trato diferenciado hacia los salvadoreños y los nicaragüenses tuvo los mismos objetivos y características del que recibieron en el territorio de Estados Unidos. Se describe también la situación vivida en el resto de países que de manera significativa albergaron a refugiados centroamericanos, es decir, México, Costa Rica, Belice y Nicaragua. Por lo que se refiere a la década de 1990, se aprecia que el movimiento migratorio fue principalmente de retorno hacia los países de origen. El proceso de repatriación se inscribe dentro de los esfuerzos por alcanzar la paz en la región centroamericana, y como consecuencia de los logros alcanzados en este sentido.

En el capítulo dos se analiza la actuación concreta del gobierno sandinista, con el fin de identificar las razones que obstaculizaron o impidieron el adecuado desarrollo del proyecto nacional y, con ello, la inserción exitosa de Nicaragua dentro de la globalización, o al menos el mejoramiento de su posición

dentro de la jerarquía internacional. Se analizan tanto las coacciones internas como las externas. En este capítulo, eje principal de la investigación, se consideran diversas variables políticas y económicas. Para ello, se seleccionaron ciertos elementos que en el capítulo uno se identificaron como determinantes del logro y mantenimiento de un alto grado de desarrollo. Dentro de las variables políticas se incluye: a) el establecimiento de alianzas, b) el manejo de conflictos, c) el papel de las élites, d) el papel del Estado y e) las relaciones internacionales.

En el primer punto se estudian las alianzas establecidas por el FSLN, tratando de demostrar que una buena actuación en este sentido fue determinante para el triunfo de la revolución, y que su deficiente desenvolvimiento tuvo un alto costo para la instauración del proyecto sandinista que redundó en la profundización del subdesarrollo del país. Los principales grupos estudiados con los cuales el FSLN no tuvo la capacidad de establecer acuerdos son la burguesía y la Iglesia católica. Respecto al manejo de conflictos, se estudia la manera en la que el gobierno reaccionó ante la confrontación suscitada por los campesinos y por los habitantes de la Costa Atlántica. Se muestra la incomprensión gubernamental respecto a las realidades concretas e inmediatas, y a la idiosincrasia tradicional de los campesinos, y se señalan características generales de los habitantes de la Costa Atlántica, que permitirán entender por qué opusieron tanta resistencia a las medidas gubernamentales. Se muestra también la actuación inadecuada del FSLN ante las principales problemáticas ocurridas. Para analizar el papel de las élites, se hace un recuento histórico de la actuación de éstas, en el que se observa la gran responsabilidad que han tenido en el subdesarrollo de su país, y se entienden las razones por las cuales el gobierno no pudo establecer alianzas con ellas. Se muestra también la responsabilidad que tuvieron en la falta del desarrollo exitoso del proyecto nacional durante el gobierno sandinista. En el punto correspondiente a la actuación del Estado, se analizan varios aspectos en los que hubo una marcada disociación entre los planteamientos

teóricos y la actuación concreta del Estado, así como las implicaciones que tuvieron respecto del desarrollo del proyecto nacional. Se analiza el programa ideológico y se advierte cómo en una primera etapa fue muy eficiente y le permitió al gobierno un margen de actuación sumamente amplio. Se señalan las razones que a lo largo del tiempo fueron deteriorando este proyecto y que terminó por volverse en contra del gobierno. A través del estudio de diversas actuaciones de éste, se pretende demostrar la disociación que hubo entre los objetivos generales y las medidas concretas aplicadas. Una de las que tuvo consecuencias más trascendentales fue el interés gubernamental por dotar a las clases populares de responsabilidad y participación en la historia y el destino nacional, y la hegemonía que en los hechos ejerció el FSLN, por medio de la cual impidió la incorporación de las masas al quehacer político.

El último punto de las variables políticas se dedica al estudio de las relaciones internacionales. Se muestra la manera en la que el gobierno sandinista aprovechó todos y cada uno de los foros internacionales para hacer un llamado de atención a la comunidad internacional, en relación con la situación de dependencia y marginación de los países tercermundistas, así como las consecuencias que el mantenimiento de esta situación tendría para el sistema internacional en su conjunto. Las exigencias que el gobierno sandinista formuló, fueron clasificadas en el presente estudio en dos grandes grupos: 1) defensa de la soberanía de todos los países, 2) cambio del orden económico internacional. En el primer grupo se incluyen las peticiones de apoyo a las luchas de liberación, independencia y autodeterminación de los pueblos y se destaca la denuncia que el gobierno nicaragüense realizó respecto a la incongruencia entre el discurso de igualdad y la situación colonial que en los hechos experimentaban muchos países. Hizo hincapié también en la necesidad de, por una parte, utilizar los instrumentos jurídicos y políticos, que en el nivel internacional se habían instrumentado para solucionar los conflictos, y por la otra, poner fin a la carrera armamentista.

En el segundo grupo se incluyen las denuncias contra el orden económico internacional, caracterizado por contener reglas discrecionales a favor de los países poderosos y las formuladas respecto a la incongruencia entre la formal libertad de mercado, que teóricamente rige para todos los países por igual, y la realidad en la que los estados hegemónicos utilizan y profundizan el subdesarrollo del resto de los países para fortalecer su hegemonía. En el estudio se advierte que Estados Unidos fue el país hacia el cual el gobierno sandinista dirigió la mayor parte de las denuncias.

En lo que se refiere a las variables económicas, se muestra que las medidas políticas aplicadas estuvieron disociadas entre sí y también respecto del proyecto global de desarrollo, y se presentan diversos eslabonamientos negativos que provocaron el fracaso estrepitoso de la política económica. Entre éstos se destacan por su importancia los producidos por la guerra, por la política de subsidios y por el paternalismo. Se incluye un estudio de las empresas estatales, como ejemplo de variables internas atribuibles directamente al desempeño del gobierno. El análisis abarca la política cambiaria, la política interna de precios, la política de salarios sociales y la política crediticia.

Este capítulo termina con una reflexión acerca de los movimientos migratorios verificados en Nicaragua durante este lapso. Se pretende mostrar que el exilio significó para el gobierno sandinista un obstáculo para la instauración de su proyecto nacional. Las migraciones estudiadas se clasifican en las efectuadas por individuos de: a) las élites, b) las clases bajas, c) las clases instruidas en determinada área (ejecutivos, profesionales, técnicos, etc.) y d) diversas clases, con motivo de la guerra.

El capítulo tres está dedicado a estudiar la política exterior de Estados Unidos hacia la Nicaragua sandinista y está conformado por tres secciones: 1) Los antecedentes generales. 2) El gobierno de Ronald Reagan. 3) La política migratoria como coadyuvante de la política exterior. A través de este capítulo se intenta analizar los elementos resultantes de una de las coacciones externas más

importantes que tuvo que enfrentar el gobierno nicaragüense. La primera sección está a su vez dividida en cuatro puntos ordenados cronológicamente: a) el inicio; b) la Guerra Fría; c) el cambio de los años sesenta, y d) el gobierno de Carter. Estos antecedentes nos sirven para comprender las razones que tuvo el país del norte para conformar una política externa expansionista, imperialista y agresiva, y la evolución que ésta ha tenido a lo largo del tiempo. Con ello se intenta probar que la política exterior ha sido un coadyuvante fundamental en el desarrollo de Estados Unidos como potencia hegemónica. En el primer punto se analiza la forma en que este país utilizó la expansión territorial y las intervenciones en otros países para consolidarse en primera instancia como nación independiente y con posterioridad en nación hegemónica. Se advierte que las intervenciones tuvieron una influencia sumamente intensa en el desarrollo de los países centroamericanos, que pudo ser logrado gracias a la colaboración de los grupos hegemónicos dentro de estos países. Se analiza también la relación positiva que ha habido entre el crecimiento económico estadounidense y sus acciones imperialistas, y la justificación ideológica que han utilizado para llevarlas a cabo.

En el segundo punto se analiza la evolución que la política exterior tuvo durante la Guerra Fría. Se observa en primera instancia cómo el temor hacia el comunismo y la pretensión de ser no sólo el país más poderoso sino además el más bondadoso, fueron cohesionando a la sociedad y conformando una sólida identidad nacional. En el tercero, se reflexiona sobre el cambio que existió en la sociedad y en los medios de comunicación durante las décadas de 1960 y 1970, lo que dio lugar a actitudes más abiertas, independientes y críticas respecto de las acciones intervencionistas del gobierno. Se advierte, no obstante, que estas actitudes no lograron debilitar las fuerzas y las ideas conservadoras y que no consiguieron transformar la esencia de la política exterior. En el cuarto, se estudian las acciones que James Carter emprendió para restablecer la credibilidad del gobierno tanto en el nivel interno como en el internacional, especialmen-

te la promoción de las democracias viables y la defensa de los derechos humanos. Se intenta mostrar, no obstante, que incluso estas acciones fueron acordes con la política exterior tradicional y tuvieron el objetivo de contener al poder comunista y asegurar los intereses de Estados Unidos. Concretamente, la relación que se mantuvo hacia los países centroamericanos dependió de la lealtad de sus gobernantes hacia el gobierno estadounidense y no de la posición de éstos respecto a los derechos humanos. En este punto se observa cómo los cambios ocurridos en Centroamérica (especialmente el triunfo sandinista y el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador), obligaron a Estados Unidos a redefinir su estrategia para la región, dotándola aun de más elementos intervencionistas y agresivos. Se pretende probar, en este sentido, que la política de confrontación hacia Nicaragua anuló la posibilidad de conducir a los sandinistas hacia políticas democráticas y liberales y alejarlos con ello de la influencia de la Unión Soviética.

La segunda sección del capítulo tres centra la atención en la política que Ronald Reagan desarrolló para Centroamérica en general y Nicaragua en particular. Muestra en primera instancia el intenso avance que fueron obteniendo las ideas y las fuerzas conservadoras en todos los espacios políticos y sociales, lo cual permitió que la política exterior adquiriera un carácter más ofensivo que defensivo. Se muestran también las acciones de Reagan para lograr el apoyo de la sociedad y del Congreso estadounidense, necesario para desarrollar su política hacia Centroamérica. La política es analizada a través de cuatro puntos: A) La Guerra de Intensidad (GBI). B) El aspecto económico. C) La preponderancia del método militar. D) La posición de la sociedad y del Congreso. En el primer punto, se estudian los objetivos, naturaleza y forma de aplicación de la GBI, así como los principales elementos de sus tres ejes: 1) la contrainsurgencia, 2) la reversión de procesos, 3) el terrorismo. Elementos de los tres ejes fueron aplicados al caso de Nicaragua, sin embargo, se dedica mayor atención al de reversión de procesos, debido a que

este eje fue diseñado especialmente para derrocar al gobierno sandinista. En este sentido, se hace un seguimiento de la manera en la que Estados Unidos apoyó la formación y fortalecimiento de la Contra, a través de recursos financieros, organizativos, bélicos, de asesoría y entrenamiento, y la creación de una eficiente y compleja infraestructura. Asimismo, se analiza la forma en la que operó la Contra, tanto en lo que se refiere a los ataques mismos, como a las redes de corrupción y de otros negocios ilícitos en los que estuvieron involucrados líderes y altos funcionarios de Estados Unidos. Se reflexiona en las implicaciones que tuvo la participación de estos últimos en el derecho internacional, y en cómo el gobierno del país del norte reaccionó ante resoluciones internacionales que condenaban su conducta.

En el segundo punto, se reflexiona en torno a las medidas económicas aplicadas de manera diferenciada, ya fuera en apoyo hacia los gobiernos amigos, o de agresión hacia los enemigos. Se intenta mostrar con ello, que aun en los casos en que hubo apoyo, la política estadounidense representó obstáculos significativos en el desarrollo integral de los países. Se pone especial atención en el caso de Nicaragua, para el cual se diseñó una política que incluyó el bloqueo económico total por parte de Estados Unidos, y el bloqueo de créditos y de otros programas de apoyo económico por parte de organismos internacionales, gobiernos de ciertos países y grupos privados. En el tercer punto, se intenta probar que para el desarrollo de Nicaragua tuvo consecuencias sumamente adversas el hecho de que el gobierno estadounidense se negara, en todo momento, a poner fin al conflicto mediante la negociación y el diálogo, y que presionara a los gobiernos aliados cuando daban muestras de desear terminar la guerra por estos medios. Se centra la atención en las consecuencias que hubo en la región debido a la militarización, durante el periodo de estudio, y en el hecho de que la derecha y las ideas conservadoras conquistaran la mayor parte de los espacios de poder. En el cuarto punto, se intenta demostrar que el apoyo de la sociedad y del Congreso fue fundamental para

que el gobierno estadounidense llevara a cabo su política de agresión.

En la tercera sección del capítulo tres se intenta mostrar que la política migratoria estadounidense tuvo una estrecha relación con su política exterior y que fue un coadyuvante sumamente útil para la consecución de sus objetivos en la región centroamericana. Se hace un seguimiento histórico de la política gubernamental hacia los refugiados, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, así como de los instrumentos jurídicos a través de los cuales se reguló dicha política. Se enfatiza la importancia de la Ley de Refugiados de 1980, y se señalan sus principales características, objetivos y limitaciones. Se trata de demostrar que entre estas últimas, la admisión de refugiados conservó el mismo objetivo ideológico que en el pasado, como coadyuvante de la política exterior, en lugar de los objetivos humanitarios que marcan los instrumentos jurídicos internacionales. Posteriormente, se analiza la política aplicada a los refugiados centroamericanos durante la década de los ochenta, y se muestra el trato diferenciado que recibieron, que dependió de la relación que el gobierno estadounidense tuviera con el Estado del cual eran originarios y no de la situación política y social de cada país, ni de la persecución que alegaran los solicitantes. Se estudia, asimismo, la influencia que tuvo el movimiento santuario y se advierte que, a pesar de que fue importante por haber constituido una protesta pacífica, aunque también muy enérgica y decidida por parte de los mismos ciudadanos de Estados Unidos contra las políticas de su gobierno y a favor de los refugiados, su capacidad de influencia en el resto de la sociedad y en el gobierno mismo fue muy limitada. En contraposición, se advierte cómo la posición mayoritaria de la sociedad, de rechazo a los inmigrantes, fue un factor decisivo en la aplicación de políticas gubernamentales cada vez más rígidas hacia los extranjeros.

El trabajo termina con un epílogo en el que se abordan los últimos acontecimientos relacionados con el tema de estudio. A pesar de que la investigación se centra en la década de los

ochenta, se consideró útil la revisión general de la manera en la que los acontecimientos habían evolucionado desde aquel entonces. Esta revisión abarca tres puntos: 1) Estados Unidos. 2) Las nuevas tendencias y políticas migratorias. 3) Nicaragua a partir de 1990.

En el primer punto se hace un balance general de lo que significó para Estados Unidos su intervención en Centroamérica durante la década de 1980.

En el segundo, se muestran las nuevas características que han adquirido tanto los movimientos como las políticas migratorias, y se reflexiona en las consecuencias que los primeros han tenido para el desarrollo de los países centroamericanos.

En el tercer punto se intenta mostrar cómo las características de la sociedad y del sistema político, económico y cultural nicaragüense han permitido que los elementos del nuevo orden global se inserten en el país sin mayores resistencias ni dificultades. Se consideró importante incluir el análisis de lo ocurrido durante las dos últimas décadas, porque gracias a él se advierten diversas oportunidades abiertas por la globalización, que los actores políticos y sociales nicaragüenses no tuvieron la capacidad de aprovechar. Esta falta de capacidad, concretamente del FSLN, dejó de estar determinada por muchas de las coacciones externas que enfrentó en la década de los ochenta y por lo tanto su responsabilidad directa puede ser identificada con mayor claridad.

I. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

A pesar de que el término globalización comúnmente se asocia con fenómenos contemporáneos, en realidad es la fase actual de un proceso que inició a finales del siglo xv, y que dio origen y desarrollo al capitalismo, al surgimiento y consolidación de los Estados-nacionales, y a la estructuración sistemática y desigual de las relaciones internacionales. Desde entonces, hasta la actualidad, estos tres conceptos han estado interrelacionados, al grado de ser cada uno, tanto causa como componente y resultado de los demás.

A partir y a través del desarrollo de estos tres conceptos, se inicia y se acentúa la división del mundo en países poderosos y débiles.

EL PRIMER ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL

Dentro de las realidades internas de las civilizaciones más importantes existentes hasta fines del siglo xv había similitud de circunstancias,¹ con lo que se puede afirmar que en lo general había un

¹ Es decir, los ingresos medios, la estructura del empleo, la productividad (tanto en calidad como en cantidad), la acumulación de capital, la distribución de la riqueza, la calidad y la esperanza de vida, la organización y alcances del comercio, etc., eran similares en la mayor parte del mundo.

equilibrio en el poder del que gozaban estas civilizaciones. Hasta esta fecha, no había proyecto alguno de alcances planetarios. Por supuesto, la razón de ello es que ni siquiera se tenía una idea cierta de los límites de nuestro planeta ni de todo lo existente en él. En lo que se refiere a la similitud de circunstancias entre las civilizaciones, la causa fundamental estriba en la ausencia de excedentes económicos significativos, resultantes de las actividades comerciales, y con ello, la escasa acumulación de capital que existía en la mayor parte del mundo. La producción crecía lentamente, y se realizaba con el objetivo principal del autoconsumo. La situación empieza a cambiar con la expansión de los países europeos que se volverían hegemónicos (en un principio Portugal y España, y posteriormente Francia, Inglaterra y Holanda), y con el cambio sustancial que tendrían en la forma y en las razones para realizar el comercio.

El desarrollo o atraso de lo que serían los estados, a partir de finales del siglo xv, dependía de la existencia o ausencia de lo que Aldo Ferrer llama “elementos tangibles e intangibles de poder”,² y sobre todo, de la capacidad del Estado para articularlos armónica y funcionalmente con el contexto externo.

Lo que determinó los diferentes grados de desarrollo fue la distinta forma en que los nacientes estados utilizaron los factores endógenos del desarrollo, los transformaron en elementos intangibles de poder y los articularon eficientemente con los elementos tangibles. La expansión en ultramar con fines comerciales y la imposición de la religión realizada por los países europeos, fueron los primeros pasos que los llevarían a la hegemonía. Posteriormente, una vez que lograron imponer su visión del mundo y estructuraron las relaciones internacionales, conforme

² Ferrer define de la siguiente forma estos elementos: “El tamaño de su población y los recursos naturales constituyen el poder tangible de cada país. Pero la respuesta al contrapunto entre el ámbito interno y el contexto externo condiciona la gestación de los factores intangibles de poder asentados en la tecnología y la acumulación de capital”. Aldo Ferrer, *Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial*, 2ª reimpresión, Buenos Aires, FCE, 1996, p. 14.

a las reglas necesarias para lograr sus propios objetivos, las situaciones resultantes de la expansión en ultramar (sobre todo la acumulación de capital con determinadas circunstancias y fines), se convirtieron en una causa y, por ello, en un elemento imprescindible para consolidar y acrecentar el poder tanto político como económico. Así, el resto del mundo se vio forzado a entrar en una competencia internacional con reglas definidas por los países hegemónicos europeos.

A pesar de que el sistema internacional se convirtió desde entonces tanto en producto como en reflejo de la hegemonía de ciertos países, y en gran medida propiciador de la consolidación de su poder, también empezó a actuar como contrapeso del poder absoluto e indiscriminado. Este contrapeso se ha manifestado en dos sentidos. Por una parte, entre estados hegemónicos y subordinados, y por la otra, entre el Estado y sus ciudadanos. En el primer sentido, podemos advertir que ni siquiera los países que a lo largo de la historia han logrado un inmenso poder y una gran capacidad de influencia, e inclusive determinación de los destinos de otros, han gozado de una completa autonomía. Por el otro lado, las instituciones internacionales fueron impidiendo que los individuos quedaran subsumidos ante el gran poder que los estados iban adquiriendo rápidamente. En este sentido, es significativo que la ideología de la “razón de Estado”, como instrumento legitimador del control de los ciudadanos, y de defensa y/o ataque hacia los otros países, el establecimiento de la burocracia como elemento para el engranaje y puesta en marcha del mecanismo estatal para la consecución de sus fines, y el aparato militar sean instituciones que nacieron al mismo tiempo que las representaciones oficiales de los países en los otros estados, a través de la instauración de la Embajada permanente con personal autorizado, con lo cual el desarrollo de la diplomacia fue adquiriendo mayor importancia y fuerza. Contemporáneo a esto, se encuentra la emergencia del humanitarismo y del racionalismo; fundamentos que le dieron al individuo la oportunidad de tomar un papel protagónico en la historia de la filosofía y la política.

Para lograr la hegemonía tanto en el aspecto religioso como en el del comercio, los emergentes estados nacionales utilizaron un medio que, reestructurado, fortalecido y ampliado constituiría uno de los elementos que mayor impulso y dinamismo daría a las actividades financieras y económicas: los ejércitos y las fuerzas navales.

Tanto la revolución teológica como la evolución de la filosofía fueron conformando una base que poco a poco se fue haciendo más sólida y amplia para fundamentar, justificar e incluso alentar las actividades comerciales. La acumulación de capital dejó de tener una naturaleza exclusivamente económica y se convirtió, también, en un medio para ascender socialmente y para adquirir o reforzar el poder político. Las antiguas condenas de la Iglesia hacia distintas prácticas, como la usura, se fueron flexibilizando y combinando con los nuevos valores aceptados social y políticamente. Lo que es más, esta actitud flexible y tolerante fue convirtiéndose en un factor endógeno de crecimiento que generó nuevos elementos intangibles de poder. Así, podemos ver que las actitudes tolerantes que mantuvieron determinados países (principalmente Inglaterra, Holanda y Estados Unidos) en el terreno religioso fueron aprovechados directamente en favor de las actividades económicas y de la expansión en ultramar. Con ello puede advertirse que los países que lograron la hegemonía no se detenían a pensar tanto en lo equivocados o no que estuvieran los “contrarios”, sino en la forma en que podía utilizarse todo su bagaje cultural (muy especialmente en lo que se refiere a la ciencia y a la tecnología) y a su potencial productivo.

Precisamente la capacidad de adaptación y de cambio fue uno de los elementos fundamentales que determinaron las diferencias en el desarrollo de las civilizaciones. Las potencias atlánticas supieron aprovechar y apropiarse del inmenso conocimiento clásico y oriental. Sin embargo, su acierto fue que no solamente “trasladaron” todo ese bagaje a sus soberanías, sino que tuvieron la capacidad de adaptarlo a sus propias realidades y utilizarlo para la solución de sus problemas particularizados para el logro

de sus objetivos y, además, los incorporaron y usaron para realizar innovaciones que darían lugar a procesos independientes.

En todo ello estuvo presente la utilización conjunta de la ciencia y la tecnología. A pesar de que la interrelación entre ambos elementos tendría su mayor apogeo durante la Revolución Industrial, es a partir del siglo xvi que se sientan las bases para el uso del conocimiento científico en la resolución de problemas prácticos, entre los cuales las actividades comerciales ocuparon un sitio prioritario. Así, los avances científicos iniciales más importantes, durante este periodo, se centraron en áreas como la astronomía, la óptica y la mecánica, y fueron empleados para resolver los problemas que planteaba la expansión en ultramar de las potencias europeas.

La capacidad de adaptación y cambio no se realizó exclusivamente con el objetivo de aprovechar el conocimiento ajeno en el terreno propio. Las potencias atlánticas supieron también adaptarse a las condiciones existentes que no podían cambiar en terrenos comerciales extranjeros.

Los elementos intangibles de poder son al mismo tiempo promotores del desarrollo económico y de la globalización, como cimientos de la construcción y consolidación de los estados nacionales. El análisis de las realidades de las civilizaciones más importantes, y su posterior colocación como países centrales o periféricos, permite advertir que la globalización fue desde su inicio un proceso en el que confluyeron estas dos características imprescindibles y de igual importancia: la expansión y el domino inicialmente económico más allá de las fronteras nacionales, y la cohesión y unidad del poder en el interior de cada Estado, es decir, implica la expansión hacia el exterior del territorio y concentración (de poder, de capital, de conocimiento, de valores) hacia el interior del mismo. A la par que los estados buscaban abrir y dominar nuevas rutas comerciales e imponer su visión del mundo a través de la religión, pretendían también lograr la cohesión hacia el interior de los estados nacionales. Por ello, la discusión tanto de quién, cómo,

para qué y hasta dónde podía gobernar, es decir, el tema de la soberanía, como el de la representación y participación que los principales actores sociales tendrían en el gobierno, además de las formas e instituciones adecuadas para ello fueron problemas fundamentales que ocuparon la atención de los filósofos, los economistas y los políticos.

La discusión de estos temas puso al descubierto problemas que desencadenaron enfrentamientos internos. La forma en la que los estados resolvieron estos conflictos constituyó un elemento intangible de poder que representaría ya fuera un obstáculo o una base de proyección del desarrollo económico y de su expansión en ultramar: la estabilidad interna. De ésta dependía el eficaz y el eficiente desarrollo de los restantes elementos intangibles de poder.

El que la política de los estados nacionales comenzara a ser “política económica” determinó que la economía se convirtiera en el eje en torno al cual giraban los restantes elementos internos. Así, las decisiones públicas estuvieron encaminadas a promover, respaldar, consolidar o defender las actividades comerciales; la ciencia y la tecnología se pusieron al servicio de la producción manufacturera y se utilizaron en la resolución de problemas concretos, localizados y primordiales para la apertura y acceso más rápido, seguro y económico de las rutas comerciales y/o para la consolidación del poder en los mercados internacionales; la religión y la filosofía crearon un nuevo código de valores y de conducta que no sólo permitía sino, incluso, alentaba las actividades comerciales.

La economía, entonces, dejó de tener el sentido clásico de “administración de la casa”, para convertirse en un problema manejado por el Estado. Es cierto que existieron casos, como en Inglaterra, en los que la iniciativa privada tuvo una participación mayor que el Estado en las actividades comerciales. Sin embargo, incluso estas situaciones pudieron darse gracias a las decisiones (premeditadas y/o declaradas o no) del propio Estado.

No podía ser de otra manera, porque desde entonces la economía comenzó a depender de la existencia de un Estado po-

deroso. A medida que los estados fueron desarrollándose y consolidándose como naciones, fueron necesitando nuevas fuentes y formas de financiamiento. Esto implicó que mientras más se desarrollaba la globalización y más se consolidaban los estados nacionales, la economía dejaba de tener el papel, evidente, de eje del desarrollo de los países, para convertirse en parte de un proceso circular, en donde todos los restantes elementos se implican, se retroalimentan y se reconstruyen.

De esta manera, el sistema financiero se convirtió en una fuente de acumulación de capital y de creación de riqueza mediante la movilización del ahorro y de su reinversión en procesos productivos. De la misma forma, el desarrollo de los mercados de capitales, de las sociedades por acciones y la expansión del crédito constituyeron elementos importantes de la movilización y crecimiento del capital y de su canalización a la creación de nuevas fuentes productivas.

La existencia de los factores endógenos del crecimiento y de los elementos intangibles de poder es un hecho necesario para el desarrollo de un país. Sin embargo, la existencia de algunos de estos elementos no determina que se verifique el desarrollo. Para ello es imprescindible que los elementos estén eslabonados e interrelacionados. Uno de los factores más importantes, como hemos visto, es la acumulación de capital. Pese a ello, ésta no da lugar al desarrollo si no va justificada, alentada, acompañada y defendida por otros factores endógenos. Ejemplos ilustrativos son los casos de las colonias portuguesas y españolas en América, en donde se lograron acumular grandes cantidades de capital, pero los excedentes no se colocaron dentro del engranaje productivo y se destinaron en lugar de ello para otros objetivos, como los usos suntuarios.

Las migraciones en el contexto del primer orden económico mundial

Las actividades comerciales y religiosas fueron generadoras de grandes migraciones. En realidad, el proceso que se vivió desde

entonces propició que los diversos elementos se convirtieran en causa y resultado unos de otros: la acumulación y el excedente económico pudo darse gracias a la conquista de las civilizaciones americanas, africanas y orientales, realizada a través de la fuerza. De esta forma, la guerra y el control efectivo y permanente de la población requirieron la movilización de vastos ejércitos y personal del viejo continente a los territorios recién entonces conquistados. Por medio también de la fuerza, se llevó a cabo uno de los más importantes movimientos de personas: los provocados a raíz de la esclavitud. Pronto se vería que la guerra podía ser en sí misma una actividad lucrativa y no sólo un medio para la apertura de las rutas y los dominios comerciales.

La migración que se dio dentro del mismo continente europeo, sin embargo, fue también numerosa y se intensificó conforme fue creciendo el movimiento internacional de capitales.³ Puesto que las actividades comerciales y de guerra necesitaban recursos que los estados no podían siempre sostener, comenzaron a buscarse nuevas formas de financiamiento, basadas principalmente en el crédito. De esta forma, los préstamos y la imposición de intereses fueron conformando el sistema financiero, en un principio eminentemente ligado a las actividades productivas, pero que poco a poco iría tomando cauces, ritmos y fines propios.

Al interior de los mismos países europeos, el panorama iba cambiando rápidamente. La antigua forma de vida, principalmente agropecuaria, fue transformándose. Los avances científicos y tecnológicos dieron por resultado nuevas formas de acti-

³ Ferrer señala en este sentido: "Lisboa, Cádiz y Sevilla, fueron de importancia creciente a fines del siglo XV como entrepuertos y centros de la actividad comercial y financiera. Numerosos mercaderes y banqueros flamencos genoveses, venecianos y florentinos previnieron las nuevas tendencias de las corrientes comerciales y se instalaron en las emergentes ciudades comerciales del litoral atlántico. Este proceso constituye el primer caso importante de transferencia de recursos humanos calificados y de inversiones privadas directas para participar en las nuevas oportunidades abiertas por la expansión comercial". Ferrer, *op. cit.*, p. 53.

vidades productivas, que propiciaron migraciones paulatinas del campo a las ciudades. Aunque este proceso se llevaría a cabo en todo su esplendor a raíz de la Revolución Industrial, fue en ese entonces que comenzó a realizarse.

La migración fue creciendo proporcionalmente, conforme el Estado nacional se iba consolidando. Las actividades comerciales, financieras y productivas fueron dando mayores oportunidades de empleo en sitios diferentes, lo cual obligó a un gran número de europeos a realizar migraciones inter o intracontinentales.

Todo ello fue dando lugar a procesos sumamente complejos que imprimieron a la migración un tinte diferente. Las ideas e instituciones políticas, así como los valores filosóficos y religiosos dieron lugar tanto a nuevas formas de participación social, como a una diferente manera de ejercer el poder. En este sentido, la evolución del concepto de “soberanía” comenzaría a convertirse en clave para la emigración que ciertos individuos tendrían que hacer de sus estados de origen, y para el tratamiento que recibirían de los países en los cuales buscaban establecerse.

En la formación del Estado fue necesaria la definición de los objetivos e intereses nacionales, así como de los medios para alcanzarlos. En este sentido, se comenzaron a identificar a ciertos individuos, o categorías de individuos, que —de acuerdo con el criterio de aquellos que ejercían el poder— no resultaban convenientes para el fortalecimiento del Estado. Las expulsiones masivas de personas, cuya presencia los gobernantes creían perjudicial para los objetivos nacionales, se dieron con marcada fuerza en el terreno religioso. Sin embargo, se ha tratado de demostrar⁴ que la mayor parte de estas expulsiones fueron perjudiciales para la fortaleza de los estados. En los países protestantes, en los que no existió la Inquisición ni se dieron expulsiones masivas tan marcadas, se logró un clima social propicio para la

⁴ Ferrer realiza una interesante exposición de cómo la tolerancia se convirtió en un factor endógeno de poder para los diferentes países, durante el Primer Orden Económico Mundial.

investigación científica y tecnológica. Por ejemplo, durante la restauración efectuada en la Gran Bretaña, pudo aprovecharse el trabajo y las innovaciones científicas de investigadores pertenecientes a distintos credos. Así, en lugar de desterrar y despreciar a aquellos con los cuales no se compartían los mismos valores y creencias, se utilizaba su potencial y creatividad en beneficio de los propios estados y de los grupos gobernantes. En cambio, en los países en los que la intolerancia religiosa imperó, se desperdició un invaluable caudal de recursos humanos. La revocación del “Edicto de Nantes”, en 1685, obligó a medio millón de hugonotes, dentro de los cuales existían valiosos científicos, a emigrar principalmente hacia Suiza y Gran Bretaña, países que se beneficiaron enormemente de su trabajo. En el mismo sentido, hoy se reconoce que la expulsión de judíos y musulmanes, realizada por España en el siglo xv, debilitó la infraestructura urbana asociada con las actividades comerciales y financieras.

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La primera revolución industrial, caracterizada inicialmente por el uso creciente de la ciencia y la tecnología aplicada a la producción, pero cuyas repercusiones implicaron transformaciones drásticas en todas las áreas de la vida humana, vino a intensificar la polarización existente entre los diferentes países. Durante este periodo se establece de una manera mucho más definida el destino de los logros científicos y tecnológicos. Éstos van dejando de ser simples elementos útiles para conseguir de una manera más sencilla y rápida el crecimiento interno de los estados, para convertirse en esenciales y en la base imprescindible del desarrollo. Se transforman, en el mismo sentido, en la plataforma de sostenimiento y de impulso del poder en todos los ámbitos y en todos los niveles (económico, político, social, cultural; así como nacional, regional e internacional). Muchas de las catástrofes que amenazan a la humanidad dejan de estar determinadas

por la naturaleza y se convierten en responsabilidad humana. Así, el hambre, por ejemplo, gracias a los avances científicos y tecnológicos, especialmente en materia agropecuaria, deja de ser un problema físico para volverse una consecuencia de la polarización.

Por lo que se refiere al aspecto político, se produce un choque entre las ideologías que buscan reforzar el poder del Estado, con las que pretenden darle mayor libertad y responsabilidad al individuo. En el primero dos conceptos son de particular importancia: el “mercantilismo”, éste considera que el interés del Estado debe ser el principio rector en la competencia internacional; y el “nacionalismo”, que pretende diluir las identidades individuales, grupales y regionales, y conformar un solo interés nacional, con el objetivo de formar un Estado lo suficientemente fuerte como para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y tener un mejor lugar dentro de la comunidad internacional. Por el segundo, principalmente gracias a las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, se positiviza una serie de postulados cuyo desarrollo filosófico comienza desde el Renacimiento. Así, los derechos universales van tomando sistematización y consistencia. Los “derechos del hombre y del ciudadano” eran reivindicaciones frontales ante el poder del Estado y ante la opresión de los gobernantes. Su objetivo era la destrucción del régimen y su sustitución por otro que reconociera, respetara y defendiera derechos, más que del individuo, del ciudadano perteneciente a un Estado en el que ambas partes se deben lealtad y protección recíproca.

Durante este periodo toman mayor definición ciertos elementos intangibles de poder que ya habían empezado a configurarse durante el primer orden mundial, y que en esta época se muestran ya tanto como elementos indispensables para que un país logre el desarrollo, como claros indicadores del grado de éste. La estabilidad del marco institucional y político fue uno de ellos. A partir de entonces, esta estabilidad fue una condición indispensable que permitió el nacimiento y/o fortalecimiento

de otros elementos intangibles de poder. Un sistema político y jurídico sólido y eficiente permitió un continuo y acelerado crecimiento tecnológico, basado en los avances de la ciencia y la tecnología.

Para alcanzar la estabilidad fue necesario el establecimiento de un sistema claro de normas de convivencia, transacción política y coexistencia religiosa, que permitió a los diversos actores sociales concentrarse en sus diferentes actividades, con la confianza de estar protegidos e incluso impulsados por el marco jurídico y político. Con ello fue posible no sólo un alto grado de eficacia y calidad en las diferentes áreas (empresarial, agropecuaria, industrial, científico-tecnológica, artística, etc.), sino también el acuerdo para la convivencia y la productividad entre distintos actores y clases sociales. Gran Bretaña, país a quien se debe el despegue y desarrollo de la primera revolución industrial y que se convirtió en la mayor potencia dentro de este periodo, logró poner en práctica las ideas generadas a partir de su Revolución de 1688. Con este clima de estabilidad, consiguió que las nuevas fuerzas del crecimiento económico, generadas por la misma revolución industrial, fueran siendo incorporadas a la organización de la sociedad y del Estado, y con ello, que se acelerara e intensificara el papel del país como potencia líder. Gran Bretaña obtiene, durante este periodo, superar a Francia, país que había sido su más importante competidor hasta entonces. Gran Bretaña estaba más avanzada en su industrialización y por lo tanto registraba un mayor crecimiento económico. En ello influyó decisivamente el hecho de que ésta había alcanzado una alianza entre sus clases dirigentes, a partir de la Revolución Gloriosa. En cambio, los constantes, intensos e irresueltos conflictos políticos que Francia experimentó a todo lo largo del siglo xix debilitaron el avance científico y, sobre todo, influyeron fuertemente para que no se registrara el enlace de la ciencia con el sector productivo que sí experimentó Gran Bretaña, y años más tarde Alemania y Estados Unidos.

La alianza de las clases hegemónicas fue muy importante tanto para la generación, reproducción y fortalecimiento de otros elementos necesarios para el desarrollo, como para el mantenimiento y solidez de la misma estabilidad institucional y política. La actuación de las élites de cada país fue determinante en la historia que cada uno experimentaría. Aquellos que lograron un alto grado de desarrollo y de poder, tuvieron élites con un fuerte sentido nacionalista, que enfocaron su trabajo y su inventiva en pro del fortalecimiento de su país. El despegue y solidez de Gran Bretaña tuvo como base un capitalismo con fuertes raíces nacionalistas. Al hacer converger los intereses privados con los públicos, se crearon eslabonamientos y retroalimentaciones que permitieron que el beneficio de uno se convirtiera en el del otro. De las clases altas surgieron empresarios y políticos que trabajaron a favor, por una parte, de la reforma política, de la consolidación del constitucionalismo y de la tolerancia religiosa, y por la otra, del desarrollo de la ciencia y de nuevas tecnologías, y de la consolidación de su posición hegemónica en los mercados internos e internacionales. La capacidad de compromiso de la aristocracia y la burguesía para convivir y trabajar en un sistema de poder compartido, redundó en beneficios mutuos que se derramaron en los niveles públicos y permitieron con ello el desarrollo nacional. El mismo efecto tuvo el que el Estado tuviera la disposición y la capacidad de incorporar las distintas visiones hegemónicas al desarrollo nacional. George Washington incorporó a su gabinete a los dos mayores exponentes del federalismo y antifederalismo: Hamilton y Jefferson. Estas dos visiones antagónicas podían ser conciliadas a favor de una nación que despegaba en su desarrollo, pero que, entre otras cosas, supo dirimir los mayores conflictos dentro de las reglas establecidas por el sistema político y jurídico y llegaría a ser la potencia líder en el nivel mundial, durante la primera mitad del siglo xx.

La alianza entre los sectores hegemónicos (entre ellos mismos y en relación con el Estado) permitió la unidad nacional necesaria para la consolidación interna de los países exitosos,

condición a su vez indispensable para su proyección en el nivel internacional. Ello sólo pudo ser conseguido a través de un Estado en pleno ejercicio de su soberanía, que sabía en qué áreas y en qué niveles era adecuada e incluso necesaria la libre actuación de los sectores sociales, y en cuáles debía intervenir de forma decidida y en algunas ocasiones hasta enérgica. Un Estado fuerte y soberano, en este sentido, daba seguridades a las clases hegemónicas de estar auténticamente representadas y protegidas, y al mismo tiempo les enviaba mensajes claros de los límites y condiciones dentro de los cuales podrían actuar. La capacidad de ejercer la soberanía en todo el país propició, y al mismo tiempo requirió, que los beneficios resultantes de la Revolución Industrial y del desarrollo, cubrieran todo el territorio y que la población estuviera cohesionada a través de las nuevas ideas y valores que se estaban generando. En Gran Bretaña, la ideología liberal (y con ella las ideas del libre mercado) sustentada por la aristocracia y la burguesía industrial y financiera fue aceptada por el resto de la sociedad. Los descubrimientos también contribuyeron a que se alcanzara la unidad nacional y territorial, debido al interés que despertaron en toda la población. Aldo Ferrer señala de ello:

En los cafés, tabernas e imprentas de diversas partes del país, divulgadores científicos difundían los nuevos conocimientos de la filosofía natural y las posibilidades de sus aplicaciones prácticas[...] Los divulgadores científicos recorrían el país y encontraban en Manchester, Bristol, Derby o Lanchashire audiencias tan atentas como en Londres. En la segunda mitad del siglo XVIII, la profesión de “conferencista viajero” estaba en pleno auge y era un respetable y lucrativo medio de vida.⁵

⁵ Aldo Ferrer, *Historia de la globalización II*, México, FCE, 2000, p. 119.

Esta situación contrasta con el caso francés, en donde las instituciones científicas y tecnológicas se concentraron en la capital, en detrimento del desarrollo de otras regiones. Tal parecería ser que la actitud de la población de las provincias ante esta situación podría resumirse en lo siguiente: si el país no se interesaba por ella, ella no se interesaba por el país.

Dentro del escenario de mutuos beneficios entre las clases hegemónicas y el Estado existieron, también, sectores y grupos sociales que se vieron perjudicados y/o marginados por el desarrollo nacional. Sin embargo, los reclamos y los conflictos que se suscitaron fueron también eficientemente manejados y controlados por el Estado. En este sentido, la capacidad para asimilar los conflictos sociales se convirtió en otro elemento endógeno de poder, indispensable para obtener o conservar un alto grado de desarrollo.

La primera revolución industrial fue posible gracias a una revolución de la agricultura. Esta última significó la transformación radical de los modos de producción agrícola que hasta entonces se habían conocido, así como de las formas de relación social entre los diversos actores implicados. Kaplan indica al respecto:

La expansión demográfica, urbana, comercial y manufacturera requiere el mejoramiento de la producción agrícola mercantil, y para ello una doble Revolución social y técnica, en el agro. Son destruidas la comunidad campesina medieval y las formas de agricultura colectiva, y su reemplazo por la explotación individual moderna. Una revolución técnica supera la barrera milenaria a la productividad agrícola.⁶

La necesidad de que los elementos intangibles de poder se encuentren armónica y eficientemente interrelacionados, registrada desde el primer orden mundial, se reafirma e intensifica en la

⁶ Marcos Kaplan, *Estado y globalización*, México, IJ-UNAM, 2002, p. 110.

primera revolución. El avance tecnológico, las reformas organizativas de la empresa rural y el mejor uso de la tierra permiten el aumento de la producción y de los excedentes agropecuarios. Éstos, a su vez, representaron una fuente importante de capitalización del Estado, que tuvo la capacidad para financiar nuevos proyectos científicos y tecnológicos. La incorporación de numerosos terratenientes en la revolución agrícola intensificó el crecimiento económico y permitió se generaran los ahorros nacionales necesarios para la creación y/o fortalecimiento de otros elementos intangibles de poder, como la actividad mercantil, la producción manufacturera, las obras de infraestructura. Así, la economía nacional, que se beneficiaba directamente con los ahorros de empresarios y terratenientes, los “premiaba” con buenas condiciones para que establecieran y desarrollaran nuevos proyectos.

La industria bélica fue otro eslabón de esta cadena positiva. Las fuerzas armadas demandaron para su abastecimiento del desarrollo industrial en diversas áreas (ropa, alimentos, calzado, construcción de armamento en general, traslado de tropas, etc.), que redundó en beneficio directo de la economía nacional.

El desarrollo de los transportes y comunicaciones representa otra de las características del avance de la Revolución Industrial, y con ella, del proceso de globalización. El crecimiento del comercio interior y de las exportaciones de Gran Bretaña, así como la integración territorial, fue posible gracias a la construcción de canales que completó la red de ríos navegables y de puertos internacionales. Las obras de infraestructura en materia de comunicaciones se interrelacionaron de manera positiva con la ciencia y la tecnología, y con el sistema productivo y financiero y con el comercio interno e internacional. A finales del siglo xviii, Gran Bretaña era uno de los países mejor comunicados, lo cual representó una importante ventaja frente al resto del mundo. La importancia de la inversión en comunicaciones y transportes sería comprendida un siglo después por Estados Unidos en su despegue como potencia hegemónica. En 1914, “la red ferroviaria norteamericana alcanzaba casi 400 mil km.

Es decir que un tercio de los ferrocarriles del planeta estaban entonces instalados en los Estados Unidos, que ocupa el 5% de la superficie mundial.”⁷

El ahorro interno fue una de las condiciones fundamentales para el despegue, en virtud de ser ésta la fuente más adecuada para el financiamiento de inversiones y proyectos productivos. Los países poderosos lograron establecer inversiones exitosas no sólo al interior de sus territorios, sino también al exterior. El ahorro interno también sirvió para financiar el avance en los conocimientos técnicos y científicos, que fueron aprovechados para generar ventajas competitivas, especialmente en el campo de la producción. Esto permitió tanto el nacimiento y crecimiento de industrias dinámicas internas, como la posibilidad de exportación de tecnología y bienes de capital. El desarrollo estuvo asociado en todos los casos con el crecimiento de la producción agropecuaria, puesto que ésta es una condición para la ampliación del mercado interno y para el aumento de la oferta de alimentos y materias primas. En el aspecto externo, vemos como característica común de los países exitosos el haber mantenido un equilibrio en sus pagos internacionales, logrado principalmente a través de la diversificación y aumento de las exportaciones. Los elementos antes descritos estuvieron interrelacionados de una manera armónica y eficiente: el ahorro interno financió proyectos productivos y de inversión que permitieron el crecimiento de las exportaciones. Éstas a su vez fueron fuente para cubrir pagos internos (parte de los cuales se destinaron al ahorro interno) e internacionales.

Las migraciones en el contexto de la primera revolución industrial

Las transformaciones ocurridas durante este periodo ocasionan que la interrelación entre regiones y países se vaya estrechando.

⁷ Ferrer, *Historia de la globalización II...*, p. 194.

Los avances en materia de producción no sólo permiten sino que estimulan y en muchos sentidos obligan a que se realicen vastos y constantes movimientos de personas de un lugar hacia otro. Los avances en el área de la metalurgia y de la siderurgia revolucionan los medios de transporte; la invención del ferrocarril permite el traslado de grandes cantidades de carga de todo tipo de productos, y también el movimiento de personas. Dentro de los productos transportados por medio del ferrocarril, los bélicos ocupan un espacio de particular importancia. De esta manera se realiza un cambio profundo en el quehacer de la guerra que produce, a su vez, nuevos movimientos de personas. Otra de las innovaciones importantes en este periodo es el establecimiento de la fábrica moderna, que va a transformar no sólo la relación del ser humano con el trabajo (al establecer la división del trabajo, la especialización y la mecanización), sino que incluso va a cambiar el paisaje geográfico, ya que a partir y alrededor de la fábrica moderna, se va a crear y a desarrollar la ciudad industrial, que implicará necesariamente la movilización y reubicación de distintos recursos naturales y humanos.

LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

A partir del año 1875 comienza un periodo en el que las transformaciones en materia científica y tecnológica, realizadas en la primera revolución, continúan presentándose. Sin embargo, dado que estas transformaciones se dan con una profundidad y una rapidez mucho mayor, y provocan cambios pronunciados en un mayor número de aspectos de la sociedad, se le ha considerado como una segunda revolución, cuya época de finalización no está muy bien definida. Las fechas que se toman como punto de referencia en cuanto a su terminación son alrededor de los años 1914, 1918 o 1929.

Con esta segunda revolución, se confirma la ley de la ace-

lización histórica, que establece que los cambios ocurridos en un periodo de la historia son mucho más rápidos que en los periodos anteriores.

Uno de los más importantes logros de este periodo es el descubrimiento del petróleo como material energético. Su utilización en una gran cantidad de áreas, es ampliamente aprovechado con fines comerciales y productivos, ya que además posibilita nuevos descubrimientos e invenciones. Con el descubrimiento del petróleo, se confirma el objetivo principal de los productos científicos y tecnológicos: la acumulación de capital y de poder de unos cuantos países en detrimento del resto de los estados y de la mayor parte de la humanidad. Pudiendo ser utilizado en beneficio de la comunidad internacional, se le convierte en una importante y estratégica arma, que provoca nuevas formas de monopolio, de imperialismo y de colonialismo.

La división internacional del trabajo, de esta forma, se va acentuando cada vez más. No sólo las colonias, sino también los países formalmente independientes (aunque realmente subordinados a las decisiones de los centrales) van siendo convertidos en productores de materias primas ampliamente aprovechadas a favor del desarrollo de las naciones hegemónicas, y obligados a aceptar condiciones desventajosas en todos los ámbitos. Ello da por resultado que el desarrollo de los países periféricos se vea detenido o francamente en retroceso.

El equilibrio se rompe no solamente en cuanto a las relaciones internacionales se refiere. Al interior de los países, las brechas que existen entre distintas capas sociales se van también ampliando. Igualmente, se producen desequilibrios, separaciones o incluso rompimientos entre el interés de los ciudadanos y el del Estado; y dentro de la división política interna de los países, en la que los poderes judicial y legislativo quedan subordinados al ejecutivo, sobre todo en los países periféricos.

El fin de la Primera Guerra Mundial da la pauta para el primer intento de establecer reglas mínimas que rijan las relaciones internacionales, a través de la creación de la "Sociedad de las

Naciones". Dentro de ésta, el aspecto laboral toma un lugar privilegiado y provoca que las tres banderas izadas por la Revolución francesa (la libertad, la igualdad y la seguridad) sean tomadas por actores diferenciados. La división política clásica, en donde los "conservadores" se identifican como el "Partido del orden" y los "liberales" como el "Partido del cambio", se amplía con el surgimiento, a partir de 1848, del socialismo, el cual es identificado con el radicalismo. Entre el socialismo ubicado hacia la izquierda, que pugna esencialmente por la igualdad; y el conservadurismo ubicado hacia la derecha, que defiende a ultranza la seguridad, se mueve constantemente el liberalismo y va estableciendo alianzas con aquel que coyunturalmente va evaluando como el más débil, con el objetivo de contrarrestar y detener la fuerza del que ubica como mayor amenaza. Como resultado de sus eventuales alianzas con el conservadurismo, el liberalismo va renunciando a una serie de postulados que le dieron origen y posteriormente estructura, y pretende despojar al "pueblo" de fortaleza, con lo cual logra que los intereses del Estado y los de los ciudadanos, así como los de las capas altas, medias y bajas de la población, se vayan diferenciando y rápidamente contraponiendo entre sí.

Con la conformación de la clase media, se liberan múltiples y contradictorias tendencias que el Estado pretende integrar en un solo interés común. Sin embargo, los beneficios reales y actuales que se otorgan a las clases altas, generalmente identificadas o incluso pertenecientes al gobierno, contrastan con las condiciones decrecientes del resto de la población, al que se le piden sacrificios en lo inmediato, en nombre de la construcción de una nación que les dará no sólo beneficios materiales, sino la tranquilidad y el orgullo de pertenecer a un Estado fuerte y unido. A pesar de lo poderoso que en muchos casos llegó a ser este discurso ideológico, se advierte un enorme impulso y efectividad del trabajo de las masas en búsqueda del respeto y garantía del disfrute de sus derechos. Especial fuerza es la que se adquiere en el aspecto laboral: el sindicalismo obrero emerge, y con él

se va estructurando la legislación protectora del trabajo. Esta fortaleza se refleja no sólo en el aspecto interno. Gracias a la conformación de la "Organización Internacional del Trabajo" (que se crea a través del Tratado de Versalles), en 1919, se llega a la internacionalización del derecho del trabajo.

El aspecto financiero, deja de ser un coadyuvante para la realización de las actividades comerciales y productivas y se convierte en un fin capitalista en sí mismo. Igualmente sucede con el sistema bancario, que al fusionarse con el sistema industrial construye empresas sumamente fuertes que se colocan por encima de la sociedad, y muchas veces de los gobiernos, con lo cual crea monopolios. Con ello, la economía simbólica y la real van diferenciándose y separándose.⁸ La primera toma el papel principal y no sólo avanza mucho más rápidamente y abarca mayores espacios que la real, tanto en el interior de los estados como en el aspecto internacional, sino que incluso con su avance debilita a la economía real y llega, sobre todo en los países periféricos, prácticamente a anularla. El avance de lo simbólico en detrimento de lo real se da no sólo en el aspecto económico estrictamente. Las corporaciones, los monopolios y en general las empresas que tienen algún fin comercial o financiero desplazan al ser humano, que se ve subsumido ante el poder de "entes" que no alcanza a visualizar ni a comprender, pero cuyas acciones en el nivel macroeconómico tienen drásticas, negativas y concretas consecuencias para la satisfacción de sus necesidades y debilitan el papel protagonista que, incluso filosóficamente, había adquiri-

⁸ Respecto a estas economías, Kaplan señala: "En un sentido también erosivo o destructivo de la soberanía, la economía real (producción, productividad, inversión de capital, capacitación laboral), y la simbólica (dinero, flujos de capital, tipos de cambio, movimiento de divisas, reciclamientos del capital, endeudamiento), se independizan una de la otra, siguen caminos divergentes, aflojan sus nexos o los vuelven impredecibles. La economía simbólica tiende a crecer más que la real, y a reemplazarla en grado considerable como fuerza motriz y timón de la economía internacional". Marcos Kaplan, *El Estado latinoamericano*, México, IJ-UNAM, 1996, pp. 216-217.

do a raíz del inicio de la modernidad. La propiedad, en el mismo sentido, se refiere a valores abstractos y la responsabilidad de las acciones de los individuos concretos que están por “detrás” de los monopolios, se vuelve difusa con la creación, entre otras figuras jurídicas, de las “personas morales”.

A pesar de este crecimiento de la economía simbólica, que logra avanzar casi con independencia de la autorización expresa y clara de los gobiernos de los estados, y alcanza dimensiones cada vez más globales, el Estado intensifica y diversifica su intervención en otras áreas, terminando en muchas ocasiones con prácticas de colaboración y solidaridad internacional. Uno de los hechos más importantes en este sentido es la forma de creación de la ciencia y la tecnología, que deja de tener el toque cosmopolita que en un momento alcanzó y, especialmente, a raíz de la creación de las armas nucleares, adquiere tintes eminentemente nacionalistas, convirtiéndose en un medio para alcanzar la hegemonía política en el aspecto internacional. La ciencia y la tecnología le da al Estado la posibilidad de obtener un mejor sitio dentro de la jerarquía mundial no sólo por su carácter de posibles productores de medios de defensa respecto a los demás países, sino, sobre todo, de productores de medios de ataque. El monopolio que el Estado hace de estos elementos se realiza tanto en el nivel internacional como en el interno. Las técnicas proporcionan al Estado medios para el conocimiento de lo que ocurre con la población y posibilidades para su control y manipulación. Así, la ciencia y la tecnología se convierten en ambos niveles en razón de Estado y, por lo tanto, imperan en su creación y manejo la desconfianza y el secreto.

Las migraciones en el contexto de la segunda revolución industrial

Durante la segunda revolución industrial el mundo vive una etapa de marcado colonialismo,⁹ que produce a su vez nuevos flujos migratorios. Los movimientos de personas se dan por distintos motivos. Primeramente, en algunos casos los ciudadanos pertenecientes a los países colonizadores son enrolados en los ejércitos y trasladados forzosamente a los territorios por conquistar. Sin embargo, los movimientos se dan también de una manera espontánea e individualmente decidida, ya que la guerra y la colonización posibilitan el empleo, el enriquecimiento y el ascenso social. La ideología del nacionalismo y la de la supremacía del hombre blanco desempeñan, en este sentido, un papel fundamental, ya que justifican las intervenciones y pretenden legitimarlas. Por el otro lado, los habitantes de los países colonizados también producen movimientos migratorios, por parte de personas que huyen, primeramente, de la guerra y después, de la opresión y el dominio de los gobiernos extranjeros.

Es en esta época cuando las consecuencias del capitalismo empiezan a exhibir profundas contradicciones respecto a los movimientos de personas. Por una parte, el desarrollo de la urbanización intensifica la migración del campo a las ciudades. En las urbes de los países hegemónicos, principalmente, se realizan acciones tendentes a desarrollar los procesos productivos y de industrialización, que a su vez provocan nuevas acciones de la misma naturaleza. Dentro de esta cadena del capitalismo, las migraciones desempeñan un papel esencial, dado su carácter

⁹ Kaplan señala con respecto a esta época que: "El mundo fuera de Europa es repartido en territorios bajo el gobierno formal o la dominación política, de hecho, de los Estados miembros del club de colonizadores. Entre 1876 y 1915, un cuarto de la superficie terrestre es distribuida como colonias entre media docena de Estados". Marcos Kaplan, *Revolución tecnológica, Estado y derecho*, México, IJ-UNAM, 1993, p. 190.

de ejecutantes directos de dichas acciones. Además de operantes, se convierten también en sus destinatarios. Gracias a los espectaculares avances en los transportes marítimos, aéreos y terrestres, se hace una invitación tácita y masiva para que las personas se trasladen hacia distintas partes. La aceptación de esta “invitación”, debería significar un logro de las acciones capitalistas. Sin embargo, es también en esta época cuando a través de medidas jurídicas se empieza a restringir el libre paso de los individuos de un país hacia otro. En 1914 se crea el pasaporte y se convierte en un medio para poner límites y barreras legales a las consecuencias de las acciones del mismo sistema capitalista.

La Primera Guerra Mundial, además de las flujos migratorios propios de cada enfrentamiento bélico, en materia de población produce hechos que van a tener consecuencias drásticas a finales del siglo xx: la división de antiguas nacionalidades. La fragmentación geográfica y política que se lleva a cabo a raíz de la terminación de la primera guerra, no toma en cuenta los procesos culturales y de identidad de los distintos grupos. Las nuevas fronteras se trazan en función de lo que les corresponde a los países vencedores y en muchas ocasiones dividen a pueblos que ancestralmente se habían desarrollado como una unidad política y cultural, y cuyos habitantes, de la noche a la mañana, se convirtieron en ciudadanos pertenecientes a distintos países. En el mismo sentido, personas que profesaban culturas e incluso religiones diferentes, se transformaron en habitantes de una misma entidad política, que los llamaba a reconocerse como iguales y a trabajar en conjunto por un solo objetivo nacional. A pesar de que el proceso de integración en una nueva nación se llevó a cabo con ritmos, maneras y resultados distintos en cada país, en la mayor parte de los nacionalismos “originales”, se conservaron elementos culturales sumamente fuertes que los procesos artificiales no pudieron desterrar completamente. La geografía mundial también sufre cambios debido al avance en la rebelión de los países colonizados.

LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

La tercera revolución industrial, a pesar de que implica una mutación general del capitalismo, conserva muchas de las bases y los fines con los que éste nació originalmente. Una gran cantidad de los cambios, en este sentido, se puede ubicar en los mecanismos para lograr los objetivos y en los actores encargados de llevarlos a cabo.

La polarización económica y política entre clases, regiones y países, como característica con la que nació y fue desarrollándose el capitalismo, tiende a profundizarse con una gran aceleración e intensidad en esta etapa de la historia. La Guerra Fría hace que esta polarización tenga un reconocimiento más evidente y “oficial”, al establecer la categoría del “Tercer Mundo”. Dentro de esta categoría, se ubican países con antecedentes, realidades y posibilidades de crecimiento muy diferentes entre sí, pero que comparten condiciones de pobreza y subdesarrollo, así como de dependencia ante alguna de las dos grandes potencias en competencia durante este periodo.

A partir de 1970, se introduce el término de “países en vías de desarrollo” para designar a los estados pobres. Dentro de esta categoría se ubica sobre todo a aquéllos que se encuentran dentro de la semiperiferia de las economías-mundo.¹⁰

Los actores más representativos de esta época son las grandes empresas transnacionales que, sin embargo, siguen generando para los países periféricos, en los que establecen sus sucursales, consecuencias sumamente negativas, que profundizan

¹⁰ “La semiperiferia comprende dos tipos de economía: la economía de exportaciones minerales, principalmente de los países exportadores de petróleo del Medio Este, quienes han generado un sistema internacional de trabajadores migratorios a escala masiva-global a los Estados del Golfo; y los nuevos países industrializados, mayoritariamente en Asia del Este y en América Latina, quienes, por el contrario, no han generado flujos internacionales de trabajadores en la misma escala”. W.T.S. Gould y A.M. Findlay, “International migration within the third world: recent trends and current issues”, en W.T.S. Gould, y A.M. Findlay, *Population migration and the changing world order*, Chichester, Londres, J. Wiley, 1994, 293 pp.

e intensifican el subdesarrollo de éstos. Las decisiones de las empresas transnacionales se hacen tomando en cuenta motivos de rentabilidad comercial, lo cual pareciera ubicarlas fuera del alcance de los intereses ideológicos y políticos de los diferentes estados. Sin embargo es, precisamente, todo lo que gira en torno al capitalismo, lo que les da la oportunidad de obtener grandes ganancias, apoyando tácitamente el proyecto de los países periféricos e identificándose con él. El capitalismo, en ese sentido, opera no solamente como un sistema de producción, sino como un proyecto civilizatorio que abarca todas las áreas de la vida en sociedad. Las empresas transnacionales, además de ser las reproductoras y beneficiarias del capitalismo, funcionan también como neutralizadoras de algunas de las amenazas de éste. El poder que poseen las hace estar en una situación de evidente y marcada ventaja respecto a los gobiernos de los países periféricos en los que se establecen, obligándolos en muchos casos a legislar en contra de conquistas sociales ganadas con base en intensas, prolongadas y literalmente sangrientas luchas llevadas a cabo por el pueblo. Así, los gobiernos aceptan condiciones que, por un lado merman el bienestar de la sociedad en lo inmediato e impiden su desarrollo futuro, y por el otro, inhiben cualquier proyecto a largo plazo del propio Estado que pudiera sacar al país del subdesarrollo, a cambio de beneficios cuantiosos para el gobierno, pero que representan un porcentaje mínimo de las ganancias de la empresa y que, además, son efímeros.¹¹ La resistencia que encuentran por parte de la sociedad es también reducida debido al impacto de las restantes acciones del capitalismo. El mínimo nivel de educación, que convierte a la población en una gran masa de empleados no especializados;

¹¹ Respecto a la relación de las empresas transnacionales con los estados subdesarrollados, Marcos Kaplan señala: "Con frecuencia llegan a influir y hasta dominar a los poderes públicos de las naciones de implantación, obligados así a negociar con ella en la debilidad y en la oscuridad". Marcos Kaplan, *Revolución tecnológica...*, vol. iv, p. 130.

la desintegración social, causada entre otros motivos por la falta de oportunidades de ascenso y que reemplaza los sentimientos de solidaridad e identificación por los de competencia y egoísmo; las continuas y cada vez más profundas crisis económicas, que obligan a los individuos a aceptar empleos en condiciones que incluso atentan contra la dignidad humana (ínfimamente remunerados, con largas jornadas de trabajo, sin ningún tipo de prestaciones sociales ni posibilidad de desarrollo, sin garantías de estabilidad), por el temor a formar parte de la cada vez más numerosa población desempleada; permiten que las empresas transnacionales se fortalezcan sin encontrar obstáculos significativos.

En este escenario, la relación del individuo con el trabajo sufre serias modificaciones. Además de la renuncia a conquistas laborales, ya comentada, se advierte una contradicción con los principios tayloristas.¹² Gracias a las técnicas electrónicas, los individuos con poder y capacidad de decisión tienen también la oportunidad de ejecución. Esto da por resultado que aquellos que simplemente ejecutaban las órdenes, hoy ya no sean necesarios en las empresas y que se provoquen despidos masivos de trabajadores. La tendencia al desempleo, surgida desde épocas tempranas del capitalismo, se intensifica y acelera como consecuencia de los avances de la tercera revolución, en especial de

¹² El taylorismo es "[...] la culminación de un proceso histórico comenzado en el siglo xix, y reforzado por la fase de este siglo[...]. Este proceso culmina en los años de 1920, con la sistematización e imposición de un conjunto de métodos identificados como la Organización Científica del Trabajo de F.W. Taylor (1856-1915)". *Ibid.*, p.184. Entre las características y fines principales del taylorismo se encuentran las siguientes: parcelación de la actividad del trabajo; búsqueda de cómo un proceso productivo garantice las condiciones más eficientes para la producción y la plusvalía; separación, aislamiento del trabajador dentro de un grupo; control del trabajador; división del proceso productivo en tareas que se puedan cuantificar; cambio en los salarios dependiendo de la productividad; examen de las tareas medido por cronómetro y por el ordenamiento en los puestos de trabajo; apropiación del saber técnico del obrero para adaptarlo a máquinas y a la dirección; división de la empresa entre los que piensan y los que ejecutan; fragmentación y reducción de la personalidad del trabajador; desarrollo del trabajo en cadena.

los realizados a través de la robótica. Además, el conocimiento se vuelve no sólo un medio para lograr un objetivo, sino un objeto —altamente valuado— del comercio en sí mismo.

La mutación general del capitalismo tiene sus bases y está dirigida especialmente por el cambio en la correlación de fuerzas entre las tres representaciones políticas e ideológicas conocidas a partir del siglo xix. El liberalismo, que había tenido el papel protagónico, y que en muchos sentidos había hecho constantes concesiones, permitiendo que tanto demandas progresistas como conservadoras se manifestaran y se cumplieran en determinados casos, pierde poder, significativamente, al grado de dejar de ser el que marca la pauta. Tanto en el nivel internacional como al interior de los estados (en la mayoría de ellos), las tendencias conservadoras adquieren fortaleza y logran imponerse en la mayor parte de las áreas de la sociedad. Sin embargo, mucho de la fuerza de estas tendencias se debe a que no se presentan con el membrete de “conservadoras”, sino que esconden su naturaleza y alcances con el nombre de “neoliberalismo” cuando, en realidad, poco o nada tienen que ver con la propuesta original del liberalismo.¹³

El neoliberalismo comienza a adquirir mayor estructura a partir de 1970, cuando el régimen de paridades fijas entre monedas, surgido de la convertibilidad del dólar en oro, es sustituido por el de tasas de cambio flotante. Esto ocasiona una mayor desvinculación entre la economía real y la simbólica. En apariencia ésta es una situación espontánea, resultado de las fuerzas libres del

¹³ De ello sostiene Wallerstein: “el neoliberalismo histórico no puede considerarse como una nueva versión del liberalismo. Ha adoptado el nombre, pero es, a fin de cuentas, diferente del liberalismo. El Liberalismo histórico no ha podido sobrevivir al colapso de la Vieja Izquierda que, lejos de ser su enemiga mortal, fue su más importante sustento social, ya que durante mucho tiempo desempeñó el papel crucial de contención de las presiones democráticas de las clases peligrosas al brindarles la esperanza —y la ilusión— de un progreso inevitable”. Immanuel Wallerstein, *Liberalismo y democracia: ¿hermanos enemigos?*, México, CIECH-UNAM, 1998, p. 26.

mercado, sin embargo, en realidad forma parte de un proceso que alcanza prácticamente todos los aspectos de la sociedad y del Estado. Éste es entonces un proceso político, cultural, ideológico, social y, por supuesto, económico, que opera tanto en el nivel nacional como en el internacional. El neoliberalismo encuentra en Ronald Reagan y Margaret Thatcher, a sus mejores impulsores y representantes. El hecho de que dos países con un alto grado de desarrollo y, especialmente, con una gran capacidad de influencia e imposición sobre otros muchos, lo avalara y desarrollara, dio al neoliberalismo una gran fuerza y espacio. Ambos jefes de Estado impusieron las medidas con mucha decisión e incluso agresividad. Así, a partir de la década de 1980, se enfatizó la necesidad de privatizar empresas públicas, y el apoyo de los estados y del sistema internacional hacia los intereses de las grandes empresas y el gran capital monopólico se hizo más evidente e intenso. En el terreno social, esto dio como resultado, y al mismo tiempo tuvo como necesidad, el que el Estado impusiera restricciones en materia laboral y contuviera las inconformidades y protestas de los trabajadores, que se rebelaban ante las nuevas políticas. El aspecto laboral no fue el único con consecuencias adversas. El desmantelamiento del Estado social implicó la pérdida de beneficios a la población en las áreas estratégicas (salud, educación, seguridad social), especialmente para los más desprotegidos y/o marginados por las fuerzas del libre mercado.

Sin embargo, las fuerzas desencadenadas por el capitalismo, ahora a través del neoliberalismo, han provocado también situaciones que escapan a su control y que inclusive lo limitan y atentan contra él, al otorgar a los individuos la posibilidad de adquirir mayor fuerza y presencia. Las nuevas tecnologías son uno de los mejores ejemplos de ello. Los avances tecnológicos le dan al Estado la posibilidad de dirigir la atención de los ciudadanos hacia objetivos de mercado, por medio, especialmente, de los medios masivos de comunicación. Pese a ello, estos medios también le dan la oportunidad a los individuos de conocer

lo que pasa no sólo dentro de su país sino también en el nivel mundial. La opinión pública internacional, en este sentido, ha adquirido una fortaleza y una importancia creciente y en muchos casos ha suplido la falta de mecanismos coercitivos que hay dentro del sistema internacional. El mismo impacto han tenido las técnicas electrónicas que, por medio de las computadoras, permiten a los individuos la comunicación en tiempo real hacia prácticamente cualquier punto del globo terrestre. La inmediatez de estas formas de comunicación impiden la censura que pudiera realizar el Estado para controlar y manipular la información, y permiten la creación de públicos informados, sensibilizados y dispuestos a la movilización política, social o cultural. Las nuevas tecnologías han tenido un papel semejante en el nivel de las relaciones internacionales, ya que la rapidez con la que trabajan, en muchos casos, producen impactos antes de que los gobiernos centrales adviertan su naturaleza y posibles efectos, y reaccionen en consecuencia. De esta forma, los avances tecnológicos, creados e impulsados por los países hegemónicos, se convierten en la actualidad en un freno que les impide ejercer abiertamente el poder de manera arbitraria e indiscriminada. Las limitaciones hacia el poder indiscriminado del Estado (y de los estados hegemónicos) son establecidas no sólo por organizaciones no gubernamentales, que tradicionalmente han funcionado como la “contraparte” del Estado, sino incluso por agencias de las Naciones Unidas.¹⁴

¹⁴ Como ejemplo de ello tenemos que “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ahora mantiene una base de datos computarizada, en donde registra los reportes de violaciones a derechos humanos tanto para las propias agencias de su campo, como para otras instituciones internacionales, incluidas las Organizaciones No Gubernamentales. El ACNUR brinda esta información a gobiernos, y organizaciones no gubernamentales con la esperanza de que servirá para desincentivar a los regímenes de futuras violaciones a derechos humanos”. Myron Weiner, “International norms and institutions”, en *The Global Migration Crisis, Challenge and Human Rights*, Harpercollins College, 1995, p. 166.

Las migraciones en el contexto de la tercera revolución industrial

El lapso comprendido entre los años 1945-1970 fue particularmente importante respecto a la estimulación de los movimientos migratorios. La alta concentración de la inversión y la expansión de la producción, que caracterizaron este periodo, necesitaron de una gran cantidad de mano de obra, que la población interna de los países que llevaron a cabo este proceso no pudo satisfacer. Además de la migración provocada por razones productivas y de desarrollo, se realizó un vasto, importante y continuo movimiento de personas, relacionado directa o indirectamente con causas políticas.

A) La migración relacionada con aspectos de desarrollo y de producción

La economía de posguerra que vivió la mayor parte de los países a raíz del término de la Segunda Guerra Mundial provocó que miles de personas se trasladaran hacia Europa Occidental, Norte América y Australia. En todos estos países se crearon programas para trasladar a una gran cantidad de refugiados o de personas que, habiéndolo perdido todo a causa de la guerra, veían la posibilidad de encontrar trabajo en el extranjero como la única oportunidad de supervivencia. Los países que crearon estos programas se beneficiaron enormemente con la inmigración, al grado de ser considerada ésta como uno de los factores más importantes del desarrollo económico inmediato de los estados receptores.¹⁵ Por lo que respecta a Europa, en Inglaterra, Bélgica,

¹⁵ Así, se establece que "Hay fuertes evidencias de que fueron los países con mayores índices de inmigración, como la República Federal Alemana, Suiza, Francia y Australia, los que tuvieron los mayores índices de crecimiento económico durante el periodo de 1945-1973. Países que tuvieron menores índices de inmigración (como Gran Bretaña, Estados Unidos en el mismo lapso), tuvieron un crecimiento

Francia, Suiza, Luxemburgo, Suecia, Alemania Federal, los programas para reclutar trabajadores extranjeros (“sistemas de trabajadores huéspedes”) fueron la solución ideal de posguerra, tanto para los mismos inmigrantes como para los países receptores. En todos ellos se verificaron condiciones similares: en un principio los reclutados fueron exclusivamente hombres solteros (después este patrón fue cambiando para recibir también a mujeres); los trabajos que desempeñarían estaban previamente designados, por lo que sufrían de una restricción muy marcada dentro del mercado de trabajo; no gozaban del reconocimiento de los derechos civiles; los programas no preveían la reunificación familiar y, en cambio, establecían reglas por medio de las cuales castigaban la indisciplina laboral con el retorno del trabajador al país de origen. En todos estos países, sin embargo, se dieron también las mismas consecuencias indeseadas por parte de los gobiernos receptores y que, posteriormente, convertirían a los inmigrantes de coadyuvantes de fortaleza y desarrollo en un problema cada vez más complejo, creciente y difícil de detener, controlar o eliminar.

Los gobiernos receptores percibían a la inmigración como un fenómeno conveniente de utilizar en lo inmediato y por lo tanto, temporal. Sin embargo, no contaban con que estos “elementos productivos”, eran también seres humanos con necesidades que iban más allá del aspecto económico-laboral y en los que se presentaban variables sumamente difíciles de identificar y controlar. Contrario a lo que planearon los gobiernos europeos, los inmigrantes no sólo no abandonaron el país cuando ya no se les necesitó, sino que inclusive el patrón de inmigración fue cambiando en forma y en cantidad. El intento por prevenir la reunificación

económico menor. Entonces, el argumento de que la inmigración fue económicamente benéfica en este periodo es convincente”. Stephen Castels y Mark Miller, “Migration to highly-developed countries since 1945”, en *The age of migration. International Population Movements in the Modern World*, Nueva York, The Guilford Press, 1993, p. 76.

familiar fue un completo fracaso. Paulatinamente, los familiares de los hombres, que en un principio llegaron a trabajar, fueron uniéndoseles y provocaron con ello el establecimiento, en los países receptores, de redes conformadas por familiares o por personas pertenecientes al mismo Estado de origen. Así, al contar los trabajadores con condiciones más estables, la inmigración tomó un tinte más estructurado, permanente y, en muchos casos, organizado, lo que provocó, a su vez, nuevos flujos migratorios. Esto ocasionó que incluso el paisaje de los países de los gobiernos receptores fuera cambiando. Poco a poco se fueron conformando comunidades de extranjeros con características y necesidades muy distintas a las de la población nativa.

En Canadá, Estados Unidos y Australia, se observaron condiciones y consecuencias similares a las que hubo en los países de Europa Occidental. No obstante, los aspectos ideológicos, pero sobre todo étnicos dieron a la inmigración una característica diferente. En un principio, en estos tres países se establecieron políticas en las que se condicionaba el ingreso según la nacionalidad de los inmigrantes. En Canadá, en 1966 se estableció un “sistema de no discriminación”, ya que hasta esta fecha sólo eran admitidos al país los inmigrantes europeos. En el mismo sentido, en Australia el Departamento de Inmigración reclutó trabajadores en campamentos de personas europeas desplazadas, dando preferencia a los refugiados de los países bálticos y eslavos, precisamente por motivos raciales, además de que con ello se pretendía reclutar a inmigrantes no comunistas.

B) La inmigración relacionada con aspectos político-ideológicos

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencias principales, la creación de un orden mundial diferente al anterior y de nuevas fronteras ideológicas y geopolíticas y, con ello, el inicio de la Guerra Fría, cuyo objetivo era la imposición del sistema de producción capitalista o del socialista. Ello determinó que

el continente europeo fuera dividido en Este y Oeste, y que se continuara presentando una gran cantidad de desplazamientos forzados. Los flujos migratorios se conformaron, principalmente, de personas que iban del Este al Oeste, en donde fueron albergados en campos creados especialmente para este objetivo. Estos campos estuvieron situados básicamente en Italia y Austria, en donde esperaban hasta ser reasentados en terceros países.

La Segunda Guerra Mundial se dio con el objetivo formal de evitar la hegemonía del poderío alemán y de terminar con la discriminación y la exclusión de aquellos seres humanos que la filosofía nazi consideraba como peligrosos y/o inútiles. Sin embargo, la Guerra Fría, que dio inicio al término de la Segunda Guerra Mundial, tuvo el mismo objetivo: el querer imponer una sola visión del mundo, ya fuera capitalista o socialista. Con este fin, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos emprendieron el desarrollo de una carrera armamentista y se enfrascaron en un enfrentamiento bélico indirecto en el terreno de terceros países. Cada uno de los dos grandes contendientes tenía intereses y ganancias al apoyar y fomentar los conflictos en otros territorios, que por lo general pertenecían a países del Tercer Mundo, pero como los enfrentamientos no se daban directamente entre ellos dos, se les consideraba como parte de la Guerra Fría. Todo ello ocasionó la existencia de nuevos movimientos de migración forzada.

LATINOAMÉRICA ANTE LA GLOBALIZACIÓN

El subcontinente latinoamericano, al igual que el resto de los países del Tercer Mundo, ha sufrido desde los inicios del proceso de globalización las consecuencias adversas y negativas de éste. Desde el principio de su historia fue incorporado al proyecto modernizador con el objetivo fundamental de utilizar sus recursos humanos y naturales, en función del crecimiento y fortalecimiento de las naciones más poderosas. Dentro de la in-

corporación selectiva al crecimiento y al desarrollo, que implica el proyecto globalizador, los países latinoamericanos ocuparon rápidamente los sitios más alejados del centro de poder, y representaron el papel de coadyuvantes del progreso de otros en detrimento de sus propias realidades y potencialidades. Con ello, perdieron paulatinamente más y más oportunidades de desarrollo, de posibilidades para decidir sobre sus realidades internas y de capacidades para influir en el aspecto internacional. El proceso operó en la misma forma pero en sentido diferente que para los países hegemónicos: el hecho de que un Estado estuviera lo suficientemente cohesionado y fuerte era un elemento que le permitía obtener un lugar privilegiado dentro de la pirámide de poder en el nivel internacional, y este lugar, a su vez, le permitía seguir consolidándose internamente y obtener de esta forma mayor fortaleza y desarrollo. Para los países latinoamericanos, el proceso fue a la inversa: sus adversas realidades internas les obligaron a ocupar los lugares más desfavorecidos dentro de la escala de poder, volviéndolos más vulnerables y dependientes de los países hegemónicos, y restándoles posibilidad para establecer reglas en el nivel internacional que les permitieran adquirir fortaleza, o al menos, nuevos elementos para acceder a la competencia mundial en condiciones más equitativas. De esta forma, la capacidad de estructurar una política exterior adecuada a las necesidades y objetivos internos y, sobre todo, de hacerla efectiva en todos sus postulados, fue un privilegio exclusivo de los países hegemónicos, en el que fue incluida la posibilidad de guiar, o incluso determinar la política exterior de los países más débiles que estaban dentro de su esfera de influencia.¹⁶

¹⁶ En relación con ello Kaplan señala: "Cuanto más débil y pequeño es un Estado-nación, más está determinada su política exterior por factores externos. Una colonia no tiene política exterior. Una ex colonia tiende a tener una política exterior condicionada por la ex potencia colonizadora, o quien la ha reemplazado como tal. Una nación pequeña y débil, formalmente independiente tiende a adoptar una política exterior alineada según la esfera de influencia de la potencia en que esté ubicada". Kaplan, *El Estado latinoamericano...*, p. 92.

El hecho de que los países hegemónicos tuvieran la capacidad de guiar el proceso, de establecer las reglas que les favorecieran, e incluso de ir las aplicando discrecionalmente según objetivos, intereses y condiciones coyunturales dio por resultado que la brecha de poder político y económico se fuera profundizando y ampliando. El axioma del libre mercado es una de las reglas que mejor ilustra este hecho: por un lado, los países centrales lo han reivindicado teóricamente como uno de los elementos imprescindibles del desarrollo de la economía internacional, y como tal han establecido las condiciones para la apertura de los mercados de los países periféricos. Por el otro lado han impuesto una serie de mecanismos protectores de sus propios mercados, y concentrado sus exportaciones entre ellos mismos, dejando fuera del marco de acción y de los beneficios a los países débiles.

Los países latinoamericanos han estado intensa y constantemente determinados por el ejemplo, las decisiones y los objetivos de Estados Unidos. Esta determinación se ha llevado a cabo de múltiples formas. En un principio, las ideas políticas y los postulados jurídicos del entonces naciente Estados Unidos de Norte América tuvo un papel fundamental ideológicamente en el logro de la independencia de los países latinoamericanos. Estas ideas y postulados fueron igual de importantes en la construcción de los Estados-nacionales en Latinoamérica, cuyos gobiernos los trasladaron casi íntegramente a su organización política y jurídica, sin importar que en muchas ocasiones las ideologías y las leyes nada o poco tuvieran que ver con las realidades internas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el papel que Estados Unidos desempeñaría dentro de nuestro subcontinente dejó de ser exclusivamente ejemplar, para convertirse en una participación completamente activa. La Guerra Fría ocasionó que Estados Unidos considerara a Latinoamérica como uno de los espacios más importantes de su zona de influencia, y por lo tanto, para ellos el subcontinente dejó de ser un conjunto de países independientes y soberanos y se convirtió en una zona estratégica

potencialmente coadyuvadora, ya fuera de su fortaleza o de su debilidad. Lo que ocurriera dentro de cada uno de los países repercutiría en el desarrollo de la Guerra Fría y significaría pérdida o consolidación de poder. Estados Unidos, entonces, consideró que una situación que los afectaría de tal forma, no podía dejarse en manos exclusivas de los gobiernos y de las sociedades latinoamericanas y comenzó a intervenir de una manera tan intensa y decidida, que pareció mostrar que concebía el diseño del destino de los latinoamericanos no sólo como un elemento externo de poder, sino inclusive como su responsabilidad y su derecho. Este derecho fue ejercido de muy diversas formas: intervenciones armadas directas; inversiones productivas u otra clase de mecanismos económico comerciales o de desarrollo; adoctrinamiento y formación (física e ideológica) de cuadros militares; préstamos y apoyos financieros, ya fuera directos o por medio de instituciones internacionales; proclamación de doctrinas de defensa o integración del continente. Una de las primeras acciones a este respecto fue la “Doctrina de defensa hemisférica”, creada en 1947. Esta estrategia militar tuvo el objetivo formal de defender a América de invasores externos.

El intervencionismo proteccionista benefactor

A partir de la Independencia, los gobiernos de los países latinoamericanos comenzaron a desarrollar unas características que, expresadas en diversas modalidades, han conservado hasta la actualidad: la debilidad y subordinación hacia el exterior, respecto a los países centrales, y la rigidez y el autoritarismo hacia el interior, respecto a sus ciudadanos. El intervencionismo del Estado ha sido especialmente marcado en Latinoamérica, representado en una primera etapa por un intervencionismo proteccionista benefactor y, posteriormente, por uno neoliberal. Este intervencionismo hacia el interior de los diferentes países parece funcionar con la misma lógica de la competencia por el poder en el nivel internacional y producir consecuencias similares. La

contradicción existente entre un Estado fuerte hacia el interior y débil hacia el exterior ha sido la fuente de otras contradicciones. En primer lugar, existe una intensa contradicción entre la soberanía nacional y la apertura hacia el exterior, que, a diferencia de lo ocurrido con los estados hegemónicos, parece ser irresoluble: la apertura comercial en las condiciones de desigualdad internacional debilita y, en muchos aspectos, niega la soberanía interna; a su vez la incapacidad para ejercer ésta, efectivamente, produce la profundización y ampliación de las desigualdades internacionales. En el mismo sentido, la contradicción entre el deber del Estado respecto a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, está contrapuesto con los compromisos adquiridos con un reducido número de grupos que ven en la libertad del mercado la mejor forma de conservar y acrecentar sus privilegios.

Una de las formas más importantes de la intervención del Estado proteccionista benefactor fue la Industrialización "Sustitutiva de Importaciones" (ISI). A través de ella los países latinoamericanos pretendieron allegarse de los beneficios que la industrialización representaba para los países más adelantados, y fortalecer la economía nacional produciendo internamente lo que sus sociedades necesitaban, procurando recurrir lo menos posible a las exportaciones. Sin embargo, la industrialización latinoamericana no produjo los mismos resultados que la de los países centrales, debido a que se realizó la "industrialización sin revolución industrial,"¹⁷ es decir, los proyectos industriales se hicieron de manera sumamente parcializada, sin estar apoyados, fundamentados y guiados por los otros aspectos que sí se llevaron a cabo sobre todo en la primera revolución industrial. Esto se manifestó así no sólo en lo que se refiere al aspecto científico-tecnológico propiamente dicho. Los cambios más significativos que se llevaron a cabo estuvieron enfocados al ámbito jurídico, pero prevalecieron las estructuras políticas,

¹⁷ Marcos Kaplan, "El Estado latinoamericano: entre la crisis y las reformas", en *Sistema*, núm. 147, Madrid, noviembre, 1998, p. 12.

sociales y económicas tradicionales. De esta forma, la ISI no trajo los beneficios prometidos para la mayoría de la población, sino que contribuyó a profundizar la brecha económica entre los diferentes sectores de la sociedad. En nombre de la ISI, y en ayuda real a ciertos grupos, el Estado incrementó sus deudas públicas y privadas, con el correspondiente daño inmediato y a largo plazo de la nación, realizó rescates de empresas y financió infinidad de proyectos privados. Todo ello dio como consecuencia una frustración masiva y la desintegración de las sociedades en un contexto de deterioro político y económico, que sirvió en muchos casos de pretexto para la imposición de regímenes autoritarios o francamente dictatoriales.

La generalización de la dictadura

Las décadas 1960 y 1970 representaron para la mayor parte del subcontinente, una secuencia de gobiernos militares llegados al poder a través de golpes de Estado.¹⁸ La gran proliferación de este tipo de gobiernos, sin embargo, no se debió exclusivamente a las deterioradas condiciones existentes en el nivel interno, sino también al apoyo —la mayor de las veces abierto— de Estados Unidos, que celebró con los gobiernos dictatoriales acuerdos de colaboración mutua. La justificación ideológica utilizada más eficazmente para el apoyo a los gobiernos militares latinoamericanos fue la Doctrina de la Seguridad Nacional, a través de la cual se presentaba al comunismo como la mayor amenaza hacia los países latinoamericanos y se les daba a los gobiernos de éstos la responsabilidad de combatirlo al interior de sus territorios. De esta forma, la Guerra Fría existente en el nivel internacional se materializaba y convertía a los integrantes de un mismo país en adversarios. La Doctrina de Defensa Hemisférica, creada en 1947, adquiría nuevos matices, al introducir o modificar el con-

¹⁸ En la década de 1960, sólo México, Venezuela y Colombia tenían gobiernos democráticos.

cepto de enemigo externo por el de enemigo interno, con lo cual los gobiernos militares veían en sus ciudadanos a enemigos potenciales, en lugar de individuos a quienes debían protección y respeto. Estos enemigos fueron combatidos por medio de tácticas de contrainsurgencia, la mayoría de las veces creadas en escuelas militares de Estados Unidos, que pronto establecieron diversas sucursales en países latinoamericanos. Durante esta época, Estados Unidos combatió sistemáticamente en Latinoamérica todo intento de reforma democrática y nacionalista proveniente tanto de la sociedad como de los gobiernos.

La fase neoliberal y de transición a la democracia

A finales del siglo xx los países latinoamericanos, que vivieron dictaduras militares y otros regímenes autoritarios, iniciaron procesos de transición a la democracia encabezados por gobiernos civiles.

En materia económica, la sustitución de regímenes militares por civiles estuvo marcada por una intensa crisis, al grado de que el decenio de 1980 se convirtió para el continente entero en una “década perdida”. Esta crisis, además de las evidentes causas internas de cada uno de los países, estuvo determinada por aspectos internacionales, entre los cuales el aumento en las tasas de interés impuesto por Estados Unidos fue fundamental. En 1982, además, se desencadenó la crisis de la deuda, producto de los aumentos espectaculares que sufrieron los endeudamientos contraídos en el nivel internacional. Durante todo el decenio, los enormes esfuerzos realizados por los diferentes países parecieron no tener resultados significativos, ya que los intereses crecían con una rapidez que superaba cualquier capacidad de pago. Así, los gobiernos latinoamericanos veían que a pesar de los pagos realizados, las deudas se hacían más grandes. La mayor parte de los pagos, durante esta década, se aplicaron a los intereses, sin disminuir el monto real del capital. Esta situación provocó que los gobiernos tuvieran que recurrir a nuevos endeudamientos,

con lo cual adquirieron nuevos compromisos ante los cuales —a pesar de ser perversos y absurdos— era necesario responder.

Además de las consecuencias netamente económicas, esta situación tuvo drásticas secuelas en el terreno político y social. Tanto los gobiernos como las instituciones internacionales acreedoras (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), establecieron rígidas condiciones que los gobiernos deudores debían cumplir al interior de sus respectivos países, si pretendían acceder a nuevos préstamos o gozar de ampliación de los términos de pago.¹⁹ Estas condiciones se centraban en la petición a los gobiernos para que establecieran la infraestructura adecuada para que el libre mercado se pudiera desarrollar sin mayores obstáculos. Sin embargo, para ello era necesario transformar toda la estructura política y social. Estas transformaciones se fueron realizando de forma parcializada, por lo general respondiendo a problemas particulares, sin estar apoyados en un proyecto integral, y

¹⁹ Estas condiciones siguen permaneciendo rígidas hasta la fecha. Como ejemplo tenemos lo siguiente: "La iniciativa para la reducción de la deuda de los países muy pobres endeudados (PPME) requiere que los países de bajos ingresos y muy endeudados que son los posibles beneficiarios mantengan durante un cierto periodo una gestión adecuada de los programas de ajuste propugnados por el Fondo (Monetario Internacional) y el Banco (Mundial). Por lo tanto, el alivio de la deuda de los PPME se considera la culminación de un proceso y un incentivo para mantener políticas acertadas en el curso de este proceso, así como una garantía informal a los acreedores de que no se desperdiciarán los recursos que se aporten a título de alivio de la deuda. Antes del final del proceso, que se denomina punto de culminación, y es el momento en que se adoptan definitivamente todas las medidas de alivio de la deuda, el PPME recibe una financiación sustancial y obtiene un considerable alivio de la deuda. En general se supone que el país debe demostrar su buen comportamiento durante seis años, pero la comunidad internacional se compromete a llegar al acuerdo definitivo más o menos a mitad del periodo cuando las juntas del Fondo y el Banco aprueban el conjunto final de medidas de alivio de la deuda. Ese compromiso tiene lugar en lo que se llama el punto de decisión. Desde que el programa se inició en septiembre de 1996, sólo un país ha llegado al punto de culminación: Uganda en abril de 1998". Naciones Unidas, *Estudio económico mundial: tendencias y políticas actuales de la economía mundial*, Nueva York, Naciones Unidas, 1998, p. 96.

fueron rápidamente destruyendo conquistas sociales logradas a través de años de sacrificios masivos en todos los aspectos.²⁰ Así, lo social y lo político fue subordinado en privilegio de lo económico, y la intervención del Estado respecto a la economía y a la sociedad se transformó en un intervencionismo neoliberal. En todo este proceso, el aspecto jurídico ha tenido un papel fundamental, al servir como legitimador y protector de las transformaciones económicas.

Sin embargo, todo este proceso no sirvió ni para elevar el nivel de vida de las mayorías, ni para que los países latinoamericanos obtuvieran un mejor peldaño dentro de la pirámide de poder internacional, sino que contribuyó a acrecentar la concentración económica y política en ambos niveles y a intensificar la dependencia latinoamericana. Además del fortalecimiento de la subordinación tradicional ante los países centrales, el neoliberalismo trajo nuevos actores que intervendrían en la construcción del destino latinoamericano mucho más decididamente que en el pasado.

Las instituciones financieras internacionales, como ya se comentó, han tenido un papel fundamental en este sentido y han contribuido, además, a que los gobiernos en muchas ocasiones oculten o disfracen problemas internos, con el objetivo de ofrecer una imagen adecuada y cumplir con los requisitos que se les marcan para tener acceso a los programas de préstamos. Las

²⁰ González Casanova considera a este respecto que "El fin del Estado nacional y el Estado social se convierten en exigencias prácticas de la transnacionalización asociada, que con el 'adelgazamiento' del Estado nación, la privatización de las empresas, la desnacionalización de industrias básicas y la venta de tierras y recursos naturales a pago de la deuda, dan fin al proyecto histórico y social equilibrado. La falta de conciencia con respecto al cambio de proyecto histórico no sólo es muy grande en la burguesía latinoamericana, asociada al proyecto, sino en las antiguas fuerzas nacionalistas, progresistas, socialdemócratas y democráticas". Pablo González Casanova *et al*, *América Latina, hoy*; México, Editorial de la Universidad de las Naciones Unidas, Siglo xxi, 1990, p. 66.

condiciones internas, producto del subdesarrollo, han propiciado que las consecuencias sean mucho más difíciles que para otros países que están sometidos a las mismas influencias negativas: debido a su incipiente industrialización, las exportaciones de América Latina siguen siendo de pocos productos básicos y materias primas, que han sufrido fuertes y continuadas bajas en el precio internacional. Aunado a esto y otros variados factores, la dependencia financiera que Latinoamérica mantiene con el exterior se ha convertido casi en un elemento estructural de su economía. Por ello, las medidas que los gobiernos latinoamericanos han tomado para solucionar la crisis han sido principalmente dirigidas por las instituciones financieras internacionales, introduciendo ajustes fiscales, incrementando los tipos de interés para evitar la salida masiva de capitales, y garantizando la liberalización, privatización y desregulación de la economía. A pesar de que estas medidas han probado ser contraproducentes para el desarrollo nacional, los gobiernos latinoamericanos se ven forzados a adoptarlas ante la necesidad inmediata de créditos e inversiones.

Las reglas desiguales en el juego internacional, que los países centrales han impuesto a su favor, han estado legitimadas y han sido realizadas a través de estas instituciones, que hacen aparecer las acciones y las direcciones tomadas por los países hegemónicos, como las más favorecedoras de la convivencia internacional y del desarrollo interno de los diferentes estados. Lo que es más, las reformas y políticas económicas que se les imponen a los países débiles dejaron de ser consideradas como las más convenientes, para convertirse en necesarias, y en últimos tiempos, en inevitables. A pesar de que las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional han probado no ser las adecuadas para el desarrollo de los países emergentes, han redundado en el creciente deterioro del nivel de vida de la mayoría de sus habitantes, e incluso han contribuido en mucho a desencadenar la actual crisis mundial; sus dirigentes siguen defendiéndolas a ultranza, al grado de declarar que los proble-

mas se deben no a las políticas impuestas por el Fondo, sino precisamente al hecho de que no se aplicaron o se aplicaron insuficiente o ineficientemente.

Las empresas transnacionales, en el mismo sentido, han representado para los gobiernos latinoamericanos una disminución de su poder de decisión y acción. Muchos de los cambios en los aspectos sociales y políticos, se han dado con el objetivo de establecer las condiciones para que las empresas puedan operar sin mayores obstáculos dentro de los países latinoamericanos. Para éstas, muy especialmente las conquistas laborales, representan una fuente de inestabilidad y por lo tanto de amenazas a la productividad y a la rentabilidad.

Otros de los nuevos actores, ante los cuales los países latinoamericanos se han subordinado, son los inversionistas o especuladores internacionales, que rápidamente han adquirido una gran fortaleza y capacidad de influencia en el nivel internacional. Esta fuerza, no obstante, no ha sido adquirida a través de la mística del trabajo constante e intenso, la austeridad, o la capacidad de organización y gestión de proyectos productivos, como valores iniciales del capitalismo, sino que en la mayoría de los casos ha sido producto de las actividades bursátiles especulativas, que permitieron a sus realizadores la creación y multiplicación desmedida de capitales, sin necesidad de haber invertido una gran cantidad de tiempo, esfuerzo o talento integral. El éxito, en este sentido, se debió principalmente al hecho de haber actuado oportunamente, de conocer de una manera tanto global como detallada la lógica del sistema financiero, y de contar con una ética cuyo único objetivo fuera la adquisición de enormes ganancias económicas inmediatas, aun a costa del deterioro de las condiciones de otras personas, grupos, naciones, o incluso del sistema financiero en su conjunto.

A pesar de que las acciones de estos inversionistas son completamente a título particular, su éxito se debe también a que mantienen un contacto oportuno y eficiente con los principales actores políticos y con personas con puestos clave dentro de las

instituciones financieras nacionales e internacionales. Éste es el caso de Rudiger Dornbusch, muy cercano al vicedirector del FMI y la administración Clinton, a quien se le atribuyó responsabilidad en la crisis venezolana, ya que en una entrevista que le concedió a *El País* (26-12-98), le avisó oportunamente a los megaespeculadores sobre el momento en que debían retirar masivamente sus capitales de este país. Sin embargo, el ejemplo más ilustrativo lo tenemos en George Soros, uno de los más conocidos y poderosos megaespeculadores del mundo, quien debe su éxito no solamente a su capacidad de aplicar la filosofía²¹ a los negocios financieros, sino además a que ha sabido crear y utilizar toda una poderosa y extensa red de contactos políticos en diferentes partes del mundo. El vínculo que Soros tiene con las élites políticas y económicas de los países emergentes, también le ha permitido que hoy sea considerado como uno de los mayores y más prósperos terratenientes en Argentina.²² Este hecho lleva incluso a cuestionar una situación producto del avance de la globalización: el cambio en las ventajas comparativas de los distintos países.

²¹ Soros ha manifestado que el éxito de sus negocios financieros ha sido posible gracias a la comprensión de diferentes conceptos filosóficos, entre los cuales la *fallibilidad* y la *reflexibilidad*, son los ejes principales. En cuanto a los motivos para realizar sus actividades filantrópicas, también ha señalado que están basados y guiados por conceptos filosóficos. La tesis de Karl Popper de *La sociedad abierta*, tiene un papel fundamental en este último aspecto. George Soros, *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, Madrid, Debate/Plaza y Janés, 1999.

²² En un estudio realizado por *Le Monde Diplomatique* (marzo-abril de 1998), se señala lo siguiente acerca de Soros: "En Argentina multiplicó su inversión inicial en bienes raíces de diez millones de dólares en 1990 a 500 millones en 1998. Además de sus numerosas propiedades que incluyen modernas torres de oficinas, exclusivos conjuntos habitacionales, muelles y centros comerciales y deportivos, actualmente es el terrateniente más importante de ese país sudamericano. Una de sus empresas más recientes fue la inversión de 17 millones de dólares en 400 mil hectáreas de tierra y 160 mil cabezas de ganado. A principios de 1997, Soros inyectó 90 millones de dólares a esa propiedad para comprar 60 mil hectáreas adicionales y 87 mil cabezas de ganado. Las repercusiones están a la vista: El valor de la tierra se ha duplicado en un par de años y el mercado estadounidense se ha abierto repentinamente a las exportaciones de carne argentina por primera vez en 60 años".

Hoy se considera que las ventajas comparativas han dejado de estar en la baratura y abundancia de las materias primas (en donde la tierra tenía un papel fundamental) y de la mano de obra, para centrarse especialmente en la capacidad para adquirir, procesar y utilizar la información. Sin embargo, el que un actor tan importante, y con tanta visión de dónde están las posibilidades de realizar cuantiosos negocios, como lo es George Soros, esté tan interesado en volver sus ojos a las formas tradicionales de obtener ganancias es un indicador importante de que las ventajas comparativas que existen hoy día, basadas prioritariamente en todo lo que gira alrededor de la información, podrían tomar otro cauce, o al menos diversificarse o ampliarse.

El poder que han llegado a tener estos megaspeculadores, los coloca por encima de muchos gobiernos²³ y les otorga de facto, la posibilidad de decidir sobre las condiciones que tendrán y los rumbos que tomarán los países débiles.²⁴ El poder económico que han llegado a adquirir individuos o grupos privados,

²³ Esto es fácilmente comprensible si se toman en cuenta los siguientes datos: "•Las tres personas más ricas del mundo tienen activos que exceden el producto nacional bruto (PNB de cuando menos 48 países en desarrollo) •Los 15 más ricos tienen más activos que el total del PNB de todos los países del África Subsahariana. •La riqueza de los primeros 32 de la lista es superior al PNB de todo el sur de África. •La riqueza de los primeros 84 es superior al PNB de China, que tiene un millón 200 mil habitantes. •Con la riqueza de las 225 personas más ricas del mundo, se podría pagar el acceso a los servicios sociales básicos en todo el mundo, y toda la educación, todos los servicios médicos, toda la alimentación y toda el agua potable, que se podría cubrir con sólo 4% de lo que tienen". Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Informe sobre desarrollo humano*, Nueva York, 1998.

²⁴ La consideración que los inversionistas tienen del emblema de los Estados-nacionales, se entiende mejor si se toma en cuenta que "consideran a los mercados emergentes como 'una clase de activos', sin diferenciar si se trata de países o si dentro de éstos hay corporaciones o instituciones financieras con adecuada rentabilidad y desempeño... Si un miembro de esa clase de activos tiene un problema, como sucede con Rusia que declaró la moratoria al pago de su deuda externa, en ese momento consideran a todos los activos de naciones emergentes como uno solo". Erick Peterson, experto del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington, *El Financiero*, 27 de octubre, 1998.

no obstante, se pone por encima no sólo de los gobiernos de los países más pobres, sino que llega a rebasar indicadores macroeconómicos de los más poderosos o incluso de la comunidad internacional en su conjunto.²⁵ Una variable del poder que están tomando ciertos individuos es la capacidad de influencia e inclusive de determinación en terceros países que están haciendo las firmas calificadoras, especialmente de Estados Unidos.

A pesar de que la dependencia de América Latina, al igual que la del resto de los países débiles, ha servido como un eslabón importante dentro de la cadena que representa el proceso de globalización, hoy aparece también como un elemento potencial de la destrucción o debilitamiento de éste. El proyecto globalizador había necesitado de la debilidad y dependencia de la mayor parte de los países, para que un número reducido de éstos se fortaleciera y adquiriera un papel hegemónico internacionalmente. Sin embargo, los problemas que hoy enfrentan los países débiles son de una magnitud y una diversidad tal, que amenazan con producir consecuencias drásticas no sólo al interior de ellos mismos, sino también hacia los países centrales e incluso hacia la estructura internacional en su conjunto. El riesgo es aún mayor, si se considera que Latinoamérica acaba de salir de uno de sus mejores ciclos en el aspecto económico;²⁶ ciclo que no supo aprovechar para transformarlo en una base de fortalecimiento interno y de posible proyección internacional. El hecho de que la pobreza haya disminuido significativamente en la gran ma-

²⁵ En este sentido son sumamente ilustradores los siguientes datos: "El *Chase*, principal banco estadounidense, maneja en 'derivados' un poco más de todo el PIB en EU, que es de ocho trillones, aproximadamente. Las cifras juntas de los tres primeros megabancos planetarios, que resultan ser de EU, representan 74% del PIB mundial, que es de alrededor de 30 trillones. Las operaciones de los superlativos diez megabancos arrojan un total de 47.9 trillones de dólares, casi la tercera parte del monto global de 150 trillones que presumiblemente se movieron el año pasado". Alfredo Jalife-Rahme, *El Financiero*, 13 de febrero, 1999.

²⁶ "Antes de la crisis se estimaba que el área crecería el 3%, ahora se piensa que apenas llegará al 0,5%". Editorial de *Temas para el debate* (1998, p. 5).

yoría de los países latinoamericanos²⁷ es por supuesto positivo, pero no tanto como parece ser a primera vista. La densidad ocupacional, es decir, la incorporación de un mayor número de integrantes de un grupo familiar al mercado laboral tuvo un importante aumento, y desempeñó un papel fundamental en la disminución de la pobreza. Así, parece ser que una familia fue menos pobre, no porque los salarios de los proveedores familiares aumentaran, sino porque el aumento estuvo precisamente en el número de estos proveedores. A pesar de los beneficios inmediatos que esta situación pueda traer al grupo familiar, a la larga representa una fuente muy peligrosa de multiplicación de problemas, también, en el aspecto nacional, ya que retira a los individuos en edad de formación de los centros académicos —que pudieran darle a largo plazo mayores posibilidades de ascensos sociales y económicos—, al obligarlos a colocarse en el mercado laboral. Además de esta situación, es sumamente preocupante que a pesar del crecimiento económico, persista el alto grado de concentración existente al comienzo del periodo, es decir, podría decirse que las buenas noticias son que los países latinoamericanos lograron avances significativos en materia económica, pero que las malas son que este hecho en poco benefició en lo inmediato a las cada vez más y en mayor número marginadas sociedades y al desarrollo futuro de cada uno de los países latinoamericanos.

²⁷ Solamente en dos países la pobreza no sólo no disminuyó sino que inclusive aumentó: Venezuela y México. En Venezuela hubo un incremento de 8 y 5 puntos porcentuales y en México de 4 y 2 puntos. CEPAL, *Panorama Social*, CEPAL, 1998, pp. 17-18. En el resto de los países el porcentaje de hogares en situación de pobreza se redujo de 41% a 36%, con lo que casi se recuperó el nivel existente en 1989 (35%).

Los procesos migratorios

La migración europea

La migración es un fenómeno intrínseco a América Latina, no sólo por haber sido una constante a lo largo de su desarrollo, sino también porque precisamente con la inmigración española y portuguesa comenzó su historia.

La conquista —objetivo de esta primera inmigración—, determinó los patrones culturales, económicos, sociales y políticos del futuro del continente, y obligó a que desde ese entonces toda su historia tuviera como referencia directa el pensamiento y actuar europeo, así haya sido para negarlo o evitarlo.

Con la inmigración europea se inició la historia de la migración forzada dentro del continente latinoamericano. A pesar de que el principal objetivo de los conquistadores fue utilizar a la población nativa en lugar de aniquilarla, en algunos casos se obligó a una elevada cantidad de individuos a abandonar sus lugares de residencia habitual, ante el cambio radical en las actividades: con el auge en la explotación de la minería, por ejemplo, se necesitaba trasladar una gran cantidad de personas al lugar donde se encontraban las minas. Con el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en el continente, se produjeron también éxodos masivos forzados. A parte de exterminios masivos —como en el caso del Cono Sur—, se llevó a cabo también la expulsión de pueblos enteros.

A pesar de la independencia política alcanzada en los albores del siglo xix, la migración europea siguió ocupando el primer sitio, y continuó siendo sumamente atractiva para los latinoamericanos. Sobre todo a finales del siglo xix y principios del xx, y como consecuencia del pensamiento positivista reinante en estos tiempos, la llegada de europeos se consideró no sólo deseada sino necesaria. Cuando a principios del siglo xx, los intelectuales latinoamericanos reflexionaban acerca de la naturaleza de sus respectivos países, así como de los objetivos,

fortaleza y recursos para alcanzarlos, tuvieron que hacer una definición precisa de lo que deseaban construir como naciones. Este proceso implicaba hacer inclusiones de ideologías, personas, formas de producción, cultura y maneras de gobernar. Sin embargo, también se realizaron importantes exclusiones. Puesto que el racismo —elevado a ciencia por el positivismo—, indicaba que el mal más pronunciado, y que representaba un mayor obstáculo para el progreso de los países latinoamericanos, era la población indígena, se vio en la inmigración europea la oportunidad de traer al continente no sólo aportes científicos, tecnológicos y culturales, sino también material genético superior, que disminuyera el mal racial que representaban los indígenas. Al blanquear la población nativa con el material genético europeo, se pensaba, se mejoraba la raza y se contribuía directamente al beneficio nacional.

Esta posición se dio con mucha fuerza en países como Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, en donde se convirtió incluso en una política oficial. En otros países, aun y cuando no fue llevada a cabo a través de acciones concretas, sí formó parte de su filosofía y del pensamiento nacional de ese entonces.²⁸

La migración intercontinental

En mayor o menor grado alrededor de los diferentes países, la inmigración europea fue la más importante desde los procesos de independencia hasta 1950. A partir de esta fecha, la inmigración intercontinental forzada toma el lugar más elevado para

²⁸ El pensador peruano, Javier Prado decía a este respecto: “los males han sido y son muy graves, pero hay un remedio para combatirlos. Previniendo aquéllos, en primer lugar, de la influencia de la raza[...] Es preciso modificar la raza, ‘remozar’ nuestra sangre y nuestra herencia por el cruzamiento con otras razas; es preciso aumentar el número de nuestra población, y lo que es más, cambiar su condición, en sentido ventajoso a la causa del progreso, por medio de la inmigración, pero de una buena inmigración”. Rodolfo Stavenhagen, *Derecho indígena y derechos humanos en América Latina*, México, Colmex, 1988, p. 36.

volverse una constante que —aunque con diferentes grados a lo largo de la historia— no ha dejado de cesar.

El traslado de trabajadores hacia otros países del mismo continente, en busca de mejores oportunidades laborales, empezó a darse con una gran intensidad a partir de 1910. Es en estos años cuando los latinoamericanos vuelven su mirada hacia Estados Unidos, y comienza una relación de sobredemanda de mano de obra por parte de este país y de sobreoferta de trabajo, especialmente de los mexicanos. Esta relación, conforme ha pasado el tiempo, se ha incrementado en grandes proporciones. Alrededor de esta fecha —entre 1915 y 1929— muchos haitianos y dominicanos emigraron a Cuba para trabajar en las plantaciones e ingenios de azúcar. Estos dos casos son tan sólo ejemplos del traslado laboral que a partir de estas fechas comenzó a darse con gran fuerza y constancia dentro de todo el continente. La dirección que toma este traslado está determinada por la situación económica, tanto de los países receptores como de los expulsores. En momentos de auge económico o de expansión de la producción, los países actúan como un imán sumamente poderoso, que atrae por lo general a los habitantes de países con quienes comparte fronteras, pero también a países más alejados, en el caso de que la situación sea especialmente favorable. El poder de atracción será más fuerte entre mejores sean las condiciones del país receptor y peores las del expulsor: los emigrantes no sólo salen por la promesa de oportunidades muy buenas en el extranjero, sino ante la ausencia mínima de opciones de desarrollo en su país de origen. Este poder de atracción hacia Estados Unidos se incrementó en forma notable a partir de la década de 1970, debido a la expansión de los medios de comunicación en los que se publicitó la imagen del país del norte como el lugar de la libertad, la democracia, y de manera muy especial, como el lugar en donde todos podían adquirir felicidad a través de la obtención y el uso de bienes materiales. Estos mensajes se comenzaron a recibir con gran intensidad y difusión en los países latinoamericanos, y propiciaron un incremento en la población deseosa de

ser parte del “sueño americano”, cuyas imágenes percibían sobre todo a través de la televisión.

La emigración laboral en el Cono Sur se incrementó a partir de 1950, realizándose por lo general de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay hacia Argentina. Este patrón de traslado, sin embargo, se vio disminuido en 1976, a consecuencia del golpe militar en Argentina. El movimiento cambió en dirección inversa (de Argentina hacia los otros países), aunque ya no se trató de una emigración de carácter laboral sino política.

La migración política

La generalización de la dictadura en las décadas de 1960 y 1970 en América Latina tuvo como uno de sus saldos negativos más importantes, la expulsión de una gran cantidad de personas. Las características de los migrantes variaron mucho dependiendo del país de origen, del país de recepción y de la coyuntura específica de la cual huían, pero tuvieron como común denominador que esta salida se dio con el objetivo de salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad o la libertad; a causa de la violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos por parte de sus gobiernos, por lo cual se le conoce como una migración eminentemente política.

Esta migración tuvo efectos en prácticamente todos los países latinoamericanos, ya fuera en su carácter de expulsor o de receptor de personas. Sin embargo, fue especialmente grave la situación generada por las dictaduras del Cono Sur.

Las causas de esta migración, así como el trato que en lo general recibieron en los países receptores, permite ubicar a los individuos que emigraron como “asilados”. Durante esta época, la institución del asilo diplomático²⁹ fue frecuentemente socorrida y gracias a ella pudo salvarse un gran número de vidas.

²⁹ La institución del asilo tiene dos manifestaciones, según sea el lugar y el modo en que es concedido. Por una parte, tenemos el “asilo diplomático”, que

La migración centroamericana

Durante la década de 1970, el Cono Sur fue la región que más exiliados políticos arrojó. Esta tendencia cambió radicalmente durante los años ochenta, ya que el lugar protagónico correspondió a Centroamérica. Esto fue uno de los saldos que en los aspectos sociales y políticos dejó la llamada “década perdida”.

Con el éxodo centroamericano, el patrón migratorio que hasta entonces había existido cambió radicalmente. Este nuevo tipo de migración, caracterizado entre otras cosas por su masividad, obligó incluso a la modificación de conceptos, instituciones, prácticas y regulaciones jurídicas que hasta la fecha se habían utilizado para el tratamiento de refugiados. La definición tradicional de refugiado³⁰ era insuficiente para atender los flujos masivos de personas que no podían probar una persecución particularizada, pero que se veían forzadas a abandonar sus lugares de origen por peligrar seriamente su vida.

En 1984, a través de la Declaración de Cartagena, se decidió ampliar la figura de refugiado, para incluir a “las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.³¹

se concede dentro del territorio del país de origen del solicitante, en embajadas, legaciones, buques de guerra, campamentos o aeronaves militares del país que concede el asilo. Por otra parte, está el “asilo territorial”, que se concede dentro del territorio del país asilante.

³⁰ Mediante esta definición, contenida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951 (Convención de 1951) se consideraba como refugiado a: “La persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. (Capítulo I).

³¹ Esta definición tuvo como antecedente la establecida en la *Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se regula los aspectos específi-*

Esta Declaración ha tenido una gran importancia para el desarrollo del derecho de los refugiados. Es cierto que por tener una naturaleza declarativa, no crea obligaciones jurídicas concretas para los estados, sin embargo, su importancia ha sido trascendente, ya que ha llegado a servir de pauta a los gobiernos sobre todo en lo referente a la definición. Eduardo Arboleda señala respecto a la Declaración.

La Declaración de Cartagena es el primer documento en el contexto latinoamericano en establecer lineamientos para los Estados que enfrentan movimientos masivos de refugiados. Es también la primera declaración internacional que reconoce que las víctimas de la violencia generalizada, los conflictos internos y las violaciones masivas a los derechos humanos, necesitan el estatus de refugiado. Aunque, a diferencia de la Convención Africana, la Declaración de Cartagena no es formalmente un instrumento legal que cree obligaciones, su definición ampliada gradualmente ha sido establecida a lo largo de Latinoamérica.³²

Aun y cuando jurídicamente el refugio es una institución completamente apolítica, en la realidad las respuestas que los gobiernos receptores dan a personas que vienen huyendo de otro gobierno, dependen directamente del tipo de relación que ambos tengan entre sí. Honduras fue durante esta década un caso ejemplar.

La situación que se vivía en los campamentos situados en Honduras, país que más refugiados de los países vecinos albergó, fue sumamente dura para los salvadoreños. La colaboración que en otros sentidos existió entre el gobierno de El Salvador y el de Honduras para eliminar a la que denominaban “guerrilla comunista”, se extendió, en muchas ocasiones, a los refugiados. El año 1980 constituye un ejemplo muy ilustrativo de ello: el 14

cos de los problemas de los refugiados en África, del 10 de septiembre de 1969 de Addis-Abeba.

³² Eduardo Arboleda, “Refugee Definition in Africa and Latin America”, en *International Journal of Refugee Law*, vol. I, núm. 2, U.K, Oxford University Press, 1991.

de mayo los ejércitos de ambos países realizaron un operativo con el objetivo de retirar a las supuestas guerrillas que estaban asentadas a lo largo del Río Sumpul (punto que marca la frontera entre los dos países). Muchos campesinos salvadoreños buscaron refugio en Honduras, pero lo que encontraron fue a las fuerzas armadas de esta Nación, obligándolos a retroceder a su país de origen. El ejército salvadoreño, por su parte, los estaba esperando en el otro punto. Los campesinos quedaron atrapados entre los dos ejércitos, con un saldo de 600 muertos. Algo semejante sucedió en marzo de 1981 en el Río Lempa, y en 1982 nuevamente en el Río Sumpul.³³

Los refugiados salvadoreños no podían sentirse a salvo ni siquiera en los campamentos. Las intromisiones del ejército de su país fueron tan constantes, que sólo se explican con la complicidad de las autoridades hondureñas. Esta complicidad se volvió colaboración directa y evidente, en las ocasiones en que el mismo ejército hondureño entraba a los campamentos en busca de guerrilleros.³⁴

Los refugiados salvadoreños en Honduras enfrentaron situaciones extremas, ya fuera de inseguridad o en sus condiciones de vida. Los que se encontraban en campamentos alejados de la frontera, en donde los ataques militares eran menos frecuentes, sufrían de condiciones deplorables. En el año de 1981, se propuso a refugiados situados en puntos fronterizos ser enviados al Campamento de Mesa Grande, situado en un terreno árido que carecía de la infraestructura básica, y donde 10 000 refugiados vivían aislados de la población hondureña. Las condiciones de este campamento hacían muy difícil que los refugiados alcanzaran la autosuficiencia. La mayor parte de los que recibieron la propuesta de reubicarse en éste, prefirieron volver a El Salvador.

³³ Elizabeth Ferris, *The Central American Refugees*, Nueva York, Praeger Publishers, 1987 p. 100.

³⁴ En agosto 29 de 1985, el ejército hondureño entró al campamento de Colomoncagua buscando guerrilleros, con el resultado de 10 refugiados prisioneros, 2 muertos y varios heridos. *Ibid.*, p. 104.

El gobierno salvadoreño propició gran cantidad de desplazados internos en su territorio, como parte de las estrategias militares que buscaban la destrucción de la guerrilla. En lugares que el gobierno no podía controlar, realizaba diversas acciones, entre las cuales las más extremas eran los bombardeos, con el fin de que las personas que habitaban en ellos se vieran forzadas a abandonarlos. El gobierno desarrolló varios programas en relación con estas poblaciones, sin embargo, en ellos se privilegiaron los objetivos bélicos sobre los humanitarios. Puesto que el gobierno partía de la idea de que los desplazados eran simpatizantes del FMLN, se aplicaron planes como el

Proyecto 1000, que planeaba el reasentamiento de medio millón de refugiados internos. De acuerdo con el Boletín de noticias de CARECEN, el programa de reasentamiento, popularmente conocido como *Techo, Trabajo y Tortillas* (título del programa en español en el original) tiene el mismo nombre dado al programa de reasentamiento de 1982-83 del gobierno guatemalteco, el cual duplicaba ampliamente los planes de “*refugios estratégicos*” (“*strategic hamlets*”) en Vietnam para controlar y pacificar a la población rural con el objetivo de quitar el apoyo a las guerrillas.³⁵

El gobierno buscó que los desplazados se ubicaran en los centros diseñados y controlados por él. Impidió y obstaculizó la ayuda que otras instancias, como las agencias de la Iglesia, daban a la población desplazada que se encontraba en otros sitios.

Los nicaragüenses en territorio hondureño, recibieron un trato muy diferente al de los salvadoreños. Por principio de cuentas, en los campamentos había posibilidad de movimiento (a diferencia de lo que ocurría con los que habitaban los salvadoreños, que eran cerrados y vigilados por el ejército).³⁶ Las autoridades

³⁵ Renny Golden and Michael McConnell, *Sanctuary*, Nueva York, The New Underground Railroad, Orbis Books, Maryknoll, 1986, p. 81.

³⁶ “En junio de 1981, la CONAPRE [Comisión Nacional para Refugiados] anunció que los campamentos de refugiados salvadoreños serían controlados a partir de esa fecha por comandos militares”. Ferris, *op. cit.*, p. 100.

de Estados Unidos y de Honduras solían referirse a los refugiados salvadoreños como guerrilleros o por lo menos simpatizantes de éstos, y mantenían un estricto control en los campamentos, a pesar de que el 90% eran mujeres y niños. Los nicaragüenses, que pertenecían a la Contra, abandonaban los campamentos dependiendo de las operaciones bélicas que se estuvieran efectuando. En sentido jurídico, los nicaragüenses en Honduras no eran refugiados. Ni en la figura tradicional, que protege a los perseguidos particularizados, ni en la ampliada, que protege a víctimas en forma masiva, tendrían cabida estas personas, que en realidad eran combatientes de guerra. Sin embargo, recibieron en territorio hondureño, por parte tanto del gobierno de éste como del de Estados Unidos, múltiples y constantes beneficios.

La política hacia los refugiados aplicada por el gobierno hondureño estuvo directamente determinada por los objetivos que, en materia ideológica y de política internacional, tenía Estados Unidos. Al no ser el aspecto humanitario el que regía las políticas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tuvo una capacidad de influencia sumamente reducida. En noviembre de 1982, el gobierno hondureño y el ACNUR firmaron un memorándum de entendimiento, en el cual se establecían los términos en los cuales ambas instancias actuarían y se brindarían mutuo apoyo en favor de los refugiados. No obstante, en la práctica el ACNUR no tuvo mucha capacidad de acción. Su papel se redujo a aplicar las medidas adoptadas que el gobierno le tenía destinadas, y a protestar en los casos en que advertía violaciones a los derechos humanos de los refugiados. Incluso su posición formal fue degradada, ya que su Oficina en Honduras fue formalmente añadida a las que operaban en la Ciudad de México y en San José, quedando como una oficina subregional.

Los países vecinos en los que los refugiados centroamericanos buscaron protección en esta década fueron Costa Rica, Belice, México y Nicaragua.

Costa Rica constituyó un país de refugio para los nicaragüenses. En 1981, el ACNUR en este país otorgaba asistencia a

21 765 refugiados nicaragüenses,³⁷ que fueron ubicados en dos campamentos. En general, la experiencia de refugio para los nicaragüenses fue también muy dura en Costa Rica, ya que tuvieron que aceptar una situación de encierro y control. Cada campamento, no obstante, presentó características diferentes. Uno de ellos fue ubicado en un barrio de la provincia de Limón y, a pesar de que éste era el que tenía condiciones materiales más precarias, representó para los refugiados una mejor experiencia que los ubicados en el otro. El campamento de Limón fue establecido en un barrio pobre, que no suscitó mayores reclamos por parte de la población local, y que, por el contrario, recibió a los refugiados con hospitalidad, facilitándoles la integración. Un factor importante, en este sentido, fue que la mitad de la población refugiada era negra, al igual que la comunidad local. El otro campamento fue Tilarán y, debido a que contaba con buenas condiciones de infraestructura, suscitó desde el primer momento rechazo de la población local, que pidió, incluso, la expulsión de los refugiados. La población aceptó la permanencia del campamento, después de entablar negociaciones con el gobierno, pero a cambio de que los nicaragüenses permanecieran en absoluto encierro y bajo estricto control.

Belize constituyó otro destino de la migración centroamericana. El gobierno (tanto colonial como independiente) tuvo una postura en favor de la inmigración, debido a la necesidad de aumentar la población del país. De esta manera hasta principios de la década de 1980, se mantuvo una puerta completamente abierta a la inmigración, sin intervención gubernamental. Debido a que el número de los centroamericanos, que comenzaron a llegar a inicios de esta década, rebasaba las cantidades de inmigrantes que hasta entonces se habían recibido, el gobierno decidió intervenir. La primera respuesta fue humanitaria, tratando de atender

³⁷ "Diagnóstico Nacional de Nicaragua sobre refugiados, repatriados y población desplazada, 1988", en *Cuadernos de Pensamiento Propio*, serie 5, Managua, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, 1989, p. 37.

las necesidades más apremiantes de los recién llegados. La invitación al ACNUR, para que estableciera una oficina en Belice, fue una de las acciones más importantes en este sentido. Por otra parte, el gobierno permitió y motivó a los refugiados para que realizaran sus acostumbradas actividades en la agricultura que, a su vez, ayudarían al desarrollo del país. Además, emprendió una campaña para contrarrestar la ideología contracentroamericana que, sobre todo en la capital, tradicionalmente había existido. Esta campaña consistió en informar de la situación en los países expulsores y concretamente de las causas de expulsión.

Con la ayuda del ACNUR, el gobierno estableció un campamento que albergó tanto a refugiados como a población beliceña: *The Valley of Peace Resttlement Project*, que empezó a funcionar en 1981, con 1 087 personas (99 familias salvadoreñas y 23 beliceñas). El resto de los refugiados permaneció en el país de manera dispersa. En agosto de 1988 “había un total de 4 863 refugiados registrados en la Oficina de Refugiados del gobierno en Belmopan[...] 3 556 eran guatemaltecos; 1 268 salvadoreños; 37 nicaragüenses; 1 chileno y 1 de Ghana”.³⁸

A principios de 1984, el gobierno decretó una amnistía para extranjeros indocumentados, por medio de la cual, pasado un tiempo, los refugiados podían pedir la residencia permanente y posteriormente incluso la naturalización.

México también albergó a una gran cantidad de centroamericanos durante los años ochenta. El primer movimiento masivo estuvo compuesto por nicaragüenses que huían de la guerra civil y de la dictadura de Somoza. Al triunfo de la revolución, la mayor parte de exiliados retornaron a Nicaragua, como cita Sergio Aguayo “[...]aún el gobierno estadounidense que tiene una visión hartamente conservadora de la región acepta que el éxodo inicial de 200 000 nicaragüenses durante la guerra civil, todos,

³⁸ Society for the promotion of education and research, *Socioeconomic integration of Central American immigrants in Belice*, México, Cubola Productions, 1990, p. 6.

con excepción de 20 000 regresaron y se reintegraron en la vida nacional nicaragüense después de la caída de Somoza".³⁹

El segundo movimiento estuvo representado por los salvadoreños, que comenzaron a llegar a México en los años de 1978 y 1979. La cantidad de los refugiados salvadoreños fue tan grande, que obligó al gobierno mexicano a crear un organismo que se ocupara de su atención. Así, se fundó en 1980 la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), formada por representantes de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social. En el año de 1982, el gobierno aceptó que el ACNUR abriera sus oficinas en México.

Posteriormente, en 1981, comenzaron a llegar a México los refugiados guatemaltecos. La primera ola, compuesta por 500 personas, fue deportada en masa por el gobierno. El segundo grupo, llegado en julio de 1981, tendría una respuesta similar, ya que de 2 000, el gobierno mexicano sólo concedió asilo a 58 y deportó al resto. Esto no detuvo el éxodo guatemalteco y el gobierno mexicano tuvo que cambiar su actitud. Entre 1981 y 1982, otorgó refugio a 46 000 guatemaltecos, quienes se establecieron en el estado de Chiapas, hasta 1984, año en que el gobierno de México decidió su reubicación, en campamentos, en los Estados de Campeche y Quintana Roo.

El gobierno nicaragüense, por su parte, también fue receptor de migrantes en la década de 1980. En febrero de 1980, el entonces nuevo gobierno se adhirió a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967, así como a otros convenios internacionales y regionales sobre derechos humanos que preveían la protección a los refugiados. A Nicaragua llegó una gran cantidad de extranjeros ofreciendo sus servicios profesionales, diplomáticos, educativos, técnicos y de asesoría especializada, así como otros muchos que se integraron a labores agrícolas, con el fin de contribuir a la reconstrucción del país y al fortalecimiento del go-

³⁹ Sergio Aguayo, *El éxodo centroamericano*, México, SEP-Foro 2000, 1984, p. 13.

bierno sandinista. Los refugiados que recibió, fueron fundamentalmente originarios de El Salvador y, en una cantidad menor, de Guatemala.⁴⁰ No obstante, una gran parte de las personas que originalmente se trasladó a Nicaragua siguió su tránsito hacia otros países. Estos traslados se intensificaron conforme la situación económica se deterioró. Los refugiados que permanecieron en Nicaragua, no ocasionaron mayores trastornos al gobierno, ni necesitaron de programas o gastos sobresalientes por parte de éste, ya que la mayor parte, (después de una etapa de asistencia muy breve, apoyada por el ACNUR), se integró a las actividades normales de la población nicaragüense. Para el gobierno, necesitado de personas que desarrollaran los proyectos económicos y sociales que requería el país, los refugiados fueron un apoyo en lugar de un problema.

Durante la década de 1990, se realizó un importante proceso de repatriación, cuyas bases comenzaron a sentarse en los últimos años de los ochenta. Los principales acontecimientos que favorecieron este proceso son los siguientes: con la firma del Documento de una "Paz firme y duradera de la región" —conocido como *Esquipulas II*—, que suscribieron los presidentes centroamericanos, el proceso de paz adquirió viabilidad y, puesto que una de las principales causas de expulsión centroamericana fue la guerra, la posibilidad de retorno de los refugiados se vislumbró como realista.

En abril de 1988, la ONU, a través de su Comité General de Cooperación para Centroamérica, reconoció como problema prioritario la situación de los refugiados, retornados y desplazados.⁴¹

⁴⁰ En 1983 existían 18 500 refugiados en Nicaragua. La mayoría (17 500) eran salvadoreños, 500 eran guatemaltecos y el resto de países de Sudamérica. *"Diagnóstico Nacional..."*, pp. 9-10.

⁴¹ Así lo señala Hug Heiner en *Refugges*, núm. 85, UNHCR, Geneva, 1991, p. 20.

II. NICARAGUA ANTE LA GLOBALIZACIÓN

La falta de inserción exitosa en el mundo global y la profundización en el subdesarrollo interno que Nicaragua experimentó durante el gobierno sandinista, pueden explicarse fundamentalmente a través del análisis de las coacciones externas e internas. Respecto a las externas tuvieron especial importancia: la situación de bipolaridad y radicalización que vivió el mundo en todos los aspectos a raíz de la Guerra Fría; la guerra emprendida por Estados Unidos contra Nicaragua; la situación financiera global (términos de intercambio de comercio desfavorables a países subdesarrollados, rígidas condiciones para la concesión de créditos, tasas de interés desproporcionales, canalización de recursos internos para el pago de deuda externa); el avance de las ideas y de las fuerzas conservadoras, representadas especialmente por el neoliberalismo; la debilidad de las ideas de izquierda y de los movimientos de liberación. Las coacciones internas más importantes fueron: la existencia de una burguesía subdesarrollada y antinacionalista; la existencia de una sociedad sin conciencia ni capacidad de movilización autónoma o de resistencia, capaz tan sólo de realizar acciones aisladas y coyunturales contra las políticas gubernamentales, que constituyeron obstáculos insalvables para la realización del proyecto nacional a largo plazo; la debilidad del gobierno, que lo llevó

a adoptar posiciones hegemónicas y radicales; el autoritarismo del gobierno, que impidió a los dirigentes por una parte, el análisis objetivo de la realidad, generando una disociación entre el proyecto integral a largo plazo de la nación y los mecanismos internos para llevarlo a cabo, y por la otra, la capacidad de evaluar de manera adecuada la gestión gubernamental, reconocer y aprender de los errores, y corregirlos de forma oportuna y eficaz. El entrelazamiento constante que existió de dos o más de estos elementos dentro de su misma dimensión (interna o externa) y el entrelazamiento de ambas dimensiones, ocasionó que las serias consecuencias adversas que cada uno tenía se multiplicaran, se profundizaran y se intensificaran.

En el presente capítulo se toman en cuenta ambos niveles, analizando la manera en la que el gobierno sandinista reaccionó frente a diversas variables. Éstas se dividen para su estudio en políticas y económicas.

LAS VARIABLES POLÍTICAS

A) Establecimiento de alianzas

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comprendió en un principio la importancia de establecer alianzas. Las primeras que se lograron fueron en el interior del mismo partido, dividido de 1975 a marzo de 1979 en tres tendencias: la guerra popular prolongada, la proletaria y la tercerista. Los partidarios de la primera tomaron como ejemplo las luchas del pueblo de Vietnam y pensaban que los campesinos eran los actores idóneos para ser protagonistas del proceso insurreccional. Los proletarios pugnaban porque se revalorara el papel que la clase obrera podría tener en la lucha, y trabajaron especialmente en espacios urbanos, en donde reunieron cuadros universitarios. Los terceristas, por su parte, consideraban que la toma del poder sólo sería posible a través del establecimiento de un sistema de alianzas amplio,

en donde participaran todos los sectores sociales del país, incluyendo a la burguesía. Debido a las divergencias contundentes que las tres tendencias tenían en cuanto a los actores (y por lo tanto a la forma) en la que debía ser derrocado el gobierno somocista, se vislumbraba difícil el que pudieran unirse en un solo y verdadero frente. Los terceristas finalmente lograron imponer su línea estratégica. Pronto se probó que la inclusión de todos los sectores sociales del país en la lucha contra la dictadura era la forma no sólo más efectiva, sino quizá la única de obtener el triunfo.

El FSLN consiguió entonces una gran unidad y cohesión, al grado de que las diferentes visiones de las tendencias sirvieron como una especie de “división del trabajo”, en lugar de elementos de tensión y fractura: cada una trabajó con los sectores que consideraba como más importantes, logrando la organización y el trabajo efectivo.

La unidad nacional que se obtuvo a través de las alianzas impulsadas por la tendencia tercerista fue un catalizador de otro elemento que sería fundamental para la toma del poder: el apoyo internacional. La mayor parte de la comunidad internacional formó, también, una especie de frente común, que dejó aislada (y con ello completamente debilitada) a la dictadura. Es interesante observar en este sentido, que el establecimiento de las alianzas fue aún más útil que el trabajo guerrillero y organizativo que venía desarrollando el Frente Sandinista desde principios de la década de 1960.

El 8 de mayo de 1979, se formaliza la unión del FSLN, mediante la creación de una Dirección Nacional de nueve miembros, integrada por tres representantes de cada una de las tendencias. Esta instancia llamaría de inmediato a la insurrección nacional y, posteriormente, a raíz del triunfo del 19 de julio, se consagraría en la mayor fuente de poder durante todo el gobierno sandinista.

El sistema de alianzas pudo ser eficientemente establecido en el momento de la insurrección. No obstante, no logró mantenerse una vez conseguida la victoria. Al momento del triunfo,

se creó una Junta de Gobierno para la Reconstrucción Nacional, integrada por Violeta Chamorro (viuda de Pedro Joaquín Chamorro, conservador asesinado por Somoza⁴² por sus acciones opositoras al gobierno), Alfonso Robelo (liberal y empresario exitoso que a finales de la dictadura organizó agrupaciones para derrocarla), Daniel Ortega (dirigente y combatiente sandinista), Sergio Ramírez (miembro del Grupo de los Doce, que apoyaba al FSLN), y Moisés Hassan Morales (figura independiente). El papel que los sandinistas tenían destinado para la Junta, sin embargo, era más simbólico que funcional, ya que el verdadero poder estuvo en la Dirección Nacional del FSLN, donde se concentró el poder militar y desde donde se elaboraron e instauraron las estrategias de gobierno. El establecimiento de instituciones con funciones formales, pero en realidad sin incidencia en la elaboración de políticas públicas y en la organización del Estado, fue un elemento que ocasionó inseguridad y que envió mensajes, especialmente a la burguesía, de una incongruencia entre el

⁴² Chamorro sugiere que los responsables de la muerte de Pedro Joaquín fueron los sandinistas y no Somoza. Sus argumentos deben tomarse con muchas reservas debido a que, desde su posición de director de *La Prensa*, durante la década de 1980, fue uno de los más enconados enemigos del régimen: sin embargo, no deben descartarse completamente debido a la lógica que presentan. Chamorro sostiene que Somoza dio amplias muestras de querer aclarar la muerte: presentó a los sospechosos ante la radio, la televisión y la prensa escrita, y durante tres días se les vio y oyó confesar su participación en el crimen. Hace una relación, además, de múltiples y graves irregularidades tanto administrativas como de impartición de justicia, presentadas durante el régimen sandinista en relación con el esclarecimiento de los hechos, da a entender que hicieron todo lo posible para que no se conociera la verdad. Relata, además, la muerte sospechosa de una persona clave durante el juicio, y la existencia de obstáculos para investigar las razones y los responsables de ella. Lo más interesante de sus argumentos es el hecho de que en realidad los únicos beneficiados con la muerte de Pedro Joaquín fueron los sandinistas. Al final de su gobierno, Somoza insistía en que *La Prensa* y su entonces director eran la prueba de que su régimen no era tan represor. Su muerte, entonces, fue perjudicial para el somocismo. En cambio, Pedro Joaquín hubiera sido la única persona capaz de rivalizar políticamente con los sandinistas. Tenía un fuerte arraigo popular y una imagen democrática y honesta. Jaime Chamorro, *La Prensa. La República de papel*, México, Ediciones Gernika, 1989.

discurso pluralista y las prácticas hegemónicas por parte del entonces nuevo gobierno. La exclusión de la burguesía de los órganos de poder se hizo más evidente con la modificación de la estructura del Consejo de Estado. Esta instancia, creada también al momento del triunfo, y que formalmente tenía funciones legislativas, estuvo formada en un inicio por 33 miembros, de los cuales sólo tres eran sandinistas. En mayo de 1980, el Frente aumentó el número de los escaños a 47, ocupando 24 entre ellos y sus partidarios.

En 1981 se formalizó el fin de la alianza entre el Frente Sandinista y la burguesía, al renunciar Alfonso Robelo y Violeta Chamorro a los puestos que tenían dentro de la Junta de Gobierno. Esta exclusión de la burguesía de los órganos del Estado y, por lo tanto, del poder político marcó lo que en lo sucesivo sería un continuo y encarnizado enfrentamiento con el gobierno. Si la renuncia de Robelo y Chamorro a la Junta de Gobierno puede considerarse como la formalización de la ruptura de la alianza, la conocida como “crisis de noviembre”, en el año de 1980, puede tomarse como el momento de la formalización del enfrentamiento, que llevó al gobierno incluso a encarcelar a importantes representantes de los empresarios, como fue el caso de Enrique Dreyfus, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

La burguesía fue excluida del poder político en lo inmediato, y también fue despojada de los recursos estratégicos estatales indispensables para su pronta recuperación en él. El Frente Sandinista, de este modo, nacionalizó los bancos, las compañías de ahorro y préstamo, el sistema financiero, las compañías de seguros, el sistema de comercio exterior de los productos de exportación y su acopio interno, las minas y el sistema de pesca y de corte y procesamiento de madera. La burguesía quedó también al margen de las decisiones en cuanto a las expropiaciones, a la realización de la reforma agraria y al diseño y aplicación de la política económica en general. El Frente sabía, sin embargo, que la participación de la burguesía era indispensable para el

crecimiento de la economía nacional. La colaboración que no encontró espontáneamente en aquélla, trató de obtenerla por medio de mecanismos coercitivos que en la mayor parte de los casos no fueron eficaces. En este sentido, se dictaron diversas leyes que trataban de frenar las acciones que atentaban contra los objetivos del gobierno revolucionario, realizadas por la burguesía. Como ejemplo de ello tenemos a la conocida popularmente como “Ley de los ausentes”, emitida en 1981, mediante la cual se permitía la confiscación de los bienes de los empresarios que abandonaran el país por más de seis meses sin causa justificada, o la “Ley de descapitalización”, que castigaba la fuga de capitales al exterior, mediante la confiscación de las empresas responsables.

Carlos Vilas sostiene una interesante tesis, en la que muestra que el Frente Sandinista tuvo una relación de confrontación “sólo” con una parte de la burguesía: la perteneciente a la clase política liberal, mientras que con los conservadores estableció alianzas sólidas y duraderas, al grado de que éstos tuvieron una participación y una responsabilidad muy importante dentro del gobierno.⁴³ En este trabajo, cuando se hable en general de la “burguesía”, se hará para referirse a la clase social. En la relación que se dio entre los conservadores y el gobierno sandinista, precisamente por las implicaciones políticas, no se reconoció la pertenencia de los primeros a una clase.

Aún más perjudicial que las acciones coercitivas fue la ausencia de un marco institucional, político y jurídico estable que fijara de una manera clara y segura las reglas del juego, especialmente en materia económica, para todos los sectores nacionales. En principio, la política económica tenía el objetivo

⁴³ Es interesante observar cómo la literatura reflejó esta relación. Gioconda Belli, una de las escritoras más impulsadas por el sandinismo y representativas de éste, narra en su obra *La mujer habitada*, la incorporación de una joven conservadora a la lucha contra la dictadura. A pesar de que literalmente se presenta a la protagonista con el deseo de renunciar a sus privilegios de clase, en los hechos se ensalza a los conservadores y se les adjudican valores positivos, mientras se hace lo contrario con los liberales.

de reactivar la economía interna en beneficio directo de los grupos populares. Todas las intervenciones del Estado respecto a la propiedad privada de los particulares (confiscaciones, expropiaciones, intervenciones de empresas, reforma agraria, etc.) se realizarían para alcanzar este objetivo. No obstante, la forma en la que en la práctica se llevaron a cabo no siempre tuvo un criterio definido y estable. En muchas ocasiones se realizaron con objetivos políticos en lugar de económicos y de productividad, algunas veces a favor y otras en contra de los intereses inmediatos de los particulares, pero siempre en detrimento de la estabilidad política e institucional del país. Así, en ocasiones se toleraban prácticas improductivas e incluso ilegales por parte de importantes empresas, por temor a un enfrentamiento con los propietarios; y en otras se confiscaban o expropiaban bienes, sin una razón netamente económica, pero que servían como represalias políticas o como efecto demostrativo de lo que el gobierno podía hacer en determinados casos. Carlos Vilas señala, en este sentido, que en la política gubernamental respecto a las confiscaciones y expropiaciones estuvo presente la lucha de poder entre conservadores y liberales, en la que resultaron ganadores los primeros, dado que muchos de ellos ocuparon los puestos en donde se decidían éstas. Como ejemplo pone la intervención y posterior expropiación del ingenio San Antonio, propiedad de la familia Pellas, de antigua raigambre conservadora. El ingenio fue intervenido en el año de 1988, argumentando que los propietarios y la administración incurrían en constantes maniobras de descapitalización y en incumplimiento de los planes de producción gubernamentales, además de canalizar fondos para la Contra. Después de la intervención, se decretó la expropiación, en la que la familia Pellas recibió una indemnización pagada en azúcar, en el momento en que el precio de ésta se encontraba a la alza en los mercados internacionales. La intervención del gobierno se dio después de múltiples y constantes avisos y advertencias que la familia Pellas no consideró, y contrasta no sólo con la manera en la que se dieron las expropiaciones para

propietarios pertenecientes a la clase liberal, sino también con las que se realizaron a campesinos pobres a los que se identificó como colaboradores de la Contra.⁴⁴

El Frente Sandinista fue también incapaz de establecer normas mínimas de convivencia religiosa que permitieran la estabilidad necesaria para el desarrollo. Las alianzas que estableció con la Iglesia, en el momento de la insurrección, también se rompieron casi de forma inmediata una vez iniciado el gobierno. La posición de éste frente a la religión tuvo dos vertientes. Por un lado, una cantidad importante de clérigos (sacerdotes, monjas, seminaristas) participó de forma activa y constante dentro de la lucha tanto política y organizativa como guerrillera que el Frente mantuvo desde principios de los años sesenta. Una vez en el gobierno, siguió contando con el apoyo de la Iglesia popular, que, debido a su adhesión a la teología de la liberación, veía con beneplácito las políticas del gobierno, orientadas fundamentalmente a la atención de los sectores pobres. Incluso existieron ministros del culto que estuvieron al frente de Ministerios dentro del gobierno (Ernesto Cardenal: Cultura; Edgar Parrales: Bienestar Social; Miguel D'Escoto: Relaciones Exteriores; Fernando Cardenal: Educación). Sin embargo, el gobierno revolucionario tuvo muy poco éxito en establecer relaciones armónicas con la Iglesia como institución (y como grupo de poder hegemónico tanto nacional como internacionalmente). La Iglesia popular desempeñó un papel de enlace entre los sectores pobres y el gobierno sandinista, al presentar las políticas y los objetivos de éste en concordancia con los postulados cristianos (Ernesto Cardenal decía incluso que el mensaje de la Biblia era completamente marxista). El Frente Sandinista tuvo el acierto de reconocer la importancia del trabajo de la Iglesia popular, y canalizarlo en su beneficio. La relación armónica y de mutuo apoyo que se estableció entre Iglesia popular y gobierno sirvió a éste para unificar a los sectores mayoritarios

⁴⁴ Carlos Vilas, "Clase, linaje y política sobre la burguesía nicaragüense", en *Panoramas de Nuestra América*, núm. 10, México, UNAM-CCYDEL, 1993, pp. 137-157.

de la población en torno a un proyecto. Sin embargo, tuvo como consecuencias negativas la profundización de la división que la sociedad sufría en su conjunto. Los grupos hegemónicos, que rechazaban la teología de la liberación, se unificaron en torno a la Iglesia tradicional, integrando un bloque que tendría una relación crecientemente conflictiva con el gobierno. La jerarquía tomó una posición de completo rechazo al proyecto y a las acciones de los sandinistas. Por principio de cuentas, advirtió a los sacerdotes que trabajaban en el gobierno, que de no renunciar a estos puestos serían declarados en rebeldía.⁴⁵ Posteriormente, realizó diversas acciones en contra del proyecto revolucionario y en particular de sacerdotes que lo apoyaban, como señala Van Eeuwen:

el arzobispo (Obando) expulsa a decenas de sacerdotes considerados partidarios del régimen, crea una red de formación que se considera una “máquina de guerra”, recorre el país, multiplica las homilías críticas y se niega a denunciar a Estados Unidos y los abusos cometidos por la Contra alegando la falta de pruebas. Apoyado por el Vaticano —que lo ha designado cardenal a los 59 años, en abril de 1985— en su lucha contra la Iglesia popular, que según él es el “principal enemigo de la Iglesia institucional”, recibe también ayuda del Institute on Religion and Democracy, órgano de la lucha librada desde Washington contra la teología de la liberación. Así, no vacila en celebrar su primera misa cardenalicia en Miami ante un grupo de dirigentes contras.⁴⁶

⁴⁵ El 1º de junio de 1981, la Conferencia Episcopal emitió una Declaración, cuyo punto principal fue el siguiente: “2. Declaramos que si los sacerdotes que están ocupando puestos públicos y ejerciendo funciones partidistas, no dejan esas responsabilidades cuanto antes, para incorporarse totalmente a su específico ministerio sacerdotal, los consideraríamos en actitud de abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia”. Declaración transcrita en “Sacerdotes en el gobierno nicaragüense: ¿poder o servicio? Algunos documentos acerca de esta polémica”, *Cuadernos*, núm. 5, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1981.

⁴⁶ Daniel Van Eeuwen, “Nicaragua”, en Alain Rouquié [coord.], *Las fuerzas políticas en América Central*, México, CIE, 1994, p. 193.

La jerarquía católica, además de las acciones frontales, utilizó la fe de la población con el objetivo de poner a ésta contra el gobierno. Un ejemplo muy significativo tuvo lugar en 1987, cuando se difundió que a un parroquiano se le había aparecido la Virgen y que ésta le había hablado sobre el derecho del pueblo a recibir un mejor abastecimiento y a que se abriera un diálogo entre todos los sectores en pugna. Por supuesto, este mensaje tenía claras referencias a la situación de guerra y de crisis económica que estaba viviendo el país. El mismo cardenal Obando declaró a través de "Radio Impacto" (radiodifusora de la Contra): "todavía no se le ha dado publicidad a esta aparición porque pensamos que puede aparecerse nuevamente."⁴⁷

Los sandinistas no tuvieron oportunidad ni capacidad para establecer normas de convivencia que satisficieran a la jerarquía y, por lo tanto, que solucionaran o aminoraran las tensiones. El gobierno reaccionó con medidas de fuerza a las acciones de fuerza realizadas por la Iglesia. Ante las manifestaciones con contenido antisandinista por parte del clero, reaccionó con expulsiones de sacerdotes, intervenciones de bienes, supresión de espacios de expresión y discursos tachando a la Iglesia tradicional no sólo de antinacionalista, sino también de estar en contra de los verdaderos postulados cristianos.⁴⁸ A pesar de lo importante que fue para los sandinistas contar con el apoyo de la Iglesia popular, el enfrentamiento con la jerarquía representó una fuente de desestabilización permanente y se convirtió en uno de los elementos

⁴⁷ Giani Beretta, "Relaciones Iglesia-Estado. Una delicada trama de intereses", en *Pensamiento Propio*, Managua, CRIES, 1987, p. 55.

⁴⁸ En 1983 se intervinieron los bienes de Coprosa, una fundación del Episcopado, se expulsó al obispo Pablo Antonio Vega y se suprimió la transmisión por televisión de las misas que Obando celebraba los domingos. En agosto de 1982, se descubrió a Bismark, asistente de Obando en la Curia, en un escándalo. Se le presentó a través de la televisión saliendo desnudo de la casa de su amante, siendo perseguido por el esposo de ésta. Según Sergio Ramírez, todo esto fue planeado y ejecutado por la Dirección General de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior. *Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista*, México, Aguilar/Altea/Taurus/Alfaguara, 1990, p. 188.

más dañinos para la gobernabilidad y obstáculo para el desarrollo de su proyecto. En realidad, se estaban enfrentando con uno de los poderes mejor estructurados y con mayor fuerza en el nivel mundial, puesto que la alta jerarquía en Roma apoyó en todo momento a la Iglesia tradicional en Nicaragua. El nombramiento de Obando como cardenal, en abril de 1985, fue un signo inequívoco del proyecto que la Santa Sede apoyaba. Esta ayuda se advirtió desde años antes, cuando en 1983 el Papa visitó Nicaragua, y no mencionó ninguna de las acciones terroristas de la Contra, como señala Comblin: “en Ayacucho el Papa hizo un llamado dramático a Sendero Luminoso para que depusiera las armas. Hizo lo mismo en todos los países en los que existen movimientos guerrilleros en la lucha contra el gobierno establecido. En Nicaragua no dijo nada.”⁴⁹

La estabilidad requerida para el fortalecimiento de un país al interior, y su proyección al exterior, estuvo completamente ausente durante todo el gobierno sandinista. La falta de acuerdos se observó también en el nivel internacional. La guerra sin cuartel que Estados Unidos sostuvo con Nicaragua fue un elemento que canceló cualquier posibilidad de desarrollo interno. El país del norte no tuvo justificación jurídica ni moral alguna para agredir a su vecino centroamericano del modo en que lo hizo, como veremos en el capítulo tres de este trabajo. Sin embargo, en este espacio es conveniente advertir que el gobierno sandinista desaprovechó las ocasiones (pocas a decir verdad) que tuvo para lograr algún acuerdo en su beneficio. El saliente gobierno de James Carter tuvo una actitud ambivalente con los sandinistas. Por una parte, incrementó el potencial militar que Estados Unidos tenía no sólo en Nicaragua, sino en toda Centroamérica. En el terreno financiero, en cambio, tuvo una actitud cooperativa al enviar, en septiembre de 1979, una ayuda en medicamentos y alimentos por un valor total de 118 millones de dólares.⁵⁰ En

⁴⁹ José, Comblin, “Testimonio de...”, en José María Vigil [coord], *Nicaragua y los teólogos*, México, Siglo xxi, 1987 (Col. Sociología y política), p. 90.

⁵⁰ Alain Rouquié, *Guerras y paz en América Central*, México, FCE, 1994, p. 175.

septiembre de 1980, declaró que Nicaragua era apta para recibir créditos. Ronald Reagan tuvo aun antes de acceder al poder una posición agresiva respecto a Nicaragua. No obstante, en agosto de 1981 intentó una negociación con el gobierno sandinista. Le pidió que suspendiera la ayuda a las guerrillas de los países vecinos a cambio de lo cual se comprometía a no poner en tela de juicio la naturaleza del régimen y a garantizar su seguridad. Daniel Ortega, entonces presidente de la Junta de Gobierno, y miembro de la Dirección Nacional, se negó rotundamente y declaró incluso que la lucha del FMLN era indispensable para la supervivencia de la Revolución nicaragüense.

En 1982, Reagan ofreció al gobierno sandinista un préstamo, con la condición de que fuera entregado directamente al sector privado.⁵¹ De haber existido en Nicaragua un marco institucional y político estable, con un gobierno fuerte y hábil, se habrían podido aprovechar estos recursos, con los límites y modalidades dictados por el interés nacional a favor del crecimiento económico. La situación era tan precaria, que el gobierno rechazó el préstamo, por el temor (fundado) de que la burguesía lo utilizara como arma en contra suya.

La alianza que quizá perjudicó más al gobierno nicaragüense fue la establecida con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Al realizar un balance retrospectivo, podemos advertir que los costos resultaron sumamente altos, mientras que los beneficios prácticamente estuvieron ausentes. El Frente Sandinista estaba convencido de que el apoyo a los guerrilleros salvadoreños constituía un arma necesaria en la lucha ideológica que estaba librando, y veía no sólo como posible sino también como probable el que éstos llegaran al poder. Para hacer más grande esta probabilidad, brindó al FMLN un gran apoyo tanto en lo material (armamento, bases de operaciones, refugio a combatientes), como en lo logístico (aseso-

⁵¹ Orlando Núñez, *Transición y lucha de clases en Nicaragua (1979-1986)*, México, Siglo XXI, 1987, p. 126.

rias, capacitación, información) y en lo político. En este último sentido, se convirtió en uno de los mejores voceros del Frente Farabundo Martí en los foros internacionales, y contribuyó a que se le reconociera el carácter de grupo beligerante.⁵² También ayudó a un acercamiento con los demócratas de Estados Unidos y otros actores con gran influencia dentro del ambiente político internacional.

Con este apoyo, el gobierno de Nicaragua buscaba fortalecer su posición a largo plazo, pensando en la posibilidad del establecimiento de gobiernos afines en toda la región. Este objetivo no fue original del gobierno sandinista, éste tiene antecedentes muy remotos en la historia de la región, ya que Centroamérica posee elementos de identidad comunes muy fuertes. En muchos momentos de su historia, a partir de la independencia, se ha tratado de unir formalmente a los cinco países que de manera natural han estado ligados por diversos elementos. A pesar de que la Confederación centroamericana tuvo una vida efímera, los países de la región han estado estrechamente interrelacionados tanto económica, como política y culturalmente. Alain Rouquié, en este sentido, menciona el caso de un grupo de salvadoreños que, en 1944, bajo la presidencia de Arévalo, creó en Guatemala el “partido comunista guatemalteco”.⁵³

El FSLN identificó su causa con la del grupo guerrillero de El Salvador, y con la de distintos movimientos populares existentes en la región. En la solidaridad internacional, también existió esta identificación que llegó al grado de poner a todos en un mismo nivel. “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá”, se oía como consigna en las manifestaciones que en muchas partes del mundo se cele-

⁵² Este reconocimiento tuvo su origen formal en la *Declaración franco-mexicana* de 1981, mediante la cual estos dos gobiernos reconocieron al FMLN el carácter de grupo beligerante. Sin embargo, el apoyo y la actuación de Nicaragua pueden considerarse como antecedentes fundamentales para la realización de esta declaración.

⁵³ Rouquié, introducción a *Las fuerzas políticas...*, p. 17.

braban.⁵⁴ Sin embargo, todo parece indicar que la probabilidad de que el FMLN, u otro movimiento popular, llegara al poder fue vista por el gobierno sandinista más en función de una necesidad y de un deseo, que como resultado de un análisis objetivo. Las condiciones que permitieron el acceso al poder del FSLN eran completamente diferentes de las existentes en otros países de la región, por lo cual la ayuda, en relación con el fortalecimiento del ánimo combativo y con el otorgamiento de elementos materiales y logísticos al FMLN, no fue suficiente para la victoria de éste. Otro elemento que se trató de impulsar, tanto por la solidaridad internacional, como por el gobierno nicaragüense, fue la organización y movilización de las comunidades eclesiales de base, identificadas con la teología de la liberación. En los países de la región, no obstante, la realidad a este respecto fue distinta a la de Nicaragua.

Por ello podemos decir que la “regionalización del conflicto” no fue sólo un pretexto de la intervención de Estados Unidos, sino un objetivo real del gobierno nicaragüense. Sin embargo, ambos gobiernos valoraron de forma completamente equivocada las posibilidades de que el objetivo se realizara, y esta equivocación tuvo implicaciones negativas muy importantes tanto para Nicaragua como para la región en su conjunto.

B) Manejo de conflictos

La relación del gobierno revolucionario con la burguesía y con Estados Unidos fue, sin duda, la mayor fuente de conflictos. Sin embargo, en el interior de las clases populares también se registraron inconformidades y enfrentamientos que el Frente Sandinista no atendió ni manejó de una forma adecuada. El mejoramiento en las condiciones de vida de los campesinos fue uno de los

⁵⁴ Luis Enrique Mejía Godoy, cantor y compositor nicaragüense que puede considerarse como “representante del sandinismo”, en una de sus canciones retoma esta consigna agregándole: “y Guatemala prepara ya, su ofensiva hacia el final”.

objetivos principales del FSLN, desde la etapa de lucha contra la dictadura. Una vez en el poder, siguió siendo una de las premisas fundamentales y a las que dirigió mayor atención y recursos. Sin embargo, la dirigencia gubernamental atendió el problema del campo de manera autoritaria y hegemónica, con una visión ideológica que en muchos sentidos impidió un análisis realista de la situación. Las acciones tomadas durante la primera etapa de gobierno estuvieron encaminadas a que los campesinos trabajaran y obtuvieran beneficios de manera colectiva. Así, se crearon cooperativas agrarias y unidades de producción agropecuaria a las que se dotaba de tierra y de recursos para trabajarla, pero no se les daba la propiedad a los campesinos de manera individual. Además, se impusieron condiciones rígidas para que éstos comercializaran los productos agropecuarios, con lo cual estaban obligados a venderlos de manera exclusiva al gobierno. La incompreensión de éste a las realidades concretas e inmediatas de los campesinos, así como a su idiosincrasia, dio por resultado que muchos de ellos vieran las acciones gubernamentales como una intromisión peligrosa e indeseada. La contrarrevolución encontró terreno fértil entre los campesinos inconformes, para atraerlos a sus filas.

El Frente Sandinista siempre se refirió a los integrantes de la Contra como “mercenarios”. Es verdad que una buena cantidad de ellos lo era, pero también lo es que la Contra tuvo integrantes y base social de campesinos que se incorporaban a la lucha como resultado de inconformidades no resueltas por el gobierno. Éste tácitamente reconoció dicha realidad a través de la modificación de las políticas de la reforma agraria que, en 1985, autorizaba a entregar tierras de forma individual a los campesinos. Estas medidas, aplicadas demasiado tarde, tuvieron resultados negativos, principalmente porque no se adjudicó la propiedad de manera jurídica. Cuando en 1990 el Frente Sandinista perdió el poder, se encontró que la mayor parte de las propiedades que físicamente habían sido entregadas a los campesinos, pertenecían a los antiguos dueños, ya que el gobierno revolucionario nunca formalizó las confiscaciones y expropiaciones.

Los conflictos suscitados con los habitantes de la Costa Atlántica tampoco fueron debidamente manejados. El Frente Sandinista quiso “llevar” la revolución a un lugar en donde no había interés en recibirla. A pesar de que la Costa Atlántica formalmente es parte del Estado nicaragüense, en realidad ha tenido una historia y una cultura distinta al resto del país, al grado de no compartir ni siquiera el mismo idioma. Sus integrantes, con una fuerte ideología anticomunista, desconfiaban del FSLN, debido a los “informes” que recibían de la única radiodifusora de cobertura regional, *The Voice of America*.

El entonces nuevo gobierno no se detuvo a pensar en las particularidades de esta población indígena heterogénea, que vio en las nuevas medidas aplicadas desde el centro, una forma de intromisión en sus estilos de vida que hasta entonces habían sido regidos por usos y costumbres propios. Las medidas sandinistas, en este sentido, fueron vistas por los indígenas de la misma forma que las antiguas intromisiones y agresiones de los gobiernos españoles. La primera gran intromisión fue la disolución, por parte del gobierno, de la organización indígena Alianza para la Promoción de Miskitos y Sumus (ALPROMISU) y la posterior conformación de Miskitos, Sumus, Ramas y Sandinistas Unidos (MISURASATA). Dos situaciones fueron especialmente importantes en la profundización de la confrontación entre el gobierno y los integrantes de la Costa Atlántica. La primera se presentó en octubre de 1980, cuando se suscitaron violentas protestas en Bluefields por la llegada de médicos y maestros cubanos. El Ministerio del Interior intervino también con una gran violencia, y detuvo a cientos de personas. La mayoría fue liberada al día siguiente, pero los líderes permanecieron presos hasta septiembre de 1981. La segunda situación se generó a partir del “Documento sobre la Tierra”, hecho por parte de los integrantes de la Costa Atlántica, en el que:

[se] delimitó como territorio indígena un área de 45 000 km², que representaba más del 30 por ciento del área total de Nicaragua. En el

mismo demandaban no sólo derechos civiles y políticos especiales, tales como los de “organizarse y gobernarse por sí mismos”, sino también el pleno control de todos los recursos naturales comprendidos en la superficie, subsuelo, aguas continentales y costeras.⁵⁵

Además de las implicaciones que estas reivindicaciones tenían para el proyecto nacional,⁵⁶ este documento despertó una gran preocupación en el gobierno debido a que uno de los asesores que intervino en su realización profesaba también una ideología anticomunista, y veía en la consolidación de las naciones indígenas de Centroamérica una oportunidad para frenar el avance del comunismo. Antes de que el documento pudiera ser presentado al gobierno, como planeaban los indígenas, el Ministerio del Interior ordenó la detención de 22 líderes. A raíz de la ejecución de la orden, murieron cuatro indígenas y cuatro militares sandinistas, lo cual desató a su vez más protestas violentas. En mayo de 1981, fueron excarcelados los líderes indígenas, pero uno de ellos cruzó la frontera con 3 000 miskitos e inició una campaña para que los demás indígenas de la Costa Caribeña se levantaran en armas contra el gobierno. Ésta fue una de las ramas de la Contra a cuyos integrantes no puede considerarse como “mercenarios”, y que constituyeron un genuino movimiento de la población en contra del FSLN.

Uno de los logros sandinistas más reconocidos en el nivel internacional fue la realización de una “Ley de Autonomía de

⁵⁵ Frances Kinloch, “Pacificación y transición neoliberal (1990-1996)”, en *Enciclopedia de Nicaragua*, vols., Barcelona, Océano, 2002, vol. I, p. 158.

⁵⁶ Borge señalaba en 1981: “Es elemental que partamos del principio de reafirmar la Unidad Nacional y la integridad del territorio nicaragüense. A pesar de las diferencias de cultura y lingüística que existen con la Costa Atlántica, nosotros tenemos que resolver los problemas del país en su conjunto, y la Costa Atlántica forma parte de Nicaragua, ese es un principio que no podemos olvidar, porque hay algunos que piensan que el Pacífico es un problema y la Costa Atlántica es otro, ¡no! Nicaragua es el problema, y la respuesta tenemos que darla a nivel nicaragüense. Tomás Borge, *No pedimos que elogien la revolución, sino que digan y divulguen la verdad*, Managua, Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN, 1981, p. 22.

la Costa Atlántica". No obstante, en este caso también falló la institucionalización del marco jurídico, ya que el reglamento necesario para la aplicación de dicha ley, nunca se realizó.

La migración constituyó uno de los efectos del inadecuado manejo de conflictos. Por su importancia, este tema será abordado en espacio aparte.

C) El papel de las élites

En la conformación de la estructura de las élites nicaragüenses han influido de manera determinante las relaciones de parentesco. A través de éstas se conformaron dos grandes grupos, que se han disputado el poder durante toda la historia del país: los liberales y los conservadores. La ideología y actuación de estos grupos, sin embargo, no tiene mucho que ver con la de las representaciones políticas tradicionales de las cuales tomaron su nombre. En realidad, estos grupos se han caracterizado por la búsqueda del acrecentamiento de su poderío económico, con el cual han respaldado el político, sin haber tenido ya no la capacidad, sino ni siquiera el interés por diseñar y defender un proyecto nacional. A diferencia de las élites existentes en los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo, las nicaragüenses no tuvieron la vocación de acumular poder a través del desarrollo y el dominio de los recursos de su país. Todo lo contrario. Permitieron y, la mayor parte de las veces, solicitaron la participación de agentes externos, quienes, una vez que obtuvieron el control de los recursos estratégicos nacionales (Banca, sistema financiero, medios de comunicación y transporte, tierras, etc.), canalizaron los beneficios obtenidos a favor del desarrollo de sus países de origen. A pesar de que todo ello permitió a los conservadores y a los liberales nicaragüenses acrecentar su poder político y económico al interior, les impidió, al igual que lo que ocurría con el país, proyectarse hacia el exterior y conformarse como grupos de poder hegemónicos en el nivel internacional. En este caso, podríamos hablar de una

élite “subdesarrollada”. Los liberales y los conservadores no han tenido una diferencia sustancial en la manera de gobernar. Ambos han buscado, en la misma medida, la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua, como una forma de fortalecerse para obtener y mantener el poder. Conservadores fueron quienes se opusieron en primera instancia a la Independencia de su país; quienes en 1909 derrocaron a José Santos Zelaya mediante la ayuda militar de Estados Unidos y permitieron la ocupación de Nicaragua por parte de éste hasta 1928. Durante este periodo, conservadores fueron: Adolfo Díaz, quien, a finales de 1911 pidió la intervención militar de Estados Unidos para defenderse de los liberales que amenazaban con quitarle la presidencia, y Emiliano Chamorro, quien firmó en 1914 con el secretario de Estado del país del norte, Bryan, el tratado por el que Nicaragua cedía formalmente una parte de su soberanía.⁵⁷ Y liberales fueron quienes impulsaron la intervención armada de William Walker en 1855 y lo apoyaron cuando se proclamó presidente el siguiente año; liberales fueron los integrantes de la dinastía Somoza, que gobernó de manera déspota, cruel y antinacionalista al país durante casi cincuenta años, con el patrocinio constante y reconocido de Estados Unidos.

Ésta es la esencia de la burguesía con la que contaba el país en el momento en que el Frente Sandinista comenzó a gobernar Nicaragua. Las clases políticas hegemónicas habían mostrado, a través de la historia, la forma en la que ejercían el poder y no había ningún indicio que permitiera suponer un cambio en esa tendencia. El gobierno revolucionario fue incapaz de establecer un sistema de alianzas que permitiera la gobernabilidad y el desarrollo del país, sin embargo, uno de los elementos más evidentes que le dio esta condición de incapacidad fue, precisamente, la naturaleza de las élites que existían en Nicaragua. Los países que alcanzaron un desarrollo interno e internacional tuvieron

⁵⁷ Sergio Ramírez, *Las armas del futuro*, Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1987, p. 10.

la capacidad de negociar con las clases hegemónicas, logrando que éstas trabajaran a favor del desarrollo interno y, a la vez, se beneficiaron sustancialmente con los servicios que brindaban éstas. Sin embargo, ello sólo pudo ser logrado por gobiernos fuertes que supieron establecer límites y tuvieron los recursos adecuados y suficientes para que éstos se respetaran. El gobierno del Frente Sandinista estaba en una posición completamente diferente. En primera instancia, sabía que las élites no tenían ninguna intención de trabajar por el desarrollo de Nicaragua sino por el de ellas mismas y, sobre todo, que no se conformarían con los beneficios económicos que pudiera generar el país en un momento dado, sino que buscarían a toda costa recobrar el poder político que les permitiera un margen de acción prácticamente ilimitado. El gobierno revolucionario aprovechó que los grupos hegemónicos se encontraban en situación de especial debilidad (sin apoyo internacional, sin un proyecto nacional, sin el control de las fuerzas armadas y con la mayor parte de sus dirigentes fuera de Nicaragua) y los marginó de los espacios en donde se decidía el futuro del país, quitándoles, además, los recursos estatales indispensables para que pudieran fortalecerse económica y políticamente.

Durante el gobierno sandinista, las élites mostraron el mismo comportamiento que habían tenido a lo largo de la historia. Primeramente, demostraron a través de sus acciones un interés por recobrar el poder que en muchas ocasiones iba, incluso, contra sus intereses económicos. Así, tomaban decisiones que podían perjudicar la productividad de sus empresas en lo concreto, con el objetivo de producir consecuencias negativas en la esfera macroeconómica y con ello desacreditar políticamente al régimen y debilitarlo paulatinamente. No fue de extrañar, entonces, que el gobierno no encontrara apoyo en las élites al momento de aplicar las medidas que buscaban la reactivación de la economía. Éstas, precisamente, pretendían lo contrario. No estaban dispuestas a realizar el más mínimo sacrificio, como la reducción de bienes suntuarios que permitiría canalizar los

recursos, si no al ahorro, como hubiera sido lo ideal, por lo menos a la inversión en proyectos productivos. La otra característica que mostraron durante este periodo, que ha sido una constante en el pasado, fue la búsqueda del apoyo estadounidense para recobrar el poder. Las élites de los países exitosos lograron, en primera instancia, establecer acuerdos entre sí mismas y después frente al gobierno, con lo cual formaban un bloque común ante las amenazas extranjeras. Las élites nicaragüenses mostraron muy poco sentido de pertenencia a una nación.⁵⁸ El apoyo de Estados Unidos le permitió a cada uno de los dos grupos de la burguesía beneficios concretos y la permanencia en el poder en determinados momentos, pero representó para Nicaragua una de las causas más determinantes de su estancamiento interno y del deterioro de su posición dentro del orden global.

La falta de acuerdos políticos entre élites y gobierno dio por resultado una gran fractura en lugar de la unidad que el país necesitaba. Esta fractura se dio en primera instancia entre dos proyectos antagónicos y entre los grupos que los representaban. No obstante, el deterioro en el que se vio inmerso el país dio por resultado que las contradicciones se manifestaran en muy diversos campos y entre distintos actores, que trabajaban ya fuera a favor de uno u otro proyecto, dependiendo más de las circunstancias coyunturales que de los principios ideológicos y/o políticos. Así, se vio a campesinos que en el aspecto político se enfrascaban en luchas, incluso a muerte, para defender a la patria de la contrarrevolución, al mismo tiempo que atentaban contra el proyecto económico gubernamental, al dejar de producir en sus tierras y colocarse dentro del comercio informal en las ciudades (principalmente en Managua) o realizar actividades de especulación en el mercado negro. La política económica

⁵⁸ Spalding señala que los nicaragüenses ricos solían hacer arreglos para que sus hijos nacieran en Estados Unidos, de modo que pudieran adquirir la nacionalidad de este país. Rose Spalding [comp.], *La economía política de la Nicaragua revolucionaria*, México, FCE, 1989, p. 80.

tuvo también como consecuencia negativa la diversificación y profundización de las contradicciones no políticas, como las que se presentaron entre los productores y trabajadores del campo y los comerciantes especuladores de la ciudad.

D) *El papel del Estado*

El marco institucional y político estable que los países que han alcanzado el desarrollo establecieron en el interior de sus países fue sustituido en el caso nicaragüense por un rígido aparato de Estado, desde el cual (y hacia el cual al mismo tiempo) los sandinistas ejercieron un poder excluyente del resto de los sectores sociales. El hecho de que al frente del gobierno estuviera un cuerpo colegiado (la Dirección Nacional) compuesto por nueve integrantes, fue un hecho insólito dentro de la historia y la tradición política del país, en las que el caudillismo fue una constante. La forma de gobernar de los sandinistas, sin embargo, en realidad no rompió esta constante, ya que se conservaron las estructuras rígidas que impedían la participación de otros actores sociales, y con ello su involucramiento en el diseño de las estrategias gubernamentales y en el destino del país. Durante este periodo el gobierno promovió y protegió la movilización y organización de la población, a través de la creación de diversos espacios de expresión y de participación popular desde los cuales se ejercía la democracia directa, al decir de los mismos sandinistas. Éste fue un logro para el gobierno tanto por el respaldo y el apoyo que consiguió por medio de estas organizaciones, como por el hecho de que los sectores marginados por primera vez en la historia del país tuvieron la oportunidad de adquirir conciencia de su valor y de su importancia política. Debido a que el gobierno tenía objetivos primordialmente de atención a las clases pobres, no tuvo mayor problema en apoyar a las organizaciones en la solución de dichas dificultades. Así, se establecía una coincidencia de metas inmediatas entre la población organizada y el gobierno, que resultó benéfica para ambas partes. Si el punto era la deficiencia

en los servicios de salud, por ejemplo, el gobierno promovía la organización interna de un grupo, que votaba de manera libre para elegir a los responsables directos de poner en marcha el programa, y decidía el papel de cada uno de sus integrantes. El gobierno colaboraba al respetar las designaciones en los niveles más bajos, al enviar promotores de salud que multiplicaban los conocimientos y al proporcionar los recursos materiales en la medida de lo posible. Sin embargo, ejercía una total hegemonía en el momento de diseñar y desarrollar las políticas estratégicas y esenciales, excluyendo a cualquier otro sector. Este verticalismo y autoritarismo coincidió, a su vez, con la situación de guerra que vivió Nicaragua en este periodo, que permitía, y la mayoría de las veces exigía, la existencia de un mando único y de estructuras obedientes y disciplinadas. El hecho de que la Dirección Nacional funcionara, precisamente, como un mando único fue un gran logro del Frente Sandinista. Sus integrantes supeditaron las profundas y variadas discrepancias que tenían entre sí (al principio entre las tres tendencias),⁵⁹ así como la propensión al protagonismo de muchos de ellos, pensando en un solo y gran objetivo común: la permanencia en el poder. La agresión constante, intensa y creciente que el Frente sufrió por parte de la antes clase política hegemónica nicaragüense y, sobre todo, por parte de Estados Unidos fue quizás un elemento que

⁵⁹ Estas discrepancias se evidenciaron durante la revolución pero pudieron ser controladas. Un ejemplo de conflictos es el que se suscitó entre el Ministerio del Interior, representado por Tomás Borge, y el Ministerio de la Defensa, representado por Humberto Ortega. Este último comenta: "Yo era del criterio que no podía existir un Ministerio del Interior tan grande, que incluso en algunas oportunidades quiso hasta tener helicópteros, es decir, casi constituirse en otro ejército. Cuando se organizaron las Tropas Pablo Ubeda se inicia una suerte de competencia en cuanto a quién mataba más contras, quién iba ganando la guerra, si las Tropas Pablo Ubeda o los Batallones de Lucha Irregular. Como esta situación provocaba mayores gastos y doble esfuerzo para el país yo pensaba que el Ministerio del Interior siempre debía haber sido un Ministerio de Gobernación con su policía, en tanto que el Ejército debía ser precisamente eso: una Fuerza Armada con sus tropas y los medios correspondientes". Humberto Ortega, *Nicaragua: revolución y democracia*, México, Organización Editorial Mexicana, 1992, p. 55.

permitió que se mantuviera cohesionado. Tan pronto como el Frente perdió el poder, se evidenciaron claramente las diferentes visiones que existían dentro de él y, sobre todo, se descubrieron de una manera incluso escandalosa las disputas, ya fuera por conservar o por obtener el papel protagónico en el interior del partido. Esto desembocó en el enfrentamiento directo y, en muchos casos, en la ruptura política entre representantes de las nuevas tendencias que se fueron estructurando.

Paralelamente al proceso de homogeneizar el poder, el Frente Sandinista experimentó un proceso de radicalización en todos los ámbitos, que también tuvo como consecuencia la profundización del aislamiento y del enfrentamiento respecto de otros grupos y tendencias, tanto en el nivel interno como externo. La imagen moderada que fue tan eficiente para que el FSLN estableciera las alianzas necesarias para derrocar a la dictadura, se fue distorsionando debido a la forma en la que éste gobernaba al país y a la posición que adquiriría en el nivel internacional. Por una parte, declaraba, casi obstinadamente, que en el nuevo gobierno tenían lugar todas aquellas personas que propugnaran por el bien del país, independientemente de su clase social o tendencias ideológicas. Algo similar sucedía en el plano internacional, al afirmar la posición de Nicaragua como un país no alineado, que buscaba fundamentalmente recuperar su soberanía. La simpatía que el nuevo gobierno despertó mundialmente ha sido algo inusitado, incluso hasta la actualidad.⁶⁰ Sin embargo,

⁶⁰ Esta simpatía, no obstante, estuvo sustentada principalmente por la imagen moderada que manejaron los principales dirigentes sandinistas, impulsada por la corriente tercerista. En octubre de 1977, se declaró que el Frente abandonaba el marxismo-leninismo, ya que su preocupación fundamental era la democracia (pp. 156-157). En agosto de 1978, el comandante Edén Pastora, con motivo de la famosa y exitosa toma del Palacio Nacional, declaró que el objetivo del Frente era implantar una democracia similar a la costarricense (p.4). Incluso Tomás Borge, conocido por su radicalidad y su adhesión al marxismo-leninismo, señaló que el Frente se convertiría a la social-democracia. Juan Monroy, "La insurrección democrática en Nicaragua: conservadores, liberales y marxistas", en Ignacio Sosa [coord.], *Insurrección y democracia en el Circuncaribe*, México, UNAM-CCYDEL-UAEM, 1997, p. 161.

ésta se fue debilitando al observarse que las acciones de los sandinistas no se correspondían con lo acostumbrado dentro de la democracia representativa. En lo abstracto, el Frente negaba su adhesión a las ideas socialistas. No obstante, sus discursos mostraban un propósito claro por instaurar el marxismo leninismo. En septiembre de 1979, es decir, dos meses después de la toma del poder, y cuando aún se hablaba de un gobierno plural y compartido por todas las tendencias y clases sociales, el Frente Sandinista elaboró un documento por medio del cual se buscaba dar una estructura definitiva al mismo, así como fijar los objetivos que tendría la revolución. En el conocido como "Documento de las 72 horas" (por haber sido realizado en este lapso), y filtrado después a la opinión pública de manera subrepticia, según Sergio Ramírez se declaraba que:

(el) objetivo era alcanzar la sociedad socialista basada en la dictadura del proletariado, previa una etapa de alianzas con la burguesía, mientras más corta, mejor; y la existencia misma de la Junta de Gobierno se ponía como el primer ejemplo de esas alianzas, que tarde o temprano tendrían que terminar, por el sino dialéctico de la historia. El FSLN aspiraba a consolidarse en un partido marxista leninista, se declaraba en lucha a muerte en contra del imperialismo yanqui, y proclamaba su adhesión al campo socialista, donde debíamos insertarnos cuanto antes.⁶¹

Este objetivo en realidad no fue ni medianamente cumplido. Pocas acciones del gobierno revolucionario pueden calificarse como socialistas. La prueba que Estados Unidos consideraba como más evidente del carácter socialista del FSLN, era la ausencia de un marco electoral dentro de un régimen de democracia representativa durante el primer periodo (1979 a 1984) y la manera rígida y autoritaria de gobernar en ambos. Sin embargo, estas características no son exclusivas de los países socialistas, ya que la historia

⁶¹ Ramírez, *Adiós muchachos...*, p. 112.

muestra que se han dado en muchos otros con diferentes tendencias ideológicas.

Lo que en realidad quiso instaurar el Frente Sandinista en el interior de Nicaragua fue un proyecto nacionalista y popular, a través del cual el país adquiriera fortaleza y pudiera ejercer su soberanía de una forma más real. La materialización de este proyecto, por supuesto, implicaba la modificación profunda de las estructuras políticas y económicas del país, así como de las relaciones entabladas entre las distintas fuerzas y clases sociales, tanto entre ellas mismas como frente al gobierno y al capital internacional. Igualmente, implicaba un cambio de raíz en lo que se refería a la relación que Nicaragua tenía frente a la comunidad internacional y, muy especialmente, frente a Estados Unidos. Este proyecto, entonces, era sumamente radical y para ello, según declaraciones posteriores de uno de sus mayores dirigentes,⁶² debían adoptarse posiciones radicales. Los dirigentes sandinistas se vieron insertos y en muchos casos atrapados y obnubilados por la situación de bipolaridad que se vivía en el nivel mundial en esos momentos. El sostener que se luchaba por obtener “todo o nada” sirvió en su momento, como fuente de legitimidad y como elemento que les dio fortaleza frente a los adversarios. Sin embargo, en términos pragmáticos quizás hubiera sido más útil adoptar una posición más conciliatoria y moderada en el momento en que el Frente se encontraba más fuerte y cohesionado, y contaba con un gran apoyo de la comunidad internacional, para realizar modificaciones que probablemente no habrían cambiado la estructura nacional de raíz y de manera inmediata, pero que habrían constituido mejoras concretas y duraderas para los sectores populares. La radicalización sandinista tenía como fundamento y

⁶² Ramírez, explica: “Nadie había cogido un fusil para hacer una revolución a medias[...] Y una propuesta de cambio radical necesitaba de un poder radical, capaz de defenderse y librarse de riesgos. Era, además, un poder para siempre. Tampoco se triunfa con las armas para conquistar un poder de corto plazo, cuando se trata de barrer con la historia”. Ramírez, *Adiós muchachos...*, p. 226.

como objetivo atender la deuda histórica que el país siempre ha tenido con los pobres. Al decir que luchaban por “todo o nada”, los dirigentes pensaban que obtendrían todo y que podrían pagar definitiva y totalmente esa deuda. Sin embargo, la posibilidad de que el proyecto fracasara de manera rotunda significaba la ampliación de la deuda, es decir, la agudización de la marginación y del atraso en todos los sentidos de los sectores populares.

No obstante, debe tomarse en cuenta que esta interpretación se hace desde la realidad de un mundo que ha cambiado sustancialmente desde el periodo en que gobernó el Frente Sandinista, y además conociendo los resultados del proceso. La situación de unipolaridad que se vive actualmente y el resultado adverso que han tenido los movimientos revolucionarios son elementos que obligan a hacer una interpretación radicalmente distinta. Los sandinistas no fueron visionarios políticos. Sin embargo, la mayor parte de los elementos que conformaban su realidad estaba en contra de que lo fueran. El elemento que más peso tuvo en ello fue la posición que Estados Unidos ha mantenido a lo largo de la historia hacia los movimientos nacionalistas y populares. El país del norte tuvo una actitud quizás aún más radical que los propios sandinistas. Ellos también luchaban por el todo o nada, sabiendo que contaban con todos los elementos para obtener lo primero. Las fuerzas moderadas, pero con ideas de paulatina apertura política y de ampliación de los derechos civiles, se veían como parte de la amenaza comunista con la cual no se estaba en disposición de transigir, por lo que fueron también intensamente combatidas.

Independientemente de las razones que tuvo el gobierno revolucionario para adoptar una actitud radical, el hecho concreto es que ésta fue una de las causas más poderosas para que no se alcanzara la unidad que el país necesitaba para el desarrollo. En lugar de unidad lograda a través de la negociación, el país quedó dividido y se vivió una polarización que abarcó prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional así como a todos los sectores sociales. Esto dio por resultado un intenso

enfrentamiento en el cual el proyecto y los sectores populares sufrieron siempre las pérdidas mayores.

La intervención del Estado ha sido un elemento común en los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo. En varios países la participación de los particulares a través de la libre empresa y la libre competencia fueron más fuertes que la participación del Estado en determinadas áreas (como por ejemplo, comercial, productiva, financiera), sin embargo, incluso esta participación fue posible gracias a la decisión directa del Estado, quien a través de medidas concretas la impulsó, orientó y limitó. Aun en los casos de mayor apertura a los particulares, el Estado mantuvo una presencia significativa. Su intervención fue determinante para coordinar y controlar la participación privada y para suplir o completar la labor en las áreas que los particulares no cubrían o que cubrían de manera insuficiente. La participación del Estado en materias como la educación, la salud, la innovación científica y tecnológica sirvió, además, para crear una estructura nacional sólida con un clima social adecuado para el libre desempeño de los particulares, que además se reatroalimentaba de los beneficios resultantes de las áreas en las que el Estado intervenía con mayor energía.

En Nicaragua la intervención del Estado fue sumamente fuerte en prácticamente todos los ámbitos. En primera instancia, esto se debió a que durante el periodo estudiado el Estado se confundió con el partido que lo gobernaba, quien, como hemos visto, ejerció el poder de forma hegemónica.

El Frente Sandinista tuvo como propósito una tarea nunca antes emprendida en la historia de Nicaragua: dotar al país de una identidad nacional que sirviera tanto de base como de brújula e impulso para la realización de un proyecto popular. Éste tenía como fundamento, razón de ser y objetivo sacar a los sectores pobres de la marginación profunda y continuada en la que desde siempre se habían encontrado. La historia oficial de Nicaragua había estado formada por las luchas internas por el poder entre el Partido Liberal y el Conservador y las relacio-

nes de éstos frente a las intervenciones extranjeras. El Frente Sandinista consiguió dotar a la historia del país de un nuevo sentido, por medio del cual los sectores populares adquirieron el papel protagónico. El desarrollo de un proyecto social, que diera un nivel de vida sustancialmente mejor y que abarcara todos los espectros de las necesidades del ser humano, fue visto por los dirigentes sandinistas como el objetivo principal de su gobierno. Este proyecto fue además una de sus mayores fuentes de legitimidad y un instrumento sumamente útil para la edificación de la identidad nacional (o popular, para ser más exactos). Estos elementos (proyecto popular, social e identidad nacional popular) llegaron a estar tan interrelacionados y a adquirir tanta fuerza durante el gobierno sandinista, especialmente durante el primer periodo (1979-1985), que en realidad llegaron a ser tanto necesidad como causa, base, elemento y objetivo uno de otro. Esta interrelación llegó a ser negativa y se percibió tanto el debilitamiento de la identidad nacional popular, como el fracaso en el desarrollo del proyecto social en particular y del popular en general.

La instauración de un proyecto que tuviera como prioridad la atención a los estratos pobres implicaba un cambio radical en los valores y en los códigos éticos de conducta que hasta entonces se habían manejado dentro del gobierno. Esos valores fueron los que sustentaron y guiaron la lucha del FSLN a lo largo de casi veinte años. Desde su fundación, en el año de 1963, el Frente Sandinista fue un movimiento en el que los actos de valentía de sus militantes fueron tantos y tan continuados, que se convirtieron en la forma de vida de la mayor parte de los que ingresaban en sus filas. Leonel Rugama,⁶³ poeta y militante que adoptó esta forma de vida y murió en nombre de ella, escribió un poema titulado "Como los santos", en el que se refiere a los militantes sandinistas. En realidad, los militantes no

⁶³ Leonel Rugama, *La tierra es un satélite de la luna*, 4ª ed., Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1980, pp. 60-69.

eran de ninguna manera santos, pero definitivamente sí fueron mártires. La mayor parte renunció durante el tiempo que duró la lucha a todos los aspectos que conformaban su vida normal (familia, novias(os) o esposas(as), estudios, diversiones, hábitos cotidianos) en nombre de una causa que, precisamente, por sus escasas posibilidades de triunfo, implicaba enormes sacrificios. El entrenamiento armado en la montaña y los posteriores combates en ella fueron los ejemplos más evidentes de que las situaciones límite fueron la constante a lo largo de este tiempo (Omar Cabezas, en “La montaña es algo más que una inmensa estepa verde” y Tomás Borge en “La paciente impaciencia”, narran de una manera magistral la intensidad y complejidad de los sacrificios). Sin embargo, los sacrificios también se realizaron en los espacios de lucha restantes, como en la organización clandestina y los combates urbanos y el exilio. Esta forma de vida con base en sacrificios fue elevada al grado máximo a través de una gran cantidad de actos verdaderamente heroicos con un alto contenido simbólico.

No obstante, los militantes sandinistas dejaban de cumplir con los compromisos básicos personales y familiares. La mayor parte, incluyendo a las mujeres, se desentendían de las obligaciones que tenían para con sus hijos, dejándolos en muchas ocasiones en el completo abandono. Tomás Borge es un ejemplo claro de ello:

Mis hijas con Yelba no tenían techo ni escuela; pasaban hambre. Un día vivían donde una tía, otra noche dormían en casa de un colaborador. El FSLN carecía de recursos y lo poco que obteníamos era para sostener de puntillas a los combatientes de tiempo completo. Las familias que dependían de los cuadros profesionales pasaron privaciones.

Un día llegó Yelba, y nuestra hija Bolivia la maltrató con palabras que yo rechacé, porque era su madre, porque no era justa, porque estaba ofuscada. Y ella, mi hija, que era la fotografía ambulante de mis gestos primarios, y a quien yo amaba como a un pajarito heri-

do, tomó una dosis excesiva de tranquilizantes. Aquel corazón, que aceleraba las afluentes de mi ternura, se paralizó.

Bolivia fue, desde muy niña, a los dieciséis años, prostituta. Por eso la amaba tanto; ¿sería por eso? Se vendió para vivir, porque yo no le daba un centavo para su supervivencia; porque ése era el precio que tenía que pagar; mi contribución a la lucha fueron las luces rojas, el vómito, el horror, su piel mancillada por necesidad o por debilidad, qué mierda importa eso. Fumó marihuana, muy joven quedó preñada y tuvo un niño (que murió) a quien le puso mi nombre.⁶⁴

La gran responsabilidad que mostraban en la lucha contra la dictadura estaba ausente cuando se trataba de las relaciones familiares. A pesar de que el Frente Sandinista impulsó en diversos sentidos el desarrollo de la mujer,⁶⁵ no logró superar muchos de los atavismos de una cultura machista ancestral. Borge señala con orgullo: “Cuando un combatiente sandinista era herido, se le buscaba refugio en el seno de alguna familia campesina. Nunca se reincorporó un herido a su columna sin haber preñado a una muchacha. El coronel Santos López fue herido siete veces en piernas, brazos y tórax, y catorce veces en el corazón: fue padre de catorce hijos”.⁶⁶ El 8 de marzo de 1987, se emitió la “Declaración del FSLN ante la situación de la mujer”, en la que se abordó el tema de una manera novedosa. Por ejemplo, se reconoció que ciertas situaciones, como el maltrato a la mujer, que hasta entonces se había considerado como una problemática privada, eran de interés social. El autoritarismo vivido en el interior del Frente Sandinista, no obstante, fue uno de los elementos que permitió que el machismo no pudiera ser seriamente combatido. Ileana

⁶⁴ Tomás Borge, *La paciente impaciencia*, La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1989, pp. 409 y 410.

⁶⁵ Por ejemplo, existieron mujeres con altos cargos de dirección tanto en la lucha armada como en el gobierno. En las elecciones de 1984, el FSLN presentó a 34 mujeres de un total de 90 candidatos.

⁶⁶ Borge, *op. cit.*, pp. 145-146.

Rodríguez, escritora y directora de la Biblioteca Nacional, señaló con motivo de la Declaración del 8 de marzo: “Esta proclama debe transformarse en nuevas exigencias para la militancia partidaria, porque también los militantes le pegan a sus mujeres (y los hay que las tratan tan bien que hasta casa y carro les dan a cambio de ciertos favores), aunque los estatutos condenan eso. La condena debe traducirse en sanciones. Expulsión del partido y cárcel.”⁶⁷ La contradicción máxima entre una política de apoyo a los derechos y al desarrollo de las mujeres, impulsada por los varones sandinistas, y las formas concretas que tenían para relacionarse con ellas, la encontramos en la conducta del propio secretario general de la Junta de Reconstrucción Nacional y posterior presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo, denunció que había sufrido violaciones por parte de Ortega en el recinto familiar, durante los años en que éste estuvo al frente del gobierno sandinista. Ortega no pudo ser enjuiciado por ello, debido a su inmunidad, y fue hasta diciembre de 2001, que renunció a ésta y pudo enfrentar la acusación.⁶⁸

Una vez en el gobierno, el Frente Sandinista recurrió al martirologio como uno de los elementos básicos que conformarían su ideología. Además de los actos de sus propios militantes, recogió casos ejemplares de resistencia popular y de lucha contra la opresión y la dictadura. El más sólido fue por supuesto el de Sandino, pero también incorporó a otros como Rigoberto López Pérez, quien en septiembre de 1956 mató a Somoza frente a una gran multitud, dándose inmediatamente después un tiro en la cabeza. El sacrificio, especialmente de los que habían dado su vida por la causa, fue utilizado por el gobierno sandinista como un elemento de cohesión colectiva. La nueva historia del país,

⁶⁷ Entrevista realizada por Debora Robb “Resistimos a combatir el machismo es resistimos a nuestra liberación”, en *Pensamiento Propio*, año V, núm. 41, CRIES, Managua, abril, 1987, p. 11.

⁶⁸ Véase *Excélsior*, 14 de diciembre, 2001, p. 2.

aquella que ponía el acento en los pobres, se fue conformando entonces de nuevos héroes, que los sandinistas intentaron exaltar en todos los espacios del quehacer político, social y cultural. Al poner el nombre de un combatiente caído a un centro de salud o a una escuela, se intentaba hacer ver a la población que ese logro era resultado directo de los que habían muerto y se pretendía, al mismo tiempo, perpetuar su ejemplo. Sobre todo, se buscaba que fuera una fuente de emulación. La ideología sustentada en el reconocimiento del sacrificio fue más necesaria cuando se comenzaron a sentir las agresiones de Estados Unidos. La resistencia de la población habría entonces de ser una muestra más de heroísmo, esta vez colectivo, que los dirigentes sandinistas buscaron a toda costa mantener y reivindicar. No obstante, esta ideología basada en el sacrificio, en el sufrimiento y en la muerte, que ayudó en un momento al Frente Sandinista para cohesionar a la población y obtener y mantener su apoyo, fue paulatinamente convirtiéndose en uno de sus mayores peligros y una de las fuentes de su posterior derrota electoral.

Para lograr una defensa efectiva y duradera, el gobierno no podía coaccionar a la población, sino que debía obtener su apoyo decidido, convencido y continuado. Esto fue posible gracias a la introyección social de los valores antes comentados, y su puesta en perspectiva frente a las agresiones bélicas que estaban sufriendo. Era necesario, entonces, vencer o morir. El gobierno hizo una fuerte apología de la guerra que desgastó profundamente a la sociedad. Esta apología no fue realmente de la guerra sino de la defensa y la resistencia, sin embargo, tuvo su materia prima en los mismos elementos: la violencia, el sufrimiento, el sacrificio continuado, la muerte. Se relacionaron de manera estrecha dichos elementos con valores sublimes y positivos. Durante este tiempo fueron famosas internacionalmente fotografías estampadas en tarjetas postales en donde la guerra siempre estaba presente. Se veía a niños con armas, a jóvenes combatientes enamorados, etc. Especialmente conocida fue la fotografía de una joven guerrillera amamantando a su bebé, con

una metralleta al hombro. Cortázar, señala de Brenda Rocha, joven mutilada en un enfrenamiento con la Contra:

Creo que por eso su sonrisa, de la que todos hablan, se ha grabado en las memorias y en los corazones con tanta fuerza como si fuera una consigna de lucha, una bandera o una canción revolucionaria.

De pronto sé, con toda claridad por qué Brenda se ha convertido hoy en un símbolo entrañable para los nicas: ella es como Nicaragua, ella es Nicaragua. Sus quince años son la juventud de los tres años de la revolución; su coraje y su serenidad son los que día a día veo en quienes esperan a pie firme a los enemigos de fuera y de dentro; el muñón de su brazo es la cuota de sangre que ha pagado y sigue pagando este pueblo enamorado de la luz y la libertad y la alegría.⁶⁹

La ideología sandinista, nutrida por la muerte y el sacrificio, y que sirvió como sustento a la identidad nacional, se convirtió con el paso del tiempo en un elemento que debilitó al gobierno debido, precisamente, al exceso de muerte, de sacrificio y de sufrimiento. Esta ideología fue muy intensa y sirvió en un momento dado de una forma eficiente para que el gobierno obtuviera el apoyo de la población, debido a que estaba sustentada en elementos reales. Los dirigentes sandinistas podían hablar de sacrificio porque ellos mismos lo habían llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, esta ideología fue perdiendo fuerza conforme el FSLN se fue separando de las bases y fue actuando conforme a códigos éticos distintos de los que predicaba. El sacrificio que se pedía a la población más pobre debido a la crítica situación económica no era llevado a cabo por la cúpula y se comenzó a evidenciar un inadecuado manejo en los gastos gubernamentales. Es cierto que estas conductas no fueron tan escandalosas ni tuvieron la magnitud y los alcances que se han observado en otros países que viven en democracias recono-

⁶⁹ Julio Cortázar, *Nicaragua, tan violentamente dulce*, Barcelona, Muchnik Editores, 1984, pp. 64-65.

cidas. Sin embargo, fue precisamente el régimen de excepción, resultante de la guerra y del proyecto que se pretendía desarrollar, así como el tipo y el grado de expectativas generadas, lo que motivó que las conductas gubernamentales incongruentes fueran debilitando de una forma especialmente pronunciada la ideología y, por tanto, el apoyo social hacia el FSLN. Durante la lucha los militantes sandinistas demostraron una vocación de entrega total en nombre de una causa. Posteriormente, la responsabilidad de gobernar un país fue en algunas ocasiones el motivo, y en otras el pretexto, para adoptar una actitud más pragmática y en muchos casos materialista. En el momento de perder el poder fue esta última actitud la que prevaleció y provocó casos ilegítimos de apropiación de bienes materiales.

Durante la etapa que transcurrió entre las elecciones y la entrega del poder, muchos dirigentes sandinistas se adjudicaron, a título particular, la propiedad de una gran cantidad de inmuebles y de otros bienes materiales. Esta operación, conocida como “la piñata”, puso en evidencia que los códigos de conducta eran radicalmente diferentes de aquellos en vigencia durante la lucha contra la dictadura y que guiaron los primeros pasos del gobierno revolucionario. Tomás Borge narra su estancia durante la lucha contra la dictadura, en una casa de seguridad con condiciones óptimas, después de haber pasado un tiempo prolongado sufriendo situaciones límite de cansancio y hambre. Señala entonces que guardaba la mitad de los alimentos que le correspondían y que: “La doña me preguntó por qué comía sólo la mitad de lo servido; no pude decir nada. La verdad es que guardaba parte de los alimentos debajo de la cama, para comerlos más tarde, por temor a no sé qué. Al hambre, a que de pronto desapareciera todo, a que nos invadiera la selva”.⁷⁰ Independientemente de la responsabilidad política y social de los sandinistas ante “la piñata”, en el terreno emocional o psico-

⁷⁰ Borge, *op. cit.*, p. 177.

lógico quizá lo narrado por Borge podría constituir un principio de explicación de estas conductas.

Los perjuicios emanados de la guerra, experimentados de manera diferenciada entre los distintos estratos de la población, constituyeron otro de los elementos con gran peso en el proceso de separación entre el Frente Sandinista y sus bases. En el discurso, la guerra alcanzaba a todos por igual, pero en la realidad fueron los sectores populares quienes aportaron la mayor parte de los combatientes y, por tanto, de los muertos, los heridos, los mutilados y los huérfanos de guerra. Se conformó entonces una relación perversa por todos conocida: entre mayor influencia tuviera un muchacho o su familia dentro del gobierno, menores eran las posibilidades de sufrir las consecuencias de la guerra. Los dirigentes con más poder dentro del gobierno podían, incluso, evitar que determinado joven cumpliera su servicio militar, o arreglar que lo hiciera en una oficina urbana, lejos del campo de combate. Aquellos jóvenes que no tenían ninguna influencia gubernamental eran enviados a los lugares más peligrosos. La corrupción que se dio en este sentido fue muy desgastante para la credibilidad del gobierno revolucionario.

En realidad, desde el inicio se conocieron distintos elementos que minaban la legitimidad del entonces nuevo gobierno. El nombramiento de personas ajenas a la lucha y a la ideología revolucionaria en puestos clave para el desarrollo del país generó diversas reacciones en la población. Existieron casos en los que se otorgaban puestos importantes a personas que habían sido tibios opositores al somocismo, o que se habían mantenido al margen de la lucha, y que de la noche a la mañana se presentaban como sandinistas de toda la vida (en tono de broma, a estas personas se les conocía como integrantes de la “Brigada 20 de Julio”, por haberse incorporado a la revolución una vez que ésta logró el poder). Otros casos fueron más graves, debido a que puestos de gran importancia eran dados a personas que habían tenido responsabilidades durante el somocismo. Estos casos generaron mayor descontento, llegando incluso a

ser motivo para la incorporación a la Contrarrevolución.⁷¹ Estas prácticas, no obstante, fueron toleradas por la población debido quizás a que ésta veía que los actos concretos del gobierno le beneficiaban directamente, es decir, que la ideología sandinista se colocaba por encima incluso de funcionarios gubernamentales que no eran completamente afines a ella. Sin embargo, en la medida que la situación económica comenzó a ser crítica, esta tolerancia se volvió más débil. En esto también influyó el hecho de que el gobierno dio, cada vez, más privilegios a sus altos funcionarios. Así, el pésimo servicio de transporte (especialmente en Managua) contrastaba con los automóviles de lujo de muchas autoridades; las largas filas que tenía que hacer la población para obtener productos de primera necesidad, con los bonos en dólares que los altos funcionarios obtenían para comprar artículos suntuarios en la "Diplotienda" (establecimientos en un principio destinados al personal de representaciones extranjeras, pero que después sirvieron también para el abastecimiento de funcionarios públicos). El Frente Sandinista reconoció éstos y otros hechos después de la derrota electoral, pero los enmarcó como actos personales, sin reconocer la responsabilidad del gobierno:

Entre los fenómenos y comportamientos individuales que afectaron la autoridad moral y la ejemplaridad de cuadros y militantes sandinistas, podrían mencionarse las siguientes: a) Algunos compañeros llevaron estilos de vida que contrastaban con las condiciones difíci-

⁷¹ Salvador Aranda Mairena, integrante de la Contra señala: "En realidad la revolución no me dañó, pero tuve problemas personales con algunas personas que antes habían apoyado a Somoza y ahora se presentaban como los grandes (apoyadores) de la revolución. A algunos de ellos se les dieron buenas posiciones —en la Unión Nacional de Agricultores, en los Comités de Defensa Sandinista, e incluso en el Ejército. Eso me enfurecía. Maldita sea, yo había participado en la lucha armada, tomando una posición clara, y ahora tenía que quedarme mirando mientras que la misma gente que antes disfrutaba de la crema de hasta arriba". Dieter Eich y Carlos Rincón, *The Contras. Interviews with Anti-Sandinistas*, San Francisco, Synthesis Publications, 1985, p. 107.

les que enfrentaba la mayoría de nuestra población. b) Hubo casos de personas carentes de prestigio o acusadas de corrupción que, por distintas razones, fueron mantenidas en sus cargos o transferidas a posiciones equivalentes o, incluso, superiores. c) Conductas prepotentes y abusos de poder de sandinistas con responsabilidades civiles y militares, o simples militantes de base.⁷²

De la misma forma, en la población se gestó un gran descontento por situaciones causadas por el exceso de burocratización del gobierno, que alcanzaba y complicaba muchos aspectos de la vida diaria, y que en ocasiones llegaba, incluso, a ser un obstáculo para la solución de problemas apremiantes.⁷³

Después de las elecciones de 1990, tanto en el interior del país como hacia el exterior se trataron de analizar las razones del fracaso del FSLN. Hoy quizá sea más productivo reflexionar en torno al por qué en el gobierno revolucionario se gestaron conductas contrarias a su ideología y a sus propósitos originales y, sobre todo, por qué los dirigentes no fueron capaces de advertir las implicaciones que éstas tenían y de actuar en consecuencia para erradicarlas. Aun después de la derrota electoral la dirigencia no pudo reconocer su responsabilidad, y culpó a los cuadros intermedios y a las acciones individuales de los militantes y los funcionarios. En la falta de capacidad de autocrítica de la dirigencia debe tomarse en cuenta el papel de la parte de la comunidad internacional que apoyó de manera, prácticamente, incondicional al gobierno nicaragüense. La revolución representó no sólo para Nicaragua, sino para las luchas de liberación en todo el mundo, uno de los símbolos más fuertes de espe-

⁷² FSLN, "La autocrítica de los sandinistas", en *Memoria*, vol. 4, núm. 3, septiembre-octubre, México, CEMOS, 1990, p. 207.

⁷³ En la novela *La noche del 25*, se ejemplifica una de estas situaciones: una enfermera hace constantes alusiones a una importante donación de medicinas hecha por la comunidad internacional, que no puede ser entregada a un centro de salud por cuestiones burocráticas. Cuando al final logran liberar la donación, las medicinas se han echado a perder por el paso del tiempo en condiciones inadecuadas. Daniel Martínez, *La noche del 25*, México, Era, 1992.

ranza⁷⁴ que ha habido en la historia. La carga de este símbolo impidió a la solidaridad internacional con Nicaragua reconocer en un momento oportuno, las conductas gubernamentales que atentaban contra el proyecto revolucionario. En los casos en los que existió este reconocimiento no se tuvo la capacidad de formular críticas constructivas, pero que también fueran firmes y demandantes.

Un elemento muy importante que influyó en la falta de crítica internacional es el contexto histórico en el que se desarrolló el gobierno sandinista. La Guerra Fría dividió al mundo en dos posiciones encontradas en las que no había lugar para visiones alternativas. Para Nicaragua esta situación fue aún mucho más marcada debido a que se enfrentaba con uno de los dos contrincantes de ella. La formulación de cualquier tipo de crítica, en este contexto, era utilizada por el gobierno estadounidense para probar lo negativo del proyecto revolucionario en su conjunto, y como una fuerte arma en la lucha ideológica, económica y física que libraba contra los sandinistas.⁷⁵ Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos, que tienen como su mayor fuente de legitimidad la imparcialidad y una naturaleza apolítica, pudieron escapar a las presiones de la Guerra Fría. En 1987, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), rindió un informe de la situación de los derechos humanos en los países centroamericanos. Para el caso de Nicaragua, cita como únicas violaciones las perpetradas por la Contra. Al gobierno sandinista no se le formula ni un solo señalamiento.

⁷⁴ Pedro Casaldáliga escribía en ese entonces: "Y tu, pequeña Nica/ no eres la menor de mis ciudades, /dice el Señor,/ porque de ti ha nacido/ mi hija Libertad,/ mi hijo el Hombre Nuevo./Guerrillera bordada de ternura,/Flor de liberación, abanderada,/Sacramento-guerrilla de la América Nueva,/¡Nicaragua!", en Vigil, *op. cit.*, p. 157.

⁷⁵ En una Editorial del *Nuevo Diario*, se señalaba en relación con *La Prensa*: "[...]en primer lugar es necesario que a estas alturas de la lucha, se definan. Ya no es posible decirse *neutral* porque como se presente no sólo con las armas sino con las ideas, decirse neutral es ser aliado en silencio de los crímenes contra nuestro pueblo." El *Nuevo Diario*, 2, febrero, 1982.

Es verdad que en las actuaciones del gobierno nicaragüense no se presentaron violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, sin embargo, aun el gobierno más democrático y respetuoso recibe denuncias, así sea por violar los procedimientos o por faltas administrativas de sus funcionarios. El gobierno de Costa Rica, por ejemplo, recibió en el mismo informe denuncias por abuso de autoridad, detención y reclusión ilegal, agresión policial, y privación del derecho de libertad de tránsito.⁷⁶

No obstante el contexto de la Guerra Fría, no puede señalarse como explicación para la falta de autocrítica al interior del gobierno.

La acusación más fuerte que recibió el gobierno sandinista fue profesar una ideología marxista leninista. En realidad, estos preceptos estuvieron presentes de forma ideal durante la lucha contra la dictadura y ni siquiera fueron compartidos por todas las corrientes del FSLN. Una vez en el gobierno siguieron presentes de una manera abstracta, aunque se llegaron a materializar en pocas acciones concretas. La ideología sandinista que en la práctica se aplicó estuvo conformada por una amplia gama de preceptos propios como el culto a los héroes muertos, como hemos visto, y la teología de la liberación. Mucho de la ideología se construyó sobre la marcha, como respuesta a las situaciones generadas por la guerra y por la crítica situación económica. Sin embargo, los preceptos inamovibles que la guiaron y sustentaron fueron aquellos reivindicados en su tiempo por Augusto C. Sandino: la defensa de la soberanía y la necesidad de la justicia social. El programa del gobierno sandinista consideraba, en realidad, hacer valer en el interior del país derechos que estaban reconocidos universalmente desde hacía mucho tiempo. La situación de colonia, que en la práctica había existido en Nicaragua, le impidió conocer y compartir el desarrollo político que se estaba

⁷⁶ CODEHUCA, *Cronología de hechos de violación a los derechos humanos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, a partir del 8 de agosto de 1987*, Centro de documentación de la Comisión, 1987.

viviendo en el nivel mundial. Las luchas y las ideas de liberación que se libraban y difundían en otras partes de América Latina eran prácticamente desconocidas a principios del siglo xx. El atraso que vivían las élites en Nicaragua, respecto a la evolución del pensamiento político y del desarrollo social, hizo entonces que vieran en el programa del FSLN una amenaza comunista radical, en lugar de considerarlo como la reivindicación de una serie de derechos humanos básicos, que los países con un alto grado de desarrollo habían, desde tiempo atrás, reconocido e incorporado dentro de sus sistemas jurídicos y políticos. La reivindicación de los derechos humanos económicos, culturales y sociales fueron el centro del programa sandinista. Lo que causó más desconfianza entre las élites nicaragüenses y la comunidad internacional fue que, en el primer periodo de gobierno, en el país no se practicó la democracia formal, a la usanza de Occidente, especialmente en materia electoral.⁷⁷ El gobierno sandinista tuvo resultados negativos en lo que se refiere al goce de derechos económicos para la población. El aspecto en el que fueron más exitosos, paradójicamente, fue en el que tuvieron menos interés y que inclusive vieron, en un tiempo, como obstáculo para que se actualizaran los otros derechos: el político y, en especial, el de la democracia formal.

La intervención del Estado en aspectos como la cultura, la salud y la educación tuvo el objetivo fundamental de otorgar a los estratos pobres un mejor nivel de vida. El proyecto que tenía en mente la dirigencia sandinista implicaba involucrar a los destinatarios en la aplicación del mismo. Al hacer partícipe a la población, se pretendía sensibilizarla y conscientizarla de la importancia tanto de sí mismos, como de convertirse en actores

⁷⁷ Ante las críticas de no practicar elecciones durante el primer periodo de gobierno, Sergio Ramírez señalaba: "El pueblo de Nicaragua está yendo a las urnas todos los días, está votando todos los días. Al elegir al presidente de un Comité de Defensa, al elegir al secretario de un sindicato, al votar por un responsable, por un representante municipal, está ejerciendo la más pura de las democracias, por primera vez en toda su historia". Ramírez, *Las armas del futuro...*, p. 90.

responsables e influyentes dentro del desarrollo social de su país. Además, se buscaba resolver la escasez de recursos humanos especializados, mediante la capacitación de personas que atendieran determinada área dentro de sus respectivos espacios y, además de resolver problemas específicos, lograran multiplicar los conocimientos. El gran aumento en el número de centros de salud y de educación requirió la capacitación y posterior aplicación de conocimientos de personas que no tenían ninguna relación anterior con estas áreas, y las críticas condiciones materiales obligaron a que los responsables buscaran, a su vez, formas alternativas de resolución de problemas. En materia de cultura, el gobierno apoyó el amplio y marcado interés que la población siempre había mostrado de manera espontánea en áreas como la poesía, el teatro y la música, y promovió su desarrollo en los espacios en los que la gente interesada se desenvolvía: la fábrica, la escuela, el campo, la oficina. Cortázar señala en este sentido que: “tanto en el ministerio (de cultura) como en cualquiera de las otras instancias del gobierno[...] han empujado la palabra *cultura* a la calle como si fuera un carrito de helados o de frutas, se la han puesto al pueblo en la mano y en la boca con el gesto simple y cordial del que ofrece un banano.”⁷⁸

No obstante, el gobierno sandinista no fue capaz de hacer que estos esfuerzos tuvieran una incidencia real en el desarrollo del país. A través de la radio y, principalmente, de la televisión la población seguía reproduciendo los esquemas culturales importados del pasado. El gobierno se planteó la transformación total de la radio, con pocos resultados favorables. Por principio de cuentas, decretó que 30% de la programación se destinara para la música nacional. A pesar de ello, éste fue uno de los aspec-

⁷⁸ Cortázar, *op. cit.*, p. 92. El gobierno también impulsó la sistematización de la historia oral. Un ejemplo de ello es el libro: “*Esta luz ya no se apaga*”, realizado por la pequeña comunidad campesina *Cantimplora*, ubicada en el Departamento de Rivas. Baldelomar Félix y otros, *Esta luz ya no se apaga. Reflexiones sobre el trabajo organizativo en el campo*, Managua, Editorial Vanguardia, 1988.

tos en que no se vincularon de manera apropiada los objetivos generales con las medidas concretas para alcanzarlos. Existieron ambiciosos proyectos de radio participativa. Los que se desarrollaron en poblaciones alejadas del centro, se encontraron con obstáculos como la dispersión de la población, la falta de medios de transporte y de líneas telefónicas, y lo obsoleto de los equipos con que contaban las radiodifusoras. Aun los proyectos que podrían considerarse como más exitosos, no pudieron competir en audiencia con los programas tradicionales. En 1984 salió al aire un programa llamado "Contacto 6-20", en el que se recibían las quejas que la población tuviera en cualquier área y se canalizaban con los funcionarios gubernamentales correspondientes, con el objetivo de que éstos las solucionaran. A pesar de que el programa contó al principio con una gran audiencia, no tuvo los efectos esperados, debido a que los motivos de queja no eran adecuadamente atendidos. Luis Cabrera, director del programa, señalaba en ese momento:

No siempre es posible dar respuestas a los problemas planteados, ya que depende de la prisa con que el periodista pueda localizar a alguien que dé respuestas; y a veces, el funcionario se te corre o dice que está en reunión para no responder. En este sentido, el programa no logra ser un efectivo canal de gestión de las masas, porque realmente no acerca a los funcionarios a los problemas cotidianos. Si en todos los ministerios hubiera gente inteligente, ellos mismos serían los que nos buscarían y estarían hablando a diario en el *Contacto*, pidiendo sugerencias.⁷⁹

En la disociación entre objetivos generales y medidas aplicadas en esta área tuvo una gran peso el hecho de que el gobierno no diseñó ni impulsó una política global. Esta carencia fue responsable, a su vez, de que los recursos no fueran canaliza-

⁷⁹ Debora Rob, "¿Fuera de onda?", en *Pensamiento Propio*, año V. núm. 4, Managua, CRIES, marzo, 1987, p. 17.

dos eficientemente y que las radiodifusoras locales se quejaron de que no contaban con el equipo y la infraestructura básica, mientras que en los Ministerios relacionados con el ramo se derrocharan los recursos.

A pesar de los resultados favorables en proyectos particularizados, el Frente Sandinista no logró que tuvieran mucha incidencia en el desarrollo del país. Los rezagos en educación eran tan pronunciados, que en el mejor de los casos se logró dotar a la población de información general básica y de motivación para seguirse desarrollando, pero en ningún caso generó cuadros especializados que solucionaran los problemas nacionales. En materia de innovación científica y tecnológica los resultados fueron nulos. La falta de cuadros especializados, y la poca experiencia de los dirigentes sandinistas en cuanto a planeación y organización, fueron factores muy importantes del fracaso de muchos proyectos productivos y de inversión. En un primer momento el gobierno fue excesivamente optimista, al pensar que a través de la confiscación de empresas e industrias se lograría la reactivación económica en beneficio directo de las clases populares. Lo cierto es que además de la propiedad debía contar con los conocimientos adecuados y con el apoyo de determinadas instancias y recursos (mercados y créditos internacionales, divisas, etc.) para hacerlas producir eficientemente. En 1985, Sergio Ramírez escribía en relación con la confiscación de las minas:

“La decisión es de ustedes”, me diría tres días después el yanki representante de las compañías mineras, sentados a la inmensa mesa de sesiones de la casa de gobierno, de vuelta en Managua. “La decisión es de ustedes, pero están cometiendo un error, sin nosotros, esas minas no las van a poder manejar”⁸⁰[...] O Bonanza, desde ahora las minas están produciendo (ya vé, Mister, Mister yanki, podíamos manejarlas nosotros solos.)⁸¹

⁸⁰ Sergio Ramírez, *Estás en Nicaragua*, Barcelona, Muchnik Editores, 1985, p. 104.

⁸¹ Sergio Ramírez, *El alba de Oro. La historia viva de Nicaragua*, 2ª ed., México, Siglo xxi, 1985, p. 119.

Y en 1999 señalaba:

en lo más crudo de la guerra, decenas de muchachos regresaron de Polonia y Bulgaria graduados como ingenieros de minas, ya cuando los planes de crecimiento minero se habían hundido, y terminaron de comerciantes en el Mercado Oriental, o de choferes de taxi, sin oficio en su profesión, como los pilotos de los aviones MIG que nunca llegaron.⁸²

En el momento del triunfo de la Revolución se dio un importante éxodo de ejecutivos, técnicos, empresarios,⁸³ que contaban precisamente con la preparación necesaria para echar a andar los proyectos, y que los jóvenes dirigentes revolucionarios no pudieron reemplazar eficientemente durante todo su gobierno. A este éxodo se sumaron más individuos conforme se fueron dando nuevas confiscaciones. Algo similar sucedió con los nuevos proyectos productivos y sociales que el gobierno trató de desarrollar. La falta de capacidad de innovación científica y tecnológica que pudiera ser aplicada pudo ser suplida, así fuera de manera temporal y parcial, de haberse utilizado de manera eficiente la tecnología aplicada exitosamente en otros lugares del mundo. Esto sí se dio durante el gobierno sandinista, sin embargo, por lo general implicó la copia al carbón de los proyectos extranjeros o incluso el traslado físico de maquinarias e instrumentos, sin tener la capacidad de realizar modificaciones especializadas para adaptarlas a las realidades y necesidades concretas del país.

La separación entre la sociedad y el Estado

El proyecto revolucionario tenía como mayor fuente de legitimidad el apoyo de la sociedad, y como principal objetivo el mejoramiento del nivel de vida de ésta, en especial de los sectores

⁸² Ramírez, *Adiós muchachos...*, p. 234.

⁸³ Rouquié, *op. cit.*, p. 28.

más marginados. Las primeras acciones que el gobierno realizó, particularmente en materia de educación, salud y vivienda, constituyeron muestras amplias y concretas de su genuino interés por cumplir dicho objetivo. No obstante, conforme pasó el tiempo, se registró una creciente separación entre la sociedad y el gobierno, que terminó por ser la principal razón de la pérdida del poder por parte de los sandinistas. Desde un principio, se dio una contradicción entre los fines de las acciones gubernamentales, ya que algunas buscaban incorporar a las masas al quehacer político y dotarlas de responsabilidad en el destino del país, mientras que otras fortalecían el autoritarismo del Estado e impedían la intromisión de cualquier agente externo. Conforme fue avanzando el tiempo, el segundo tipo de acciones ganó terreno en detrimento de las del primero. Entre las acciones del primer tipo tenemos la incorporación de una gran parte de la sociedad a tareas en materia de educación, salud y productividad en el campo. Al gobierno le interesaba no sólo el trabajo que la población pudiera aportar, sino también la opinión que ésta tuviera en determinadas áreas. Así, en 1981 el Ministerio de Educación realizó una consulta nacional sobre educación:

En medio de una intensa lucha ideológica y del rechazo de las organizaciones de la burguesía y los ataques contrarrevolucionarios, algo más de 50,000 personas, organizadas en 30 organizaciones de masas, partidos políticos incorporados a la revolución, sindicatos, y otras organizaciones revolucionarias, democráticas y progresistas, participaron en todo el territorio nacional, durante dos semanas, en una intensa discusión colectiva sobre los fines y objetivos de la nueva educación, las formas educativas que deberían impulsarse, sus contenidos y las características que deberían reunir el “hombre nuevo” y la “sociedad nueva”.⁸⁴

Este interés por conocer de manera directa la opinión de la sociedad, y de involucrarla en las tareas nacionales, coexistía

⁸⁴ Ramírez, *Las armas del futuro...*, pp. 128-129.

con procedimientos autoritarios que desde el principio caracterizaron al gobierno sandinista. Especialmente simbólica fue la consigna presente en toda reunión política de: “¡Dirección Nacional, ordene!”, por medio de la cual se despojaba a la sociedad de toda capacidad de iniciativa o creatividad.

Conforme pasó el tiempo, el gobierno recurrió menos a la consulta directa y más a su interpretación particular del sentir y de las necesidades sociales. Se institucionalizó entonces un proceso vertical y autoritario, mediante el cual la dirigencia “bajaba” líneas de acción a las bases. Este proceso obstaculizó la generación de una actitud creativa y propositiva por parte de la sociedad, que tan sólo esperaba poner en práctica las acciones que el gobierno diseñaba para la solución de los problemas. Esta pasividad no se verificó únicamente por comodidad, sino también por el hecho de que el autoritarismo del gobierno impedía que las bases desarrollaran ideas distintas a las diseñadas desde arriba. Especialmente en el campo, los cuadros del Frente Sandinista aplicaban programas completamente ajenos a la práctica y la lógica tradicional, e, incluso, al lenguaje de los campesinos, como se señala en un análisis de la revista *Envío*: “La mayoría de los técnicos que se enviaron al campo —por no decir todos— sólo hablaban el lenguaje de la tecnificación. Ante este lenguaje, la lógica productiva del campesinado aparecía ‘atrasada’.”⁸⁵

El no haber actuado a tiempo para detener la profundización de la brecha entre la sociedad y el Estado fue la causa fundamental de la pérdida del poder por parte de los sandinistas. No obstante, esta falta de actuación parece haber tenido como causa el autoritarismo y no la ignorancia respecto a la existencia de la brecha. El FSLN sabía de la importancia del apoyo social. Éste fue fundamental durante la etapa en que mantuvo la lucha guerrillera. Los sandinistas se insertaron en las comunidades campesinas no sólo para buscar protección y recursos para continuar la lu-

⁸⁵ *Envío*, “Los costos del verticalismo. Un FSLN sin rostro campesino”, año 9, núm. 107, Managua, septiembre, 1990, p. 26.

cha, sino también para difundir la ideología y tratar de conscientizar a los sectores más desinformados y marginados que existían en el país. Una vez en el poder, se percataron de que el apoyo de las comunidades campesinas era imprescindible para ganar la guerra que Estados Unidos estaba librando contra Nicaragua. En 1984, momento especialmente delicado de la guerra, el ejército sandinista vio en los campesinos un elemento estratégico para ganar posiciones. Joaquín Cuadra, viceministro de la Defensa, declaraba en ese año: “la guerra la gana no quien mata más, sino quien se gane al campesino.”⁸⁶ Esta premisa sirvió de base para el establecimiento de un nuevo entrenamiento de los Batallones de Lucha Irregular (BLI), a quienes se les instruyó de la importancia política y militar del apoyo campesino. A los soldados se le entregó una cartilla en la que se explicaba que todo campesino era un aliado en potencia y no al revés. Se destinaron entonces, por cada tres compañías con actividades militares, una para el trabajo político y de asistencia social, que se dedicaba a realizar visitas casa por casa. Esta estrategia fue fundamental para sacar a la Contra de la VI Región, y sirvió como antecedente para aplicar, a principios de 1985, un Plan Único para las regiones I y VI, con las mismas bases y objetivos.

E) *Las relaciones internacionales*

Nicaragua, en su carácter de país periférico dentro del orden global, había aceptado pasivamente las decisiones que se tomaron en los países desarrollados que, la mayoría de las veces, tuvieron consecuencias negativas que profundizaron su dependencia. El gobierno sandinista se propuso dotar al país de un papel diferente al que había representado durante toda su historia. Si bien sabía que la debilidad del país le impediría influir de forma directa en las acciones que se tomaran en el nivel internacional, pretendió ejercitar de una forma más real la soberanía que jurí-

⁸⁶ “VI Región”, en *Pensamiento Propio*..., p. 34.

dicamente todos los estados tienen. Al ser un país soberano, Nicaragua podía denunciar las situaciones que consideraba como injustas, dañinas e incluso irracionales.

El gobierno sandinista aprovechó entonces todos y cada uno de los foros internacionales para hacer una crítica al orden político y económico mundial e incluso pidió, en muchas ocasiones, su modificación de raíz. Las exigencias nicaragüenses pueden englobarse en dos grandes grupos. Por un lado, están las referentes a la defensa de la soberanía de los países y por el otro, las peticiones de un cambio del orden económico internacional, que permitiera el verdadero ejercicio de esa soberanía. En el primer sentido, hizo hincapié en la incongruencia existente entre el discurso manejado, tanto en el nivel internacional como al interior de los países poderosos, en cuanto a la importancia de la democracia, la soberanía, los valores, derechos humanos y la realidad imperante en la mayor parte de los países con condiciones coloniales de hecho, de las que son responsables precisamente los estados poderosos. Pidió a la comunidad internacional que velara por los derechos de los países débiles y que no permitiera se perpetuara la opresión. De manera especial, en este último caso, solicitó que no se impidiera la liberación de los pueblos que de alguna u otra manera estaban luchando contra esa opresión.

En este sentido, además de denunciar las intromisiones y agresiones que Nicaragua estaba sufriendo de parte de Estados Unidos, denunció muchas de las que se realizaban en otros países. La lucha por la independencia y la autodeterminación de los pueblos fueron las banderas más firmes que el gobierno sandinista ondeó. La denuncia se convirtió en una advertencia de las consecuencias negativas, en el nivel global, que podrían tener los conflictos que se libraban al interior de los países subdesarrollados. Con ello, el Frente Sandinista hacía un llamado para que se atendiera la situación no sólo por justicia sino también por sobrevivencia del propio sistema internacional. Los llamados que hizo para que se atendiera la situación nicaragüense

fueron en especial intensos y conforme la situación empeoró, se tornaron desesperados. Las denuncias se hicieron apegándose a las más estrictas formas diplomáticas, de una manera tanto digna como clara y respetuosa, pero también de forma enérgica y contundente, responsabilizando a la comunidad internacional de los efectos que pudiera acarrear una situación no atendida a tiempo. En este sentido, exigió que la comunidad internacional utilizara los instrumentos que se había dado a sí misma para solucionar los conflictos dentro de un marco de legalidad y de paz y dejara de imperar la ley de la selva, en donde el más fuerte se imponía sobre el resto. Además de las denuncias sobre casos particulares, el gobierno revolucionario hizo una constante denuncia general sobre la carrera armamentista global, advirtiendo sobre la irracionalidad de derrochar impresionantes cantidades de dinero en armas, cuando en los países subdesarrollados se carecían de las condiciones mínimas de subsistencia.

En lo que se refiere a la economía internacional, el gobierno sandinista también denunció la incongruencia entre las concepciones discursivas y teóricas que proclaman la libertad de mercado, tanto interna como internacional, como condición necesaria y suficiente para que un país alcance el desarrollo, y la realidad en donde la explotación, el subdesarrollo y la profundización de la dependencia de los países débiles es una de las formas más socorridas de los poderosos para adquirir aún más fortaleza. También señaló la incongruencia en la utilización de las reglas del juego a discreción de los países desarrollados, ya que cuando se trataba de impulsar su desarrollo interno, aplicaban mecanismos de protección (subsidios, control de importaciones y exportaciones) sumamente rígidos y perjudiciales a los débiles. Los términos de intercambio crecientemente desfavorables para los países pobres era otro de los absurdos y de los obstáculos insalvables para el desarrollo de éstos. El orden económico internacional debía modificarse de raíz, porque de otra forma pondría en riesgo los intereses más sagrados y vitales de la humanidad. En el mismo sentido, hizo énfasis en la forma

equivocada con la que se manejaba la recesión mundial experimentada en esos tiempos, ya que se partía de la premisa falsa de que la recuperación de la economía internacional dependía exclusivamente de la recuperación de los países desarrollados. En materia de la deuda externa de los países tercermundistas estructuró de una forma muy coherente y convincente sus argumentos. Al ofrecer cifras y datos concretos demostraba la imposibilidad material que tenían los países deudores (incluso los que se encontraban en mejores condiciones en relación con el resto) para hacer frente a sus obligaciones.⁸⁷ La deuda, al decir de Daniel Ortega, era “una tenebrosa e imposible ficción”. El gobierno nicaragüense pidió a la comunidad internacional que adoptara una actitud más responsable, realista y constructiva frente a esa situación. Como ejemplo de la irracionalidad del orden global internacional Daniel Ortega señalaba:

Los gastos militares nominales anuales, aceptados por los países desarrollados, suman los 780 mil millones de dólares. Mientras que los gastos reales anuales invertidos en salud por los países desarrollados y en vías de desarrollo, alcanzan la cifra de 540 mil millones de dólares, es decir que anualmente, en la carrera armamentista se gastan 240 mil millones de dólares más que en salud. Más de dos mil millones de dólares al día, es el gasto fatídico que imponen las políticas que arrastran por el camino del suicidio al género humano. Si comparamos estas cifras con el monto de la deuda externa acumulada desde las postrimerías de la guerra contra el fascismo, por los países en vías de desarrollo, nos encontramos con un total de 778 mil millones de dólares. Esta deuda se cancelaría con los gastos militares globales de solamente un año y todavía quedarían libres recursos para invertirlos en la lucha contra el hambre, la desnutrición, el analfabetismo y el desempleo.⁸⁸

⁸⁷ Si los países en mejores condiciones estaban imposibilitados, la situación para Nicaragua era aún más absurda. En cinco años, pagó 621 millones de dólares solamente en servicio de la deuda, es decir, el total de las ganancias por exportaciones de dos años. Daniel Ortega, *Combatiendo por la paz*, México, Siglo xx, 1988, p. 130.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 165.

Estados Unidos fue señalado por el gobierno sandinista como el país más responsable de la situación crítica vivida en el nivel internacional. Este último denunció el rechazo del país del norte a todas las iniciativas encaminadas a evitar el uso de la fuerza en los asuntos internacionales, señalando tanto el aspecto general (negativa a firmar pactos de no agresión y a dialogar sobre el congelamiento de armamento estratégico y la prohibición de destrucción de armas químicas) como el particular, a través de intervenciones de diverso tipo en una gran cantidad de países. En este último sentido, sistematizó las agresiones de Estados Unidos tanto hacia Nicaragua (pasadas y actuales), como hacia otros muchos países tercermundistas. El que uno de los países más atrasados del mundo condenara de una manera autorizada (tanto por la conducta de su gobierno como por la veracidad de los datos que aportaba) a Estados Unidos y se convirtiera en vocero de los agraviados por éste en todo el mundo, fortaleció la imagen negativa que el país del norte tenía hacia los sandinistas.

Estados Unidos fue sin duda un enemigo poderoso para Nicaragua. Sin embargo, lo era aún más el orden económico internacional en particular y el proceso de globalización en general que se estaba viviendo.

LAS VARIABLES ECONÓMICAS

En Nicaragua, la promesa de aplicar la economía mixta fue uno de los elementos que mayor credibilidad dio a los sandinistas y base fundamental de las alianzas que se establecieron entre los diferentes grupos y clases sociales con el objetivo de derrocar a la dictadura. Una vez en el poder, y aun después que se evidenció la ruptura de dichas alianzas, el FSLN siguió considerando a la economía mixta como la mejor forma de lograr el crecimiento económico del país, necesario para el desarrollo del proyecto político y social. Veían que la participación tanto

del Estado como de los sectores privados en materia económica eran importantes y necesarios. La participación privada, sin embargo, estaba prevista sólo en cuanto al desarrollo del proyecto se refería, puesto que el diseño del mismo fue función exclusiva del gobierno. Este proyecto compartió muchas de las características del proyecto político y social, como son la hegemonía, el control férreo sandinista y el haber sido preparados, por lo general, sobre la marcha, dependiendo de las coyunturas políticas y económicas internas e internacionales y, especialmente, respondiendo a las situaciones generadas por la guerra. La falta de definición en cuanto a las reglas del juego, y de poder para hacerlas respetar en los casos en que sí existieron, fueron factores determinantes en el fracaso de la política económica. No obstante, deben tomarse en cuenta también las condiciones estructurales del país y la naturaleza del sistema económico internacional.

Gracias al control de los recursos estratégicos que tuvieron los sandinistas desde el inicio de su gobierno pudieron, a su vez, controlar importantes aspectos de la economía y de las finanzas. A través de impuestos más significativos hacia la antes clase económica hegemónica se buscó una redistribución más equitativa de la riqueza, sin embargo, fue un motivo más de descontento por parte de la burguesía, que señaló la nueva política fiscal como desalentadora de la productividad y la iniciativa para nuevas inversiones. Sin embargo, causó aún más descontento el control que el gobierno hizo en cuanto a la compra de divisas, que comenzaron a escasear desde 1981. Esta escasez fue uno de los obstáculos más grandes para el gobierno revolucionario, debido a que éstas constituían el motor indispensable de la mayor parte de los proyectos nacionales.

La industria nicaragüense, incapaz de producir los bienes indispensables para su puesta en marcha y mantenimiento, era completamente dependiente de maquinaria, refacciones e incluso materia prima proveniente del exterior, que sólo podía comprarse con dólares. Lo mismo pasaba prácticamente en todas las

áreas restantes, que se vieron forzadas a trabajar a un ritmo más lento y, en algunos casos y temporadas, a detener su funcionamiento. Los países desarrollados lograron crear condiciones favorables que eran en sí mismas factores generadores de nuevas condiciones de la misma naturaleza: una buena infraestructura en caminos y medios de transporte favorecía la creación de un mercado nacional integrado, que a su vez generaba una riqueza mayor y mejor distribuida. En Nicaragua los eslabonamientos que se dieron fueron en todos los casos negativos. La escasez de divisas fue uno de los eslabones más importantes en esta cadena. La ineficiencia de los medios de transporte, encargados de llevar alimentos y productos indispensables para el trabajo a las regiones apartadas, generada por el alto costo de la gasolina y de las refacciones (ambos productos importados), dio por resultado, en varios momentos, escaseces y paralización de las actividades productivas, necesarias para generar los recursos económicos para la compra de divisas.

Otro eslabón importante fue la restricción en el consumo de combustible y de energía eléctrica. En agosto de 1987 se suspendió el trabajo del día sábado en la administración central del Estado y en febrero de 1988 se redujo la jornada laboral de ocho a seis horas diarias. Estas medidas fueron tomadas ante la crisis de energía que atravesaba el país, y fueron acompañadas de la paralización temporal y parcial de más de 15 empresas industriales. La baja productividad de la industria y de la administración pública generó desequilibrios económicos, entre los cuales se encontraron la crisis energética que, a su vez, forzó medidas para profundizar esta baja en la productividad. Una mejor condición para la compra de divisas, sólo podría adquirirse a través de mayores exportaciones, para lo cual era necesario una mayor productividad. Sin exportaciones, fue imposible para el país la creación de ahorro interno y se hizo inevitable la racionalización de las importaciones. La política en este último sentido se encaminó a importar artículos esenciales para el funcionamiento de la industria, la agricultura y la ganadería, así como artículos

básicos para la población. El gobierno hizo un llamado a la burguesía para reducir al mínimo la importación de productos suntuarios, que nunca fue atendido.⁸⁹

Uno de los factores que desencadenó mayores eslabonamientos negativos fue la guerra. Los países exitosos utilizaron el aspecto bélico no sólo como un medio para obtener el control político en otros territorios, sino también como una importante fuente para generar y multiplicar ganancias económicas. Las actividades bélicas impulsaron la creación de múltiples industrias de las cuales se beneficiaban directamente y las cuales, a su vez, fortalecían el desarrollo en otras áreas. La ciencia y la tecnología también registraron importantes avances al ser puestas al servicio de la guerra. No obstante, los países que se beneficiaron con ésta fueron, en todos los casos, los que la iniciaban, puesto que para los agredidos siempre representó una fuente de destrucción en todas las áreas internas. Nicaragua es un ejemplo evidente de ello. A la guerra destinó la mayor parte de recursos que en otras circunstancias pudieron haber sido utilizados para el desarrollo nacional. El 50% del presupuesto estaba canalizado a la defensa y una gran cantidad de la población, que hubiera podido dedicarse a actividades productivas, estaba comprometida en la guerra. La atención de los dirigentes estaba también centrada en el diseño de las estrategias militares y en la solución de los daños inmediatos que la guerra provocaba en el interior del país, con lo cual se desaprovechó mucha capacidad intelectual que quizás hubiera generado ideas innovadoras y creativas útiles para el desarrollo del país. Dado que, a diferencia de lo ocurrido en los países exitosos, Nicaragua no contaba con una industria de fabricación de armamento, tenía que utilizar las escasas divisas, tan necesarias para la reactivación económica,

⁸⁹ El gobierno sandinista aplicó medidas fiscales con el objetivo de desalentar el consumo de productos no esenciales casi desde el principio de su administración. En febrero de 1982 se decretó un impuesto selectivo a las importaciones no esenciales para el pago de la deuda pública (de cinco dólares por cada dólar solicitado). En diciembre de 1983 este impuesto se duplicó. Spalding, *op. cit.*, pp. 67 y 70.

para adquirirlo en mercados internacionales. Este mismo efecto se registró con los artículos necesarios para la manutención de los conscriptos (ropa, calzado, jabón, alimentos), puesto que los artículos de fabricación nacional representaban fuertes pérdidas para una industria ya de por sí deficiente, que reforzaba con ello su incapacidad para cubrir incluso las necesidades elementales de la población civil. Spalding señala.

El aprovisionamiento de las fuerzas armadas involucra a 45% de la capacidad manufacturera de la industria zapatera y 24% de la capacidad productiva del sector textil y el del vestido. Esto equivale a que, respecto a las necesidades de alimentos básicos (azúcar, arroz, maíz, aceite de cocina, jabón y sal), las fuerzas de la defensa requieren cerca del 10% del consumo nacional.⁹⁰

La guerra además creó una desarticulación en las redes comerciales sumamente dañina para el sistema productivo en su conjunto: los espacios de combate separaban las zonas agrícolas de los centros de distribución de herramientas e insumos necesarios para la producción y las dejaban, también, sin un mercado para comercializar los productos, con lo cual se generaba el desabasto en las ciudades. Esta desarticulación fue aún más pronunciada debido a que las batallas se libraban en zonas productoras de café y de ganado, dos de los cuatro principales productos de exportación del país. La guerra en Nicaragua estuvo más articulada al sistema productivo nacional y ocasionó por ello mayores problemas que en otros casos, ya que la Contra dirigía sus agresiones principalmente hacia los proyectos esenciales para el desarrollo nacional: centros de salud, escuelas, fábricas, centros de capacitación para adultos. También tuvo consecuencias sumamente negativas para la educación, no sólo por los recursos económicos que acaparaba, sino también porque a partir de los 16 años, los jóvenes tenían que interrumpir sus estudios para cumplir con el servicio militar.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 252.

Una de las características centrales de la política económica de los sandinistas fue el establecimiento de subsidios para los grupos y sectores más desfavorecidos económicamente. Con ello se buscaba proteger los salarios reales y asegurar la satisfacción de las necesidades elementales de toda la población. El gobierno estableció un sistema mediante el cual ofrecía los productos básicos a un precio mucho menor del que en realidad tenían en el mercado, con el objetivo de que los sectores marginados mejoraran sus condiciones de vida. El sistema incluía también la entrega de comidas subsidiadas en los lugares de trabajo y de donaciones de productos alimenticios. En el sector estatal, éstas se entregaban periódicamente como parte del salario de los trabajadores. El sistema de subsidios desencadenó efectos nocivos en la economía, debido a que no existían condiciones reales en ésta que permitieran su mantenimiento.

La deuda pública fue la fuente más importante de financiación de los subsidios, lo cual produjo espirales inflacionarias crecientes durante todo el gobierno sandinista. El desajuste entre la oferta y la demanda creó, además, especulación y acaparamiento y escasez de productos. Una variante de los subsidios fueron los créditos otorgados por el Estado, en especial a medianos y pequeños agricultores, organizados en cooperativas u otras formas de asociación. La política de créditos fue excepcionalmente generosa, en especial durante los primeros años del gobierno revolucionario. Al igual que con los subsidios, sin embargo, representó fuertes desequilibrios para la economía del país, ya que la expansión del crédito se financió con nuevas emisiones del Banco Central, con el consiguiente aumento de la inflación. La política de créditos se llevó a cabo de una forma tan amplia y en términos tan favorables, que en realidad cumplió con objetivos más sociales y políticos que productivos. Los eslabonamientos positivos que en otras circunstancias habrían generado los préstamos estatales, no lograron concretarse debido, por una parte, a la crisis estructural económica, que obligaba a los beneficiarios en muchos casos a utilizar el dinero para la subsistencia, en lugar de destinarlo a

mejorar las tecnologías de producción y/o reinvertirlo en nuevos proyectos; y por la otra, a la falta de cultura empresarial y en materia de desarrollo. Entre los campesinos no se produjeron iniciativas originales para aprovechar de una manera más eficiente los recursos con los que contaban, ni liderazgos empresariales que mejoraran esas condiciones. El gobierno tampoco tuvo la capacidad de brindar a los campesinos condiciones, información y motivaciones suficientes y adecuadas para eficientar su trabajo. El apoyo al sector privado tuvo los mismos efectos. Los créditos fueron entregados pensando en librar a la burguesía de los riesgos que generaba la situación económica del país, y alentarlos a realizar nuevas inversiones nacionales. No obstante, el sector privado aceptaba los recursos pero los canalizaba a actividades especulativas o los retiraba del país. Al no reflejarse la expansión del crédito en el crecimiento de la producción y en el mejoramiento de la economía, se impidió la formación del siguiente eslabón que constituiría una cadena positiva para la reactivación económica. En cambio, se crearon eslabones para cadenas negativas sumamente largas y prácticamente imposibles de romper.

El paternalismo hacia los campesinos que ejerció el gobierno sandinista, lo llevó a aplicar medidas inmediatas, disociadas de un proyecto global de desarrollo. Los países exitosos vieron en la creación y mejoramiento de las vías de comunicación y de los medios de transporte una forma para lograr la integración nacional, que permitió a su vez que los logros de diferentes estratos y sectores del país se “derramaran” entre ellos mismos. En Nicaragua se optó por llevar (por medio de las “cajas móviles”) a las áreas rurales aisladas los préstamos en efectivo, en lugar de crear la infraestructura en materia de caminos que aminorara su aislamiento y lograra eslabonamientos positivos. Mediante el sistema de “Banco aéreo”, los funcionarios bancarios volaban a las comunidades a las que no se podía llegar por medios terrestres.

La política de subsidios se amplió a todos los sectores de la población, en virtud de que la Banca estableció tasas de interés muy bajas para los préstamos en general. Por ello, aun los pro-

ductores más fuertes resultaron beneficiados. Sin embargo, esto fue un motivo más de desequilibrio económico. Puesto que la tasa de interés era igual de baja para los deudores que para los depositantes, el sector privado prefería destinar sus recursos a las actividades de especulación e incluso al mercado negro, en lugar de canalizarlos al ahorro interno.

La nueva moral que los sandinistas pretendían generar en los nicaragüenses (a través de la creación de un “hombre nuevo”), encontró en la situación económica un obstáculo significativo. Los subsidios fueron utilizados por muchos ciudadanos como medidas para obtener mayores ganancias económicas, con lo cual se debilitaba su propósito original, que era brindar a la población marginada la posibilidad de aumentar sus niveles de consumo y, con ello, mejorar sus condiciones de salud y nutrición. Los trabajadores del Estado, en lugar de utilizar para sí mismos y para sus familias los productos básicos que les entregaba el gobierno (conocidos como “pago en especie”), los comercializaban a un precio mayor del que se ofrecía en el mercado. Las escaseces existentes en el país propiciaban que la población se viera obligada a adquirirlos al precio ofrecido. Algo similar sucedió con el otorgamiento de créditos: algunos productores adquirirían montos mayores de lo necesario, y el resto lo ofrecían a otros necesitados de dinero, pero a una tasa de interés mucho mayor que la oficial.

Las alternativas que la población encontró para mejorar su situación económica propiciaron un desfase completo respecto a las medidas aplicadas por el gobierno para lograr la reactivación de la economía nacional. Las actividades no productivas e incluso ilegales (especulación, comercio informal, mercado negro, contrabando) conformaron una economía parásita que profundizó y complicó la crítica situación del país, al mismo tiempo que debilitó la unidad nacional.

A partir de febrero de 1985 se realizó un drástico cambio en la economía con el objetivo de hacer frente a los problemas que mostraba en todos sus aspectos y niveles. La medida más signi-

ficativa, por las consecuencias tanto económicas como sociales y políticas que tuvo, fue la eliminación gradual de los subsidios. Un mes antes de comenzar la vigencia de las medidas, Daniel Ortega tomó posesión de la Presidencia de la República, después de haber sido elegido por el pueblo en comicios vigilados internacionalmente. Con ello comenzaba un segundo periodo del gobierno sandinista que, dada la legitimidad que había obtenido por medio de las elecciones y la experiencia acumulada en los años anteriores, aparentemente tendría mayor fortaleza y posibilidades de éxito. No obstante, este segundo periodo se convirtió en realidad en un camino cuesta abajo que llevaría al FSLN a perder el poder en 1990. Durante este segundo periodo, el apoyo internacional decreció notablemente. Además, las agresiones hacia Nicaragua, por parte de Estados Unidos, causaron mayores perjuicios debido a la canalización de mayores cantidades de dinero que en el pasado (en este segundo periodo autorizadas por el Congreso) y a que la guerra se convirtió en una política oficial, a través del desarrollo del Conflicto de Baja Intensidad, con lo cual adquirió mayor organización, y con ello, mayor eficiencia.

El segundo periodo de gobierno significó para los sandinistas un camino de descenso, además, porque en él se materializaron las consecuencias de la política económica distorsionada que se puso en marcha en el primero. A partir de 1979 se tomaron medidas que no estaban acordes con las finanzas y la economía real. Los subsidios, los créditos y las inversiones se financiaron con recursos externos que desestabilizaron la balanza de pagos del país. En este sentido, no es que hubieran absorbido la totalidad de los fondos nacionales sin realizar con posterioridad el debido reembolso, sino que ocuparon recursos que el país ni siquiera tenía. Los efectos naturales de la realidad económica, como la devaluación de la moneda, en el mismo sentido, fueron artificialmente contenidos.

Las consecuencias negativas fueron evidentes desde 1984, sin embargo, quizá por la cercanía de las elecciones, se reconocie-

ron tiempo después, con lo cual los efectos negativos fueron aún mayores. El conocido como “ajuste de 1985”, así como los que se realizaron en 1988, se compusieron de medidas comunes a los ajustes aplicados por el FMI en los países tercermundistas, que golpearon drásticamente a los sectores más pobres y acentuaron la concentración de ingresos en las clases económicamente fuertes. Además de la eliminación gradual de los bienes de consumo básico, se redujeron y racionalizaron las inversiones estatales, se congeló el empleo en el gobierno central, se decretaron nuevos impuestos, se devaluó el córdoba (por primera vez desde 1979) y se aumentaron los precios de bienes de consumo.⁹¹ El gobierno señaló que estas medidas eran sustancialmente diferentes a las recomendadas por el FMI en virtud de que se tomaban otras, con el objetivo de que los sectores pobres no se vieran especialmente afectadas por ellas. Así, se decretaron aumentos salariales y se crearon sistemas de distribución de bienes de consumo, estableciendo cuotas familiares y/o regionales para la adquisición de productos alimenticios esenciales. Sin embargo, estas últimas medidas no cumplieron el objetivo previsto, debido a la intensidad y extensión de las adversas.

En 1988 se aplicaron nuevos ajustes con iguales consecuencias negativas, especialmente para los sectores marginados. En febrero se devaluó la moneda en el sorprendente porcentaje de 3 000%, se reorganizó el aparato estatal, se incrementaron los precios de artículos esenciales (el costo de la canasta básica sufrió un aumento del 273%), se hizo un cambio de signo monetario⁹² y se aumentaron los salarios en un 30%. En junio se devaluó el córdoba 567%,

⁹¹ Como ejemplo de lo drástico de estos aumentos tenemos lo siguiente: “En 1985 se elevaron los precios oficiales para los consumidores, en 400% para el arroz, 300% la leche, 312% los huevos, 480% el azúcar y 300% la transportación pública urbana. En el mismo periodo se elevaron en 150% los precios de la gasolina, mientras que los del diesel aumentaban 225%”. Spalding, *op. cit.*, pp. 293-294.

⁹² Por cada 1000 córdobas viejos, se entregaba un córdoba nuevo. Las cantidades que excedieran los 10 millones de córdobas por familia fueron congeladas de 12 a 14 meses en los bancos. Richard Stahler-Sholk y otros, *La política económica en*

se liberalizaron los precios y los salarios, se hicieron recortes en los gastos del gobierno central y se condonaron los adeudos con el Banco de la Vivienda. Durante el segundo periodo, además de los aumentos decretados de manera premeditada por el gobierno, se registraron incrementos constantes debido a que no se podía parar ni aminorar la inflación que se experimentaba. 1988 fue el año en que se registró una cantidad mayor de devaluaciones, de incrementos a los precios de los productos y de inflación.

En materia internacional, el gobierno sandinista tuvo en los primeros años (1979-1981) una gran cantidad de ayuda económica destinada a la reconstrucción nacional, representada por préstamos en términos sumamente blandos e incluso por donaciones. Entre 1982 y 1984, la ayuda consistió en créditos bilaterales, sobre todo de países occidentales y del Tercer Mundo. Sin embargo, puesto que en esta etapa ya se había iniciado la campaña estadounidense de desestabilización económica hacia Nicaragua, la situación comenzó a volverse crítica. Instituciones como el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, con fines eminentemente económicos, aplicaron criterios políticos debido a la influencia de Estados Unidos, y privaron a uno de sus miembros de los derechos que como integrante de la comunidad internacional formalmente tenía. La negativa de créditos de estas instituciones, así como de otros prestamistas internacionales, representó el bloqueo de la mayor parte de sus proyectos de desarrollo interno. A partir de 1982, Venezuela suspendió el abasto de petróleo que había venido dando a Nicaragua, y en 1985 México hizo lo mismo. A partir de este año, la Unión Soviética fue el único proveedor de petróleo y, junto con otros países socialistas, la fuente de financiamiento externo más importante. Esta fuente, sin embargo, también se agotó, como recuerda Humberto Ortega: “a partir de 1987, las naciones del campo socialista vivían serios

Nicaragua 1979-1988. Bibliografía comentada, Managua, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, Cuadernos de Pensamiento Propio, 1989, p. 79.

problemas en sus propias estructuras internas, y el apoyo que Nicaragua recibía de ellas era cada día más limitado y prácticamente estaba congelado. Para enero de 1989, nuestro país no contaba siquiera con la seguridad del petróleo que necesitaba consumir ese mismo año, mucho menos para 1990.”⁹³

El papel de las empresas estatales en la economía

La guerra y la situación económica internacional fueron dos factores que influyeron decisivamente en la crisis económica durante la década de 1980 en Nicaragua. Sin embargo, también existieron múltiples variables internas, directamente atribuibles al gobierno. El funcionamiento de las empresas estatales es un buen ejemplo de estas últimas.

Se consideró que las empresas estatales se convertirían en la base del proceso de acumulación económica y, con ello, en el principal motor de desarrollo del país. No obstante, éstas no generaron excedentes y, por el contrario, se convirtieron en una fuente de elementos adversos para la economía y el sistema financiero. Estos elementos, con el paso del tiempo, aumentaron en variación y en cantidad, y multiplicaron los eslabonamientos negativos que se produjeron no sólo en el terreno económico y financiero, sino también en el social e incluso en el cultural, al obligar a la sociedad a actuar de una manera completamente contraria a lo previsto por los valores de la ideología sandinista.

Dentro de las empresas estatales, las agroindustriales tuvieron el papel preponderante, ya que con ellas se pensaba cumplir con dos objetivos estratégicos: la seguridad alimentaria de la población y la generación de divisas. El fracaso de las empresas agroindustriales se debió principalmente a que las medidas para alcanzar estos objetivos no sólo no se llevaron a cabo coordinadamente, sino que, incluso, en la mayoría de los casos se diseñaron y se aplicaron en perjuicio mutuo. Podría decirse, en este sentido, que

⁹³ Ortega, *op. cit.*, p. 36.

la política macroeconómica estuvo disociada completamente de sus mecanismos concretos e internos de aplicación.

El gobierno, al buscar garantizar el acceso físico y económico de los productos a la población, se hizo cargo directa y exclusivamente de todos los canales de distribución.⁹⁴ Las medidas que tomó, sin embargo, tuvieron un efecto completamente contrario a lo esperado. El férreo control provocó el rechazo de la población, que veía que las medidas cambiaban drásticamente e inesperadamente las dinámicas que hasta entonces habían visto como naturales, en relación con la producción, el comercio y el acceso a los diferentes productos y, además, creó elementos concretos de distorsión económica. En 1981 se ordenó el cierre de los mataderos municipales, y la eliminación de los mayoristas regionales, para que el gobierno asumiera directa y exclusivamente estas actividades. No obstante, la gente que se dedicaba a ellas siguió realizando su trabajo. Ello provocó la proliferación de mataderos clandestinos y el surgimiento del mercado negro. En 1983 se pidió a los intermediarios que operaban en este último volver a los canales de distribución de una manera legal, pero la práctica ya había tomado ritmos y cauces propios y fue muy difícil desarticularla.

⁹⁴ Kinloch señala en relación con esto: "A través de instancias apoyadas por toda una red de inspectores populares y de los Comités de Defensa Sandinista, el Estado pretendió sustituir a los tradicionales intermediarios privados que operaban en los mercados públicos, pulperías, e incluso en el sector informal, integrado por millares de vendedores ambulantes. En consecuencia, se impuso un drástico control sobre los precios, el suministro de insumos y maquinarias, el acopio de las cosechas, así como el almacenamiento y distribución al consumidor. Se prohibió el comercio interregional y se crearon puestos de vigilancia —los odiados 'tranques'— en las carreteras municipales. Allí, funcionarios de Micoín y miembros de la Policía Sandinista detenían los vehículos de transporte público y privado, registraban las pertenencias de sus ocupantes, y decomisaban las pertenencias de sus ocupantes, y decomisaban granos u otros productos alimenticios a toda persona sospechosa de ser un mercader ilegal, especulador, agiotista contrarrevolucionario o explotador del pueblo consumidor —epítetos utilizados para justificar dicho programa estatizante. Frances Kinloch, "Pacificación y transición neoliberal 1990-1996", en *Enciclopedia de Nicaragua*, Barcelona, Océano, 2002, v. I, p. 157.

Las políticas cambiarias desarrolladas por el gobierno sandinista generaron en las empresas agroindustriales fuertes eslabonamientos negativos. La escasez de divisas provocó, al igual que en el resto de las empresas estatales, problemas crecientes para importar los insumos y la maquinaria necesarios para la productividad. Esto ocasionó la disminución en la producción agrícola con su lógica consecuencia: reducción en las exportaciones lo que, a su vez, provocó una continua baja en la generación de divisas. Es cierto que los términos de intercambio internacional operaron en una gran cantidad de casos en perjuicio de Nicaragua, pero el gobierno no supo aprovechar las ocasiones en que los precios internacionales favorecieron a los productos nicaragüenses. En estas oportunidades no aprovechadas, la política interna de precios tuvo también una gran responsabilidad. Los bajos precios establecidos por el gobierno, que sus empresas procesadoras y distribuidoras de alimentos pagaban a los agricultores, provocaron que éstos no tuvieran incentivo alguno para venderles sus productos y que optaran por ofrecerlos en el mercado negro, con lo cual creaban un monstruo que fue hiriendo de muerte al sistema económico. La escasez de materia prima, aunada a una política cambiaria ineficiente, creó en las empresas estatales una baja continua en la productividad, que no obtenía los insumos necesarios ni de la producción interna, ni del mercado internacional por la falta de divisas.

El gobierno diseñó un sistema de incentivos en divisas, que tampoco benefició al sistema productivo y a la economía debido a que se destinaron a los productores privados (con criterios más políticos que productivos) y no a las empresas estatales. Éstas, llegaron a una situación tan crítica, que incluso fortalecieron al monstruo que representaba el mercado negro, al verse obligadas a adquirir sus insumos agrícolas en éste. Con esta situación, el gobierno actuaba en contra de sí mismo. Las empresas estatales no podían parar su producción por ninguna causa, aun cuando ésta fuera la falta de productividad y de acumulación de capital. Debido a que el gobierno debía cumplir con el objetivo de

brindar seguridad alimentaria a la población no podía permitir que una empresa parara o cambiara el giro de su producción. Si un agricultor privado consideraba que no era viable dedicarse a determinado producto y que producir otro traería mayores beneficios económicos podía hacerlo, pero una empresa estatal debía seguir produciendo aquello para lo cual fue creada, a pesar de que esto representara un pésimo negocio no sólo para ella sino para la economía del país. En poco tiempo, esta situación ocasionó, además de la falta de generación de excedentes, el encarecimiento y el desabasto aun de los productos básicos, con lo cual el objetivo gubernamental en cuanto a la seguridad alimentaria dejó también de cumplirse.

Al inicio de su gobierno, los sandinistas pensaban que en un plazo de dos años las empresas estatales reportarían ganancias y comenzarían el proceso de acumulación de capital. No obstante, en ningún momento fueron productivas. Contrario a sus expectativas, registraron pérdidas crecientes y aumentaron su capacidad ociosa. En un país en donde era necesario que la industria operara al 100% de su capacidad, la subutilización de plantas procesadoras de alimentos, por ejemplo, aumentó considerablemente. Biondi-Mora señala de ello: "En 1985, la capacidad ociosa alcanzaba al 63% en las plantas empacadoras de carne de res, al 73% para los rastros en general, al 81% para las plantas pasteurizadoras de leches, al 78% para las plantas productoras de leche en polvo y al 56% para los ingenios azucareros".⁹⁵

Los eslabonamientos negativos fueron tan fuertes en Nicaragua, que incluso elementos aparentemente benéficos, como las donaciones internacionales, fueron contraproducentes para la reactivación de la economía y para el desarrollo del país. En el caso de las empresas pasteurizadoras de leche, por ejemplo, las donaciones de leche en polvo y de grasas vegetales del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas y de la Comunidad Econó-

⁹⁵ Biondi-Mora, *Revolución y política alimentaria. Un análisis crítico de Nicaragua*, México, Siglo XXI, 1990, pp. 167-168.

mica Europea, provocaron una dependencia que les impidió crear mecanismos para generar una empresa que produjera ganancias de forma independiente y sostenida. A partir de 1983, debido a que tenían materia prima garantizada en bodega, gracias a las donaciones, dejaron de interesarse por la leche del país, con lo cual no sólo perjudicaban directamente a los productores nacionales, sino que además anulaban la capacidad creativa que en otras circunstancias hubiera sido necesaria para que la empresa cumpliera con sus fines. Mario Hanón, productor privado de arroz, y miembro del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEPC), señala otro ejemplo de una donación con efectos negativos:

La donación de la URSS fue mal manejada por la Empresa Nacional de Abasto (ENABAS), ocasionando un *dumping* (venta de un producto del exterior a un precio inferior al aplicado en el interior). Eso fue tremendamente destructivo, se sintieron los efectos a partir de septiembre de 1988 hasta mayo de 1989. No podíamos competir por la cuestión de precios, que eran la tercera parte de los costos de producción. El arroz siempre ha sido un grano político, es comida, porque es básico, elemental, nunca ha gozado de altos precios. Pero bajaron el precio, bueno, prácticamente lo regalaron para favorecer a quienes comen arroz, que somos todos. Eso lo entiendo, pero hay que pensar a largo plazo. Lo triste es que nos quebraron. No me explico con qué sentido económico, era como si nos quisieran castigar o destruir. No podía tener otro mensaje. Es como si de repente alguien creyera que iba a ser eterna esa donación.⁹⁶

El caso de la leche es emblemático de la disociación que se presentó por una parte entre la macroeconomía y los mecanismos internos para su aplicación, y por la otra entre el Estado y la sociedad. El gobierno estuvo muy interesado en garantizar que la población recibiera cantidades suficientes de leche. Entre 1979 y 1984, el precio de la leche al menudeo fue realmente muy

⁹⁶ Mario Hanón, "Lo que más duele", en *Barricada Internacional*, año IX, núms. 295/296, Nicaragua, 8 de julio, 1989, p. 20.

reducido. Mientras que el índice general de precios al consumidor había aumentado 325%, el precio de la leche se mantuvo a 3 córdobas por litro durante todos estos años. El gobierno no pudo satisfacer la demanda de leche, debido a lo elevado del precio y a la caída de la producción, y comenzaron a registrarse escaseces. Esto generó que la leche empezara a venderse en el mercado negro, a veces hasta nueve veces más que el precio oficial, y que en las ocasiones que la población tenía la oportunidad de adquirirla a precios oficiales, prefiriera revenderla en lugar de consumirla. El objetivo estatal de garantizar la seguridad alimentaria y aumentar el nivel nutricional de la población, en este sentido, tenía como obstáculo la misma actuación de la sociedad, que veía que el mercado negro solucionaba sus necesidades inmediatas más apremiantes.

En la falta de productividad en las empresas estatales desempeñó un papel predominante el sistema de fijación de precios, a cargo del gobierno. Para fijar el precio de un producto, el gobierno estableció un complicado sistema que a lo largo del tiempo probó ser completamente ineficiente. Los precios de cada producto variaban según se tratara de un precio de exportación, al menudeo, de compra de fábrica, venta de granja, o al mayoreo. En el establecimiento de cada uno de ellos, intervenían de manera conjunta los diferentes ministerios relacionados con la rama del producto. Sin embargo, debido a la falta de una estrategia integral de gobierno, cada Ministerio actuaba según sus objetivos y su particular visión de los problemas, muchas veces en contradicción de otros ministerios. Este problema (conocido popularmente como el “feudalismo ministerial”) llegó a ser tan fuerte que afectó todas las ramas gubernamentales, y en especial perjudicó seriamente a la agroindustria. Como ejemplo de la complejidad del sistema de fijación de precios, tenemos el caso de la leche líquida cruda adquirida por las plantas pasteurizadoras, citado por Biondi-Mora.

Después que ENILAC sugiere un nuevo periodo —explicó uno de los gerentes de planta— la propuesta va a la División General de Ganadería (DGG) del MIDINRA. Después que la DGG revisa, modifica y finalmente aprueba la propuesta, va a la División General Económica (DGE) del mismo Ministerio. La DGE, a su vez, revisa todos los números y el análisis de costos que los apoya e introduce criterios adicionales que deberán ser usados en el análisis final. Entonces la propuesta modificada pasa a la oficina del ministro, quien la somete a la junta del Ministerio para su aprobación. Si la junta la aprueba, va al Consejo Nacional de Planificación (CNP) para la decisión final. Cada una de las ramas económicas del gobierno tiene un representante en el CNP, y lo preside el presidente de Nicaragua. Una vez que el CNP aprueba la propuesta, la modificación del precio se hace efectiva. Por supuesto una propuesta puede recorrer todo el proceso varias veces antes que el CNP llegue a una decisión final. La última vez que hicimos una propuesta de precios tardó más de seis meses en ser aprobada. Para entonces el precio ya era inadecuado, porque había sido erosionado por la inflación.⁹⁷

El fracaso de las empresas estatales se explica también por la drástica caída de la productividad del trabajo que se registró inmediatamente después de iniciado el gobierno sandinista, y que se acrecentó a lo largo de él. La lucha insurreccional tuvo como una de sus banderas principales otorgar la tierra a los campesinos. La ausencia de asignaciones individuales de tierra tuvo serias consecuencias para el gobierno, en diferentes áreas. En el caso de las empresas estatales, los trabajadores, al no haber recibido asignaciones individuales de tierra, y al escuchar que las empresas en que trabajaban formaban parte del Área Popular del Pueblo, decidieron asumir su papel de nuevos dueños haciendo uso discrecional de su tiempo de trabajo en ellas. Así, dejaron de trabajar las ocho horas o más a las que estaban acostumbrados y en muchos casos optaron por reducir la jornada laboral a la mitad o incluso a menos. Esta situación (conocida popularmente como la “vacación histórica”), fue posible por la

⁹⁷ Biondi-Mora, *op. cit.*, p. 201.

ausencia de sanciones por parte del gobierno, que les entregaba su salario íntegro, independientemente del tiempo real de trabajo. Esta tendencia no pudo revertirse ni aun con la intensa labor ideológica por parte del gobierno. Jaime Wheelock, ministro de Agricultura, señalaba en relación con los trabajadores de las Empresas Estatales: "Son productores de riqueza social y la conciencia del productor es muy distinta de la del trabajador asalariado... saben que cada golpe de machete ya no es para beneficiar a un patrón, sino quizás para crear un nuevo par de zapatos para un niño descalzo, que pueden ser sus hijos".⁹⁸ La realidad demostró, no obstante, que estas palabras fueron ideal que no pudo alcanzarse.

Otro factor propiciatorio de esta situación, fue la política de "salarios sociales" desarrollada por el gobierno. Hasta el año de 1985, no se realizaron ajustes a los salarios nominales de los trabajadores, por lo que el nivel adquisitivo se deterioró. El gobierno pretendía que a pesar de ello la población tuviera asegurada la obtención de los productos básicos, por lo cual desarrolló la política de "salarios sociales" o "pago en especie". Así, además del salario en efectivo que recibían los trabajadores, se les otorgaban diversos productos y/o la oportunidad de adquirirlos a un precio mucho menor que el del mercado. El poder adquisitivo de los salarios se depreció tanto,⁹⁹ que la mayor parte de los trabajadores se mantuvo en sus puestos por la oportunidad de adquirir estos productos y no por el ingreso en efectivo que recibía. No obstante, el salario nominal insignificante fue un factor que desmotivó a los trabajadores. La falta de relación entre el esfuerzo en el trabajo y el monto de los ingresos económicos que recibían por él propició esta caída de la productividad laboral.

⁹⁸ *Ibid.*, pp. 24-25.

⁹⁹ En 1985, el administrador de una Empresa Estatal mencionaba: "Con el salario de una semana, un trabajador de mi empresa se puede comprar una Coca-Cola. Si le duplico el salario, se puede comprar dos Coca-Colas. ¿Por qué va a trabajar?". Citado en *ibid.*, p. 217.

En 1985, una familia no podía adquirir ni siquiera la canasta básica, subsidiada por el gobierno (el salario junto de los cónyuges representaba sólo el 43% de la canasta básica). Ante la gravedad de la situación económica y del bajo nivel adquisitivo de los salarios, la población comenzó a desarrollar sus propios recursos, completamente disociados e incluso opuestos a los planes del gobierno.

Estos recursos solucionaban las necesidades inmediatas, pero representaron fuertes golpes a la economía y a los planes de desarrollo nacional, y en muchos casos se materializaron en situaciones completamente absurdas y opuestas a las más elementales reglas de política económica. Un ejemplo de esto último fue el caso del arroz, cuyo precio para el de primera calidad era estrictamente controlado por el gobierno. El arroz quebrado no tenía este control, y por ello, a los productores les resultaba económicamente más favorable quebrar su arroz de primera calidad y colocarlo al precio de la oferta y la demanda.

Estos absurdos fueron frecuentes en las situaciones relacionadas con la política crediticia. Para una empresa estatal resultaba más viable comprar una maquinaria nueva en otra empresa estatal, con un crédito del gobierno, que comprar una refacción en el mercado negro (único lugar en el que se podía encontrar) y repararla. Por supuesto, la inventiva, la creatividad y el ingenio quedaban anulados ante esta situación.

La política crediticia fue otro de los grandes eslabones negativos dentro de la política económica en general. En el caso de las empresas estatales, los créditos se concedieron independientemente de su posibilidad de recuperación. El trabajo en estas empresas no podía detenerse por ningún motivo. Dado que su baja productividad no generaba excedentes económicos, en la mayor parte de los casos su única fuente de financiamiento fueron los créditos estatales. La política crediticia, que en otras circunstancias habría servido de impulso para el desarrollo nacional, se convirtió en el caso nicaragüense en un obstáculo. Por una parte, desembocó en la ruina de los bancos, que veían

interrumpido el proceso financiero al no poder recuperar los créditos. En 1983, dada la insolvencia de las empresas estatales, se realizó un saneamiento financiero mediante el cual se les condonaron todas las deudas. Se buscó inyectar a las empresas con mayor capital a fin de elevar la productividad. Sin embargo, en 1985, año en que se realizó un segundo saneamiento, las empresas estaban aún más endeudadas que en 1983, y todo indicaba que continuarían con esta tendencia. Así, el gobierno mantuvo el otorgamiento de créditos aún a pesar de saber que con ello no se solucionaría la situación. Parecía que cada área de la economía estatal tenía siempre otra que le dotaba incondicionalmente de recursos: las empresas estatales en ruinas a los bancos, los bancos en ruinas al Banco Central, el Banco Central a la deuda pública y a los recursos estatales, con la consiguiente inflación. Esta situación, a pesar de que duró casi diez años, no podía mantenerse indefinidamente.

Además de las razones ya mencionadas anteriormente, en relación con la baja productividad, la nula capacidad de pago de las empresas estatales tuvo como principales razones un deficiente manejo administrativo por parte del gobierno, y la falta de una estrategia integral por parte de los diferentes ministerios. En relación con lo primero, tenemos el caso de las agroindustrias, en donde ENABAS, la empresa estatal encargada de la compra y distribución de los productos básicos, retrasaba considerablemente los pagos (a veces hasta más de un año) a las otras empresas estatales que le surtían la producción. Esto ocasionaba que las otras empresas se descapitalizaran y tuvieran que pedir más créditos al gobierno. ENABAS, no obstante, sabía precisamente que tenían acceso ilimitado al crédito y que el gobierno no dejaría que pararan su producción, por lo cual no temía quedarse sin productos que distribuir a la población. El "feudalismo ministerial" tuvo también una fuerte responsabilidad, debido a que los ministerios que pedían crédito para las empresas estatales de su rama, muchas veces lo hacían sin tomar en cuenta la situación integral de la economía y de las

necesidades del país, y se centraban en cumplir los objetivos particulares, ya fuera de los ministerios, o, más grave aún, de las personas que estaban al frente o que tenían alguna influencia en ellos. En los pocos casos en que no se autorizaba un crédito, el ministro o representante llamaba personalmente a los bancos, y el préstamo se realizaba.

La política crediticia generosa impidió, a las instancias y/o personas que pedían los préstamos, desarrollar proyectos que realmente resultaran productivos. El nulo riesgo que representaron los créditos impidió la generación de la inventiva y la responsabilidad. Además, representó un telón que cubrió de manera artificial una infinidad de problemas que sólo se reconocieron cuando la situación era irremediable.

LA MIGRACIÓN

Nicaragua ha tenido desde el inicio de su historia una tradición migratoria muy fuerte. La migración, al igual de lo que ocurre en muchas partes del mundo, ha estado relacionada directamente con el estado de subdesarrollo que ha vivido el país. La relación ha sido tan fuerte, que en realidad ambos elementos han sido tanto causa como consecuencia uno del otro: el subdesarrollo ha propiciado que las personas abandonen el país por diferentes motivos (falta de oportunidades para profesionistas, falta del sentido de permanencia a la nación de parte de las élites, falta de trabajo para clases medias y bajas) y estas salidas han ocasionado que el país perdiera elementos humanos que, en otras circunstancias, habría aprovechado en pro del desarrollo.

Durante el gobierno sandinista, las migraciones tuvieron un papel determinante en el curso de los acontecimientos políticos y económicos. Por principio de cuentas, se dio una emigración muy importante durante la etapa en que el FSLN pretendía derrocar a la dictadura. Figuras centrales del Frente en muchas ocasiones se vieron forzadas a abandonar el país debido a la persecución de que eran objeto por parte de Somoza. Estos exi-

lios, no obstante, sirvieron para que los sandinistas establecieran vínculos en el exterior con los que obtuvieron apoyos que redundaron directamente en favor de su lucha. Los apoyos fueron muy variados (protección durante el exilio, ayuda organizativa para la lucha política y bélica, armamento, etc.), pero permitieron crear una simpatía que contribuiría a lograr el consenso internacional a favor del derrocamiento de la dictadura.

Una vez en el poder, sin embargo, las migraciones representaron para los sandinistas una fuente constante tanto de inestabilidad como de ataques frontales, así como una fuga de elementos humanos que eran imprescindibles para el desarrollo del país. Las migraciones podrían clasificarse en las efectuadas por individuos de: a) las élites, b) las clases bajas, c) las clases instruidas en determinada área (ejecutivos, profesionales, técnicos, etc.) y d) diversas clases, por motivo de la guerra. El desenvolvimiento que el gobierno tuvo en las variables analizadas anteriormente (tanto políticas como económicas), fueron las causas de ella.

La incapacidad para el establecimiento de alianzas y la naturaleza y papel de las élites, fueron las causas fundamentales para la migración por parte de éstas. Las élites nicaragüenses han estado acostumbradas a dejar su país por largas temporadas y han establecido espacios y redes, especialmente en Miami, que consideran como un hogar alterno al que tienen en Nicaragua. Estos espacios les permiten oscilar entre ambos países dependiendo de sus necesidades y objetivos coyunturales. Una tradición muy fuerte ha sido enviar a los hijos a estudiar en escuelas de Estados Unidos. Con el triunfo de la revolución, muchas personas optaron casi inmediatamente por establecerse de manera más permanente en este país. Sin embargo, con las medidas que los sandinistas realizaron para despojar a la burguesía del poder político y económico que tenían (especialmente a través de las diversas nacionalizaciones), este tipo de migración se intensificó. El gobierno trató, sin éxito, *de frenarla, a través de medidas como la “Ley de los ausentes” de 1981*, que, como hemos visto, permitía la confiscación de los bienes de los empresarios que abandonaran el país por más de seis

meses sin causa justificada. Sin embargo, estas disposiciones no fueron suficientes para contrarrestar otras acciones del gobierno.

La ausencia de un marco institucional político y jurídico estable fue una causa fundamental para que la tendencia migratoria de las clases hegemónicas se profundizara e intensificara: al no contar con parámetros confiables sobre lo que podrían esperar, las personas preferían abandonar el país. En realidad, esta posición resultó sumamente cómoda y en muchos sentidos irresponsable. Sabían que contaban con los medios para establecerse en un lugar con óptimas condiciones materiales, y por ello no aceptaban reducciones en su nivel de vida, que un gobierno primero en reconstrucción, y después en guerra, requería. En este proceso, debe tomarse en cuenta, también, el tradicional poco sentido de la pertenencia a la nación, por parte de las élites, que les impedía la realización de sacrificios o simplemente de compromisos en favor no de los sandinistas, sino de Nicaragua. Este exilio puede calificarse como de voluntario, ya que el gobierno no tuvo una política de persecución y expulsión. Las cosas operaron de manera diferente para otros individuos a los que también podríamos considerar como pertenecientes a las élites, debido a su pertenencia a una instancia con gran poder político y económico a lo largo de la historia nicaragüense: los sacerdotes católicos. La incapacidad del gobierno para establecer relaciones armónicas con la Iglesia oficial, llevó a éste a realizar expulsiones de sacerdotes que, si bien no pueden considerarse importantes en cuanto a su número, sí tuvieron una gran trascendencia en el nivel simbólico y fueron uno de los elementos que poco a poco fueron separando a la sociedad del gobierno.

Dentro de la migración de individuos de las clases bajas, puede ubicarse a los campesinos y a los integrantes de la Costa Atlántica. Los primeros tuvieron como causa de expulsión la incapacidad del gobierno para realizar una auténtica e integral reforma agraria. Las acciones en esta materia tuvieron repercusiones en dos sentidos: el no haber tomado en cuenta las condiciones e idiosincracia particulares de los campesinos nicaragüen-

ses tuvo consecuencias políticas y sociales, ya que éstos sentían una invasión a su espacio y una falta de respeto a sus prácticas y costumbres, que acabó por desencadenar un abierto rechazo al gobierno. Tuvo también consecuencias económicas, ya que la ineficacia de las acciones gubernamentales respecto al campo intensificó el rezago histórico que éste tenía. Ambas consecuencias fueron, a su vez, motivo para que muchos campesinos prefirieran emigrar del país, en la mayor parte de los casos para enrolarse en la Contra. Los integrantes de la Costa Atlántica, en particular los miskitos, constituyeron otra migración que desestabilizó fuertemente al gobierno sandinista. Los miskitos son un grupo indígena que quedó dividido al delimitarse la frontera entre Honduras y Nicaragua. A pesar de que formalmente pertenecían a distintos países, siguieron manteniendo relaciones entre sí. Los miskitos nicaragüenses históricamente habían emigrado a Honduras de forma temporal y periódica, dependiendo de los ciclos agrícolas, el uso de recursos rurales y las necesidades de caza y pesca. No obstante, a partir de 1981 el patrón de esta migración cambió drásticamente. Los miskitos abandonaron sus lugares de residencia habitual, debido entre otras cosas, a que gran parte del conflicto armado nicaragüense se libraba en ellos. Muchos se desplazaron a otras zonas del país, mientras que otros cruzaron la frontera con Honduras.¹⁰⁰ En 1983, el gobierno sandinista, pensando en atender a esta población:

Empezó a tomar medidas para encauzar esta migración basada tanto en criterios de defensa militar y de desarrollo económico, como en la satisfacción de las necesidades de la población afectada. Se comenzó a evacuar de forma organizada la población campesina que habitaba de forma dispersa en las zonas conflictivas para reubicarla en nuevos asentamientos que facilitarían la defensa del territorio, el acceso a ser-

¹⁰⁰ Para 1984, aproximadamente un 50% de la población del RAAN se encontraba fuera de sus lugares de residencia habitual. *Diagnóstico nacional de Nicaragua sobre refugiados...*, p. 20.

vicios sociales básicos como educación y salud, y el aprovechamiento colectivo de los recursos productivos.¹⁰¹

No obstante, estos reasentamientos provocaron un rechazo total de la población miskita, históricamente aislada de lo que ocurría en el resto del país, y acostumbrada por ello a regirse por sus propias reglas y decisiones. Los miskitos optaron por emigrar hacia Honduras antes que aceptar la reubicación. Todo ello fue aprovechado por el gobierno de Estados Unidos, que reclutó entre esta población inconforme a combatientes contra el gobierno nicaragüense y apoyó la creación de una agrupación miskita contrarrevolucionaria.

La crítica situación económica propició la migración de un importante número de técnicos, profesionistas, ejecutivos, empresarios y otras personas con conocimientos especializados, que al verse limitados en su desarrollo profesional optaron por abandonar el país. Además de las causas estrictamente económicas, que quebraban empresas y obligaban a detener las actividades profesionales y productivas, muchos trabajadores especializados emigraron porque el gobierno los desplazó de sus responsabilidades para colocar a personas más afines ideológicamente o con quienes tenía compromisos políticos, pero que no contaban con los conocimientos adecuados. Esta fuga de cerebros, ocasionó que el país se quedara sin una buena parte de los recursos que necesitaba para impulsar el desarrollo en las diferentes áreas.

La guerra fue una de las causas principales de la migración. El temor a ser enrolado en actividades bélicas, a través del Servicio Militar Obligatorio, fue una causa constantemente citada por los nicaragüenses que buscaban refugio en otros países. Este temor fue experimentado no sólo por las personas que directamente podían ser reclutadas, sino también por sus familias y llegó, incluso, a convertirse en un temor irracional, debido a que familias

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 41.

con niños pequeños abandonaron el país pensando proteger a sus hijos de un riesgo que quizá se veía como lejano en tiempo, pero inminente. Este temor irracional fue magnificado y utilizado por las clases hegemónicas nicaragüenses y por Estados Unidos, como un arma estratégica en su lucha contra el gobierno sandinista. En este sentido, una causa importante de expulsión fue la ola de rumores que se propagaron contra el gobierno. Estos rumores formaron parte de una guerra psicológica, en donde la población era el objetivo fundamental, y en la que se utilizaron además factores adversos reales (la crisis económica, la inestabilidad, los saldos humanos de la guerra) para provocar la inseguridad emocional de la población y el consecuente rechazo hacia su gobierno. Pacheco profundiza en relación con ello:

Las investigaciones resaltan, al respecto, que la salida de estas familias no fue determinada sólo por factores tales como el miedo, la inseguridad, los rumores o las dificultades económicas. Algunas de las razones se suman a la situación de estrés o duelo que, por diversas razones específicas para cada caso, es vivida como definitivamente amenazante para la continuidad del precario equilibrio y es la que fundamentalmente *decide* la salida.¹⁰²

¹⁰² Gilda Pacheco, "Migraciones forzosas en Centroamérica: una interpretación psicosocial", en Rodolfo Casillas [comp.], *Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales*, México, FLACSO, 1992, pp. 48-49.

III. LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS

ANTECEDENTES

El inicio

La política exterior ha sido para Estados Unidos un coadyuvante fundamental de su desarrollo como potencia hegemónica. El acelerado crecimiento económico que el país comenzó a experimentar, una vez que se consolidó como nación independiente (aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo xix), intentó ser sostenido por los diferentes gobiernos a través de, en un primer momento, la expansión territorial y, con posterioridad, de intervenciones en distintos países. En el primer aspecto las compras de territorios importantes por su ubicación (como Alaska y Hawai) convirtieron a Estados Unidos en un país que controlaba puntos estratégicos, que pronto le permitiría, a su vez, tomar mayor ventaja comercial, militar y política respecto a los competidores más fuertes de la época. Las intervenciones (militares y/o financieras) tuvieron el mismo objetivo pero consecuencias muy diferentes. Sobre todo las realizadas en Centroamérica y el Caribe determinaron el destino de los países intervenidos a un grado tal, que aún hoy en día pueden sentirse las consecuencias negativas, especialmente en lo que se refiere al desarrollo económico. No obstante, este tipo de política no se

pudo haber dado sin la participación abierta o encubierta de los grupos hegemónicos que política y económicamente existían en los diferentes países de Centroamérica y del Caribe. Desde las primeras acciones que Estados Unidos realizó en este sentido (en 1870, con la propuesta de la anexión de Santo Domingo), se empezó a desarrollar una relación de “colaboración” entre los grupos poderosos en Centroamérica y el gobierno estadounidense, en la que los primeros obtenían desmedidas ganancias políticas y económicas inmediatas (cuya proporción y durabilidad dependían de la utilidad que representaran para la satisfacción de los intereses del país del norte). Por su parte Estados Unidos obtenía un inusitado crecimiento económico interno que pronto le dio las condiciones para desarrollarse como potencia en el nivel internacional.

El aspecto económico se convirtió desde épocas tempranas para Estados Unidos en un elemento interrelacionado de forma positiva con el imperialismo: conforme más crecimiento económico tenía (o deseaba), más frecuentes y violentas eran las prácticas imperialistas. La interrelación se volvió tan estrecha, que pronto un elemento dejó de ser objetivo o método del otro, para convertirse en parte de una dinámica que, a su vez, iría diseñando el espíritu de la política exterior. En el periodo que comprende desde la Independencia hasta la segunda mitad del siglo xix, el país utilizó sus recursos y su potencial para construir un Estado nacional. La prioridad de esta época, entonces, fue la consolidación de la Independencia y no el crecimiento económico. Por ello quizás es que durante ese periodo vimos a un país que se manifestaba abiertamente, tanto en el discurso como en la práctica, contra todo intervencionismo, en particular de los países europeos. El cambio registrado en los discursos oficiales que distintos presidentes de Estados Unidos fueron realizando, da cuenta de la transformación de su política exterior. En 1823 vemos al presidente Monroe dando un mensaje alejado de prácticas imperialistas, en el cual el principal objetivo era desalentar a los países europeos de sus pretensiones por

recuperar alguna ex colonia americana que ya hubiera alcanzando su independencia.¹⁰³ En nombre de este mensaje, al que posteriormente Estados Unidos presentaría como “Doctrina”, gobiernos de la segunda mitad del siglo xix justificaron intervenciones en otros países. Sin embargo, las interpretaciones que se realizaban pronto dejaron de ser útiles para fundamentar la política intervencionista que iba desarrollando el país, por lo cual tuvieron que darse diversas adiciones, que en realidad representaban modificaciones y se alejaban del espíritu del mensaje original. Los corolarios, nombre que se le dio a las adiciones que se realizaron —Grant en 1870, Roosevelt en 1904 y Cabot en 1912— fueron cada vez más agresivos y justificadores de las acciones intervencionistas del país.

En el desarrollo de la política exterior estadounidense podemos ver otra gran constante: la insistencia en declarar que todo acto (intervencionista o no), realizado por Estados Unidos tiene un objetivo noble que ayudará al mejoramiento de la humanidad. Así, se dijo que las intervenciones en Centroamérica a finales del siglo xix y principios del xx tuvieron el objetivo de preservar el orden y ayudar a que se alcanzara la paz, como precondiciones para el mejoramiento económico de la región; la participación en la independencia de Panamá se dio para que la humanidad se beneficiara del gran proyecto civilizatorio que representaba la construcción del Canal; las acciones hacia Centroamérica desarrolladas en la década de 1980 tuvieron el fin de evitar las consecuencias negativas para el mundo que implicaba el avance del comunismo. Estados Unidos, de esta forma, ha pretendido desde el inicio del desarrollo de su política exterior combinar el

¹⁰³ Parte de este mensaje señala: “Con las colonias existentes o las dependencias de cualquier poder europeo no hemos interferido y no interferiremos. Pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la han mantenido, y cuya independencia tenemos en gran consideración y como principio justo, no podemos ver ninguna interposición con el propósito de oprimir, o controlar de cualquier otra forma su destino, por parte de cualquier poder europeo, de otra forma como una disposición inamistosa hacia los Estados Unidos”

deseo de alcanzar el liderazgo en el nivel internacional (en el siglo XIX llegar a tener el poder de las potencias europeas) con el de ser un país que se ubica del lado del “bien”.¹⁰⁴

La Guerra Fría

Durante el desarrollo de la Guerra Fría estas características se volvieron más definidas, debido por una parte a que la competencia por el liderazgo mundial se reducía a un solo contrincante (la Unión Soviética) y el “bien” y el “mal” estaban claramente delimitados. Esto ayudó a que hacia el interior de Estados Unidos, se creara una identidad nacional sustentada, precisamente, en la certeza de los individuos de formar parte de una nación no sólo poderosa sino bondadosa. Si bien la política interna estaba representada por dos visiones con discrepancias entre sí mismas (provenientes del Partido Republicano y del Partido Demócrata) coincidían en la posición que el país debía tener hacia el exterior. Tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo las diferentes visiones partidarias desaparecían cuando se trataba de fijar posición respecto a la Guerra Fría y al manejo de la contención. El temor fue uno de los elementos más importantes que sentaría las bases para que tanto en el gobierno como en la sociedad se diera esta coincidencia de pensamiento en torno al “deber” que tenía Estados Unidos de luchar contra el comunismo. Durante los años cincuenta, se percibía como una posibilidad real que el comunismo ganara cada vez más terreno, para llegar incluso a afectar directamente a la sociedad de Estados Unidos. Esta

¹⁰⁴ Sergio Aguayo señala al respecto: “[Los Estados Unidos] con frecuencia han creído tener el deber mesiánico de llevar al mundo su versión de la democracia, de la economía y de la organización social. Ha sido igualmente frecuente que insistan en que esa promoción de las ideas estadounidenses es para beneficio de los demás, y de los Estados Unidos, porque si actuaran por puro egoísmo no serían excepcionales. Hay una implicación espiritual en la política exterior y por eso las iniciativas presidenciales se llaman “doctrinas”, como si formaran parte del derecho canónico de la religión. Aguayo, *op. cit.*, p. 48.

posibilidad se percibió como más probable con el lanzamiento del *Sputnik*, por parte de la Unión Soviética. Este hecho cimbró fuertemente uno de los pilares más fuertes de la sociedad de Estados Unidos: la certeza de ser el país más poderoso en todos los sentidos. Sin embargo, fortaleció su percepción de estar del lado del “bien” y del deber que tenía para que el resto de los individuos lo estuviera.

El cambio de los sesenta

Esta percepción cambió radicalmente en las décadas de 1960 y 1970. El desarrollo de la guerra en Vietnam marcó el inicio de una nueva relación entre el gobierno y el pueblo. Durante los años sesenta se cuestionaron muchos mitos que hasta entonces habían cohesionado a la sociedad. Uno de los más importantes fue el derecho (que el gobierno manejaba incluso como un deber) de Estados Unidos de intervenir en los asuntos de otros países. La sociedad tomó una actitud más crítica y más abierta, y se interesó por conocer lo que realmente sucedía en otras partes del mundo, dejó de conformarse con las versiones que le daban sus dirigentes. El conocimiento dio paso a la tolerancia por las opiniones que diferían de la “visión nacional”, y se exigió respeto ante ellas, no sólo hacia el interior del país, sino también hacia las otras naciones. En lo que concierne a la política exterior, esta posición permitió que la sociedad revisara la actitud de su gobierno y encontró cuestionables y, en muchos casos, reprochables sus programas y acciones. Sin embargo, también concluyó que el gobierno pudo llevar a cabo esta política debido a la falta de interés y compromiso por parte de la misma sociedad. Ello dio como consecuencia que ésta se involucrara con el diseño de las políticas y que asumiera un papel de vigilancia hacia el gobierno.

Uno de los soportes intelectuales que la sociedad encontró en este sentido, fue la corriente revisionista dentro de la política exterior. Esta corriente había surgido sin mucho eco durante

los años cuarenta, pero en la década de 1960, al coincidir con la rebeldía social y con un ambiente en donde prevalecía la intención de búsqueda y de crítica en todos los aspectos, tuvo una amplia aceptación. Se proponía, precisamente, revisar los mitos en los que estaba sustentada la política exterior y discutir la vigencia de muchas de sus premisas fundamentales. Uno de los aspectos que más se cuestionó fue la legitimidad de utilizar la fuerza militar en otros países.

Esta posición de la sociedad fue reforzada por una iniciativa de la Iglesia católica. En 1961:

Monseñor Agostino Casaroli habló en nombre del papa Juan XXIII ante el Segundo Congreso Religioso de Estados Unidos reunido en la Universidad de Notre Dame. Casaroli expresó la preocupación de la jerarquía católica por la presencia de tres enemigos del catolicismo en América Latina: las iglesias protestantes, el marxismo y el espiritismo. Por ello, y por la crisis de vocaciones religiosas en la región, pidió a los católicos estadounidenses que enviaran como misioneros a Latinoamérica a un diez por ciento —un diezmo— de sus 225 mil sacerdotes, hermanos y hermanas.¹⁰⁵

Para los ciudadanos de Estados Unidos, el hecho de trasladarse a Latinoamérica y comprobar por sí mismos tanto la situación interna de los diferentes países, como las consecuencias de las políticas norteamericanas, determinó que cambiara su percepción de los problemas latinoamericanos y de las posibles soluciones. Permitió que se transformara, también, la percepción de los propios latinoamericanos hacia el país del norte, y de esta manera, entonces, diferenciar a los ciudadanos estadounidenses de su gobierno. Una vez que estos ciudadanos regresaban a su país y se reincorporaban a sus espacios cotidianos (la iglesia, la escuela, los diferentes centros laborales), tenían la oportunidad de difundir lo que habían conocido en el exterior, producir co-

¹⁰⁵ Aguayo, *op. cit.*, p. 134.

nocimiento sustancialmente diferente del tradicional, y/o influir en el diseño de diversos programas hacia América Latina. Puesto que muchos de ellos mantuvieron contactos con individuos latinoamericanos, crearon redes de comunicación que influirían también en el diseño de la política exterior.

A todo ello se sumó un cambio en la posición de la prensa. Durante los años cincuenta, la prensa representó un respaldo casi incondicional de las acciones gubernamentales. A partir de la década de 1960, en cambio, recuperó su independencia y su capacidad de crítica. Esto, aunado al hecho de que comenzó a darle importancia a los sucesos internacionales, permitió que registrara lo que ocurría al sur del país de una manera más constante y más analítica. Durante los sesenta y los setenta, la sociedad le quitó al gobierno el monopolio que había ejercido para interpretar el significado del interés nacional y del deber de Estados Unidos.

A pesar de que durante estas décadas las ideas liberales adquirieron una gran fuerza, no lograron hacer a un lado a las conservadoras. Si bien contribuyeron a que se cambiaran algunas acciones hacia Latinoamérica, no lograron una transformación de fondo de la política exterior hacia ésta. En ello tuvo mucho que ver que las condenas de la sociedad estadounidense se centraran en los gobernantes y en las personas con responsabilidades en la política y en el gobierno, y no propiamente en el sistema. En el mismo sentido, el interés que se despertó hacia Latinoamérica fue sumamente importante, pero en realidad no involucró a un porcentaje significativo de la sociedad.

El gobierno de Carter

Uno de los objetivos del presidente James Carter fue reestablecer la credibilidad del gobierno de Estados Unidos tanto en el nivel internacional como en el nacional. Por primera vez se reconocía en el Poder Ejecutivo, la incongruencia existente entre los valores que el país decía defender y las acciones que llevaba

a la práctica. En un discurso de campaña Carter señalaba: “Los pueblos de otras naciones han aprendido en años recientes que algunas veces no pueden confiar en lo que dice nuestro gobierno, ni predecir lo que éste hará. Han sido lastimados y decepcionados tantas veces que ya no saben qué creer acerca de Estados Unidos[...] Para muchas naciones tenemos dos políticas: una que se anuncia en público y otra que se lleva a la práctica en secreto.”¹⁰⁶ Carter señaló que utilizaría básicamente dos medios para que se recuperara la credibilidad del país: la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. Específicamente hacia Latinoamérica, se propuso el impulso de lo que llamó “democracias viables”.

Aparentemente, en la política exterior puesta en marcha durante la administración Carter tendría mayor importancia el aspecto de los valores y de la búsqueda de credibilidad y legitimidad, en contraposición con la pretensión de liderazgo y de concentración de poder en el nivel global. Sin embargo, en el mismo concepto de democracias viables, se aprecian las dos constantes más fuertes de la Guerra Fría: la intención de contener al poder comunista y la de asegurar los intereses de Estados Unidos. Se aprecia también una característica de la política exterior tradicional del país: creer tener el derecho de intervenir en los asuntos internos de otros. Por viables consideraron a:

Los gobiernos elegidos mediante el voto popular que cumplieran por lo menos con dos requisitos básicos: en primer lugar, impedir el resurgimiento y la influencia de las organizaciones populares de inspiración marxista (dependiente de las características específicas de cada país, ello se lograría a través de diversos métodos que van desde la ilegalización de los partidos populares hasta el reconocimiento de su existencia en condiciones que imposibiliten efectivamente su acceso al poder); y en segundo lugar, asegurar que

¹⁰⁶ Citado por Lilia Bermúdez, “La política exterior de Estados Unidos entre 1960 y 1980”, en *EUA. Síntesis de su historia*, núm. 11, México, Instituto Mora, 1998, p. 69.

las opciones de desarrollo nacional y de política internacional no modifiquen substancialmente los intereses económicos, políticos y de seguridad de Estados Unidos en la región.¹⁰⁷

Por lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos, también se registraron los elementos tradicionales de la política exterior de Estados Unidos. La política de derechos humanos estuvo encaminada básicamente a desligar al gobierno del norte de los regímenes dictatoriales de América Latina. Las acciones autoritarias y represivas de los gobiernos latinoamericanos se percibieron como posibles gracias al apoyo de Estados Unidos, con lo cual se hizo evidente la contradicción entre los valores que este país intentaba promover al interior de su territorio, y lo que en los hechos apoyaba hacia el exterior. No obstante, aún con la imagen negativa que el gobierno adquirió con ello, la administración de Carter no fue capaz de desarrollar una política de defensa de derechos humanos coherente, sólida y uniforme; ya que se aplicó tomando en cuenta el grado de "lealtad" de los gobernantes latinoamericanos, y no las acciones violatorias en sí mismas. En Guatemala, por ejemplo, se aplicaron sanciones económicas y políticas debido a las acciones represivas e intimidatorias por parte del gobierno militar. Nicaragua, en cambio, tuvo un trato preferencial, ya que se mantuvo el apoyo a pesar de las pruebas contundentes de la intensificación de violaciones graves a derechos humanos por parte del gobierno somocista.

La relación de total dependencia por parte del gobierno nicaragüense, desde la instauración del primer régimen somocista, llevó a Estados Unidos a considerar a este país como el más firme y estable de la región. El error de James Carter fue seguir considerando a la estabilidad como sinónimo de lealtad del gobernante, sin tomar en cuenta la real crisis por la que estaba atravesando el país y de la cual era directamente responsable el presidente a quien

¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 77.

ayudaba.¹⁰⁸ Cuando se dio cuenta de que el apoyo no se podía mantener, dado el grado de descomposición del gobierno del país del sur y el justificado desprestigio nacional e internacional del gobernante, fue demasiado tarde. Por principio de cuentas, el desprestigio se había extendido al gobierno norteamericano. Además, los hechos pronto probaron que éste había perdido el control absoluto del que había gozado sobre las acciones de Somoza. El gobernante nicaragüense se negó a cumplir con la política promovida por Estados Unidos, tendiente a una conciliación con la oposición que lograra mantener parte del poder somocista (y por lo tanto estadounidense) en Nicaragua.¹⁰⁹ Este fracaso del gobierno norteamericano se acentuó con la negativa por parte de la mayoría de los países latinoamericanos, ante la propuesta que presentó en junio de 1979 en la Reunión de Consulta de Ministros Exteriores de la OEA, en el sentido de crear una fuerza interamericana de paz que interviniera en Nicaragua.

El hecho de haber mantenido durante tanto tiempo el control sobre un país y por lo tanto de haber interpretado la situación de éste a través de sus muy particulares parámetros, imposibilitó al gobierno estadounidense para contar en ese momento con un análisis coherente y apegado a la realidad. Por principio de cuentas, desestimó o valoró de una forma inadecuada los alcances del movimiento popular y sus posibilidades de insurrección

¹⁰⁸ Este apoyo se mantuvo prácticamente hasta la caída del dictador, como señala Maira: "El Departamento del Tesoro mantuvo también una política de apoyo financiero al gobierno en crisis; el propio Secretario del Tesoro, Michael Blumenthal, comprometió el apoyo de Estados Unidos al crédito por 33.9 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional prestó a Somoza a principios de junio, exactamente seis semanas antes de su inminente colapso". Luis Maira, "EE.UU: fracaso en Centroamérica", en *Centroamérica en crisis*, México, Colmex, 1980, p. 192.

¹⁰⁹ La política de conciliación también se intentó llevar en el plano internacional, a través de la petición por parte de Estados Unidos de que se constituyera una mediación multilateral, pidiendo la intervención de la OEA. Lucrecia Lozano y Raúl Benítez, "La política de Estados Unidos hacia Nicaragua, 1979-1986. De la contención pasiva a la Guerra de Baja Intensidad", en *EE.UU contra Nicaragua*, Madrid, Editorial Revolución, 1987, p. 50.

victoriosa. Por la otra, no supo generar e impulsar en su momento una oposición burguesa que llevara al país por cauces más democráticos y que, al mismo tiempo, fuera afín con los intereses norteamericanos. Con ello quizás habría podido contener o retardar la llegada de los sandinistas al poder. Al no contar con esta interpretación de la crisis, el gobierno de Estados Unidos se vio también sin respuestas oportunas para hacerle frente. Las que tomó, como hemos visto, fueron ineficaces.

Todo ello obligó al gobierno de Carter a redefinir su estrategia para una región que en el pasado había considerado como de bajo perfil; es decir, cuya situación no le ofrecía mayores complicaciones. Ahora, con la llegada al poder de un grupo no sólo no apoyado sino ni siquiera previsto por Estados Unidos, en Nicaragua, y la toma de fuerza de un movimiento armado también independiente pretendiendo llegar al poder en El Salvador; la región adquiría una importancia distinta. La nueva situación, según la lectura de Estados Unidos, implicaba problemas potenciales de suma trascendencia y exigía una estrategia diferente por parte de éste para eliminarlos o neutralizarlos. La estrategia que presentó Carter fue una combinación de aspectos de seguridad militar, con aspectos diplomáticos y económicos.

Con Carter se empezó a esbozar la política de agresión hacia Centroamérica. Después del triunfo sandinista, Carter tuvo la oportunidad de manejar la crisis de la región de una manera negociada y, sin embargo, optó por la política de violencia. En 1979, se manejaba la posibilidad que tenía el gobierno de Estados Unidos de conducir a los sandinistas hacia políticas democráticas y de esta manera alejarlos de la influencia de la Unión Soviética. Dentro de esta posibilidad, se consideraba como idóneo apoyarse en los países latinoamericanos (en concreto en México, Venezuela y Costa Rica) que veían con buenos ojos la instauración de democracias liberales. Con ello se pretendía llevar a los sandinistas por los cauces democráticos en los que estos países creían. Sin embargo, la administración de Carter no dio paso alguno en este sentido. Durante el gobierno de Reagan

esta política adquiriría mayor intensidad, profundidad y complejidad. Sin embargo, podría decirse que las líneas de acción ya estaban trazadas desde la administración anterior. Por principio de cuentas, Carter incrementó de manera sustancial la presencia militar en la región y aplicó medidas económicas diferenciadas, según se tratara de premiar, presionar o castigar a los gobiernos destinatarios de ellas. En 1980, por ejemplo, se suspendió la ayuda económica que durante años había recibido Nicaragua.

EL GOBIERNO DE REAGAN

El hecho de que el país hubiera perdido áreas de interés estratégico (en América Latina, Cuba y Nicaragua y el control total sobre el canal de Panamá) durante una administración que proclamaba la importancia de la defensa de los derechos humanos (así fuera primordialmente en el discurso), hizo por una parte profundizar la percepción de los estadounidenses de que perdían la hegemonía global y por la otra considerar a una política en pro de los derechos humanos como responsable de ello. La defensa de los derechos humanos comenzó entonces a verse en importantes sectores como sinónimo de debilidad y de causa del fracaso, lo cual fue un elemento que permitió que las ideas y las fuerzas conservadoras ganaran terreno rápidamente, a una velocidad y con una intensidad tal, que permitieron al Partido Republicano ganar la presidencia del país y la mayoría en el Congreso. Las ideas conservadoras adquirieron predominancia en los espacios políticos no sólo por este triunfo republicano, sino además porque dentro del mismo Partido Demócrata, el sector liberal sufrió importantes derrotas.

No fue de extrañar, entonces, que la política exterior fuera diseñada con base en este tipo de ideología y que el presidente Reagan nombrara a un equipo afín para aplicarla. En concreto, el equipo designado para atender la relación con América Latina se caracterizó por pertenecer a la clase de los “geopolíticos”, para

quienes la premisa fundamental era la aplicación pragmática de medidas contra el comunismo, sin detenerse a analizar de fondo la realidad, mediante el examen de otras variables. Dentro de este equipo también se incluyó a políticos de la vieja guardia republicana, cuyos intereses se ligaron con la defensa de grandes corporaciones.

El gobierno de Ronald Reagan se propuso recuperar la hegemonía del país y no sólo estar a la par, sino superar el poder de la Unión Soviética. Para lograrlo vio como indispensable dejar atrás teorías como la de la “contención pasiva”.¹¹⁰ La teoría de la contención no podía operar más, debido a que Estados Unidos veía como necesario dejar el papel defensivo para tomar el ofensivo. Ya no era suficiente contener el poder comunista para evitar que conquistara mayores espacios, sino que era preciso erradicarlo de aquellos a los cuales ya hubiera llegado. La política exterior pareció entonces convertirse en un arma estratégica para el triunfo de Estados Unidos en la guerra contra la Unión Soviética. La entonces nueva administración no sólo no daba importancia sino que ni siquiera veía las posibles consecuencias adversas que se acarrearían a los países en los cuales se utilizaría esta “arma”. Tampoco se cuestionaba sobre la legitimidad de involucrar forzosamente a partes que no tuvieran interés en participar en la guerra.

Sin embargo, uno de los terrenos más importantes por conquistar, se encontraba dentro del propio país. El gobierno de Reagan desde un principio advirtió lo necesario que era convencer a la sociedad de que la agresividad que contenía su política exterior era precisa para recuperar la capacidad de liderazgo y la credibilidad del país, y también era la única forma de impedir que el enemigo los destruyera. Para lograr que

¹¹⁰ La contención pasiva forma parte de la “Doctrina Nixon”. Mediante ella se vio como inconveniente para los intereses norteamericanos la intervención militar activa en los países del Tercer Mundo, así como la posibilidad de un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, por lo que se vio también la necesidad de firmar los acuerdos de limitación de armas con ésta.

la sociedad “advirtiera” el peligro en el que se encontraba y formara un frente común con el gobierno, la Casa Blanca comenzó a “informar” de la naturaleza del enemigo que tenían enfrente. Según estos informes, la Unión Soviética contaba con tácticas y armas sofisticadas, que en mucho rebasaban la capacidad de Estados Unidos. Esto tenía como objetivos legitimar ante la sociedad cualquier acto del gobierno y, también, obtener el apoyo del Congreso para el desarrollo de una política exterior militarizada e intervencionista, y lograr la autorización de mayores recursos económicos para la defensa. Reagan no pudo sustentar con pruebas esta campaña,¹¹¹ no obstante —sobre todo al inicio de su gestión—, le sirvió para crear en el imaginario social una sensación de amenaza que había que enfrentar y vencer. Un ejemplo de las declaraciones del gobierno en este sentido es el mensaje pronunciado por el presidente Reagan, en abril de 1983, ante el Congreso, que fue difundido en cadena nacional por televisión; en el que advertía que el Congreso debía apoyar la lucha contra el comunismo en el Caribe, debido a que: “El Salvador está más cerca de Texas que Texas de Massachusetts. Nicaragua está tan cerca de Miami... y Tucson como estas ciudades están de Washington.”¹¹² Según las afirmaciones de Reagan, de no actuarse con fortaleza ante el

¹¹¹ Bermúdez apunta al respecto: “Es importante remarcar que ninguna fuente norteamericana señala cifras concretas con respecto al gasto militar soviético, concretándose en hacer afirmaciones gratuitas acerca de la superioridad en este terreno del mundo socialista, fundamentalmente de la URSS[...] el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones para la Paz (SIPRI), en su folleto de 1981, señala que ‘El presupuesto militar de la propia Unión Soviética permanece siendo un misterio, debido al secreto que rodea la mayor parte de sus asuntos militares. La estimación en dólares de su gasto militar hecha por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, sostiene, sin embargo, que éste es alrededor de un 50 por ciento superior al de los Estados Unidos’”. Lilia Bermúdez, *Estrategia de Reagan hacia la revolución centroamericana*, México, Nuestro Tiempo-UNAM, 1982, p. 87.

¹¹² Citado por Walter Lafeber, *Inevitable Revolutions. The United States in Central America*, 2nd Edition, Nueva York-Londres, W.W. Norton and Company, 1993, p. 292.

comunismo, Estados Unidos tendría que enfrentar movimientos migratorios centroamericanos que invadirían el país, ocasionándoles fuertes problemas: Reagan definió así la situación en un discurso a la nación en marzo de 1986:

Los soviéticos y los cubanos, utilizando Nicaragua como base, se han convertido en la potencia dominante en este corredor vital entre la América del Norte y la América del Sur. Afincados allí estarán en situación de amenazar el Canal de Panamá, entorpecer nuestras vías marítimas vitales del Caribe y, finalmente, actuar contra México. Si ocurriera esto, se producirían huidas en masa de gentes desesperadas hacia el norte, a las ciudades de la región meridional de los Estados Unidos, o a donde quedara alguna esperanza de libertad.¹¹³

La política exterior, al convertirse en el principal medio para lograr la victoria ante la Unión Soviética, no logró articular objetivos y medios intrínsecos a ella. La búsqueda de buenas relaciones entre Estados Unidos y otros países quedó marginada muchas veces, incluso, en los discursos formales. Toda relación dependía de lo útil o peligroso que resultara determinado país en relación con el enfrentamiento Este-Oeste. De la misma forma, la explicación de toda situación debía estar basada en dicho enfrentamiento, ignorando cualquier otro tipo de análisis. En este contexto, las causas históricas de los movimientos revolucionarios en Centroamérica no eran ni siquiera tomadas en consideración, en el momento en que la Casa Blanca diseñaba políticas específicas de relación con éstos y con los gobiernos de sus países de origen.

Sin embargo, al diseñar las políticas hacia los países centroamericanos, el gobierno de Reagan no sólo ignoraba las causas internas sino también las externas. No se tomaban en cuenta los problemas estructurales resultantes del creciente desequilibrio político y económico internacional. En el discurso reaganiano,

¹¹³ Tito Drago, *Centroamérica, una paz posible*, Madrid, El País-Aguilar, 1988, p. 97.

no existían países tercermundistas que requerían una atención especial para solucionar, o al menos aliviar los problemas resultantes de la inequitativa distribución del poder económico y político.¹¹⁴ Sólo veía a aliados o enemigos en su enfrentamiento con la URSS. A los aliados, por supuesto, debía dotarlos de armas y entrenamiento. Los enemigos debían ser destruidos sin tomar en cuenta ninguna otra consideración.

Las demandas que los países centroamericanos hacían con el objetivo de mejorar su situación económica, eran también atendidas por Estados Unidos con la óptica de la Guerra Fría: las economías de los aliados eran apoyadas y las de los enemigos agredidas. Sin embargo, aun en el caso de apoyo, este tipo de relación resultó sumamente contraproducente para Centroamérica, ya que, al tratarse de una ayuda inmediata y entregada exclusivamente para ganar terreno en la lucha contra el comunismo, debilitó aún más las estructuras internas de los países, y les impidió sentar las bases para un desarrollo económico integral, real y sostenido.

Una de las primeras teorías que se adoptaron en la administración Reagan fue aportada por Jeane J. Kirkpatrick,¹¹⁵ quien en 1979 rescató elementos de una teoría acerca de las revoluciones, realizada en la década de 1940. Kirkpatrick partía de la base de distinguir entre dos tipos de gobiernos: los autoritarios y los totalitarios. Los primeros buscaban preservar las sociedades tradicionales y mantener economías de mercado abiertas, mientras que los segundos ejercían un control férreo de todos los aspectos de la sociedad. Los gobiernos autoritarios, según la teoría, tenían una mayor capacidad para el cambio que los

¹¹⁴ Alexander Haig, secretario de Estado en el inicio del gobierno de Reagan "en su audiencia de confirmación ante el Senado... planteó la cuestión bipolar en términos estrictos, y señaló que el concepto de Tercer Mundo era 'equivoco'. Bermúdez, *op. cit.*, p. 106.

¹¹⁵ Kirkpatrick había sido profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown y tras plantear su teoría, Reagan la designó en 1981 como embajadora de Estados Unidos ante la ONU.

totalitarios. A Estados Unidos convenía apoyar a los autoritarios, independientemente de su actitud de respeto o violación a los derechos humanos. El entonces secretario de Estado, Alexander Haig, anunció la preferencia por los gobiernos autoritarios debido a que: "son más propensos al cambio que sus contrapartes totalitarias."¹¹⁶ La teoría fue adoptada por el gobierno, pero pronto comenzó a mostrar inconsistencias. En primer lugar, se observó que el cambio que ofrecían los gobiernos autoritarios por lo general era para empeorar y que, por lo menos los de América Latina, no tenían propensión a preservar las sociedades tradicionales (como fue el caso de Nicaragua, El Salvador y Guatemala). Además, ante los intentos de cambio por parte de la sociedad, reaccionaban con extrema violencia. El que esta teoría se haya tomado como base de una política de Estado, muestra la poca intención que el gobierno tenía por realizar análisis reales de la situación que le permitieran diseñar programas acordes con ella y encontrar soluciones de fondo a los problemas. Parece ser que el gobierno buscaba fundamentos que se adaptaran a las conclusiones que ya tenía previamente determinadas. Una de las conclusiones que acarrió mayores daños a los países centroamericanos fue que el tema del respeto a los derechos humanos debía estar excluido en el momento de diseñar las políticas que se aplicarían en la región.¹¹⁷ Según Kirkpatrick, la violencia era un elemento intrínseco de los sistemas políticos de Centroamérica, y pedir respeto a los derechos humanos, era legitimar esa violencia.

¹¹⁶ Citado por Lafeber, *op. cit.*, p. 276.

¹¹⁷ Sin embargo, también en este aspecto se aplicó una política diferente para cada país, ya que, mientras que para Guatemala y El Salvador se señalaba no dar importancia al tema de los derechos humanos, se estaba en contra de la supuesta violación a éstos en Nicaragua. "Nicaragua probablemente ocupa el primer lugar como violador de derechos humanos en la región" condenó Jean Kirkpatrick en 1982. Citado por Jenny Pearce, *Under the Eagle. U.S. Intervention in Central America and the Caribbean*, Boston, South End Press, 1982.

Los formuladores de la política exterior hacia Latinoamérica clasificaron a los países en tres grupos: 1) los emergentes; 2) los aliados leales que no tenían la fortaleza de los emergentes (para los cuales se estableció una gradación entre los muy leales hasta los indóctiles) y; 3) los casos críticos, en los que se encontraban los países enemigos y los amigos con fuerzas insurgentes con intenciones de derrocar al gobierno establecido. De los cinco países centroamericanos, tres fueron considerados en este último grupo (Guatemala, El Salvador y Nicaragua).

La región centroamericana se convirtió en una de las áreas a las que el nuevo gobierno dio mayor importancia y atención. Kirkpatrick señaló a principios de 1981: "Centroamérica es el lugar más importante del mundo para los Estados Unidos hoy en día."¹¹⁸ No obstante, para Reagan esta importancia estaba basada en aspectos geoestratégicos.¹¹⁹ El triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, fueron los hechos que determinaron el cambio de política que hasta la fecha había tenido Estados Unidos en la región. Este cambio giró alrededor de la manera en la que se realizaban las intervenciones, puesto que las intervenciones mismas, como hemos visto, fueron una constante desde el siglo xix.

¹¹⁸ Citado por Lafeber, *op. cit.*, p. 271.

¹¹⁹ La importancia radicaba exclusivamente en la naturaleza de elemento estratégico de lucha contra el comunismo. En el aspecto económico, América Central no importaba mucho: "Para los Estados Unidos en su conjunto la economía centroamericana tiene un interés menor, aunque haya sectores fuertemente comprometidos. La entonces adjunta del Subsecretario para Asuntos interamericanos, Sally Shelton, dijo en 1977 en una conocida presentación en el Consejo de Relaciones Exteriores, que 'contrariamente a lo que la mayoría de los latinoamericanos piensan, los intereses económicos de Estados Unidos en América Central son algo limitados. Nuestro comercio total anual con la región es de alrededor de 1.800 millones de dólares, menos del uno por ciento del comercio exterior de los Estados Unidos. La inversión norteamericana en la zona es de aproximadamente 700 millones de dólares, 0,5% de la inversión extranjera directa norteamericana y la región no posee ninguna materia prima estratégica'". Drago, *op. cit.*, p. 60.

Las estrategias iniciales que el gobierno de Reagan adoptó frente a Centroamérica pueden resumirse en las siguientes: 1) Aplicación de la nueva política exterior sobre El Salvador, considerándolo como “caso prueba”. En esta primera etapa tanto Reagan, como su equipo dentro del gobierno y sus asesores externos (representados principalmente en los *think tanks*), recomendaban el fortalecimiento de la ayuda brindada hacia el gobierno salvadoreño, con el objetivo de que se obtuviera una derrota rápida y definitiva sobre el FMLN. La atención al caso nicaragüense, en este sentido, se dejó para un momento posterior. 2) Presión a los países latinoamericanos para que se involucraran en la lucha contra los grupos armados y gobiernos que Estados Unidos consideraba como enemigos. A esta estrategia, aplicada a partir de 1982, se le conoció como la “regionalización del conflicto.” A través de ella se difundió que la crisis centroamericana estaba enmarcada en el conflicto Este-Oeste y, por lo tanto, afectaba de manera directa a todos los países del continente. El país que más contribuyó con Estados Unidos en este sentido fue Argentina. En el año de 1981, la CIA inició conversaciones con el gobierno de este país para que se comenzara el entrenamiento de Contras, en territorio argentino.¹²⁰ La regionalización del conflicto terminó a raíz de la Guerra de las Malvinas. Debido al apoyo que Estados Unidos otorgó a la Gran Bretaña, países como Venezuela, pero sobre todo, Argentina, se sintieron traicionados y decidieron dejar de prestarle apoyo. 3) Presión a los países centroamericanos para que formaran un frente común en contra de los mismos grupos y/o gobiernos considerados como enemigos por Estados Unidos. Esta estrategia fue conocida como la “regionalización restringida de la crisis” o “centroamericanización del conflicto” y fue aplicada a partir

¹²⁰ Lo que se conoció como la Tríada contra Nicaragua (combatientes nicaragüenses, entrenadores argentinos y dinero estadounidense) comenzó desde 1980, sin embargo, 1981 fue el año de mayor colaboración entre los gobiernos de los dos últimos países en este sentido.

del segundo trimestre de 1982 y más intensamente en 1983. A través de ella se incrementó de manera sustancial la ayuda y la asesoría militar, así como la asistencia económica de Estados Unidos a los regímenes aliados, y se intensificaron las agresiones a los enemigos.

Desde el inicio de su administración, Donald Reagan se caracterizó por aplicar una línea dura respecto al conflicto centroamericano y a negarse a cualquier clase de negociación para resolverlo. Concretamente hacia el gobierno nicaragüense dirigió todo tipo de acciones (militares directas e indirectas, diplomáticas, económicas) con el fin de desestabilizarlo. El argumento más utilizado para legitimar estas acciones fue que en Nicaragua se gestaba un gobierno comunista y terrorista, que tenía la intención de expandir sus ideas y su forma de gobierno no sólo al resto de países de Centroamérica, sino de todo el hemisferio.

La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

La victoria de la insurrección en Nicaragua y la posterior toma y permanencia en el poder de los sandinistas evidenció que el sistema interamericano ya no era gobernable por Estados Unidos: dentro del seno de la Organización de los Estados Americanos, a diferencia del pasado, Estados Unidos no encontró el apoyo suficiente para legitimar una posible intervención a Nicaragua.¹²¹ En el mismo sentido, mostró que los pactos militares entre fuer-

¹²¹ Así tenemos que: "En la XVII Reunión del Comité de Consulta de Cancilleres de la OEA, 13 países que incluían a los integrantes del Pacto Andino, México, Costa Rica y Panamá, patrocinaron una resolución condenando a Somoza, urgiendo la implantación de un régimen democrático y rechazando la intervención armada en Nicaragua". Adolfo Aguilar Zinser y Carlos Paredes, "El debate sobre Centroamérica en el Congreso norteamericano y su interrelación con el debate en América Latina", en *Cuadernos Semestrales. Publicación semestral de Estados Unidos: perspectiva latinoamericana*, núm. 15, 1er semestre de 1984, México, Centro de Investigaciones y Docencia Económica-Instituto de Estudios de Estados Unidos, p. 48.

zas de diferentes países no eran operables incondicionalmente, ya que en este caso, por ejemplo, la Guardia Nacional panameña no sólo se negó a apoyar a su contraparte nicaragüense, sino que incluso significó una ayuda para la llegada al poder de los sandinistas. Demostró también que las fuerzas armadas nativas no eran capaces de mantener el orden en sus países.¹²²

Estos hechos determinaron que la administración Reagan llegara a la conclusión de que era necesario cambiar las tácticas de guerra respecto a Centroamérica. Las políticas que Reagan aplicó durante la primera administración hacia la región fueron primordialmente militares y en su mayoría constituyeron acciones encubiertas, no sólo no avaladas, sino en muchas ocasiones prohibidas por el Congreso. Recuérdesse simplemente la "Enmienda Boland", en la que el Congreso prohibía la desestabilización de gobiernos por parte de la fuerza armada de Estados Unidos.¹²³ La política del presidente hacia Centroamérica durante su primera administración fue una violación constante a este precepto. A partir del segundo periodo de mandato, Reagan estructuró y aplicó una nueva política, por medio de la cual buscaba que sus acciones dejaran de tener una naturaleza secreta, para convertirse en la política oficial de Estados Unidos. La prueba mayor de su carácter oficial fue el hecho de que el Congreso autorizó el uso de importantes sumas de dinero para su puesta en marcha.

La experiencia obtenida hasta 1985 (tanto en los territorios centroamericanos como en la opinión pública interna e internacional) mostró lo contraproducente de una posible ocupación

¹²² Para un análisis más profundo ver: Lilia Bermúdez, *Guerra de Baja Intensidad, Reagan contra Centroamérica*, México, Siglo XXI, 1987.

¹²³ Thomas señala: "Su primera acción restrictiva (del Congreso a Reagan) vino en diciembre de 1982 con la aprobación de la Enmienda Boland, que prohibía a la administración otorgar equipo militar, entrenamiento, asesoramiento u otro apoyo para actividades militares designadas para derrocar al gobierno de Nicaragua". Leonard Thomas, *Central America and the United States: The Search for Stability*, Georgia, The University of Georgia, 1991, p. 186.

militar directa hacia un país de América Central. El fracaso en la guerra de Vietnam hizo que la sociedad estadounidense se pronunciara en contra de las intervenciones armadas de su país, no sólo por principios éticos, sino también por las consecuencias sociales que conllevaba el obligar a ciudadanos a pelear por intereses que no eran suyos. Por ello es que la estrategia fue presentada con el nombre de “Conflicto de Baja Intensidad”. Al sustituir la palabra guerra, por la de conflicto, se pretendía quitar la connotación bélica al término que pudiera provocar el rechazo de la sociedad. En cambio, se buscó introyectar en la mente de los ciudadanos el peligro que este conflicto representaba para Estados Unidos, enfatizando que la participación del país se daba como una forma de “defensa interior en el exterior”. La dimensión ideológica fue un punto fundamental para el desarrollo de la GBI, y se sustentó precisamente en la premisa del peligro que representaba no sólo para el gobierno, sino también (y sobre todo) para los ciudadanos norteamericanos. En este sentido, la administración Reagan fue enfática en declarar que se debía ayudar a combatir al comunismo internacional.¹²¹ Este deber ser, constantemente utilizado por los gobiernos estadounidenses a lo largo de su historia, fue usado también por Reagan con el objetivo de lograr la unidad nacional que permitiera y legitimara sus acciones en Centroamérica. Por ello recurrió en distintas ocasiones a equiparar las acciones de los Contras con las causas máspreciadas no sólo por los estadounidenses, sino por los americanos en general. Como ejemplo tenemos la siguiente declaración de Reagan. “Estos combatientes de la libertad (los Contras) son nuestros hermanos, y nosotros debemos ayudarlos[...] Ellos son el equivalente moral de los padres fundadores y de los bravos hombres y mujeres de la resistencia francesa. No

¹²¹ “El avance del comunismo en el hemisferio” fue un peligro ampliamente difundido durante la década de los ochenta que sin embargo era racionalmente insostenible, tomando en cuenta de que ni siquiera en la Unión Soviética se había logrado alcanzar este sistema.

podemos darles la espalda, porque esta lucha que no es de la derecha contra la izquierda, sino de la derecha contra lo equívoco.”¹²⁵ Los grupos privados usaron los mismos argumentos para recabar fondos. El siguiente texto es una traducción propia, de un anuncio publicado por *the College Republicas National Found*, en Washington, en el año 1985:

CON SÓLO 53 CENTAVOS AL DÍA SE APOYARÁ A UN NICARAGÜENSE LUCHADOR POR LA LIBERTAD. En muchas áreas del mundo existen niños que pasan sus días luchando por sobrevivir. Ellos lloran en la noche pero nadie les responde. Sus padres fueron secuestrados por fuerzas comunistas porque hablaban acerca de la “libertad”. Algunos fueron ejecutados por escuadrones de la muerte, otros recibieron disparos por la espalda, aún otros más murieron en prisiones políticas. A ti esto debe parecerte una pesadilla, algo que podrías ver en el show nocturno. Aquí, en Nicaragua, esto es parte de la vida que yo conozco. Mi nombre es Carlos y soy un nicaragüense contracomunista. Un Contra, luchador por la libertad. Yo he tomado las armas contra el Imperio soviético y contra sus movimientos satelitales en Nicaragua, y necesito tu ayuda. El año pasado, tu Congreso cortó nuestros fondos. Gente como Michael Barnes, Sieven Solerz y Ted Kennedy, quienes clamaban ser “amigos del pueblo”, dijeron que no era ético financiar lo que aquí en Nicaragua es la “voluntad del pueblo”. No existe un “país” llamado Nicaragua. Sólo gente viviendo bajo un régimen totalitario creado por Cuba y la Unión Soviética. ¿No están ustedes, los americanos, comprometidos con los gobiernos del pueblo, para el pueblo? ¿No es esto por lo que ustedes lucharon 200 años atrás? Si es así, por favor ayúdanos. Por 16 dólares al mes, tú puedes llevar democracia a Centroamérica. Alimentos, atención médica, y la oportunidad de votar en elecciones libres y abiertas. Eso es lo que queremos. En América tú tienes mucho. Nuestro propio futuro y el futuro de la democracia en el mundo está en riesgo. Por favor ayúdame a mí y a mis compañeros patriotas. No tenemos mucho tiempo.¹²⁶

¹²⁵ Citado por Bermúdez y Benítez, *op. cit.*, p. 32.

¹²⁶ Anuncio reproducido en *Pensamiento Propio*, año V, núm. 48, enero-febrero 1988, p. 43.

Los resultados obtenidos durante la primera administración, mostraron lo importante de analizar la situación desde ángulos distintos y más amplios, y también con una actitud mucho más flexible. Así, se estaría en posibilidad de corregir a tiempo los errores y dar a la estrategia un cambio de rumbo o de naturaleza, dependiendo de lo que mostraran las diferentes situaciones y los distintos momentos. Esto permitiría también adecuarse a las nuevas estrategias de los movimientos guerrilleros, los cuales adquirirían una fortaleza y una organización cada vez mayores.¹²⁷ Además, se veía la necesidad de utilizar otros métodos independientemente de los militares. La GBI se caracterizó por ser una estrategia global con trabajo multidisciplinario, en el que el elemento político era fundamental para la victoria. El aspecto militar se convertía entonces en un coadyuvante del político: se pretendía acosar al enemigo por medios militares, para que, llegado el momento de las negociaciones, su posición de debilidad le impidiera lograr beneficios significativos. La GBI, en este sentido, no consideraba victorias inmediatas. El triunfo dependería por el contrario del desgaste paulatino del enemigo a través del combate prolongado.

El principal método militar de la GBI consistió en entrenar a las fuerzas locales y dotarlas de armamentos para que combatieran ya fuera a las insurrecciones armadas, o al gobierno establecido, según fuera el caso. Dentro de la nueva política, el aspecto militar era un elemento que, combinado con otros, conduciría a la victoria. Sin embargo, fue aplicado aisladamente desde que Reagan asumió el poder por vez primera. Tan es así, que en 1981 se tuvieron noticias de los primeros asesores militares estadounidenses que llegaron a territorio salvadoreño, para entrenar a las fuerzas armadas de este país en su lucha contra la insurgencia. La primera acción importante que realizó la CIA

¹²⁷ La flexibilidad fue un elemento formal de la GBI, sin embargo, en la práctica fue una política rígida incapaz de detectar y reconocer a tiempo los errores que se cometían.

contra Nicaragua, en este sentido, fue la creación del Frente Democrático Nacional, en el año de 1982, por medio del cual se lograba la unificación de diversos grupos contrainsurgentes. La utilización de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE)¹²⁸ se hizo pública¹²⁹ una vez que se oficializó la GBI, sin embargo, desde 1982 comenzó su reactivación en el interior de Estados Unidos y en julio de 1983 comenzaron a llegar a Centroamérica, con el propósito de entrenar a las fuerzas armadas locales.

Las estrategias de la GBI

Puesto que la situación en los tres países centroamericanos que Reagan consideraba como casos críticos eran sustancialmente diferentes, la GBI consideró tres ejes: 1) la contrainsurgencia, 2) la reversión de procesos y, 3) el terrorismo.

- La contrainsurgencia. Se pensó para los países en donde existieran amenazas a un gobierno establecido, aliado a Estados Unidos, como en el caso de El Salvador y de Guatemala, o una amenaza potencial, aunque fuera incipiente, como en el caso de Honduras.

La tarea de contrainsurgencia requirió de la interrelación de diferentes operaciones además de las militares, como las de inteligencia, las psicológicas, las de asuntos civiles y las de control de la población y recursos, además de la legitimación de las acciones.

- Operaciones psicológicas. Los principales objetivos de este método fueron modificar las relaciones entre los mismos solda-

¹²⁸ Para una descripción detallada de las FOE véase Bermúdez, *op. cit.*

¹²⁹ Bermúdez y Benítez señalan: "El destape público para dicha colaboración (FOE-contras) se da en el último trimestre de 1985, cuando se informa que Contras nicaragüenses y afganos serán los primeros alumnos de una nueva escuela abierta en Boulder, Estado de Colorado, para la enseñanza de técnicas de espionaje y guerra psicológica. Bajo el nombre de Instituto de Estudios Internacionales y Regionales, el nuevo centro cuenta entre sus profesores a ex Boinas Verdes, bajo la dirección del coronel retirado Alexander MacColl". Bermúdez y Benítez, *op. cit.*, p. 24.

dos, con el fin de mantener el ánimo en alto y lograr un mejor desempeño militar; así como cambiar la conducta y la percepción, tanto de la población como de los insurrectos, sobre la guerra y las operaciones militares. Para lograrlo se explotaron las diferencias raciales, étnicas y religiosas, así como la idiosincrasia, deseos, temores y vulnerabilidades de los grupos neutrales u hostiles, y se utilizaron todos los medios de comunicación masiva. El oficial que aplicaba estas operaciones estaba más interesado en los aspectos cotidianos y emocionales, que en los militares. No le importaba la capacidad de armamento, por ejemplo, sino lo cómodo o incómodo que se pudiera sentir un soldado, o los deseos de abandonar la guerra y volver al hogar. En el mismo sentido, se preocupaba más por las posibles rivalidades que surgieran en los enemigos (que pudieran ayudar para provocar desertiones, por ejemplo) que en las tácticas militares que aplicarían.

Para el diseño de estas operaciones se utilizó la “Escuela de Guerra Psicológica” que tuvo tres misiones fundamentales: 1) proporcionar instrucción a residentes y no residentes; 2) contribuir a la doctrina, las tácticas y las técnicas de guerra psicológica, y 3) preparar materiales de entrenamiento para la guerra psicológica, como manuales de instrucción de campo.¹³⁰

El programa de operaciones psicológicas fue quizás uno de los elementos más exitosos de la GBI, debido a que involucró no sólo a la población civil cercana a los territorios en combate, sino a toda la población nicaragüense, y se vinculó con los aspectos negativos generados de la crisis económica. Whittman en 1987 señalaba.

La actual administración norteamericana quiere que —mes tras mes, año tras año— haya filas para el transporte, que haya escasez de alimentos, que la gente sienta el temor de una inminente invasión y que haya luto por familiares caídos en los frentes de guerra, no

¹³⁰ Bermúdez, *op. cit.*, p. 123.

para que el pueblo nicaragüense sienta una ansiedad abstracta y anónima, sino para que esa angustia se traduzca en odio en primera instancia al FSLN, y, posteriormente, al mismo proceso de transformaciones revolucionarias.¹³¹

La complejidad en el diseño del programa de operaciones psicológicas, contrastó con la total carencia de recursos del gobierno sandinista para hacerle frente. En Nicaragua existió un solo centro de atención terapéutica para combatientes y familias de combatientes, lo que ocasionó que la mayor parte de los afectados se encontrara completamente desprotegida y a merced del fuego intenso que representó este aspecto de la guerra.

- Asuntos civiles. Mediante este método, se brindaba a la población servicios que le fueran de utilidad en diferentes aspectos, como la construcción de algún camino, la entrega de alimentos, la prestación de servicios médicos. Con ello se buscaba que la población viera que el gobierno y los oficiales estadounidenses les proporcionaban beneficios, en contraposición a los estragos que representaba el que los insurrectos mantuvieran la guerra. Se buscaba también la asignación de recursos, por parte de instituciones internacionales y gobiernos aliados, ya que dentro de este rubro se destinaron fondos para ayuda humanitaria a desastres internacionales, en los cuales se incluía tanto a los actos de la naturaleza, como a los del hombre.

- Control de la población y de los recursos. A través de estas operaciones se pretendía quitar a los revolucionarios la base de apoyo social y provocar deserciones dentro de éstos que pudieran, incluso, adherirse a las fuerzas contrarrevolucionarias. No obstante, dentro de este rubro también se realizaron acciones que sembraron en la población un profundo temor, como los reasentamientos forzosos y la incorporación obligada a las tareas de defensa.

¹³¹ Earl Whittman, "El Stress en Nicaragua: una guerra de nervios", en *Pensamiento Propio*, Managua, CRIES, p. 47.

- La reversión de procesos. Este eje se aplicó para el caso de Nicaragua. Se pretendía derrocar al gobierno establecido, mediante el entrenamiento y la entrega de armamento a la Contra.

La palabra “desestabilización” comenzó a utilizarse un año después de derrocado el gobierno de Salvador Allende. El término reversión, sustituyó al de desestabilización, diferenciándose en principio en el hecho de que el segundo se usó de una manera encubierta. La reversión, en cambio, se convirtió en una política de Estado abiertamente reconocida y avalada por el Congreso.

Para la legitimación de las acciones aplicadas a través de este eje, se argumentó el derecho que tenía Estados Unidos para defenderse de la amenaza comunista (se llegó incluso a sostener que se realizaban como una medida de defensa legítima, de acuerdo con la carta de la ONU y de la OEA), así como el deber que tenía de ayudar a un pueblo a recuperar su libertad.

El apoyo que Reagan dio a la Contra puede ubicarse en dos etapas. En la primera administración el objetivo fue crear un ejército con una fuerza suficiente para enfrentarse con el gobierno sandinista. Para ello se recurrió al grupo de ex guardias nacionales somocistas, que tras el triunfo de la revolución se había trasladado a territorio hondureño. Este grupo no habría representado tantos problemas para el gobierno sandinista, de no haber sido por la intervención del gobierno norteamericano. En noviembre de 1981 el Congreso autorizó la canalización de 19 millones de dólares para la creación de una fuerza antisandinista formada por 500 hombres. Reagan autorizó que la CIA desarrollara un programa para dotarlos de financiamiento y entrenamiento. A partir y alrededor de ello, se crearía toda una estrategia que tendría graves consecuencias para el gobierno de Nicaragua, y también para Honduras y Costa Rica; países en donde se establecieron las bases de operaciones desde las cuales la Contra realizaría sus ataques. Una medida muy importante que lograría la constitución de una verdadera fuerza militar fue la unificación de los distintos grupos que existían en un solo cuerpo (el Frente Democrático Nicaragüense). Esto no le

fue muy difícil llevar a cabo a la CIA, debido a que los principales líderes habían sido prominentes personajes de la política y/o del sector comercial y financiero durante el régimen somocista, con antiguos vínculos con el sistema de poder estadounidense. Podría decirse, en este sentido, que se continuaba una relación iniciada desde hacía tiempo. Además, el hecho de que estos líderes se hubieran trasladado a Estados Unidos (principalmente a Miami) tras el triunfo sandinista, facilitaba aún más las cosas. El apoyo otorgado a la Contra tuvo las características de las acciones realizadas durante la primera administración de Reagan: su naturaleza de encubrimiento. Los fondos autorizados por Reagan para la constitución de la Contra no formaron parte de una política oficial y reconocida, puesto que no fueron autorizados por el Congreso del país. Por ello fue también que en un principio el gobierno de Reagan prefirió apoyar a los militares argentinos, que desde 1980 habían comenzado el entrenamiento de los ex guardias somocistas, sin intervenir de manera directa. Cuando en 1982 los militares argentinos retiraron su ayuda a la Contra (a raíz del apoyo norteamericano a la Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas), el involucramiento de Estados Unidos se volvió más constante, organizado y directo.

La labor del gobierno estadounidense se centró en la organización, entrenamiento y profesionalización del nuevo ejército. Asimismo, creó toda la infraestructura¹³² y la logística desde y con la cual habría de operar éste y se le dotó de armamento y equipo

¹³² Ejemplo de esta infraestructura es lo siguiente: "En Honduras, el cuartel general de las tropas norteamericanas se encuentra en Palmerola, en el centro del país. Se terminó de instalar durante las maniobras, Pino Grande III, efectuadas en agosto de 1983, y cuenta con 1 200 efectivos permanentes (900 pertenecientes a servicios del cuartel y 300 al Batallón 224 de Inteligencia Militar). Está también (CREM), en Puerto Castilla, donde se entrenan soldados hondureños. Igualmente se han construido o remodelado 11 aeropuertos —convirtiendo a Honduras en la porción del territorio latinoamericano con mayor densidad de aeropuertos por km²— así como dos estaciones de radar —una en el Golfo de Fonseca y otra en el cerro La Mole—. Bermúdez y Benítez, *op. cit.*, pp. 81-82.

de alta sofisticación, modernidad y efectividad. A pesar de que los esfuerzos se centraron en el entrenamiento de los ejércitos locales, no se descartó por completo la presencia de asesores y de efectivos militares en las zonas y en los momentos de combate.

En julio de 1985, primer año de la segunda administración de Reagan, el Congreso autorizó la cantidad de 27 millones de dólares de ayuda "humanitaria" para los Contras. En 1986, se aprobaron 100 millones de dólares, de los cuales, 70 fueron abiertamente para apoyo militar. Con ello, y con la aplicación de la nueva estrategia representada por la CBI, Reagan arremetía con mayor violencia, recursos, organización y legitimidad en su objetivo de derrocar al gobierno sandinista.

Las acciones de la Contra se caracterizaron desde el inicio de sus operaciones por ser más terroristas que bélicas.¹³³ Se focalizaron principalmente contra la infraestructura económica y de comunicación del país, así como contra la población civil. En este último sentido, un blanco socorrido fueron centros de salud y enseñanza, que los sandinistas intentaban impulsar como parte integral de su nuevo tipo de gobierno y que por lo tanto su instauración y mantenimiento tenía una gran importancia

¹³³ Daniel Ortega da los siguientes datos: "Entre 1980 y el 4 de septiembre de 1985, las fuerzas organizadas y dirigidas por la CIA han asesinado a 3 652 personas, de las cuales, 146 son mujeres y 210 niños menores de doce años. Han herido a 4 039, han secuestrado 5 232 personas, más de 240 mil nicaragüenses han quedado sin hogar, a lo que habría que sumar 7 582 niños huérfanos de guerra. Además, miles de campesinos secuestrados, confundidos y engañados, han caído en las filas contrarrevolucionarias; ellos también son nicaragüenses víctimas de la agresión: 7 599 muertos y 1 326 heridos[...] Si el país que nos agrede tuviera que enfrentar hoy en día un costo proporcional en víctimas, tendría un total de 723 mil muertos, casi tres veces más que todos los norteamericanos caídos durante la segunda guerra, o bien, toda la población de la ciudad de Boston; tendría asimismo, 373 mil heridos y 15 millones 550 mil habitantes desplazados, o sea, toda la población del estado de Nueva York, y habrían sido asesinados nueve mil mujeres y quince mil niños menores de doce años. Las acciones terroristas de los gobernantes norteamericanos han significado la destrucción de 321 escuelas y 50 centros de salud, maquinarias y equipos de construcción, cooperativas campesinas e incluso poblados enteros han sido arrasados por los mercenarios de la CIA". Ortega, *op. cit.*, pp. 128 y 129.

ideológica.¹³⁴ Los Contras se caracterizaron también por la saña y la violencia extrema que utilizaban en sus ataques. Sin embargo, esta violencia no fue indiscriminada. El objetivo era ejercerla de forma tal que provocara el más intenso sufrimiento físico y el mayor terror de la población, como forma de disuadirla de su apoyo al gobierno constituido. El tipo de violencia ejercido es comparable con el registrado durante los peores años de dictaduras militares latinoamericanas, las que también recibieron asesorías y apoyos directos por parte de Estados Unidos. Todo ello provocó que la Contra se hiciera acreedora a amplias y múltiples denuncias por parte de organismos internacionales de derechos humanos (muchos de ellos estadounidenses) que presentaron pruebas contundentes sobre las violaciones masivas y sistemáticas a derechos humanos. Estas pruebas fueron presentadas incluso ante el Congreso norteamericano.

Como parte de la puesta en marcha de la GBI, a partir del segundo periodo del mandato de Reagan se intentó con más fuerza mejorar la imagen negativa de la Contra. En agosto de 1985, se anunció la creación de un Comité de la Cruz Roja, de una Comisión de Derechos Humanos, de una Fiscalía General y de Tribu-

¹³⁴ Bardini, señala de ello: "En cinco años (1980-85), la población civil constituyó el principal blanco de ataque de los *contras*. Asimismo, la mayoría de incursiones armadas, atentados y sabotajes también se realizó contra objetivos civiles: pequeños poblados campesinos, carreteras y puentes, centros de producción y cooperativas agrícolas, escuelas y locales de asistencia médica. Según reportes del ministerio de Defensa, la acción contrarrevolucionaria por tierra, mar y aire en ese periodo arrojó el resultado de casi 3 mil 500 niños y adolescentes secuestrados, heridos o asesinados, y alrededor de 6 mil huérfanos de guerra. En ese mismo tiempo se produjeron casi mil asesinatos de civiles, 232 secuestros de pobladores rurales, 345 emboscadas a vehículos particulares y del Estado, y 640 sabotajes a objetivos económicos. Sólo entre enero y mayo de 1985 los *contras* asesinaron, hirieron o secuestraron a 27 brigadistas de salud y 246 maestros populares, destruyeron 20 centros médicos y 14 escuelas, y obligaron al cierre de 359 locales de enseñanza primaria y 840 colectivos de educación para adultos[...]. Hay otro elemento para tomar en cuenta acerca de 'los luchadores de la libertad': 500 mujeres violadas en cinco años, la mayoría casi niñas". Roberto Bardini, *Monjes, mercenarios y mercaderes. La red secreta de apoyo a los contras*, México, Editorial Mex-Sur, 1988, pp. 68 y 69.

nales de Excepción y Apelación. Con estos hechos se pretendía colocar a la guerra y a las acciones de la Contra dentro de un marco de legalidad que legitimara el apoyo del gobierno norteamericano. No obstante, puesto que se trató de medidas formales sin contenido, orientación, ni bases reales, no se obtuvo el efecto deseado. En realidad, no sólo los estratos bajos de la Contra realizaban actos contra la ley. Sin embargo, el tipo de acciones y, sobre todo, el monto de las ganancias dependía del nivel en que estuviera el que las realizara. Podría decirse en este sentido que el grado y la forma de ilegalidad dependieron de las posibilidades de cada estrato. Los soldados realizaban actos de terror contra sus connacionales. Pero ellos mismos eran victimizados en tanto libraban una lucha en la que llevaban todas las de perder. No sólo peleaban para alcanzar objetivos de un gobierno extranjero, sino que además lo hacían en pésimas condiciones. La guerra en Nicaragua fue un excelente negocio para una gran cantidad de personas, entre las que no se encontraron los soldados. Mientras que los líderes se hallaban en Estados Unidos, gozando de una vida no sólo segura y llena de lujos, los soldados no contaban ni siquiera con las condiciones mínimas en cuanto a alimentación y vestido. Sus sueldos, además, de ninguna manera compensaban lo que arriesgaban.¹³⁵ Salvador Aranda Mairena, ex contra, relata en este sentido:

Fue en mayo de 1983[...] yo necesitaba urgentemente un dentista. No podía soportar más el dolor de muelas. Mis superiores me dijeron que no había dinero para cosas personales. No tenía más opción que ir a buscar a un sobrino a San José para que me prestara el dinero para el dentista. Cuando iba para allá, vi al grupo de nuestros líderes entrar en un lujoso club nocturno con unos amigos. Ellos viajaban en lujosas limusinas, pero no tenían dinero para enviarme con un dentista.¹³⁶

¹³⁵ Cuando en Estados Unidos el sueldo mínimo era de un dólar con 35 centavos la hora, en Nicaragua cada contrarrevolucionario ganaba un dólar diario. Bardini, *op. cit.*, p. 73.

¹³⁶ Entrevistas realizadas por Eich y Rincón, *The Contras...*, pp. 110-111.

La red de corrupción fue tan amplia que no pudo haber operado sin la intervención o por lo menos sin la complacencia pasiva de las altas esferas del gobierno estadounidense. Dos casos evidencian esta posición gubernamental. El apoyo del gobierno hacia actos corruptos de los líderes contrarrevolucionarios puede ilustrarse en el caso del desvío de fondos autorizados en julio de 1985 por el Congreso, para ayuda humanitaria a la Contra. El hecho de que tan importante cantidad de dinero estuviera en las cuentas privadas de los líderes y que no se hubiera utilizado con el objetivo autorizado por el órgano legislativo, hubiera ameritado, por parte del gobierno, un castigo severo para los responsables. En cambio, la administración Reagan optó por mantener el apoyo a individuos que no sólo estaban cometiendo fraudes frente a los soldados Contras, sino también frente a los poderes legislativo y ejecutivo (que eran quienes habían solicitado y aprobado respectivamente los recursos) y frente a los ciudadanos norteamericanos (de cuyos impuestos provenían éstos). El temor de ser asociados con este tipo de delincuentes,¹³⁷ no detuvo a Reagan para bloquear las investigaciones iniciadas por la Oficina General de Contabilidad (organismo fiscalizador de los gastos públicos autorizados por el Congreso), que en diciembre de 1986 señaló que era imposible seguir la huella de los recursos desviados.

No obstante, existieron diversos hechos ilícitos en los que el gobierno tuvo una participación directa. El más constante fue la canalización de recursos económicos hacia el gobierno de El Salvador o hacia los contrarrevolucionarios, a espaldas del Congreso o inclusive a pesar de la prohibición expresa de éste.

¹³⁷ Lo mismo sucedió con respecto a El Salvador: "En nombre de la victoria sobre la izquierda, la administración Reagan ha abierto el tesoro de los Estados Unidos a los congénitamente corruptos cuerpos oficiales salvadoreños. Estos ahora gozan de accesos a dinero inimaginables; dinero apropiado por medios tanto legítimos como ilegítimos". Ernest Van Den Haag y Tom Farer, *U.S. Ends and Means in Central America*. A Debate, Nueva York, 1988, p. 172.

La mayor parte de las acciones realizadas durante la primera administración constituyó actos encubiertos fuera o en contra de la ley norteamericana. Sin embargo, durante el segundo periodo estas acciones no sólo continuaron, sino que se volvieron más complejas e involucraron a más instancias oficiales. En octubre de 1986, por ejemplo, el senador demócrata John Kerry divulgó un informe en el que se daba cuenta de una red de corrupción entre contrarrevolucionarios, traficantes de drogas y de armas; y grupos de ayuda privada a los primeros. En él se afirmaba que esta red estaba dirigida por el teniente Oliver North, subdirector de Asuntos Políticos y Militares del Consejo Nacional de Seguridad. No obstante, el caso ilícito de mayor gravedad, tanto por las pruebas presentadas, como por los actores involucrados; los valores jurídicos, políticos e ideológicos contra los que atentó; el tiempo en que fue realizado de manera encubierta fue, sin duda, el conocido como *Contra-gate*.

La administración Reagan no sólo violó el derecho interno de su país, sino también el internacional. En 1982, rechazó la resolución emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU (en relación con una denuncia presentada por Nicaragua contra Estados Unidos), en la que se llamaba a todos los estados a respetar el derecho internacional y a no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. En 1986 rechazó el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia, en el que se condenaba a Estados Unidos por el uso ilegal de la fuerza en Nicaragua, y se le ordenaba detener las agresiones y pagar las reparaciones a los daños ocasionados.

• El antiterrorismo. La Casa Blanca tuvo la habilidad de utilizar un concepto lo suficientemente amplio y ambiguo, como para que pudiera incluirse prácticamente cualquier situación y pudieran realizarse acciones intervencionistas en nombre de la defensa ante él. Mediante este eje, se pretendió convencer a los ciudadanos y al Congreso, del peligro que enfrentaba Estados Unidos y de la obligación que tenía el gobierno para vencerlo. Así, Reagan pudo definir a Nicaragua como un Estado terrorista: “Irán, Libia,

Cuba, Nicaragua y Corea del Norte constituyen una Confederación de Estados Terroristas dirigidos por degenerados, inadaptados, locos y escuálidos delincuentes".¹³⁸

El aspecto económico

El aspecto económico fue utilizado como un arma sumamente eficiente que la administración Reagan aplicó con una gran energía, como parte de su política hacia la región. La posición que el gobierno del norte tomó respecto a la situación económica centroamericana dependió del objetivo que tuviera para cada caso. Así, utilizó todos los medios posibles a su alcance para reactivar la economía de países como El Salvador y Guatemala y para destruir la de Nicaragua. Respecto a El Salvador, Estados Unidos canalizó recursos económicos directamente del gobierno y, además, logró que organismos internacionales, gobiernos de ciertos países y la banca privada de Estados Unidos autorizaran créditos. Esta ayuda económica tenía el propósito de evitar a toda costa que la economía salvadoreña colapsara. En forma similar, pero en sentido inverso, se reaccionó respecto a Nicaragua. La medida más drástica fue el decreto de un embargo económico total. Además, bloqueó una gran cantidad de créditos para fines de desarrollo que el gobierno de Nicaragua solicitó a organismos internacionales, y pidió a inversionistas privados que retiraran sus fondos de este país y a banqueros que dejaran de funcionar en él. Las consecuencias sociales que el sabotaje a la economía provocó en el nivel interno fueron también utilizadas por la administración del norte para provocar descontento y rechazo de la población hacia el gobierno sandinista.

La política estadounidense aplicada sobre Centroamérica trajo para la región graves consecuencias económicas, de las cuales hasta la fecha no se ha podido recuperar. Las consecuencias fueron adversas tanto para los países que recibieron la ayu-

¹³⁸ Citado por Bermúdez, *op. cit.*, p. 194.

da, como para el que fue objeto de bloqueo y de agresiones económicas. En el primer caso los resultados fueron negativos debido a que el apoyo consistió en medidas asistencialistas e inmediatas, que tenían como objetivo impedir que el gobierno aliado colapsara y con ello se facilitara a los grupos enemigos la llegada al poder. El objetivo de las acciones era primordialmente político y no se buscaba en realidad reactivar la economía o impulsar un proyecto a largo plazo que se mantuviera y se desarrollara. Por lo que se refiere a Nicaragua, las consecuencias de la guerra a la economía fueron inmensos. Además de los daños concretos y cuantificables que causó la guerra, se debe tomar en cuenta lo que el gobierno sandinista dejó de hacer por canalizar la mayor parte de sus recursos (económicos, humanos, políticos, diplomáticos) a la defensa. Estados Unidos no hubiera podido lograr el desarrollo económico real y sostenido de los países a los que apoyaba (aun cuando ésta hubiera sido su intención), debido a que las economías de los países centroamericanos siempre han estado interrelacionadas. De esta manera, las medidas que tomó en contra de la economía nicaragüense afectaron en diversas formas a los otros países de la región.

La Guerra de Baja Intensidad fue denominada de este modo, en razón de que no implicó para el gobierno de Estados Unidos la movilización del grueso de sus tropas. El objetivo era desgastar lentamente al enemigo, por lo cual también se previó que su duración fuera larga.¹³⁹ Sin embargo, la “baja intensidad” operó solamente para Estados Unidos, ya que para los países centroamericanos, significó pérdidas incalculables no sólo en lo que a personas muertas, heridas, refugiadas o desplazadas se

¹³⁹ En este sentido pueden observarse las contradicciones e inconsistencias de las políticas de Estados Unidos. Por un lado tomaba en cuenta que el conflicto con los países centroamericanos sería prolongado. Por otro, en innumerables ocasiones tanto Reagan como los funcionarios de alto nivel dentro de la política hacia C.A., expresaron su confianza en que el enemigo sería derrotado de una forma rápida.

refiere, sino también a los daños que causó a la economía. Un elemento que no puede ser cuantificado pero que tiene serias consecuencias para el desarrollo de un país, es el cambio en los valores y en la mentalidad de las personas que viven una situación de guerra durante un tiempo tan prolongado.

Preponderancia del método militar

A pesar de que, como hemos visto, la guerra que emprendió Estados Unidos en Centroamérica tuvo tácticas variadas (operaciones psicológicas, servicios sociales, etc.), el método militar siguió siendo el que mayor importancia tuvo y al que podría considerarse como eje de las demás acciones.

Los lineamientos de la GBI recomendaban como última opción la intervención armada directa en Nicaragua. No obstante, el gobierno de Reagan en numerosas ocasiones se encargó de presentar la intervención como una posibilidad real e inmediata, como una forma de amedrentar al gobierno sandinista. Especialmente cuando Estados Unidos invadió Granada, en octubre de 1983, y cuando bombardeó Libia, en abril de 1986,¹⁴⁰ la amenaza se hizo más temible.

Desde un primer momento, Estados Unidos se opuso terminantemente a cualquier posibilidad de solucionar el conflicto mediante la negociación política. Cada vez que se presentaba la oportunidad de diálogo, respondía negativamente expresando su confianza en vencer rápidamente al enemigo. Dentro de los lineamientos teóricos de su política sí se consideraba la posibilidad de una negociación, sin embargo, inclusive en ésta el elemento militar era el predominante: se buscaba desgastar al enemigo hasta colocarlo en una posición de debilidad que le impidiera lograr beneficios significativos. En la práctica, Reagan

¹⁴⁰ Había motivos suficientes para que el gobierno nicaragüense temiera acciones similares sobre su territorio, dado que en las altas esferas del gobierno de Reagan frecuentemente se había relacionado a Nicaragua con Libia.

se opuso a las propuestas en este sentido, incluso de actores tan importantes como el secretario de Estado George Shultz, quien en determinados momentos intentó aplicar una política de acercamiento. La Casa Blanca no sólo se negó a ello, sino que, además, presionó de todas las formas posibles a los presidentes aliados, cuando daban muestras de desear poner fin a la guerra mediante la negociación. El aspecto económico fue la forma más socorrida y más efectiva de presión y/o de disuasión.¹⁴¹

Esta posición fue una constante desde el inicio de la administración de Reagan. En el año de 1984 pareció que el gobierno de Estados Unidos mostraba cierta flexibilidad, al acceder a participar en los diálogos de paz promovidos por México, e iniciados el 18 de enero de ese año, en la ciudad de Manzanillo. No obstante, pronto se vio que con esta postura en realidad Reagan buscaba dar una imagen de apertura que le beneficiara en los siguientes comicios electorales, en los cuales buscaba la reelección. Los diálogos se suspendieron a principios de 1985, es decir, una vez que ya la había obtenido. En ese mismo año, George Shultz declaró, incluso, que su gobierno seguiría ayudando a la Contra, aun cuando se firmara la paz.

La negativa de Estados Unidos para lograr cualquier tipo de acuerdo a través de las negociaciones y del diálogo se sostuvo, incluso, durante el gobierno de George Bush, quien mantuvo hacia Nicaragua las mismas políticas que su predecesor. Éstas continuaron siendo las mismas cuando los sandinistas ya habían perdido las elecciones y habían aceptado la derrota y prometido la transferencia pacífica del poder. Sólo después del 25 de abril de 1990, fecha en la que Violeta Chamorro tomó posesión de la presidencia, cesaron las hostilidades de Estados Unidos y se reinició la relación de dependencia y sumisión que había sido suspendida durante el desarrollo de la revolución sandinista.

¹⁴¹ Drago señala que Napoleón Duarte, al negarse a firmar el acta de paz de Contadora, en junio de 1984, confesó: "Estoy de acuerdo en hacerlo, pero si firmo Reagan nos suprimirá su ayuda económica y sin ella mi gobierno no aguantaría ni una semana". Drago, *op. cit.*, p. 37.

Las políticas desarrolladas durante el gobierno de Reagan permitieron el fortalecimiento de un sector que ha representado para los países centroamericanos un obstáculo para su consolidación como verdaderos estados nacionales. El ejército junto con la Iglesia fueron los dos poderes que rigieron la vida de estos países cuando alcanzaron la independencia. La segunda perdió fuerza como poder institucional conforme se desarrollaba en la región un estilo muy particular de liberalismo. Sin embargo, con las fuerzas armadas sucedió lo contrario, ya que se convirtieron en el componente más fuerte del poder político. Durante la década de 1980, en los países apoyados por Estados Unidos, esta fortaleza aumentó en forma considerable. Por un lado, el número de efectivos tuvo un gran crecimiento. Se perfeccionaron las técnicas de ataque y la capacidad para desarrollar tácticas y estrategias. Se aumentó y mejoró el armamento y, en general, toda la infraestructura y logística militar. Por otro lado, debido a que la vida de la región giró en torno a la guerra, el aspecto militar adquirió mayor importancia de la que ya tenía y su poder en la esfera política se hizo también más grande. Incluso en Costa Rica, país que desde 1949 tenía prohibido constitucionalmente la creación de una fuerza armada regular, Estados Unidos ocasionó el fortalecimiento de la vida militar. Con la intención de proteger las fronteras, presionó de diversas formas para mejorar las capacidades de la Guardia costarricense.

Durante esta década, las fuerzas armadas de los países centroamericanos aparentemente se subordinaron a las decisiones de Estados Unidos. De él dependieron en todos los sentidos y a él se debió el fortalecimiento que alcanzaron. Esta subordinación, no obstante, parece ser que se dio exclusivamente con fines utilitarios y cuando los objetivos de ambas partes coincidieron plenamente. Cuando se trató de combatir a la insurgencia "comunista", las fuerzas armadas locales no dudaron en seguir fielmente las instrucciones. Sin embargo, en los pocos momentos en que el país del norte pidió a los ejércitos una conducta menos brutal, éstos reaccionaron con una gran capa-

cidad de “autonomía”, negándose a cumplir las peticiones. Los cuerpos militares se resistieron a aceptar procesos mínimos de depuración, cuando probadamente se encontró que sus integrantes fueron responsables de determinadas violaciones a los derechos humanos. Esta posición puso en apuros al gobierno de Reagan en más de una ocasión, pero no tuvo la habilidad para cambiarla.

En el nivel ideológico, y como parte del fortalecimiento del ejército, el gobierno de Reagan logró que la derecha conquistara todos los espacios de poder. Esto motivó que las políticas represoras y cerradas continuaran imponiéndose en la región. La justificación que Reagan utilizó con mayor vehemencia para intervenir en el conflicto centroamericano fue la necesidad de construir sistemas democráticos y de promover la libertad. Sin embargo, sus políticas ocasionaron que en Centroamérica se impidiera cualquier tipo de movimiento que representara un contrapeso a las ideas y a las políticas conservadoras y represivas y a la monopolización del poder. Este contrapeso hubiera permitido la paulatina participación de los sectores marginados en la escena política y con ello, se habrían abierto espacios que les permitieran mejorar su nivel de vida. Estados Unidos se opuso terminantemente a la realización de coaliciones tendientes a lograr el equilibrio de fuerzas. Promovió la división de uniones laborales, campesinas, e impulsó la hostilidad hacia cualquier movimiento o idea de la izquierda.

La posición del Congreso y de la sociedad

En la política de agresión que desarrolló Reagan hacia Centroamérica la actuación del Poder Legislativo fue fundamental. Apparently, existió en este poder un constante rechazo hacia las acciones del Ejecutivo. Sin embargo, en la revisión de las acciones y las posturas en lo concreto, nos podemos dar cuenta de que esta oposición fue más de forma y que existía, en realidad, un consenso en el fondo de esta política, en los objetivos que se al-

canzarían y en las razones que tenía el país para llevarla a cabo. Especialmente durante la segunda administración de Reagan, las acciones hacia la región se convirtieron en una política integral de Estado. Las divergencias que se dieron en el interior del Congreso y entre éste y el Ejecutivo radicarón principalmente en la forma de desarrollarla y fueron producto muchas veces de una medición de fuerza entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Durante el proceso de aprobación de 100 millones de dólares para la Contra, en 1986, las discusiones giraron básicamente en la eficacia de ésta para combatir al gobierno sandinista. De haber existido una real oposición a la política de Reagan, la discusión de fondo habría sido la legitimidad que tenía el país para intervenir en este conflicto. Es de extrañar, dada la cantidad y la calidad de pruebas (obtenidas y valoradas incluso por órganos internos del mismo Poder Legislativo) sobre las violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos, por parte de los actores a los que iba destinada la ayuda, que se discutiera y casi se aprobara, en ese mismo momento, la autorización del Legislativo para el reinvolucramiento de la CIA en la guerra en Nicaragua, el entrenamiento militar de la Contra por personal del Pentágono, y el suministro de armas pesadas. Podría decirse, en este sentido, que las decisiones más importantes tomadas por Reagan fueron realizadas con la aprobación del Congreso, y que las que se hicieron a espaldas, o en contra de la autorización de éste no tuvieron las represalias que el sistema jurídico y político de Estados Unidos prevén para desacatos de tal magnitud. Los desacatos, por el contrario, en muchas ocasiones fueron no sólo ignorados o tolerados sino, incluso, premiados. En 1989, tras el asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana, una investigación del Congreso encontró que “toda la unidad que presuntamente ejecutó los asesinatos se encontraba participando en un ejercicio de entrenamiento norteamericano dos días antes de la masacre”. No obstante la gravedad de la acusación y de las pruebas con que se sustentaba, el Congreso decidió continuar con la ayuda militar otorgada a El Salvador.

Con la sociedad sucedió algo parecido. Es cierto que existió una gran cantidad de individuos y organizaciones que activamente pidió un cambio en la política de su país hacia Centroamérica. En los círculos intelectuales y académicos hubo personas que se pronunciaron en contra de la política oficial y elaboraron importantes propuestas alternativas a ella. Asimismo, diferentes grupos (especialmente religiosos y de derechos humanos), pidieron el cese de hostilidades y ayudaron a los refugiados centroamericanos que llegaban a territorio estadounidense, lo cual sirvió como base de mayores movimientos, que buscaron sensibilizar e involucrar a un mayor número de personas en la lucha contra la política norteamericana. Existieron también organizaciones que no centraban sus protestas en el daño que el país estaba haciendo en Centroamérica, sino en la gran cantidad de dinero que se estaba gastando, y que podría utilizarse de forma más justa en los servicios sociales destinados a los sectores más desprotegidos económicamente que existían en su país. Sin duda, las personas que mostraron un compromiso de manera más clara y decidida fueron quienes viajaron a los países en conflicto, para tratar de ayudar a los sectores afectados por las acciones de Estados Unidos. Muchas de ellas fueron, a su vez, víctimas directas de estas acciones, ya que resultaron heridas o muertas.

No obstante, la cantidad de personas involucradas en estos movimientos fue muy reducida en relación con el grueso de la población estadounidense. La gente promedio no sólo no estuvo comprometida para exigir un cambio en la política de su gobierno, sino ni siquiera medianamente informada. Es cierto que las encuestas de opinión mostraron el rechazo mayoritario de la población hacia la posición de Reagan respecto a Centroamérica, sin embargo, este rechazo no se materializó en acciones que verdaderamente hubieran tenido una influencia para el cambio de política. El norteamericano promedio de esta década siguió viéndose a sí mismo como el habitante del país mesiánico encargado de llevar la buena nueva de la libertad y la democracia a los pueblos oprimidos. De haberlo deseado, hubiera tenido

a su alcance infinidad de pruebas que le mostraran los verdaderos alcances de las acciones de su gobierno.¹⁴² Sin embargo, siguió aceptando la versión oficial que catalogaba a los estadounidenses no sólo como los más buenos, sino también como los más capaces y los más poderosos. En este último sentido, se vanaglorió de los métodos de guerra sofisticados usados por su gobierno, y permitió que el nuevo prototipo de superhombre (difundido especialmente a través del cine y de la televisión) fuera insertado en los valores de su sociedad.¹⁴³ El hecho de que el pueblo hubiera elegido a Reagan para un segundo periodo presidencial muestra o la desinformación del electorado, o su preocupación predominante (sino no es que exclusiva) por los asuntos internos: no importaba si el gobierno cometía, incluso, actos de terrorismo contra un país pobre, si era capaz de hacer crecer la economía estadounidense. La comparación entre lo sucedido con el presidente Nixon durante el *Watergate* y lo acontecido con Reagan durante el *Contragate*, muestra la importancia que los estadounidenses dan a la política interna. Reagan no sólo no fue obligado a renunciar, como sucedió con Nixon, sino que inclusive fue reelegido.

El papel de los medios de comunicación fue un factor fundamental en la posición que la mayoría de la sociedad tuvo

¹⁴² Farer señala: "la relación entre Estados Unidos y la mayoría de los países latinos del Caribe ha sido hegemónica durante cuando menos cien años, si no es que durante mucho más tiempo. No creo que esta proposición sea un tema de discusión respetable entre la gente que conoce los antecedentes históricos. Y sin embargo, no es parte del patrimonio consciente de la forma de gobierno norteamericana. Inclusive controversia entre la élite política de Estados Unidos. Muy pocos norteamericanos se ven a sí mismos apoyando una política exterior imperialista". Farer, *op. cit.*, p. 28.

¹⁴³ La violencia se vio como parte intrínseca de este nuevo prototipo. Por ello no es de extrañar que se pudieran hacer públicamente declaraciones como la siguiente: "nuestro trabajo es matar gente y destruir cosas[...] Somos asesinos, no entrenadores" (Declaración hecha al periódico *The Washington Post* por el teniente coronel W.B. Taylor, comandante del 1º Batallón de Ranges. Citado por Bermúdez, *op. cit.*, p. 218.

respecto a Centroamérica. Chomsky y Edward¹⁴¹ realizaron un seguimiento minucioso de artículos y noticias aparecidas en los principales periódicos estadounidenses en 1980, relacionados con víctimas tanto de países aliados como enemigos del gobierno. Encontraron que la prensa dio un trato sustancialmente diferente que dependió de la relación del país de origen, de la víctima con Estados Unidos. Las noticias de víctimas de países enemigos eran presentadas con gran indignación, se asumía desde el principio que el responsable había sido el gobierno. Daban detalles de cómo se había perpetrado el asesinato y datos personales de la víctima, se enfatizaban aspectos emocionales, y se exigían las investigaciones a fondo y la aplicación de justicia. Por el contrario, las noticias de víctimas de países aliados, cuando aparecían, eran presentadas de forma ambigua, sin mención de los responsables y de una manera impersonal, se hacían parecer las muertes como parte del sistema de violencia generalizada. Las noticias se presentaban a través de frases ambiguas y comúnmente en forma pasiva como: “se cree”, “se considera”; eran despojadas de cualquier referencia personal de la víctima y de cualquier otro elemento emotivo. El mismo tema fue tratado de manera diferenciada dependiendo de la relación que se mantuviera con cada país. En el caso de Nicaragua, se presentaba al gobierno como persecutor de la Iglesia y de la libertad de religión. Sin embargo, en los casos de Guatemala y de El Salvador, se guardaba silencio ante los asesinatos a religiosos. Incluso la muerte del arzobispo Arnulfo Romero y de cuatro monjas estadounidenses fue tratado con indiferencia. El tema electoral tuvo el mismo tratamiento. En el caso de El Salvador, se dieron los datos proporcionados por el gobierno, presentándolos de manera textual, lo cual por supuesto no ocurrió con las elecciones nicaragüenses. En este último caso, se

¹⁴¹ Noam Chomsky y Herman Edward, *Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas*, Barcelona, Grijalbo, 1990.

invirtieron totalmente los parámetros utilizados en las elecciones salvadoreñas: el FMLN era “las fuerzas rebeldes”; la Contra “fuerzas insurgentes” o, incluso, “el grueso de la oposición”. En Nicaragua se citó ampliamente a la jerarquía de la Iglesia y a integrantes de la oposición, guardando silencio respecto a la opinión del gobierno. En El Salvador, sólo se dio voz a éste, y se omitió cualquier referencia a grupos de derechos humanos, a representantes del FMLN, o a religiosos. En las pocas veces que se daba espacio a la opinión de éstos, se hacía de manera incriminatoria. Así, el *Time* señaló que “Americas Watch, controvertido grupo al que con frecuencia se acusa de simpatizar demasiado con la izquierda, afirma que Guatemala es un país de prisioneros” (p.191). El tema de la libertad de expresión es también analizado. Para el caso de Nicaragua, se presentaba a “La Prensa” continuamente acosada, perseguida y limitada por el gobierno, pero se omitía cualquier dato referente a los periodistas nacionales e internacionales presos y asesinados en países como Guatemala y El Salvador.

LA POLÍTICA MIGRATORIA

La política migratoria que Estados Unidos mantuvo durante la Guerra Fría estuvo directamente determinada por el tipo de relación que tuviera con los países de los cuales sus inmigrantes fueran originarios. Puede señalarse, en este sentido, que prácticamente diseñó una política migratoria especial para cada país. Los inmigrantes provenientes de países socialistas, y muy especialmente los provenientes de Cuba, obtenían la calidad de refugiados automáticamente, y además gozaban de condiciones adecuadas de recepción en un primer momento, y de desarrollo integral con posterioridad. Así, por ejemplo, los cubanos asentados en Miami, comenzaron a edificar un emporio que serviría como modelo propagandístico de las “bondades” del sistema capitalista. No sólo se les recibía libremente en el territorio de Estados Unidos, sino que incluso se aceptaba y en muchos casos propiciaba su inserción

dentro de la política, de los medios de comunicación, de la cultura. Otra ha sido la situación de los puertorriqueños. La relación de dependencia que Puerto Rico ha tenido respecto a Estados Unidos ha obligado a éste a recibir a los migrantes puertorriqueños. No obstante, por su escasa utilidad como arma propagandística, Estados Unidos no se ha preocupado de brindarles las condiciones adecuadas para su desarrollo, lo cual ha dado como consecuencia la marginalidad de estos inmigrantes.

La política migratoria sirvió a Estados Unidos como un coadyuvante sumamente útil de su política exterior. La recepción de refugiados provenientes de países latinoamericanos con gobiernos no aliados era una clara muestra de condena a éstos. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos no fue de simple denuncia pública ni de ejercicio de su soberanía al recibir a determinados inmigrantes en su territorio. En realidad, durante toda la Guerra Fría hubo una estrecha correspondencia entre las acciones realizadas por Estados Unidos en los países latinoamericanos con el tipo y la cantidad de personas que emigraban de éstos. Podría decirse que Estados Unidos contribuía en gran medida a que en determinado país existieran causas para emigrar y, posteriormente, recibía a estos migrantes en un acto con apariencia de altruismo y de generosidad nacional.

Esta posición resultaba útil también hacia el interior del país, ya que servía como instrumento para lograr la cohesión nacional. Los ciudadanos estadounidenses veían en las acciones de su gobierno una posición firme en su lucha contra el comunismo y, también, una actitud humanitaria al albergar a los individuos que huían de él. Los refugiados, en este sentido, gozaban de la aceptación tanto del gobierno como de los ciudadanos, quienes los veían no como una amenaza sino como a seres necesitados y merecedores de protección, y se veían a sí mismos como el pueblo generoso y capacitado para otorgarla.

La política que el gobierno de Estados Unidos diseñó y aplicó por primera vez hacia los refugiados tuvo como objetivo fundamental ayudar a la reconstrucción económica de Europa, una vez

finalizada la Segunda Guerra Mundial. El primer ordenamiento legal en este sentido fue la Ley para personas desplazadas, de 1948 (*Displaced Persons Act*), que permitió la admisión de más de 205 mil personas durante los dos años posteriores a su creación.¹⁴⁵ Debido a que el número de solicitantes de refugio en los siguientes años excedió el previsto en esta Ley, se crearon otras dos que tenían el mismo objetivo de admitir refugiados procedentes de Europa: el *Refugee Relief Act*, de 1953; y el *Refugee Escapee Act*, de 1957.¹⁴⁶

Sin embargo, una vez superada la meta de promover la estabilización económica de Europa, la política estadounidense hacia los refugiados adquirió nuevos objetivos y se convirtió en un arma dentro de la Guerra Fría que sostuvieron las dos grandes potencias. Con la admisión de personas provenientes de países comunistas,¹⁴⁷ el gobierno de Estados Unidos buscaba probar las desventajas del régimen del país del cual éstas eran originarias, al utilizarlas como arma estratégica de propaganda del capitalismo y de desestabilización de sus oponentes. Los mismos fines ideológicos se buscaban en los países comunistas en donde “las condiciones de asilo estipulan que el beneficiario debe haber luchado en beneficio de la clase trabajadora o por una causa similar”.¹⁴⁸

En la década de 1960, se dio otro cambio en el patrón de la política hacia los refugiados. Si bien tuvo el objetivo de ser un instrumento contra el comunismo, registró un cambio en el tipo de países de los cuales éstos eran originarios. Hasta finales de la

¹⁴⁵ Sharon Stanton, “Migration Patterns of U.S. Foreign Policy”, en *Threatened Peoples, Threatened Borders*, Nueva York-Londres, W.W. Norton and Company, 1995, p. 47.

¹⁴⁶ *Immigration Laws*, op. cit.

¹⁴⁷ “Entre 1946 y 1950, Estados Unidos admitió a 212,000 refugiados europeos, de los cuales, cerca del 79% eran originarios del bloque de países del Este, excluyendo a la República Democrática Alemana. Los contingentes más grandes fueron personas nacidas en Polonia (79,000), Latvia (21,000), Lituania (19,000) y la Unión Soviética (14,000).” Stanton, op. cit., p. 47.

¹⁴⁸ Suhrke, op. cit., p. 161.

década de 1950, la mayor parte de los refugiados en Estados Unidos (el 95%) provenía del continente europeo, especialmente de Europa del Este. A partir de 1960, la mayoría tuvo como origen países tercermundistas. Especialmente importante fue el número de admisiones de personas procedentes de Cuba (entre 1961 y 1970, a cerca de 132 000 cubanos se les dio estatus de inmigrante), y, en la década de 1970, con el fin de la guerra de Vietnam, de Laos (837 personas) y de Camboya (126 000).¹⁴⁹

A principios de la década siguiente se registró un cambio muy importante en la legislación interna, mediante La Ley de Refugiados de 1980 (Refugee Act of 1980). La intención formal del Congreso al aprobar esta Ley fue eliminar las condicionantes de aspectos ideológicos y geográficos (es decir, la necesidad de huir de la dominación comunista o de un país del Medio Este) y “poner a la práctica de Estados Unidos en línea con la práctica internacional prevaleciente”,¹⁵⁰ mediante la adopción de una parte de la definición contenida en la Convención de 1951.¹⁵¹ La disposición que no se incluyó fue la relativa a “encontrarse fuera del país de su nacionalidad”, ya que la tradición en materia de refugio seguida por Estados Unidos a lo largo de su historia había considerado proteger a personas que se encontraban en el país de su nacionalidad, mediante su reasentamiento en territorio estadounidense. No obstante, en la nueva Ley se retomó lo prescrito por la Convención de 1951, en lo que concierne a la persecución por ciertos motivos. De esta forma, se eliminaba la presunción de que todas las personas provenientes de países comunistas eran refugiados de facto ya que la Ley les obligaba a probar la persecución.

¹⁴⁹ *Ibid.*, p. 48.

¹⁵⁰ Gil Loescher, *Calculated Kindness. Refugee and America's Half-Open Door, 1945 to the Present*. Nueva York, The Free Press, 1986, p. 15.

¹⁵¹ Como se dejó asentado en el capítulo I, según la Convención de 1951, un refugiado es: “La persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”.

En comparación con la práctica y con la legislación que hasta entonces había prevalecido, la adopción de esta definición fue un avance sustancial. No obstante, la política de admisión de refugiados tuvo el mismo objetivo ideológico y conservó su carácter de coadyuvante de la Política Exterior, en lugar del objetivo humanitario que en la práctica y la legislación internacional tiene la figura del refugio. Inclusive en la misma Ley de Refugiados, se establece que se admitirían refugiados de “especial interés humanitario para Estados Unidos”,¹⁵² con lo cual se legitimaban decisiones basadas en aspectos subjetivos, políticos y coyunturales.

La definición de la Convención de 1951 se realizó para enfrentar las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial había dejado en materia de refugiados. No obstante, la nueva realidad mundial había obligado a dejar de considerar al refugio como una institución individualizada —como la concebía la Convención— para reconocerle carácter colectivo. La Ley de Refugiados no sólo no consideró esta nueva realidad, sino tampoco los avances legislativos que en otros lugares se habían hecho para hacerle frente, como la Legislación africana de 1969 o la Declaración de Cartagena de 1984.¹⁵³ En cambio, obligaba a probar a los solicitantes de protección que habían sufrido una persecución particularizada y concreta.¹⁵⁴ Elliot Abrams, entonces secretario adjunto de Estado

¹⁵² Refugee Act of 1980, Sec. 101 (a).

¹⁵³ La primera señalaba que el término refugiado: “se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio”, y la segunda retomaba esta definición, agregándole como causa de huida la *violación masiva a los derechos humanos*.

¹⁵⁴ Es importante advertir que el gobierno no ha sido el único desinteresado en los avances legislativos que en la materia se han hecho en la región latinoamericana. En la amplia literatura que se consultó para la realización de este trabajo, publicada en Estados Unidos, no se hace una sola mención a dichos avances. En dicha literatura los autores abordan el tema desde distintas tendencias, objetivos y metodologías. No obstante, ni aún los más críticos del sistema estadounidense hacen mención alguna, así sea superficial, a lo que sucedía al Sur de su país.

para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, señalaba: "La clave del concepto de asilo es clara. No es suficiente saber que el país (del cual el solicitante es originario) es represivo, violento o pobre. Debe mostrar algo que como individuo lo haga blanco de persecución —su religión, su raza, o algo—. "¹⁵⁵

La Ley de Refugiados preveía un programa de reasentamiento, consistente en ayuda con dinero en efectivo y de asistencia médica y social. A pesar de que se siguió privilegiando a los refugiados que solicitaban ayuda fuera del territorio de Estados Unidos, se incluyó la definición del asilado, diferenciándola básicamente de la del refugiado, por que el número de admisiones de estos últimos son programadas anualmente por el presidente con autorización del Congreso, y en que la solicitud de refugio se hace en el extranjero, mientras que la del asilo se realiza en el propio territorio de Estados Unidos, en la frontera o en un punto de entrada.¹⁵⁶

Los propósitos formales que se perseguían con esta Ley (desligar a la figura del refugio de consideraciones políticas e ideológicas) no se cumplieron ni siquiera en el término inmediato a su emisión. A lo largo de toda la década de 1980 se fortalecería el vínculo estrecho entre la política migratoria y la política exterior. Dos casos sirven para ejemplificar este hecho. Por un lado, tenemos el trato diametralmente opuesto que se les dio a los migrantes de dos países caribeños, con quienes Estados Unidos mantenía una relación política también diametralmente diferente: Cuba y Haití. Los cubanos recibieron toda clase de estímulos para llegar a territorio estadounidense, y, una vez en él, obtuvieron condiciones de permanencia favorables. Los haitianos, en cambio, fueron incluso interceptados en alta mar, y obligados a regresar a su país, sin darles siquiera oportunidad de presentar una solicitud de refugio. Aquellos que lograban llegar a Estados Unidos recibían un trato completamente desventajoso en com-

¹⁵⁵ Citado en Ferris, *op. cit.*, p. 4.

¹⁵⁶ Document prepared by the National Immigration Forum, 1996, p. 1.

paración con los cubanos. En febrero de 1984, por ejemplo, la administración del presidente Reagan anunció un programa para regularizar el estatus de los cubanos que ingresaran a su territorio, pero no incluyó en él a los haitianos.¹⁵⁷

Los refugiados centroamericanos

Los refugiados centroamericanos también recibieron un trato diferenciado, dependiendo del tipo de relación que Estados Unidos tuviera con el país del cual fueran originarios. De entrada, se definió que aquéllos que huían de regímenes totalitarios eran considerados como refugiados y como personas de “especial interés humanitario” para el país. Los procedentes de países autoritarios eran considerados como migrantes económicos que no necesitaban la ayuda de Estados Unidos. No fue de extrañar, entonces, que las personas que huían de El Salvador (país calificado de “autoritario”, según la teoría desarrollada por Jeane Kirkpatrick) fueran en su gran mayoría rechazadas en sus peticiones de protección y repatriadas a su país, mientras que las que huían de Nicaragua (país totalitario) tuvieran un trato más benévolo. En este trato no influyó de forma alguna ni los reportes oficiales sobre la situación de violación a los derechos humanos de cada país, ni la persecución concreta que pudieran alegar los solicitantes de refugio.

Gibney y Stohl, muestran una “escala de terror” con datos proporcionados tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como por Amnistía Internacional. En ella se gradúan las violaciones a derechos humanos en diferentes países, entre 1980 y 1985, en un rango de 1 a 5. Con el 5 se califican los países con mayores y más graves violaciones.¹⁵⁸ El Departamento

¹⁵⁷ Ferris, *op. cit.*, p. 115.

¹⁵⁸ “Nivel 1: países bajo un seguro Estado de Derecho, las personas no son encarceladas por sus pensamientos y la tortura es inusual o excepcional... Los asesinatos políticos son extremadamente inusuales. Nivel 2. Hay un número limitado

de Estado dio una calificación de 4 para El Salvador, de 1980 a 1985, mientras que para Nicaragua la calificación fue de 4 en 1980, 1983, 1984 y 1985; y de 3 en 1981 y 1982. El Departamento de Estado, aun con su política de intensa agresión hacia Nicaragua, no pudo calificar al gobierno de ésta como mayor violador de derechos humanos que el de El Salvador, sin embargo, este hecho no influyó de manera alguna en el momento de otorgar el estatus de refugiado o asilado, ni de ordenar las deportaciones.¹⁵⁹

A pesar de que el Departamento de Estado reconocía el clima de terror que se vivía en El Salvador en la década de 1980, la política migratoria fue sumamente rígida para los salvadoreños que pedían protección en Estados Unidos. Para el gobierno de este país, los salvadoreños que se encontraban en su territorio eran migrantes económicos que buscaban una mejoría en sus condiciones de vida, pero que no enfrentaban peligro alguno que hiciera necesario el otorgamiento de refugio o asilo político. Las disposiciones contenidas en la Convención de 1951 fueron una especie de soporte de las decisiones que se tomaron en este sentido. En

de prisioneros por actividades políticas no violentas. Sin embargo, pocas personas son afectadas, la tortura y los golpes son excepcionales... Los asesinatos políticos son inusuales. Nivel 3. Hay un incremento de encarcelamientos políticos, o una historia reciente de estos encarcelamientos. La ejecución u otros asesinatos políticos y la brutalidad pueden ser comunes. Las detenciones, con o sin juicio, por ideas políticas es aceptada. Nivel 4. Las prácticas del nivel 3 se incrementan notablemente. Los asesinatos, desapariciones y tortura son una parte cotidiana de la vida. A pesar de esta generalidad, en este nivel el terror afecta a aquellos involucrados en la política. Nivel 5. El terror del nivel 4 es expandido a la totalidad de la población... Los líderes de estas sociedades no tienen límites en los medios o en la minuciosidad con los cuales logran objetivos personales o ideológicos". Gibney y Stohl, *op. cit.*, p. 163. Los puntos suspensivos son del texto original.

¹⁵⁹ Este estudio muestra de una manera clara que fueron las consideraciones ideológicas y los objetivos de política exterior, y no las condiciones internas de los países, las que determinaban la concesión de refugio por parte de Estados Unidos. En 1983 y 1987, sólo 7% de los solicitantes de países del nivel 4 fueron aceptados como asilados. En 1985 se aceptó al 8%. Por el contrario, los individuos provenientes de países con nivel 2 tuvieron mayor aceptación. En 1985, el 39% de los solicitantes de países de nivel 2 fueron aceptados. Gibney y Stohl, *op. cit.*, p. 169.

efecto, si bien fue cierto que muchos salvadoreños enfrentaron una persecución particularizada, la gran mayoría fue víctima de la situación bélica que se vivía y de la violación masiva a los derechos humanos por parte de su gobierno, sin poder probar una posición agresiva de éste que fuera directa y personal. Las disposiciones jurídicas contenidas tanto en la Convención de 1951 como en el derecho interno de Estados Unidos, coincidían en la necesidad de que una persona probara persecución concreta para ser considerado como un refugiado. De junio de 1983 a septiembre de 1986, tan sólo 528 salvadoreños (el 2.6% de los solicitantes) obtuvieron asilo político y 19 207 fueron rechazados. Estas cantidades contrastan, por ejemplo, con la situación de los iraníes.¹⁶⁰ En el mismo periodo 10 728 obtuvieron asilo (el 60.4%) y 7 005 fueron rechazados.¹⁶¹ En el mismo periodo fueron deportados 48 209 salvadoreños.¹⁶² La Convención de 1951 prohíbe que estados contratantes envíen a un refugiado a un lugar en donde su vida, libertad o seguridad corra riesgo. Lo mismo sucede con la Convención de Ginebra de 1949, relativa al trato de civiles en tiempo de guerra (ratificada por el Senado de Estados Unidos el 6 de julio de 1955), que prohíbe la repatriación de refugiados a zona de guerra. No obstante, el gobierno estadounidense argumentó no haber incurrido en ninguna responsabilidad internacional, debido a que, según su afirmación constante, los deportados no eran refugiados sino migrantes económicos. En 1984, debido a las protestas que

¹⁶⁰ Immigration and Naturalization Service (INS)/ U.S. Department of Justice, en Ann Crittenden, *Sanctuary, a Story of American Conscience and the Law in Collision*, Nueva York, Weidenf and Nicolson, p. 21.

¹⁶¹ En la literatura consultada se encontró mucha información en cuanto al número de salvadoreños aceptados como asilados y refugiados. Ésta es presentada de diversas formas (por año fiscal y por diferentes periodos; en cantidades reales y en porcentajes). Sin embargo, y a pesar del distinto perfil existente tanto entre los autores, como en la metodología y en los objetivos de los estudios, la información en cuanto a cantidades coincide de una manera muy aproximada.

¹⁶² Crittenden, *op. cit.*, p. 361.

principalmente el Congreso y los integrantes del movimiento Santuario hacían por las deportaciones, el gobierno de Reagan publicó una encuesta realizada por la embajada de Estados Unidos en San Salvador, sobre la deportación de 482 refugiados, entre abril y julio de 1984. La conclusión de la encuesta fue que los deportados no habían recibido maltratos a su regreso a El Salvador. A pesar de que esta encuesta fue usada por el gobierno del país del norte para justificar sus acciones, no sirvió para hacer un diagnóstico de la realidad, debido a la forma en que se aplicó: de los 482 reportados en la encuesta, tan sólo 233 fueron realmente contactados. De éstos, sólo 120 fueron entrevistados directamente, 39 de ellos por teléfono. Al resto se le envió por correo una carta, en la que se le pedía urgentemente ponerse en contacto con la embajada de Estados Unidos, sin revelarles el objetivo que se buscaba. 81 personas respondieron no haber sufrido maltratos por su gobierno, pero muchas de ellas fueron interrogadas por teléfono, por un entrevistador desconocido.¹⁶³ Como puede observarse, ésta no fue la mejor metodología en un país cuyos habitantes temían expresar cualquier opinión que no fuera favorable al gobierno, por el miedo fundado de que éste la interpretara como prueba de subversión y ejerciera la represión correspondiente. Crittenden señala de esta encuesta:

Sólo 121 de los 482 encuestados reportaron personalmente no haber sufrido maltrato a raíz de su regreso. Otros 60 no se encontraban en casa cuando el entrevistador tocó a la puerta, pero un amigo, vecino o familiar reportó que no habían sufrido ningún maltrato. Por lo tanto, cerca del 38% de la muestra aparentemente no enfrentaba peligro.¹⁶⁴

El haber otorgado asilo político o refugio a una gran cantidad de salvadoreños habría contradicho las afirmaciones de la Casa Blanca en relación con la naturaleza del gobierno del país del

¹⁶³ Golden, *Sanctuary. The New Underground...*, p. 43.

¹⁶⁴ Crittenden, *op. cit.*, p. 366.

sur. No hubiera sido lógico, en este sentido, sostener que el gobierno salvadoreño avanzaba en su proceso de democratización y de depuración, y que necesitaba de la ayuda de Estados Unidos para consolidarlo, por un lado, y por el otro aceptar a salvadoreños que argumentaran ser víctimas de la violación masiva a los derechos humanos por parte de su gobierno. La política de refugio de Estados Unidos hacia los salvadoreños fue diseñada y aplicada con parámetros y objetivos eminentemente políticos e ideológicos, dejando al aspecto humanitario excluido. La situación que se vivía en El Salvador fue tan crítica, que el ACNUR declaró en mayo de 1981 que todo aquel que saliera de este país, mientras no se probara lo contrario, debía ser considerado como refugiado.¹⁶⁵ La administración de Reagan negó toda protección, aun así fuera parcial y temporal, y se opuso a que se incluyera a los salvadoreños en programas especiales como la *Extended Voluntary Departure* (EVD), mediante el cual se otorgaba un permiso por un periodo determinado para permanecer en Estados Unidos, a personas en riesgo, hasta que la situación en su país mejorara.¹⁶⁶ En 1983, ambas Cámaras del Congreso, en atención a los informes del ACNUR y de los reportes sobre los posibles peligros a los que se enfrentaban los salvadoreños deportados y sobre el trato que recibían los salvadoreños detenidos en Estados Unidos, publicó una “resolución no obligatoria[...] urgiendo al presidente Reagan a otorgar a todos los salvadoreños que hubieran entrado al país antes del 1º de enero de 1983, estatus de ‘salida voluntaria ampliada’ (*Extended Voluntary Departure*).”¹⁶⁷ El presidente no tomó en cuenta esta resolución y continuó con las deportaciones.

La rígida posición del gobierno de Reagan hacia los salvadoreños (y hacia los guatemaltecos, que enfrentaron una situación igual de dura) provocó el nacimiento del “Movimiento Santuario”

¹⁶⁵ Golden, *op. cit.*, p. 42.

¹⁶⁶ *U.S. Immigration Laws...*, p. 2.

¹⁶⁷ Loescher, *op. cit.*, p. 197.

en Estados Unidos. Este movimiento fue dirigido por representantes eclesiásticos y miembros de las comunidades religiosas, que identificaron como un deber religioso y humano proteger a las personas que llegaban al territorio de su país necesitados de refugio. El refugio tuvo como origen histórico, la protección que las autoridades eclesiásticas otorgaban a los perseguidos, en el interior de las iglesias, sin importarles el motivo de la persecución ni la inocencia o culpabilidad de éstos. La protección se daba, entonces, con fines exclusivamente humanitarios. El Movimiento Santuario, en este sentido, recobró los fines y los métodos originales del refugio y los llevó hasta su máxima expresión, puesto que muchos de los líderes fueron incluso encarcelados, acusados de violar disposiciones en materia migratoria. Las autoridades, a pesar de esto, respetaron el refugio de los centroamericanos, y no detuvieron ni deportaron a ninguno de los que se encontraban dentro de las iglesias. El Movimiento Santuario sostenía que la política exterior del gobierno estadounidense hacia El Salvador era la principal responsable de que los ciudadanos de éste se vieran forzados a abandonar su país, y que, por lo tanto, era un deber básico el otorgarles protección. El movimiento fue una expresión muy importante, debido a que constituía una protesta pacífica pero muy enérgica por parte de los mismos ciudadanos de Estados Unidos. Su capacidad de influencia en el resto de la sociedad, no obstante, es discutible. En *U.S. Immigration in the 1980s, Reapraisal and Reform*, se señala que fue muy reducida:

Sólo cerca de 350 iglesias y sinagogas de un total de más de 300 000 en toda la nación se han unido al Movimiento Santuario. Alrededor de doce ciudades y dos Estados, Wisconsin y Nuevo México, se declararon así mismos áreas de santuario, a pesar de que dos de sus ciudades, Seattle y Los Ángeles, retiraron estas declaraciones debido a las fuertes oposiciones públicas.

En la década de 1980 Estados Unidos recibió una gran cantidad de solicitudes de refugio y asilo. El éxodo de los salvadoreños coincidió con la llegada de otros refugiados provenientes de diferentes países como Guatemala, Irán, Haití y Cuba. Especialmente fuerte y problemática fue la llegada de más de 100 000 cubanos a Florida, en mayo de 1980, provenientes del puerto Mariel, en La Habana. La gran cantidad de solicitantes de protección, hizo que el sentimiento nacional de rechazo hacia los migrantes, que desde los años setenta se había profundizado, conquistara mayores espacios. Los acontecimientos que se desarrollaron en la década de los ochenta, sirvieron como argumento al gobierno de Estados Unidos para radicalizar los cambios que ya se venían realizando en la política migratoria, y que cambiaron la imagen que éste había proyectado como país de "puertas abiertas", a todo aquel buscara protección y/u oportunidades de desarrollo. La política migratoria se volvió cada vez más rígida, y adquirió atributos y fines propios. Su carácter de instrumento puesto al servicio de la política externa, entonces, cambió paulatinamente, al grado de que a partir de la década de 1990, se argumentó que era más útil que la oposición existente en los países enemigos permaneciera en éstos y buscara el cambio gradual de los sistemas políticos, en lugar de viajar a Estados Unidos. A pesar de que esta política tomaría su tonalidad más nítida a partir de esta década, ya en los ochenta se comenzó a gestar el cambio. Por ello, los nicaragüenses no recibieron tantas motivaciones para huir ni tan buenas condiciones de estancia, como años atrás habían recibido otras personas originarias de regímenes enemigos.

Entre 1983 y 1986 se otorgó asilo político a 2 602 nicaragüenses (el 14.0% de los solicitantes) y se le negó a 15 856. Estas cifras, muy reducidas si se les compara con la protección que se brindó a los cubanos (solamente en el Mariel llegaron 100 000 personas), son sustancialmente mayores en comparación con la situación que encontraron los salvadoreños (cuyo porcentaje de aceptación en el mismo periodo fue de 2.6%). En 1986 se

produjo un aumento importante en el número de nicaragüenses considerados como asilados políticos, registrándose un 60% de aceptaciones.¹⁶⁸

Las condiciones de estancia que tuvieron los nicaragüenses en Estados Unidos fueron sustancialmente mejores en comparación con la de los salvadoreños. Fue en este país en donde establecieron su residencia los principales líderes de la Contra, y desde donde montaron su centro bélico de operaciones. Especialmente en el estado de Florida encontraron fuertes apoyos por parte de exiliados cubanos y de personajes importantes (empresarios y autoridades) de Estados Unidos. Puesto que el derrocamiento del gobierno sandinista era uno de los fines más significativos en materia de política exterior para el gobierno del norte, los líderes de la Contra, más que recibir apoyo de éste, se convirtieron en un instrumento fundamental para el logro de dichos fines. Sus condiciones de vida, por lo tanto, llegaron a sobrepasar las que tenían los estadounidenses promedio, debido no sólo al apoyo directo del gobierno, sino especialmente a los negocios ilícitos que realizaban con éste con motivo de la guerra. Con tan buena situación, estos emigrados no tenían ninguna necesidad ni interés de solicitar asilo político o refugio. Además de los líderes militares, a Estados Unidos emigró una gran cantidad de profesionistas y empresarios que no encontraban en la crítica situación económica de su país un ambiente propicio de desarrollo, y aquéllos a los cuales la revolución había, ya fuera expropiado sus bienes de producción, o limitado en el manejo de éstos. Una buena parte de la alta clase política, que se vio afectada por las disposiciones sandinistas y despojada de la mayoría de sus privilegios, igualmente emigró a Estados Unidos. No obstante, también abandonaron el país personas pertenecientes a estratos más bajos, entre los cuales una importante cantidad tenía como razón de huida el evitar el servicio militar obligatorio. También el riesgo de ser deportado fue más bajo para un nicaragüense

¹⁶⁸ *U.S. Immigration Laws...*, p. 252.

que para un salvadoreño: en 1985, Perry Rivkind, el director del Servicio Nacional de Inmigración del distrito de Florida, públicamente sostuvo que su oficina se negaría a regresar a cualquier nicaragüense a su país debido a las características totalitarias del régimen sandinista.¹⁶⁹

El gobierno de Estados Unidos, además, hizo cuanto pudo por evitar la llegada de refugiados centroamericanos a su territorio. Tuvo un fuerte involucramiento en las medidas que en México y en Centroamérica se tomaron en relación con éstos. Por lo que respecta a México, presionó a su gobierno para que reforzara la vigilancia en las fronteras y estableciera medidas administrativas más rígidas en materia migratoria, con objeto de evitar que los centroamericanos llegaran a su territorio. En Honduras, tuvo amplia participación en el programa que se diseñó y aplicó para los refugiados provenientes de El Salvador y de Honduras, a quienes, como vimos en el capítulo dos, se les dio un trato completamente diferenciado.

Estados Unidos fue el país que mayor apoyo económico otorgó a los programas para refugiados que se desarrollaron en la región en la década de 1980. Este apoyo generalmente fue canalizado a través del ACNUR. Además, otorgó recursos para proteger a personas que carecían del reconocimiento del ACNUR, principalmente a través del Comité Internacional de la Cruz Roja.¹⁷⁰ La Agency for International Development (AID) otorgó casi todo el presupuesto que destinó el gobierno salvadoreño para el cuidado de los desplazados internos. Con ello, la administración de Reagan sostuvo que los refugiados centroamericanos no tenían necesidad alguna para trasladarse hasta Estados Unidos, y que los que lo hacían, por lo tanto, debían ser considerados migrantes económicos.

¹⁶⁹ Gibney y Stohl, *op. cit.*, p. 179.

¹⁷⁰ Weiss, *op. cit.*, p. 68.

EPÍLOGO

ESTADOS UNIDOS

La razón principalmente esgrimida por el gobierno de Reagan de su política hacia Centroamérica fue el temor de Estados Unidos de que un poder extranjero se apoderara de un área considerada por el país del norte como estratégica y como parte de su zona exclusiva de influencia. En el contexto de la Guerra Fría este temor se hacía mucho más marcado: si en el pasado Estados Unidos se había opuesto a la penetración de cualquier potencia extrahemisférica en el continente y muy especialmente en la región centroamericana, en la década de 1980 la oposición debía ser más decidida, puesto que la potencia que supuestamente intervenía en esos momentos profesaba una ideología radicalmente distinta a la de Estados Unidos, además de ser (o por ello, precisamente) su mayor enemigo. No obstante, este argumento no tuvo muchas bases reales para sostenerse. La administración de Reagan desde un principio manejó la idea de que la Unión Soviética tenía un plan preconcebido para utilizar a la región centroamericana como punto de partida para conquistar todo el continente.¹⁷¹ Sin embargo, nunca hubo evidencias concretas que probaran la exis-

¹⁷¹ Entre los objetivos que —según el gobierno de Estados Unidos— tenía la Unión Soviética en América Central se encuentran los siguientes: “La estrategia soviética imperial está dirigida a la derrota indirecta de los Estados Unidos a través de 1) apropiarse u obstruir los accesos de Estados Unidos y el Occidente a recursos

tencia de este plan. Durante esta década comenzó el declive que conduciría a la desintegración de la Unión Soviética, por lo cual la atención principal de ésta estaba puesta en otro tipo de asuntos. El apoyo que ésta dio al gobierno sandinista en realidad no fue significativo (como lo fue por ejemplo, con Cuba). La ayuda prestada por otros países socialistas fue inclusive más fuerte que la de la misma Unión Soviética, pero fue a su vez superada por la que dieron muchos otros países occidentales.¹⁷² Por ello, y al tomar en cuenta la forma en la que Estados Unidos ha intervenido en la región a todo lo largo del siglo xx, nos podemos percatar de que el freno al comunismo fue un argumento coyuntural que utilizó el gobierno de Reagan, pero que no tenía bases reales. A lo que Reagan, al igual que todos sus antecesores, temía era a la constitución de gobiernos independientes sobre los que Estados Unidos no tuviera el control. El temor a que la ideología nacionalista del FMLN y del FSLN se consolidara en sus propios países y se expandiera a otros de Latinoamérica, sí era real y contundente. El gobierno del norte no podía permitir que esto se realizara, como no lo permitió durante las intervenciones que realizó a finales del siglo xix y principios del xx, cuando la Unión Soviética ni siquiera existía. La amenaza, en este sentido, no era hacia la Seguridad Nacional de Estados Unidos, sino hacia su poder hegemónico.

Desde los inicios de su primer periodo presidencial, Donald Reagan sentó las bases de un nuevo modelo económico, tanto

estratégicos —particularmente petróleo y minerales industriales— y 2) ganar control o la habilidad para interceptar las rutas marítimas mundiales". Jordan, "U.S. Options —and Illusions— in Central America", en *Central America and the Reagan Doctrine*, Boston, University Press of America, 1987, p. 231.

¹⁷² Así lo señala Feinberg: "la ayuda económica del bloque soviético todavía palidece ante más de mil millones de dólares en créditos oficiales concedidos por Occidente desde la revolución". Richard Feinberg, "Centroamérica, el punto de vista de Moscú", en *Cuadernos Semestrales, publicación semestral de Estados Unidos: perspectiva latinoamericana*, núm. 12, 2º semestre de 1982, México, Centro de Investigación y Docencia Económica, Instituto de Estudios de Estados Unidos, p. 379.

en lo interno de su país como hacia el exterior. Este nuevo modelo, junto con la desintegración de la Unión Soviética y el derrumbe del socialismo real, entre otras cosas, formarían parte de una nueva época histórica. Las transformaciones de esta nueva etapa han alcanzado prácticamente todos los aspectos de la vida económica, política, cultural e ideológica del mundo.

Reagan fue uno de los mayores propulsores (la otra gran figura en este sentido, como hemos visto, fue Margaret Thatcher) del desarrollo del neoliberalismo. Especialmente a través de los organismos financieros internacionales controlados o con una fuerte influencia de Estados Unidos, intentó que la fuerza de los estados nacionales disminuyera, para dar lugar a la intensificación del libre juego del mercado y de la liberalización de la economía. El aspecto económico, en este sentido, tomó el lugar principal dentro de la dinámica mundial y dejó a la política en un segundo plano. Esto dio lugar a que, posteriormente, se hablara incluso del “fin de las ideologías”.

Los dos periodos presidenciales de Reagan, sin embargo, tuvieron la característica de estar sobreideologizados. Podría decirse en este sentido que estuvo jugando con dos cartas. La primera fue usada en el aspecto económico, en el que internacionalmente pugnaba por el debilitamiento del Estado a favor del libre juego del mercado. Con la segunda carta pretendía fortalecer el papel de Estados Unidos en el nivel ideológico (ejerciendo, incluso, actos en contra de la ley tanto internacional como interna y contra su propio prestigio como presidente) sobre territorios de interés estratégico geopolítico, que sin embargo tenían nula importancia económica. Esta segunda carta fue jugada con una gran violencia sobre Centroamérica.

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos no pudo ganar la guerra en el aspecto estrictamente militar, sí puede hablarse de un triunfo de manera global, puesto que prácticamente todos los objetivos que tenía para la región fueron cumplidos. Logró en primera instancia que el FSLN dejara el gobierno de Nicaragua. Este objetivo, además, fue obtenido a través de la vía que tenía

prevista para los “cambios” en Centroamérica desde inicios de la década de 1980: la electoral. Además, consiguió que esta vía fuera utilizada de forma tal que le “devolviera” el control sobre Nicaragua, a través del apoyo económico y logístico a la Unión Nacional Opositora (UNO) y del debilitamiento ideológico del FSLN. En el mismo sentido, impidió que el FSLN llegara al gobierno salvadoreño a través de la vía armada y contribuyó a que se debilitara ideológicamente¹⁷³ (al interior de sí mismo, y frente a la sociedad) y no representara un peligro real electoralmente hablando. En el resto de los países, consiguió gobiernos totalmente afines en materia política y económica. Esto le permitió obtener el poder global sobre la región, sin necesidad de seguir utilizando la fuerza física. Sin embargo, una vez que obtuvo dicho control, la situación del mundo y la suya propia habían cambiado a un grado tal, que la región dejó de tener importancia y decidió, posteriormente, dejarla prácticamente en el abandono.

NUEVAS POLÍTICAS Y TENDENCIAS MIGRATORIAS

La política migratoria tuvo un cambio muy marcado a raíz de la finalización de la Guerra Fría. La desintegración de la Unión Soviética dio por resultado que el equilibrio que hasta entonces

¹⁷³ Uno de los mayores logros de Estados Unidos fue precisamente el debilitamiento de los factores ideológicos, no sólo respecto a los gobiernos y grupos a los que combatía, sino a todos los países que tuvieran alguna relación o incluso alguna postura frente al conflicto. Esto puede verse muy claramente en la distinta posición que países como México y Venezuela fueron adoptando. En un principio ambos gobiernos propugnaban porque se revisaran las causas que habían dado origen a la guerra (México apoyando políticamente a los sandinistas, por ejemplo, y Venezuela estando en su contra). Reagan logró (a través de presiones políticas, pero sobre todo, económicas), que los países de América Latina se escudaran en la neutralidad y que de este modo no se hicieran pronunciamientos en torno a la necesidad de un cambio político y social. De posturas políticas pidiendo este cambio, pasaron a planteamientos diplomáticos que pugnaban por la paz. La discusión entonces dejó de estar en las causas sociales, para centrarse en las cuestiones jurídicas y formales necesarias para terminar con el conflicto.

se había experimentado, posteriormente, se rompiera. En materia de migración política, la ruptura de este equilibrio puede advertirse claramente, si consideramos que en el pasado existía una cierta correspondencia entre exilio-refugio: aquellos que lograban salir de la Unión Soviética contaban con la seguridad de obtener refugio en Estados Unidos. Al ser susceptibles de ser utilizados como arma estratégica de propaganda del capitalismo y de desestabilización del régimen comunista, la mayoría de las veces gozaban de una situación privilegiada y de un buen nivel en las condiciones de vida. Lo mismo sucedía cuando eran ciudadanos estadounidenses (o procedentes de países capitalistas) los que se establecían en la Unión Soviética. Puesto que cada una de las superpotencias apoyaba, y en muchas ocasiones propiciaba la existencia de pugnas internas en distintos países, aquellas personas que salían de éstos por motivo de dichas pugnas eran recibidos de forma relativamente fácil (muchas veces incluso de manera automática) en el país que correspondiera, dependiendo del “bando” del cual fueran partidarios.

La ruptura del equilibrio fue realizada incluso jurídicamente. En el mismo año (1989) en que la Unión Soviética estableció como un derecho de todos los soviéticos la emigración, y simplificó los procedimientos para ésta, en Estados Unidos se abolió la elegibilidad automática de los emigrantes soviéticos para obtener el estatus de refugiado.

Con la finalización de la Guerra Fría, el proceso de globalización que comenzó a vivir el mundo a partir de finales del siglo xv, intensificó la mayor parte de los componentes y consecuencias del capitalismo, y le dotó además de características nuevas. Después de hablarse del “fin de la historia” —siguiendo la controvertida tesis de Francis Fukuyama—, se comenzó a hablar del “fin de la geografía”.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Octavio Ianni considera: “Cuando se acelera el proceso de globalización, y da la impresión de que la geografía y la historia llegan a su fin, muchos piensan que entró la posmodernidad, declinó la razón y se soltó la imaginación”. Ianni, *op. cit.*, p. 140.

Con los avances de la ciencia nueva, sobre todo la que se relaciona con el átomo y el espacio, las fronteras de los países parecen desdibujarse, y lo “nacional” adquiere un sentido completamente nuevo al que tenía en el pasado.

Este “fin de la geografía”, sin embargo, no se ha dado en todos los aspectos. Mientras que para las ideas y el dinero las fronteras se vuelven cada vez más porosas, para las migraciones forzadas adquieren mayor definición y control, y se hace mucho más difícil y peligroso su traspaso, así como las condiciones que encuentran en el país de destino. En este aspecto, los estados acuden a la definición más estricta del término soberanía, y aducen las facultades que les otorga ésta para controlar sus territorios.

El nuevo orden mundial ha sido por una parte disparador (tanto inmediato como a corto y largo plazo) de un número inmenso de migrantes. Por la otra, ha sido determinante en el cambio de las características, necesidades, demandas y reacciones tanto de los propios migrantes; de los estados expulsores y receptores, y de las sociedades de estos últimos. Ha ocasionado también la transformación en el recibimiento de las migraciones forzadas. Hoy, inclusive, países que en el pasado se habían caracterizado como receptores masivos y generosos de migrantes, tratan de cerrar sus fronteras tanto a través de medidas administrativas y legislativas, como físicas; haciendo más rígidos los sistemas para ingresar legalmente a los países y estableciendo mecanismos fronterizos de protección mucho más eficientes. En este sentido, el neoliberalismo parece ocasionar dos fenómenos mutuamente excluyentes: por un lado, la polarización económica y política produce constantes, intensas y crecientes crisis económicas y sociales en el mundo subdesarrollado, y estas crisis generan nuevas presiones para la migración hacia el desarrollado. Hoy, en todos los países industrializados existen inmigrantes ilegales. Por el otro lado, la polarización también alcanza el interior de los países hegemónicos, en los que se sufren problemas hasta hace poco pertenecientes en mayor cantidad y gravedad a los países pobres. Estos problemas, en los que las tasas de desem-

pleo ocupan uno de los lugares más preocupantes, han obligado a los estados hegemónicos, en un principio, a dejar de incentivar la inmigración, para llegar al momento actual de prácticamente intentar cerrar sus fronteras.

Las situaciones generadas alrededor de las migraciones forzadas tienen implicaciones tan fuertes en el nuevo orden mundial, que se les ha llegado a considerar como un riesgo,¹⁷⁵ tanto para el avance de la globalización como de la seguridad internacional. Un factor muy importante que se debe tener en cuenta en este sentido es la aceleración que el crecimiento poblacional ha tenido en las últimas décadas. Según los datos señalados por Meissner,¹⁷⁶ del inicio de la humanidad hasta 1800, la población mundial era de 1 billón de personas. De 1800 a 1987, llegó a ser de 5 billones, aumentando a partir de entonces 1 billón cada década. En el año 2010, cerca de 730 millones de personas alcanzarán la edad de trabajar en el mundo subdesarrollado. Si en estos países se siguen presentando las mismas condiciones económicas y sociales, lo más probable será que las tendencias a la migración hacia países más desarrollados se refuercen. Sin embargo, ni siquiera estos últimos estarán en capacidad de absorber esta mano de obra,¹⁷⁷ lo cual tendrá consecuencias sumamente adversas en todos los niveles. En el mismo sentido, podemos observar el crecimiento en el número de refugiados, que pasó de 2.5 millones en 1970 a 17 millones en 1993.

El rechazo que los migrantes reciben no proviene exclusivamente de decisiones y acciones gubernamentales. Conforme las fronteras económicas se abren, los grupos que conforman a la sociedad parecen irse “cerrando” y adquiriendo fuerza. La diná-

¹⁷⁵ Otros riesgos globales son: el consumo y tráfico de drogas, la degradación del medio ambiente global, el aumento y difusión de agentes patógenos, infecciosos y parasitarios, el ascenso de los fundamentalismos, las crisis financieras. Véase Kaplan, *op. cit.*

¹⁷⁶ Doris M. Meissner and others, *International Migration Challenges in a New Era*, Nueva York, The Trilateral Commission, 1993, pp. 7-8.

¹⁷⁷ En la década de 1980, época de mayor crecimiento de empleo en Estados Unidos, la economía produjo 2 millones de nuevos trabajos anualmente.

mica que han seguido los estados, de integración en estructuras interestatales con fines especialmente de mercado, ha propiciado que los grupos que constituyen la sociedad reflexionen acerca de su papel en el nuevo contexto mundial. Así, vemos que el concepto del nacionalismo ha resurgido con una gran fuerza: mientras que los estados se integran comercialmente, los diferentes grupos sociales parecen ir tomando conciencia de sus diferencias y reclamando espacios de desarrollo propios. Estos espacios propios, por supuesto, estarán vedados para aquellos que no compartan su identidad. El racismo y la xenofobia formarán parte de los mecanismos principales que muchos sectores utilizarán para hacer evidentes sus diferencias.

Tanto los actos soberanos utilizados por el Estado como los mecanismos de exclusión resultantes de la formación o toma de conciencia de identidad de la sociedad, han ocasionado una transformación radical en la situación de las migraciones. Tal parece ser que las posiciones que se han adoptado por los integrantes de las diversas sociedades son una limitante al mismo proceso de globalización. Las defensas nacionalistas que se llevan a cabo hoy en día, no son parte de una estrategia bien estructurada y con elementos políticos y/o filosóficos que le pudieran dar orientación y fundamento. La mayor parte de las posiciones nacionalistas han tenido acciones poco razonadas y llenas de agresión, y han sido dirigidas sobre personas que en realidad no representan la verdadera amenaza. Las acciones racistas y los movimientos en contra de los extranjeros son un ejemplo de ello.

Para los países centroamericanos, la migración que en la actualidad se está registrando tiene implicaciones enormes. El significativo incremento que ha habido en el número de migrantes en la región, desde la década de 1990, puede considerarse como un signo directo de la profundización de la crisis económica y social que se ha registrado en ella. El Salvador, abandonó el papel de país agroexportador, que había mantenido durante toda su historia, para hoy tener su mayor fuente de divisas en

las remesas que envían sus emigrantes. En los demás países sucede algo similar. Por ejemplo: "Según cifras del Banco de Guatemala, sólo en los años comprendidos entre 1989 y 1995 las remesas recibidas aumentaron de 64 a 417 millones de dólares, constituyendo este último año el segundo aporte de ingresos de divisas, siendo el primero el que proviene de la exportación de café."¹⁷⁸ Esta situación evidentemente constituye un elemento determinante en la profundización de la dependencia y del subdesarrollo de la región, que sobrevive gracias a los ingresos que sus nacionales obtienen en el extranjero, pero que le impide aprovechar todos esos recursos humanos a favor de su crecimiento interno. Las implicaciones que en materia económica y productiva tiene esta situación son muy grandes, sin embargo, no lo son menos las consecuencias que en el nivel cultural e ideológico tiene el que la población tenga como máxima aspiración poder salir de su país para mejorar su situación personal. Esto anula cualquier iniciativa con contenido nacionalista que pudiera ser aprovechada a favor del desarrollo nacional. Descohesiona a la sociedad y la inhibe para diseñar estrategias que pudieran colocarla en una mejor posición respecto del gobierno. Le impide, asimismo, generar liderazgos políticos y sociales. Esta situación tiende a profundizarse en la medida en que los migrantes se reintegran a sus comunidades de origen, reproduciendo esquemas y valores que aprendieron durante su estancia en Estados Unidos.

NICARAGUA

A partir de la primera derrota electoral del FSLN, en 1990, las características del nuevo orden global se han manifestado fuer-

¹⁷⁸ Edelberto Torres-Rivas, "La metáfora de una sociedad que se castiga a sí misma", prólogo a *Guatemala: causas y orígenes del enfrentamiento armado interno*, Comisión para el esclarecimiento histórico, Guatemala, F&G Editores, 2000, p. 4.

temente en Nicaragua, afectando todos los ámbitos. La ausencia de elementos de resistencia en la sociedad, en el sistema político, económico y cultural del país ha permitido que estas características encuentren la “puerta” completamente abierta. Las elecciones de 1990 tuvieron características comunes a los procesos electorales contemporáneos experimentados en el nivel mundial, y muy especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, por lo marcado de estas características y por haber sido una de las primeras que se presentó en tiempo, pueden considerarse como emblemáticas de los nuevos tiempos. Así, pudimos ver a un candidato opositor carismático e independiente, sin militancia en ningún partido, cuya ausencia de plataforma ideológica no fue un obstáculo sino un punto a favor; la pérdida de la memoria histórica de la población, y, lo más grave, la falta de opciones políticas para la sociedad. Una vez celebradas las elecciones, estas características se hicieron más nítidas y comenzaron a permear todas las áreas nacionales. La desideologización, experimentada por la entonces candidata a la presidencia, Violeta Barrios de Chamorro, alcanzó a la que hasta la fecha podía considerarse como una de las instancias más ideologizadas de la historia mundial: el FSLN.

A partir de 1990, los principales actores políticos protagonizaron una serie de rupturas y alianzas que, a la luz de los acontecimientos vividos durante la década anterior, en muchas ocasiones parecieron absurdas. La primera gran alianza se dio para contender en las elecciones de 1990, entre partidos y agrupaciones de muy diversas tendencias políticas (iban desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha) para conformar la Unión Nacional Opositora (UNO). Poco después de ganar el poder, y concretamente a raíz de la firma del Acuerdo de Transición entre el FSLN y el nuevo gobierno, se conformaron al interior de la UNO dos grupos claramente definidos y antagónicos. En el primero se encontraba Violeta Barrios, apoyada por Antonio Lacayo (su asesor y yerno) y por Alfredo César. Este grupo se caracterizó por el interés de dialogar y de llegar a acuerdos

con los sandinistas, por lo que se le consideró con tendencias moderadas y conciliatorias. En el segundo, se encontraba el vicepresidente Virgilio Godoy, de claras tendencias conservadoras e ideas políticas de derecha radical. Fue precisamente a partir del Acuerdo de Transición, en el cual la presidenta reconocía la presencia política del FSLN y le otorgaba prerrogativas para mantenerla (la prerrogativa más importante fue mantener a Humberto Ortega al frente de las fuerzas armadas), a fin de lograr la gobernabilidad y la pacificación del país. Godoy, quien pretendía borrar de raíz cualquier vestigio sandinista, se declaró no sólo en contra de la celebración de este Acuerdo, sino en general de toda la actuación de la presidenta y declaró una lucha abierta en contra de ella. Violeta Barrios se alió entonces con quienes hasta la fecha habían sido sus claros enemigos: los sandinistas, al grado de que entre 1990 y 1993, se consideró que entre ambos existió un co-gobierno.

Sin embargo, a partir de 1990, ya no pudo hablarse de los “sandinistas” en general, ya que se fueron presentando múltiples rupturas. En mayo de 1991, con motivo de la renovación de la Dirección Nacional, la cúpula sandinista tuvo un serio enfrentamiento con los militantes que pedían un proceso democrático de renovación. La Dirección Nacional, que no sufrió cambios en su conformación durante todo el gobierno sandinista, pedía que la votación se realizara a través de planillas, y no de candidatos separados, como deseaba la mayoría de los militantes y como estaba estipulado en los nuevos estatutos del partido, que además ordenaban el voto secreto y directo. Los miembros “históricos” de la Dirección Nacional, haciendo gala de autoritarismo, lograron imponer su posición, volviendo a quedar al frente de ella. La Dirección Nacional quedó conformada con los mismos integrantes del pasado, con la excepción de Carlos Núñez, fallecido en 1991 y sustituido por su hermano René Núñez, y de Humberto Ortega, quien renunció a su militancia en mayo de 1991 para permanecer al frente de las fuerzas armadas; sustituido por Sergio Ramírez.

Inmediatamente después de que el Frente Sandinista perdió el poder, empezaron a conformarse en el interior de él dos fracciones diferentes. En la primera, conocida como de los pragmáticos, renovadores o moderados, se encontraba la mayor parte de los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, y estaba liderada por Sergio Ramírez. Pedían adaptar las estructuras y los objetivos del FSLN a los nuevos tiempos vividos en Nicaragua y en el mundo, por lo que reivindicaban como líneas de acción la lucha parlamentaria y los métodos democráticos en general. En este sentido, fueron partidarios de la conciliación nacional, en oposición a la lucha de clases. El segundo grupo, que albergaba a los principistas, radicales u ortodoxos, estaba conformado por la Dirección Nacional del FSLN y liderado por Daniel Ortega y Tomás Borge. Pugnaban por mantener las reivindicaciones históricas del sandinismo y por conservar una comunicación directa con las masas, que le permitieran abanderar sus luchas. Por ello, no descartaban utilizar métodos fuera de la ley, como la toma de calles y las protestas violentas. No obstante, éstas fueron tan sólo líneas generales de las dos fracciones, porque en la práctica, los “principistas” adoptaron acciones de franca colaboración y en muchos sentidos de incondicionalidad ante el nuevo gobierno. El ejemplo más claro es Humberto Ortega, quien no sólo apoyó a la presidenta en el área de las fuerzas armadas, como era indiscutiblemente su deber, sino en otras, como en la económica y la ideológica. En 1991, Humberto Ortega respondía en una entrevista:

Soy un firme convencido de que el proceso de cambio que actualmente vive Nicaragua va por un rumbo correcto [...] recientemente doña Violeta tomó valientemente una serie de medidas y ajustes para buscar la estabilización económica como un primer paso que ha causado grandes temblores. En el primer momento creó una agitación fuerte, pero es un paso indispensable para crear mejores condiciones para que los organismos multilaterales y los gobiernos de distinta índole presten una mejor atención a Nicaragua en la

búsqueda de recursos que tanto urgen (p. 160). Para mí, ser revolucionario, es entender a doña Violeta, a Antonio Lacayo (p.167).¹⁷⁹

El apoyo de Humberto Ortega en el aspecto ideológico tuvo su máxima expresión en enero de 1992, cuando tomó la decisión de otorgar al teniente coronel Dennis F. Quinn, jefe de la Agregaduría Militar del Gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, la medalla “Camilo Ortega Saavedra”. Esta medalla se otorgó a los combatientes sandinistas que durante la guerra con Estados Unidos se destacaron por su valentía y actos heroicos. Se otorgó también a civiles, gobiernos e instituciones internacionales que prestaron importantes servicios a la revolución. Ortega señaló que concedió esta medalla a Quinn:¹⁸⁰

Porque entre otros méritos, en los momentos muy difíciles y polarizados de la controversia interna que hemos vivido los nicaragüenses, y en medio también del complejo conflicto que en algunos momentos tensó dramáticamente al sandinismo con el gobierno norteamericano, el teniente coronel Quinn no sólo supo ser objetivo sino que también desarrolló relaciones dignas, civilizadas y de respeto mutuo, que son las que históricamente los nicaragüenses hemos siempre deseado con los Estados Unidos.¹⁸¹

Es decir, se otorgaba una insignia de reconocimiento a los actos heroicos, a una persona que simplemente estaba cumpliendo eficientemente con las funciones de su cargo. La decisión de Humberto Ortega tuvo un fuerte contenido simbólico porque, además, la medalla se creó en memoria de su hermano menor,

¹⁷⁹ Ortega, *Nicaragua: revolución y democracia...*, (Entrevista concedida a Vazquez Raña).

¹⁸⁰ Ortega, *Nicaragua y democracia...* p. 200.

¹⁸¹ En una entrevista concedida posteriormente, agregó “Estoy convencido de que Sandino[...] de haberse encontrado en una situación similar, hubiera condecorado a un oficial norteamericano”. Ortega, *Nicaragua: revolución...*, p. 207, (Entrevista realizada por Saballos).

muerto en combate antes del triunfo de los sandinistas. La incondicionalidad de Ortega con la presidenta, contrasta con su poco antes postura radical e incluso agresiva. En diciembre de 1989, amenazó con ejecutar a miembros de la oposición política del entonces gobierno.¹⁸² Humberto Ortega fue considerado más afín al grupo de la Dirección Nacional (principista) que al de la Asamblea Nacional (pragmático). Sin embargo, también dentro de este grupo se dieron rupturas que poco obedecían a las tendencias ideológicas que decían enarbolarse. En julio de 1993, el grupo de los “principistas” estableció alianzas con una fracción de la UNO y con miembros del COSEP (grupo eminentemente de-rechista) para pedir la destitución de Humberto Ortega como jefe de las fuerzas armadas.

Las acciones de la Dirección Nacional no tuvieron mucho fundamento en su tendencia “principista”. El co-gobierno que mantuvo con la presidenta dejó ver que estaba optando por mantener una cuota de poder en el gobierno, a costa de restar participación a las masas en las acciones y decisiones políticas. Las concertaciones y acuerdos entre el FSLN y el gobierno, se hicieron sin consultar y, en muchas ocasiones, a espaldas de las bases. Esto provocó que se acelerara y evidenciara cada vez más la ruptura entre éstas y la cúpula del Frente, quien en lo sucesivo fungió más como árbitro o mediador en los distintos conflictos que surgieron entre la sociedad y el gobierno, y dejó su papel de abanderado de las causas y las luchas populares.

La división del FSLN en dos corrientes quedó formalizada a finales de 1992 y principios de 1993, con la formación del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que se reivindicó como pragmático y la Izquierda Democrática (ID), que se reconoció

¹⁸² Humberto Ortega manejó un discurso agresivo desde el inicio del gobierno sandinista. En octubre de 1981 “advirtió a los empresarios que si apoyaban los planes del imperialismo, en forma directa o indirecta, serían ‘colgados de los postes a lo largo de los caminos y carreteras’”. Kinloch, “Pacificación y transición neoliberal”, en *Enciclopedia de Nicaragua...*, p. 160.

como “principista”. Estos grupos fueron respaldados por los actores que apoyaban las corrientes que les dieron nacimiento, es decir, principalmente los diputados de la Asamblea Nacional y la Dirección Nacional, respectivamente. Las rupturas en el interior del partido provocaron una modificación drástica del escenario político, en donde se materializaron, a su vez, nuevas confrontaciones y nuevos establecimientos de alianzas. Como es fácil de advertir, la primera gran pugna fue entre los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional y los integrantes de la Dirección Nacional del FSLN. Los diputados establecieron alianzas dentro de la Asamblea, con una fracción de la UNO, mientras que la Dirección Nacional, como quedó anotado, apoyó a la presidenta de la República. En 1994, la Dirección Nacional dio un importante golpe a la corriente de los pragmáticos, al destituir a Sergio Ramírez como diputado y por lo tanto como coordinador de la fracción sandinista en el Parlamento. Esto pudo realizarse debido a que Ramírez ocupaba el escaño como suplente de Daniel Ortega. Otra destitución importante en este sentido fue la de Carlos Fernando Chamorro, quien había sido director del periódico sandinista “Barricada”, durante toda la existencia de éste, y quien se había pronunciado a favor del Movimiento de Renovación Sandinista.

Las confrontaciones entre las dos corrientes dieron lugar a que en mayo de 1994, el Movimiento de Renovación Sandinista rompiera formalmente con el partido y a que en 1995 se constituyera en una nueva fuerza política. A raíz de este rompimiento, otras figuras que hasta entonces habían dado identidad y cohesión al Frente Sandinista, como Ernesto y Fernando Cardenal, Gioconda Belli, Norma Elena Gadea, Carlos Tunnermann y Daisy Zamora decidieron también renunciar.

En 1995 se produce una nueva escisión dentro de los sandinistas. Los diputados, que hasta entonces habían permanecido unidos, se dividen a raíz del proceso para elegir nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La mayor parte, perteneciente al MRS, apoyaba la reelección del hasta entonces presidente, Luis

Humberto Guzmán, y una minoría a la (por cierto) conservadora, Miriam Argüello. Los diputados sandinistas se dividen en dos bloques con coordinadores diferentes.

Al interior de la UNO, las confrontaciones no fueron menos. La mayor parte de los diputados de la UNO dentro de la Asamblea Nacional, pertenecía al grupo de Godoy. En 1991, Alfredo César, que pertenecía al grupo de Violeta Barrios, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, gracias al apoyo de los diputados fieles a ésta y de los diputados sandinistas. Una vez en este puesto, rompió tajantemente con la presidenta, quien tuvo que enfrentarse a una Asamblea completamente opositora de su gestión.

La lucha no sólo entre fracciones sino, además, entre poderes (Poder Ejecutivo *vs.* Poder Legislativo) se hizo mucho más definida a partir del proceso de reformas a la Constitución, iniciado en 1994. La Asamblea Nacional señaló que con las reformas se lograría un mayor equilibrio entre los poderes y una mayor transparencia y credibilidad a los procesos electorales. Violeta Barrios se opuso a las propuestas argumentando que darían demasiadas atribuciones al Poder Legislativo, particularmente en materia económica y fiscal. En realidad, una de las propuestas que mayor discusión creó y a la que se atribuyó la oposición de Barrios, era la prohibición para que los parientes del titular del Ejecutivo pudieran contender a la presidencia de la República, lo cual representaba un freno a las pretensiones abiertamente reconocidas de Antonio Lacayo. La oposición de Barrios fue tal, que llegó incluso a señalar que el Poder Legislativo pretendía un golpe de Estado, y en febrero de 1995, cuando la Asamblea Nacional promulgó las reformas a la Constitución, se negó a reconocerlas. Este enfrentamiento tomó dimensiones tan graves que fue necesaria la mediación de instancias y gobiernos externos. La ONU, a través del PNUD, y los gobiernos de Canadá, España, México, Holanda y Suecia promovieron las pláticas entre los cuatro poderes del Estado nicaragüense, a fin de superar la crisis de gobernabilidad.

La situación parecía mejorar cuando se inició una nueva etapa de confrontaciones, esta vez entre el Poder Legislativo, por una parte, y los Poderes Ejecutivo y Judicial, por la otra. Basándose en las nuevas atribuciones que las reformas a la Constitución le daban, la Asamblea Nacional nombró seis nuevos magistrados de la Corte Superior de Justicia e inició un proceso para destituir al presidente de ésta. Inmediatamente se opusieron el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este último, además, emitió el 8 de mayo de 1995, una sentencia negativa sobre la validez de las reformas.

La propuesta de reformas a la Constitución también originó confrontaciones entre los sandinistas. La Dirección Nacional (especialmente Daniel Ortega) se opuso a ellas, argumentando que en el nivel nacional no existía consenso para que se llevaran a cabo.¹⁸³ La mayoría de los diputados sandinistas apoyaba la propuesta. Las reformas suscitaron también enfrentamientos entre la jerarquía de la Iglesia católica, representada por el cardenal Obando, y el Poder Ejecutivo, debido a que la primera estaba a favor, y el segundo, como hemos visto, en contra.

El proceso de desideologización

El gobierno de los sandinistas no logró modificar las estructuras del Estado nicaragüense, ni las relaciones políticas que tradicionalmente se habían dado entre los principales actores. Como hemos visto, la historia política del país había estado protagonizada por dos fuerzas (el partido liberal y el conservador) cuyas acciones en realidad no estuvieron sustentadas ideológicamente por las tendencias políticas que les daban nombre. El proyecto revolucionario no logró cambiar esta constante, que a partir de

¹⁸³ Las reformas prohibían que los familiares del Ejecutivo contendieran para la presidencia. El 23 de abril de 1995 Lacayo presentó su candidatura y, pocos días después, el 4 de mayo, Ortega cambió su posición de firme rechazo desde el principio para apoyarlas *repentinamente*.

1990 volvió a regir sobre el escenario político. El cambio más significativo que se presentó fue que el FSLN pasó a ocupar uno de los dos lugares en la lucha. Sin embargo, las acciones que realizó para mantener esta posición, ocasionaron que perdiera sus fundamentos y sus objetivos ideológicos. Para las elecciones de 1996, siguientes a aquéllas en las que perdió el poder, Daniel Ortega se presentó como candidato a la presidencia por parte del FSLN, con un discurso completamente diferente al manejado en el pasado, carente de contenido y de congruencia política. Su compañero de planilla, como candidato a vicepresidente, fue Juan Manuel Caldera Lacayo, próspero ganadero integrante del COSEP (organización de derecha que más combatió al sandinismo durante los ochenta). En su discurso, Ortega se desligaba de todo resabio de lucha o confrontación, pero hablaba de *seguir* pugnando por las demandas sociales. Sin embargo, la separación que durante el gobierno de Violeta Barrios experimentó el FSLN, hizo que estas palabras tuvieran muy poca legitimidad y credibilidad y ocasionó que volviera a ocupar el segundo lugar durante las elecciones.

Su contendiente, la Alianza Liberal, no estaba en mejor posición ideológica. El candidato, Arnoldo Alemán, alcalde de Managua durante el gobierno chamorrista, en realidad era un conservador de raigambre. Su campaña fue apoyada por ex contrarrevolucionarios, por integrantes connotados del Partido Conservador y por la antigua burguesía conservadora. La Alianza Liberal estuvo integrada por distintas fuerzas políticas. Entre las primeras cuatro que la formaron estaba el "Partido Liberal Nacional", antiguo partido de Somoza. Entre otros actores que lo apoyaron estuvo Enrique Bolaños, importante miembro del COSEP, empresario de Radio Conservador (radiodifusora de la antes Contra), empresarios de origen somocista y la jerarquía católica. La Alianza Liberal en general, durante la campaña, y Arnoldo Alemán en lo particular, durante su gobierno, hizo una reivindicación del somocismo, aduciendo que ésta no fue una etapa oscura, como sus adversarios habían señalado, sino un periodo de administración eficaz que

logró para Nicaragua un gran crecimiento económico. El apoyo de tantos conservadores a un partido liberal podría sorprender en un lugar en donde los contenidos políticos tuvieran algo que ver con los nombres, pero no en Nicaragua. Tampoco sorprendió el hecho de que las plataformas electorales de la Alianza Liberal y del FSLN tuvieran más semejanzas que divergencias.

La Alianza Liberal prometió durante su campaña liquidar completamente al sandinismo. No obstante, durante la administración de Alemán, se mantuvo la estrategia del gobierno anterior, de mutuas concesiones con el FSLN. Esta estrategia llevó al PLC (Partido Liberal Constitucionalista, de Alemán) y al FSLN a un acuerdo en el año de 1999, por medio del cual hicieron retroceder muchos de los logros que en materia de avance democrático y de fortalecimiento de las instituciones se habían logrado en el periodo anterior, y que garantizaba a ambos partidos mantener sus cuotas de poder dentro del Estado. Este acuerdo se realizó con el apoyo de la Iglesia católica y se institucionalizó a través de las reformas a la Constitución que se hicieron el siguiente año. Con las reformas se incrementó el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y se convirtió a la Contraloría General de la República en un órgano colegiado, introduciendo a miembros de los partidos políticos firmantes del pacto en estas dependencias.¹⁸⁴ Con ello, se atentaba contra la profesionalización y la independencia institucional. En materia electoral, se estableció la obligación de elegir alternativamente como presidente y primer miembro, tanto del Consejo Supremo Electoral como de las juntas receptoras de votos, a los representantes de los dos partidos que hubieren obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales. Las reformas ponen serios obstáculos a los grupos y partidos pequeños, con lo cual parece institucionalizarse la

¹⁸⁴ Por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, se amplió el número de magistrados de 12 a 16, para incorporar a cuatro magistrados representantes del FSLN y del Partido Liberal.

tradición de bipartidismo existente en el país, y se dan serios retrocesos en relación con el pluralismo y la competencia electoral igualitaria.

Oportunidades

El inicio de la década de 1990, trajo para Nicaragua un gran cúmulo de oportunidades desaprovechadas. El FSLN adquirió una enorme legitimidad, tanto en el nivel interno como externo, gracias a su disposición de someter su gobierno a la voluntad popular, por medio de elecciones libres y transparentes; así como a la capacidad que tuvo para reconocer su derrota y entregar el poder de manera pacífica y ordenada. No obstante, la separación que tuvo respecto de las bases, las enconadas luchas internas suscitadas entre los dirigentes y sus actuaciones sin orientación ni fundamento ideológico claro, hicieron que fuera perdiendo esta legitimidad.

Durante la década de los noventa Nicaragua vivió un proceso en donde ninguna fuerza política o social tuvo una clara preeminencia sobre las otras, por lo cual se hizo necesario la negociación constante. El hecho de que los cuatro poderes del Estado (judicial, ejecutivo, electoral y legislativo) estuvieran representados por partidos diferentes, dio la oportunidad de que se fortalecieran el Estado y las instituciones, y se restringiera el poder y los intereses de grupo. No obstante, los actores implicados en este proceso encaminaron sus esfuerzos para mantener, o adquirir cuotas de poder particularizadas, en lugar de emprender una verdadera transformación y modernización del Estado. La oportunidad que ofrecía el proceso de democratización, de competir de manera libre y equitativa, fue utilizada para fortalecer posturas personales, con lo cual debilitaron y restaron credibilidad y vitalidad al proceso mismo. La sociedad quedó atrapada en este juego, en el que fue tanto víctima como responsable. Víctima al tener la oportunidad de elegir libremente, pero en un marco político con muy pocas o nulas opciones reales. Fue

responsable porque no tuvo la capacidad de generar liderazgos políticos y/o sociales que crearan estas opciones para sí misma. No fue capaz tampoco de convertirse en un actor que exigiera cuentas a sus autoridades y a sus dirigentes, con lo cual éstas actuaron con un margen de maniobrabilidad muy amplio. Una sociedad autónoma y fuerte no habría permitido los actos de corrupción y de abuso de poder que (especialmente durante el gobierno de Alemán) se realizaron con gran impunidad en el país. El silencio de la sociedad a partir de 1990 sólo se explica a partir de su debilidad y de su falta de organización y de capacidad de movilización, ya que ni el gobierno ni el FSLN recurrieron a la represión física. Los avances alcanzados en materia de libertad de expresión, materializados especialmente en la apertura de los medios de comunicación, también fueron una oportunidad que la sociedad no supo aprovechar.

A partir de 1990 se crearon diversas agrupaciones cívicas, orientadas a materias especializadas (trabajo con niños, con mujeres, en pro de la ecología, etc.) que la comunidad internacional apoyó tanto con fondos económicos como con asesorías en cuanto a organización, con objetivo de fortalecer a la sociedad civil. Estas agrupaciones han tenido distintos resultados en su materia particular, sin embargo, aun las más exitosas no han logrado tener una incidencia para transformar las relaciones de la sociedad con el Estado.

Reversiones

La debilidad de la sociedad y la falta de capacidad y/o de interés del FSLN por abanderar las demandas de ésta, hicieron que muchos de los logros obtenidos durante la década de 1980 se revirtieran rápidamente. En 1990 el gobierno chamorrista creó Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), con el objetivo de iniciar un proceso de privatización y devolución de propiedades confiscadas por el gobierno sandinista. A través de dos instrumentos jurídicos (Ley de Arrendamiento Provisional

de Tierras o Decreto 10-90, y Ley de Revisión de Confiscaciones o Decreto 11-90. -Monrroy, 2001, p. 104-) se devolvió una gran cantidad de tierras que estaban en manos de pequeños agricultores, incluso a antiguos somocistas. La política gubernamental fue un factor muy importante en el proceso de la reconcentración de la tierra, sin embargo, no fue el que tuvo más peso. En realidad una gran parte de los campesinos decidió vender su tierra en razón de las presiones económicas. El retiro del apoyo gubernamental a los pequeños agricultores, que antes recibían subsidios y otras ayudas, como la asistencia técnica, orilló a muchos a poner en venta sus tierras, incluidos ex integrantes tanto del ejército como de la Contra, que habían recibido propiedades gracias a los acuerdos de desmovilización y pacificación. Debido a que los precios operaban *libremente* en función de la oferta y la demanda, los campesinos lograron un precio muy bajo que permitió la reconcentración de tierras y propiedades en manos de pocas personas.

En el caso de los trabajadores ocurrió algo semejante. En un principio, los sindicatos parecieron muy decididos a no permitir la reversión de los logros obtenidos hasta entonces. Sin embargo, esta postura se fue debilitando conforme la política gubernamental se fue endureciendo. El FSLN estableció diversos acuerdos con el gobierno, con el objetivo de proteger a los trabajadores. El más importante de ellos fue el compromiso de otorgar el 25% de las acciones de empresas privatizadas a los trabajadores. El gobierno cumplió poco y mal con estos acuerdos: entregaba empresas obsoletas a los trabajadores, o simplemente permanecía inactivo ante los compromisos. Ni el FSLN, ni los trabajadores mismos, no obstante, tuvieron la capacidad para hacer frente a esta situación, ni siquiera cuando el gobierno comenzó a entregar indemnizaciones (muchas veces con los ingresos de las privatizaciones de empresas estatales) a confiscaciones que había realizado el gobierno sandinista. El FSLN no sólo no tuvo la capacidad para revertir este proceso, sino que incluso contribuyó con él, a través de diversos acuerdos establecidos con el

gobierno, entre los cuales destaca el apoyo a la privatización de la empresa de telecomunicaciones TELCOR.

Ante el silencio, o por lo menos falta de movilización efectiva de la sociedad, el gobierno chamorrista llevó a cabo un proyecto que tuvo fuertes costos sociales. Debido a la reducción del gasto público, la pobreza aumentó significativamente.¹⁸⁵ Los programas integrales de bienestar social fueron sustituidos, en el mejor de los casos, con proyectos coyunturales con poco presupuesto. La educación, mayor orgullo del gobierno sandinista, también tuvo retrocesos. El proyecto educativo de Violeta Barrios tuvo dos características sobresalientes: la primera fue la intención de excluir de los programas cualquier referencia a los sandinistas, y la segunda fue la gran influencia de la Iglesia católica. El analfabetismo ascendió a 34%.

La Iglesia católica se fortaleció a partir del gobierno chamorrista. El aspecto educativo no fue el único en el que tuvo una gran presencia, ya que en general logró condicionar muchas otras políticas del Estado. Uno de los resultados de ello fue el avance de las ideas conservadoras dentro de la sociedad nicaragüense.

¹⁸⁵ Según un estudio de las Naciones Unidas realizado en 1994, citado por Kinlonch (p.169), el 75% de las familias nicaragüenses vivía debajo del nivel de pobreza, y el 44% se encontraba en una situación de pobreza extrema. A finales de la década de 1990, según Rocha y Martínez, Nicaragua se encontraba entre los tres países de producto interno bruto más bajo en América Latina y entre los catorce países de mayor nivel de inseguridad alimentaria en el mundo. *Enciclopedia de Nicaragua...*, p. 255.

BIBLIOGRAFÍA

- ACNUR, ACNUR, *40 años al lado de los refugiados*, Italia, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1990.
- ACUÑA, RODOLFO, *América ocupada*, México, Era, 1976.
- AGUAYO, SERGIO, *El éxodo centroamericano*, México, SEP-Foro 2000, 1984.
- , *El panteón de los mitos. Estados Unidos y el nacionalismo mexicano*, México, Grijalbo-COLMEX, 1998.
- AGUILAR ZÍNSER, Adolfo y Carlos Paredes, "El debate sobre Centroamérica en el Congreso norteamericano y su interrelación con el debate en América Latina", en *Cuadernos Semestrales*. Publicación semestral de Estados Unidos: perspectiva latinoamericana, núm. 15, 1^{er} semestre 1984, Centro de Investigaciones y Docencia Económica, Instituto de Estudios de Estados Unidos, México, 1984.
- ARBOLEDA, EDUARDO, "Refugee Definition in Africa and Latin America", en *International Journal of Refugee Law*, vol. 1, núm. 2, Oxford University Press, U.K., 1991.
- BALDELOMAR FÉLIX y otros, *Esta luz ya no se apaga. Reflexiones sobre el trabajo organizativo en el campo*, Managua, Editorial Vanguardia, 1988.
- BARDINI, Roberto, *Monjes, mercenarios y mercaderes. La red secreta de apoyo a los contras*, México, Editorial Mex-Sur, 1988.
- BELLI GIOCONDA, *La mujer habitada*, 9^a ed., Barcelona, Ediciones Salamandra, 2001.

- BERETTA, GIANI, "Relaciones Iglesia-Estado. Una delicada trama de intereses", en *Pensamiento Propio*, núm. 42, año V, Managua, CRIES, mayo, 1987, pp. 51-55.
- BERMÚDEZ, LILIA, *Estrategia de Reagan hacia la revolución centro-americana*, México, NuestroTiempo-UNAM, 1982.
- , *Guerra de Baja Intensidad, Reagan contra Centroamérica*, México, Siglo XXI, 1987.
- , "La política exterior de Estados Unidos entre 1960 y 1980", en *EUA*, núm. 11, México, Instituto Mora, 1988.
- BERMÚDEZ, LILIA Y BENÍTEZ RAÚL, "Los 'combatientes de la libertad' y la Guerra de Baja Intensidad contra Nicaragua", en *EE.UU. Contra Nicaragua. La Guerra de Baja Intensidad en Centroamérica*, Madrid, Editorial Revolución, 1987.
- BIONDI-MORA, BRIZIO, *Revolución y política alimentaria. Un análisis crítico de Nicaragua*, México, Siglo XXI, 1990.
- BORGE, TOMÁS, *No pedimos que elogien la revolución, sino que digan y divulguen la verdad*, Managua, Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN, 1981.
- , *La paciente impaciencia*, La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1989.
- , *Los dilemas de la modernidad*, 3ª ed., México, Siglo XXI, 1993.
- BUSTAMANTE, JORGE, "Inmigración de indocumentados, resultados de investigaciones y opciones para el diseño de políticas", en Riordan Roett [comp.], *México y Estados Unidos. El manejo de la relación*, México, Siglo XXI, 1989.
- CABEZAS, OMAR, *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde*, México, Siglo XXI, 1986.
- CASTELS STEPHEN Y Mark I. Miller, "Migration to highly-developed countries since 1945", en *The age of migration. International Population Movements in the Modern World*, The Guilford Press, 1993.
- CHAMORRO, JAIME, *La Prensa. La República de papel*, México, Ediciones Gernika, 1989.

- CHOMSKY NOAM y Edward Herman, *Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas*, trad. de Carmen Castells, Barcelona, Grijalbo, 1990.
- COMBLIN, JOSÉ, "Testimonio de José Comblin", en José María Vigil [coord.], *Nicaragua y los teólogos*, México, Siglo xxi, 1987.
- COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA —CODEHUCA, *Cronología de hechos de violación a los derechos humanos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, a partir del 8 de agosto de 1987*, Centro de documentación de la Comisión, 1987.
- COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO, *Guatemala, causas y orígenes del enfrentamiento interno*, pról. de Edelberto Torres-Rivas, Guatemala, FandG editores, 2000.
- CORTÁZAR, JULIO, *Nicaragua, tan violentamente dulce*, Barcelona, Muchnik Editores, 1984.
- CRITTENDEN, ANN, *Sanctuary, a Story of American Conscience and the Law in Collision*, Nueva York, Weidenf and Nicolson, 1988.
- CUÉLLAR ROBERTO y otros, "Refugee and Related Developments in Latin America: Challenges Ahead", en *International Journal of Refugee Law*, vol. 3, núm. 3, UK, Oxford University Press, 1991.
- Diagnóstico nacional de Nicaragua sobre refugiados, repatriados y población desplazada*, 1988, Cuadernos de Pensamiento Propio, serie 5, Managua, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, 1989.
- DICcionario DE POLÍTICA, coordinado por Norberto Bobbio, México, Siglo xxi, 1984.
- DICcionario JURÍDICO MEXICANO, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Porrúa, 1998.
- DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DEL ACNUR, *Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición del refugiado*, Ginebra, ACNUR, 1988.

- DOCUMENT PREPARED BY THE NATIONAL IMMIGRATION FORUM: *Summary Removal and Asylum Procedures Punish the Persecuted and Impede the I.N.S.* 2/2/96. H.R. 2202 and S. 1394, 1996.
- DOS SANTOS, THEÔTONIO, "América Latina: militarismo, democratización, ajuste estructural y nuevas propuestas", ponencia presentada en la *Cátedra Latinoamericana, Módulo I: América Latina y la crisis financiera mundial*, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 1999.
- DRAGO, Tito, *Centroamérica, una paz posible*, Madrid, El País-Aguilar, 1988.
- EICH, DIETER Y Carlos Rincón, *The Contras. Interviews with Anti-Sandinistas*, San Francisco, synthesis Publications, 1985.
- ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES, Madrid, Edición española, 1976.
- ENVÍO, "Los costos del verticalismo. Un FSLN sin rostro campesino", *Envío*, año 9, núm. 107, septiembre, Managua, 1990.
- Experiencias educativas revolucionarias (Nicaragua y Guatemala)*, Antología preparada por Ma. Teresa Gutiérrez Haces, México, SEP, 1986.
- EEUWEN DANIEL VAN, "Nicaragua", en Alain Rouquié [coord.], *Las fuerzas políticas en América Central*, México, FCE, 1994.
- Farrer, Tom, "Estados Unidos y la Cuenca del Caribe después de la Guerra Fría", en *La política exterior norteamericana hacia Centroamérica: reflexiones y perspectivas*, México, UNAM/FLACSO/PORRÚA, 1991.
- FEINBERG, Richard, "Centroamérica, el punto de vista de Moscú", en *Cuadernos Semestrales, publicación semestral de Estados Unidos: perspectiva latinoamericana*, núm. 12, 2º semestre 1982, México, Centro de Investigación y Docencia Económica. Instituto de Estudios de Estados Unidos, 1982.
- FERRER, ALDO, *Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial*, Buenos Aires, FCE, 1996.
- , *Historia de la globalización II*, México, FCE, 2000.
- , *De Cristóbal Colón a Internet. América Latina y la globalización*, México, FCE, 2001.

- FERRIS, ELIZABETH, *The Central American Refugees*, Nueva York, Praeger Publishers, 1987.
- FIX-FIERRO, HÉCTOR Y Sergio López Ayllón, *El impacto de la globalización en la reforma del Estado y del derecho en América Latina. Problemas actuales del derecho constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo*, México, IJ-UNAM, 1994.
- FIX MICHAEL Y Jeffrey Passel, *Immigration and Immigrants*, Setting the Record Straight, Washington, D.C, The Urban Institute, 1994.
- FONSECA, CARLOS, *Pensamiento y acción. Selección de escritos del líder del Frente Sandinista*, Buenos Aires, Editorial Antarca, 1986.
- FSLN, "La autocrítica de los sandinistas", en *Memoria*, vol. 4, núm. 3, septiembre-octubre, México, CEMOS, 1990, pp. 206-208.
- GARCÍA Y GRIEGO, MANUEL, "La Comisión Selecta, la administración Reagan y la política norteamericana sobre indocumentados: un debate en transición", en Lorenzo Meyer [comp.], *México-Estados Unidos*, México, COLMEX, 1982.
- GIBNEY MARK [ed.], *Open Borders? Closed Societies? The Ethical and Policital Issues*, Nueva York, Grenwood Press, 1988.
- GOBIERNO DE MÉXICO, *Informe sobre los Avances en la Ejecución del Plan de Acción en Favor de los Refugiados, Repatriados y Desplazados*, México, Gobierno de México, 1990.
- GOLDEN RENNY Y Michael McConnell, *Sanctuary. The New Underground Railroad*, Nueva York, Orbis Books, Maryknoll, 1986.
- GOODWIN-GILL GUYS, *The Refugee in International Law*. U.K. Edit. Clarendon Press Oxford, 1990.
- GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO Y OTROS, *América Latina, hoy*, México, Editorial de la Universidad de las Naciones Unidas, Siglo XXI, 1990.
- GOULD, W.T.S. Y A.M. Findlay, "International Migration within the Third World: Recent Trends and Current Issues", en W.T.S. Gould, y A.M., Findlay, *Migration and the changing world order*, De Wiley.

- HANÓN, MARIO, "Lo que más duele", en *Barricada Internacional*, 1989, p. 20.
- HATHAWAY JAMES C., *The Law of Refugee Status*, 2ª ed., Toronto, Edit. Butterworths, 1992.
- HUG HEINER, *Refugges*, núm. 85, Geneva, UNHCR, 1991.
- IANNI, OCTAVIO, *Teorías de la globalización*, 3ª ed., México, Siglo XXI, 1998.
- Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas IRELA, *¿América Latina en el filo de la navaja? Efectos de la crisis financiera mundial*, Madrid, 6 de octubre de 1998.
- JORDAN, David, "U.S. Options –and Illusions- in Central America", en *Central America and the Reagan Doctrine*, Boston, University Press of America, 1987.
- KAPLAN, MARCOS, *Revolución tecnológica, Estado y Derecho*, vol. IV, Ciencia, Estado y Derecho en la Tercera Revolución, México, IJ-UNAM, 1993.
- , *El Estado latinoamericano*, México, IJ-UNAM, 1996.
- , "El Estado Latinoamericano: entre la crisis y las reformas", en *Sistema*, núm. 147, Madrid, noviembre de 1998.
- , *Estado y globalización*, México, IJ-UNAM, 2002.
- KINLOCH, FRANCES, "Pacificación y transición neoliberal (1990-1996)", en *Enciclopedia de Nicaragua*, Barcelona, Océano, 2002, vol. I.
- KRITZ MARY, Editor, *U.S. Immigration and Refugee Policy. Global and Domestic Issues*, Lexington, Massachusetts, Toronto, Lexington Books, 1983.
- LAFFEBER, Walter, *Inevitable Revolutions. The United States in Central America*, 2ª ed., Nueva York-Londres, W.W. Norton & Company, 1993.
- LEONARD, Thomas, *Central America and the United States: The Search for Stability*, Georgia, The University of Georgia Press, 1991.
- LOESCHER GIL AND SCANLAN, *Calculated Kindness. Refugees and America's Half-Open Door, 1945 to the Present*, Nueva York, The Free Press, 1986.

- LOZANO, LUCRECIA Y Raúl Benítez, "La política de Estados Unidos hacia Nicaragua, 1979-1986. De la contención pasiva a la Guerra de Baja Intensidad", en *EE.UU. contra Nicaragua*, Madrid, Editorial Revolución, 1987.
- MAIRA, LUIS, "EE.UU.: fracaso en Centroamérica", en *Centroamérica en crisis*, México, COLMEX, 1980.
- MARTÍNEZ, DANIEL, *La noche del 25*, México, Era, 1992.
- MEISSNER *et al*, *International Migration Challenges in a New Era*, Nueva York, The Trilateral Commission, 1993.
- MONROY GARCÍA, JUAN, "La insurrección democrática en Nicaragua: conservadores, liberales y marxistas", en Ignacio Sosa [coord.], *Insurrección y democracia en el Circuncaribe*, México, CCYDEL-UNAM/UAEM, 1997.
- , *Transición a la democracia en Nicaragua*, México, CCYDEL-UNAM/ UAEM, 2001.
- MORRIS, MILTON, *Immigration – The Beleaguered Bureacracy*, Washington, The Brookings Institution, 1985.
- MURO RODRÍGUEZ MIRTHA y otros, *Nicaragua y la revolución sandinista*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1984.
- NÚÑEZ SOTO ORLANDO, *Transición y lucha de clases en Nicaragua (1979-1986)*, México, Siglo XXI, 1987.
- ORTEGA DANIEL, *Combatiendo por la paz*, México, Siglo XXI, 1988.
- ORTEGA HEGG, MANUEL, *La economía en el cambio de siglo*, Barcelona, Enciclopedia de Nicaragua, 2002.
- ORTEGA, HUMBERTO, *Nicaragua: revolución y democracia*, México, Organización Editorial Mexicana, 1992.
- PACHECO GILDA, "Migraciones forzosas en Centroamérica: una interpretación psicosocial", en Rodolfo Casillas [comp.], *Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales*, México, FLACSO, 1992.
- PEARCE, Jenny, *Under the Eagle. U.S. Intervention in Central America and the Caribbean*, Boston, South and Press, 1982.
- PÉREZ BALTODANO, *Bajo la bota del imperio, 1910-1933*, Barcelona, Enciclopedia de Nicaragua, 2002.

- PETRAS, JAMES, "¿Quién gobierna el mundo?", en *La Jornada*, 31 de mayo de 2002, p. 32.
- QUINTANA, LUIS R., *El proceso de adaptación de los inmigrantes centroamericanos en el valle de México*, México (tesis para obtener el grado de maestro en Psicología Social, UNAM), 1993.
- RAMÍREZ, SERGIO, *Estás en Nicaragua*, Barcelona, Muchnik Editores, 1985.
- , *El alba de oro. La historia viva de Nicaragua*, 2ª ed., México, Siglo XXI, 1985.
- , *Las armas del futuro*, Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1987.
- , *Adiós muchachos. Una memoria de la revolución sandinista*, México, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 1999.
- RANDAL MARGARET, *Todas estamos despiertas, testimonios de la mujer nicaragüense hoy*, México, Siglo XXI, 1980.
- Rob, Debora "¿Fuera de onda?", en *Pensamiento Propio*, año V, núm. 40, Managua, CRIES, marzo de 1987, pp. 14-19.
- , "Resistirnos a combatir el machismo es resistirnos a nuestra liberación", en *Pensamiento Propio*, año V, núm. 40, CRIES, Managua, abril de 1987, pp. 9 a 11.
- ROUQUIÉ ALAIN, *Guerras y paz en América Central*, México, FCE, 1994.
- RUGAMA LEONEL, *La tierra es un satélite de la luna*, 4ª ed., Managua, Editorial Nueva Nicaragua, 1980.
- RUVALCABA, MARÍA, *El Estado de emergencia y el periodismo en Nicaragua*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1987.
- "Sacerdotes en el gobierno nicaragüense: ¿poder o servicio? Algunos documentos acerca de esta polémica", en *Cuadernos*, núm. 5, Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1981.
- SELSER GREGORIO, *Honduras, República alquilada*, México, Mex-Sur Editorial, 1983.
- SIEGEL MARTHA Y Laurence Canter, *U.S. Immigration Made Easy*, Arizona, Sherindan Chandler Company Tucson, 1989.

- SIMCOX, DAVID, EDITOR, *U.S. Immigration in the 1980s. Reappraisal and Reform*, Boulder and London Center for Immigration Studies, Washington D.C. Westview Press, Boulder, Colorado, 1988.
- SOCIETY FOR THE PROMOTION OF EDUCATION AND RESEARCH (SPEAR), *Socioeconomic integration of Central American Immigrants in Belize*, México, Cubola Productions, 1990.
- DOS SANTOS, THEÔTONIO, "América Latina: militarismo, democratización, ajuste estructural y nuevas propuestas", ponencia presentada en la *Cátedra Latinoamericana, Módulo I: América Latina y la crisis financiera mundial*, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, febrero de 1999.
- SOROS, GEORGE, *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, Madrid, Plaza y Janés, 1999.
- SPALDING ROSE J. [comp.], *La economía política de la Nicaragua revolucionaria*, México, FCE, 1989.
- STAHLER-SHOLK RICHARD y otros, *La política económica en Nicaragua 1979-88. Bibliografía comentada*, Managua, Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, Cuadernos de Pensamiento Propio, 1989.
- STANTON, SHARON, "Migration Patterns of U.S. Foreign Policy", en *Threatened Peoples, Threatened Borders*, Nueva York-Londres. Teitelbaum Michael and Weiner Myron, Editors. World Migration and U.S. Policy, W.W. Norton and Company, 1995.
- STAVENHAGEN, RODOLFO, *Derecho indígena y derechos humanos en América Latina*, México, COLMEX, 1988.
- SCHULZINGER, ROBERT, *American Diplomacy in the Twentieth Century*, Nueva York-Oxford, Oxford University Press, 1990.
- SUHRKE ASTRI, "Global Refugee Movents and Strategies of Response", en *U.S. Immigration and Refugee Policy. Global and Domestic Issues*, Lexington, Lexington Books, 1983.
- VAN DEN HAAG ERNEST Y Tom Farer, *U.S. Ends and Means in Central America. A Debate*, Nueva York, Plenum Press, 1988.
- TEITELBAUM MICHAEL Y Myron Weiner, Editors, *Threatened Peoples, Threatened Borders*, World Migration and U.S. Policy, W.W., Nueva York, Norton and Company, 1995.

- TUCKER CAROL, "Immigrants on the Move", en *Chronicle*, vol. 15, núm. 11, California, University of Southern California, noviembre, 1995.
- VIALET, JOYCE, *CRS Report for Congress. A Brief History of U.S. Immigration Policy*, Educational and Public Welfare Division, Washington, January Research Service, The Library of Congress, 1991.
- VILAS CARLOS M., "Clase, linaje y política sobre la burguesía nicaragüense", en *Panoramas de Nuestra América*, núm. 10, México, CCYDEL-UNAM, 1993, pp. 137-157.
- Weiner, Myron, "International norms and institutions", en *The Global Migration Crisis. Challenge to states and human rights*, Harpercollins College, 1995.
- WEISS, PATRICIA, "Central American Refugees and U.S. Policy" en *Crisis in Central America. Regional Dynamics and U.S. Policy in the 1980s*, Colorado, Westview Press, Boulder, 1988.
- WHITTMAN EARL, "El stress en Nicaragua: una guerra de nervios", en *Pensamiento Propio*, Managua, CRIES, 1987.
- WALLERSTEIN, IMMANUEL, *Liberalismo y democracia: ¿hermanos enemigos?*, México, CEIICH-UNAM, 1998.

Hemerografía

Periódicos

- El Financiero*, México.
- Le Monde Diplomatique*, estudio especial, marzo-abril de 1998.
- Temas para el debate*, Madrid, 1998.
- Barricada*, Managua.
- Barricada Internacional*, Managua.
- El Nuevo Diario*, Managua.
- Excélsior*, México.
- La Jornada*, México.
- El Financiero*, México.

Revistas

Cuadernos Semestrales, Publicación semestral de Estados Unidos: perspectiva latinoamericana. Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Instituto de Estudios de Estados Unidos. México

International Journal of Refugee Law, Oxford University Press, U.K.

Pensamiento Propio, CRIES, Managua.

Memoria, CEMOS, México.

Refugges, UNHCR, Geneva.

Envío, Managua.

Cuadernos Departamento Ecuménico de Investigaciones, Costa Rica.

Chronicle (California. U.S.), University of Southern California,

Panoramas de Nuestra América, CCYDEL-UNAM, México.

Temas para el debate, Madrid.

Legislación

Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Convención de Ginebra de 1949, relativa al trato de civiles en tiempo de guerra.

Declaración de Cartagena, 1984.

Acta de Contadora sobre la paz y la cooperación en Centroamérica.

Conferencia Internacional sobre refugiados centroamericanos (CIREFCA), 1989.

Documento de una paz y firme duradera de la región (Esquipulas II).

Constitution of the United States of North America.

Refugee Act of 1980 (Public Law 96-212. March 17, 94 Stat. 109).

Informes internacionales

Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1997.

Estudio Económico Mundial: Tendencias y Políticas Actuales de la Economía Mundial, Naciones Unidas, Nueva York, 1998.

Informe sobre de desarrollo humano-1998, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 1998.

Panorama Social, CEPAL-ONU.

Coacciones y oportunidades de la globalización: el caso de la Nicaragua sandinista y sus relaciones con Estados Unidos, editada por el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, se terminó de imprimir en mayo de 2006, en Publidisa Mexicana, S.A. de C.V., Calz. Chabacano 69 Planta Alta, Col. Asturias. Se tiraron 250 ejemplares en papel cultural de 90 gramos. La formación tipográfica estuvo a cargo de Diseño y Letras. La edición estuvo al cuidado de María Angélica Orozco Hernández.

En la obra se propone una metodología novedosa y práctica, que en este caso se utiliza para analizar el caso de la Nicaragua sandinista, pero que puede ser aplicada para estudiar cualquier otro país y temporalidad. Con esta metodología se podrá reflexionar, a través de parámetros concretos, acerca de las razones por las cuales un país tiene determinado grado de desarrollo y ocupa cierto nivel dentro de la jerarquía internacional.

El texto tiene el mérito, además, de ser un estudio interdisciplinario, que analiza la problemática integralmente y en diferentes niveles (nacional, regional e internacional), con herramientas de la historia, las relaciones internacionales, la ciencia política y el derecho.

Eva Leticia Orduña Trujillo es licenciada en Derecho, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos, por la UNAM. Ha impartido cursos de Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Derechos Humanos. Ha sido asesora jurídica en diversas instituciones de defensa y promoción de Derechos Humanos. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus líneas de investigación son: Derecho Internacional, Relaciones Internacionales Derechos Humanos y Estudios Latinoamericanos.

Serie Nuestra América 65

ISBN 970-32-3187-X



9 789703 231874

